



**El Colegio
de la Frontera
Norte**



**MODELO DE EFECTIVIDAD DE LOS MOVIMIENTOS
AMBIENTALISTAS: EL CASO DEL INCINERADOR
TEESA**

Tesis presentada por

Jesús Miguel Escobedo De la Torre

para obtener el grado de

**MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN INTEGRAL
DEL AMBIENTE**

Tijuana, B. C., México
2010

CONSTANCIA DE APROBACIÓN

Director de Tesis:

Dr. Tito Alejandro Alegría Olazábal

Aprobada por el Jurado Examinador:

1. _____

2. _____

3. _____

A mis padres, que me lo han dado todo.

A mi vida...

Gracias a Dios por todo lo que sólo él sabe: Eclesiastés 3:1

Gracias al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por la beca otorgada y a El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) por la oportunidad de pertenecer a tan prestigiosa institución y obtener una maestría.

Gracias al Dr. Tito Alegría por ser mentor y guía en este camino. Así como a la Dra. Gisela Heckel y al Dr. Mario Alberto Velázquez por sus valiosas contribuciones a esta investigación.

RESUMEN

La problemática socioambiental contemporánea implica la necesidad de administrar de forma integral el medio ambiente. Al respecto, uno de los principales elementos a incluir en la toma de decisiones debería ser la participación ciudadana. Sin embargo, en muchas ocasiones los gobiernos no incorporan este recurso en el desarrollo e implementación de las políticas públicas. Como respuesta los ciudadanos se organizan y configuran un movimiento ambientalista por considerar que existen riesgos para la salud de su comunidad e impactos negativos sobre el medio. En ese sentido, es fundamental producir conocimientos sobre las acciones colectivas orientadas por motivos ambientalistas, pues así se podrían generar soluciones a diversas problemáticas. La presente investigación aborda el caso del movimiento en oposición al incinerador de residuos peligrosos para analizar su efectividad no solo en la consecución de sus objetivos, sino también en referencia a su capacidad para producir cambios en el espacio simbólico. A lo cual se utilizó la teoría de los campos de Bourdieu, particularmente en relación con la posesión de recursos y su aplicación a estrategias específicas. Teniendo como principal resultado que el movimiento habría sido efectivo en presionar al gobierno y evitar la instalación del incinerador TEESA. Para concluir finalmente que los movimientos ambientalistas serán más efectivos cuando logren imponer su proyecto y, por ende, se modifiquen las prácticas de otros agentes sociales.

ABSTRACT

The current socio-environmental problematic indicates the need to comprehensively manage the environment. In this regard, one of the main elements that should be included in the decision making process must be citizen participation. However, governments often do not incorporate this resource in the development and implementation of public policies. In response, citizens organize and set up an environmental movement on the ground that there are risks to the health of their community and negative impacts on the environment. In that sense, it is essential to produce knowledge-oriented collective action on environmental subjects, so it can generate solutions to various problems. This investigation focuses on a case study related to citizen opposition to a hazardous waste incinerator to analyze its effectiveness not only in achieving its objectives, but also in reference to their ability to produce changes in the symbolic space. As a theoretical framework we used Bourdieu's field theory, particularly in relation to ownership of capital and its application to specific strategies. Finding out that the movement was effective in pressuring the government and preventing the installation of the TEESA's incinerator. Concluding that an environmental movement will be more effective when it manages to impose its own project and, therefore, change the practices of other social agents.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	1
Capítulo I: SOBRE LOS MOVIMIENTOS AMBIENTALISTAS EFECTIVOS	11
1.1. Los movimientos sociales como objeto de estudio: panorama general de sus teorías.....	11
1.2. Razones para utilizar la teoría de los campos en el caso de estudio.....	29
1.3. Reseña crítica de la teoría de los campos.....	31
1.3.1. Aplicación de la teoría de los campos al contexto mexicano.....	47
1.3.2. La teoría de los campos y los movimientos ambientalistas.....	54
1.4. Modelo de efectividad de los movimientos ambientalistas.....	65
1.4.1. Conceptualización del fenómeno.....	65
1.4.1.1. Los recursos de los movimientos ambientalistas.....	69
1.4.2. Los componentes del modelo de efectividad de los movimientos ambientalistas.....	73
1.4.3. La diversidad de especies de capital.....	74
1.4.4. Las estrategias de los movimientos ambientalistas.....	78
1.4.4.1. Vinculación con organizaciones nacionales e internacionales.....	79
1.4.4.2. Utilización de recursos legales.....	83
1.4.4.3. Uso de los medios de comunicación.....	88
1.4.4.4. Participación en foros de discusión.....	94
1.5. Particularidades del modelo: el contexto como una variable interviniente.....	98
Capítulo II: METODOLOGÍA E HIPÓTESIS	101
2.1. Construcción de los datos.....	102
2.2. Construcción de las hipótesis.....	107
Capítulo III: RECUENTO DE LOS HECHOS: EL MOVIMIENTO AMBIENTALISTA EN OPOSICIÓN AL INCINERADOR TEESA	115
3.1. Las luchas de poder en el campo político y posicionamiento de nuevos agentes.....	115
3.2. La construcción de una nueva política ambiental.....	119
3.3. Perspectiva crítica de la política ambiental y sus instrumentos.....	125
3.4. Estructura del campo político en el ámbito internacional: el proceso de adaptación de la política ambiental mexicana a los lineamientos internacionales.....	129
3.5. El manejo de los residuos peligrosos en la frontera México-Estados Unidos.....	134
3.6. La problemática de los residuos peligrosos en la frontera desde la óptica de los especialistas.....	143
3.7. El proceso de instalación del incinerador de residuos peligrosos en Tijuana.....	147
3.8. La construcción del movimiento ambientalista en oposición al incinerador.....	159
3.9. Consecuencias de la movilización social.....	170

Capítulo IV: ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DEL MOVIMIENTO AMBIENTALISTA EN OPOSICIÓN AL INCINERADOR TEESA..... 175

4.1. Diversidad de Especies de Capital..... 177
4.1.1. Capital Económico..... 177
4.1.1.1. Prueba de hipótesis..... 177
4.1.2. Capital Social..... 185
4.1.2.1. Prueba de hipótesis..... 185
4.1.3. Capital Cultural..... 189
4.1.3.1. Prueba de hipótesis..... 189
4.2. Estrategias de los movimientos ambientalistas..... 193
4.2.1. Vinculación con organizaciones nacionales e internacionales..... 193
4.2.1.1 Prueba de hipótesis organizaciones nacionales..... 193
4.2.1.2 Prueba de hipótesis organizaciones internacionales..... 196
4.2.2. Utilización de recursos legales..... 198
4.2.2.1. Prueba de hipótesis..... 198
4.2.3. Uso de los medios de comunicación..... 202
4.2.3.1. Prueba de hipótesis..... 202
4.2.4. Participación en foros de discusión..... 206
4.2.4.1. Prueba de hipótesis..... 206
4.3. El contexto como una variable interviniente..... 208
4.3.1. Apertura económica hacia el exterior o negociaciones comerciales que impliquen la integración comercial..... 208
4.3.2. Contexto político tendiente hacia el autoritarismo en su etapa de relativa apertura... 208
4.3.3. Problemática ambiental compartida por dos o más países..... 209
4.4. Resultados del análisis..... 210
4.4.1. Resultados del componente diversidad de especies de capital..... 210
4.4.1.1. Capital económico..... 210
4.4.1.2. Capital social..... 211
4.4.1.3. Capital cultural..... 212
4.4.2. Resultados del componente estrategias de los movimientos ambientalistas..... 213
4.4.2.1 Vinculación con organizaciones nacionales e internacionales..... 213
4.4.2.1.1. Vinculación con organizaciones nacionales..... 213
4.4.2.1.2. Vinculación con organizaciones internacionales..... 214
4.4.2.2. Utilización de recursos legales..... 215
4.4.2.3. Uso de los medios de comunicación..... 216
4.4.2.4. Participación en foros de discusión..... 217
4.5. Conclusión del capítulo..... 217

V. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN..... 219

ANEXOS..... i

Anexo i. Agentes entrevistados para el caso de estudio..... i
Anexo ii. Publicaciones 1992..... ii
Anexo iii. Desglose de notas periodísticas..... iii
Anexo iv. Posición del autor en el campo académico..... vi

Anexo v. Perspectiva geográfica del estudio de los movimientos sociales.....	ix
Anexo vi. Inventario de vicios y virtudes de las teorías de los m. sociales.....	x
Anexo vii. Ubicación geográfica del incinerador TEESA.....	xvii

BIBLIOGRAFÍA.....	235
--------------------------	------------

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICAS

Tabla 1.	Ventajas y consecuencias de la utilización de los BPC.....	136
Tabla 2.	Efectos de los BPC sobre el medio ambiente.....	137
Tabla 3.	Alternativas al uso de los BPC.....	139
Tabla 4.	Requerimientos normativos para la instalación de un incinerador.....	150
Tabla 5.	Riesgos potenciales del proceso de incineración de residuos peligrosos.....	156
Tabla 6.	Tendencia local.....	165
Tabla 7.	Tendencia nacional (movimiento local).....	165
Tabla 8.	Tendencia nacional (metamovimiento).....	166
Tabla 9.	Tendencia internacional.....	166
Tabla 10.	Escala.....	166
Tabla 11.	Atención mediática.....	170
Tabla 12.	Medios locales.....	171
Tabla 13.	Medios nacionales (referencia local).....	171
Tabla 14.	Medios nacionales (meta-movimiento).....	171
Tabla 15.	Medios internacionales.....	171
Tabla 16.	Atención mediática (aceptación).....	171
Gráfica	Tendencia del comportamiento de los agentes 1992.....	173

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales recursos útiles para procurar una administración integral del ambiente es la participación ciudadana. Sin embargo, este valioso insumo en muchas ocasiones no ha sido valorado por las autoridades, siendo utilizado como una forma de legitimación ante la población, o inclusive como parte de un discurso demagógico.

La participación ciudadana es un elemento determinante en la elaboración e implementación de las políticas públicas. Permite a los gobiernos no solamente entender una problemática particular, sino que también aporta soluciones creativas desde “abajo”. La participación ciudadana facilita la implementación de políticas públicas, generando en teoría mayores niveles de aceptación y cumplimiento por parte de la población.

La ausencia de mecanismos institucionales para la participación, o su ineffectividad, en ocasiones motiva a la ciudadanía a recurrir a vías no institucionales para obtener sus demandas. Cuestión que debería ser “revalorada” por las autoridades gubernamentales, pues históricamente se ha comprendido la acción colectiva (no institucional) como el problema y no como una parte medular de la solución.

En ese sentido, comprender el funcionamiento de los movimientos ambientalistas aportará elementos importantes para mejorar la toma de decisiones del gobierno con respecto a la administración del medio ambiente. Mejorándose el entendimiento de las posibilidades de la participación para los diversos sectores que no vean resueltas sus demandas por los gobiernos y que decidan modificar los esquemas sociales de manera alternativa.

Nos queda claro que no se inventa el hilo negro. El tema de los movimientos ambientalistas ha sido abordado desde perspectivas múltiples y en algunos casos contradictorias. Los enfoques relacionados con la construcción de identidades, así como los relacionados con la movilización de recursos, han producido aportes fundamentales para la comprensión de la interacción social.

Empero, desde nuestra humilde perspectiva, se considera que habría que ensayar el estudio del fenómeno social a partir de una conceptualización que sea capaz de dar una lectura diferente al análisis de los movimientos ambientalistas, iniciando con presupuestos teóricos distintos a los comúnmente aceptados. Sin lugar a dudas un ejercicio potencialmente innovador, pero riesgoso en el sentido de que la modificación de los preceptos acreditados por la comunidad científica no será una tarea fácil y probablemente quedará inconclusa.

En respuesta a lo cual se elige utilizar la teoría de los campos de Pierre Bourdieu como una alternativa viable para analizar a los movimientos ambientalistas. Ya que esta teoría podría aportar una visión global del fenómeno, sustentándose esencialmente en tres conceptos, campo, habitus, y capital.

Dicha trilogía conceptual trasciende la antinomia entre los estudios sociológicos centrados en la identidad subjetiva, y los enfoques funcionalistas orientados hacia las instituciones y los procesos objetivos. Siendo quizás el principal esfuerzo de Bourdieu el construir una teoría capaz de analizar fenómenos sociales desde esta perspectiva.

A manera de adelanto, cabe decir que por medio del campo se rompe con la noción marxista de clase social, apoyada en la explicación de la realidad a partir de la posesión de capital económico. Proponiéndose un concepto de clase basado en la distinción, refiriéndose a las características, no siempre económicas, que posicionan a los agentes en el espacio social condicionando su accionar.

En los campos se ubica a los agentes con base en la posesión del capital que domina un campo particular. Por lo que es importante comprender el hecho de que en la teoría de los campos no existen individuos, sino agentes, los cuales operan a partir de un habitus, mezcla de lo subjetivo del individuo y lo objetivo de las instituciones.

El concepto de habitus nos aleja de la dualidad objetividad-subjetividad, facilitando el entendimiento de la manera como los agentes internalizan los valores imperantes a partir de las estructuras objetivas del campo, configurándolos de forma subjetiva para elaborar un habitus particular e irrepetible.

A su vez, en Bourdieu los fenómenos sociales se estudian a partir de tres dimensiones; cultural, económica, y social; dándose énfasis en la adquisición de los capitales para lograr posiciones de poder. Empero, la principal aportación de la teoría de los campos en torno a las especies de capital tendría que ver con el capital simbólico, y la forma como los agentes sociales lo utilizan para definir las reglas del juego (sociedad).

Para Bourdieu las luchas de poder se centran en la posesión del capital simbólico necesario para dominar el espacio social. Por lo que los agentes estarían en constante disputa por definir las principales nociones culturalmente compartidas y de esa forma articular un dominio. En la teoría de los campos el poder no es solo la capacidad para movilizar a otros agentes según sus intereses, sino que implica la capacidad de definir las reglas del juego, es decir, lo que es correcto e incorrecto, positivo o negativo, posible o imposible: es una guerra simbólica.

En términos generales, uno de los principales aportes a la investigación de los movimientos sociales sería la adaptación de algunos de los presupuestos de Bourdieu al estudio de los movimientos sociales urbanos mediante la generación de un modelo científico, útil tanto para los tomadores de decisiones en la administración pública, como para el desarrollo y profundización del tema en la academia; sin dejar de lado que también fungiría como un recurso valioso para la organización ciudadana de carácter no institucional.

Por lo tanto, el trabajo estaría orientado por el objetivo general de analizar la efectividad del movimiento ambientalista en oposición a la instalación de un incinerador de residuos peligrosos. Buscando además determinar las especies de capital con que contaba el movimiento ambientalista; conocer la forma como influyeron las especies de capital en la efectividad del movimiento ambientalista; comprender las estrategias de poder que habría desarrollado el movimiento ambientalista y analizar como influyeron en la efectividad del movimiento ambientalista

La importancia de la investigación estaría justificada en dos sentidos, uno práctico y otro teórico-conceptual, comprendiéndose que ambos sería complementarios. En primer lugar, este trabajo aportaría insumos relevantes para agentes de distintos campos, ya que como se dijo en

un principio, la participación ciudadana se analiza aquí como un recurso útil. Asimismo, la comprensión del funcionamiento de los movimientos ambientalistas podría ofrecer alternativas creativas en torno a las políticas públicas.

De otra parte, en el sentido teórico, se estaría haciendo un esfuerzo por crear nuevos enfoques conceptuales, o al menos, cuestionar los tradicionales. Aplicando un marco conceptual y una metodología *sui generis* a una problemática ampliamente estudiada. Junto con una interpretación y adaptación de los presupuestos de la teoría de los campos de Pierre Bourdieu en referencia al campo de los estudios socio-ambientales.

El estudio se centra en el análisis del caso del movimiento ambientalista que se gestó alrededor de la instalación de un incinerador de residuos peligrosos, durante el periodo 1988-1992, en el municipio de Tijuana, Baja California. Intentando comprender a partir del caso de estudio los factores que podrían llevar a un movimiento social urbano a ser efectivo, para plantear un modelo científico que permita la evaluación de movimientos similares.

Particularmente se explicará el fenómeno a partir de la diversidad de especies de capital y de las estrategias desarrolladas por el movimiento ambientalista. A lo cual, la influencia de los recursos económicos, culturales, sociales, y simbólicos, y el tipo de estrategias desarrolladas para lograr ser un movimiento efectivo, serían los principales temas de análisis.

En concordancia, se plantea como hipótesis general que los movimientos ambientalistas serán efectivos cuando logren acumular el capital, económico, social, cultural, necesario para desarrollar estrategias coherentes con sus objetivos y relacionadas con la consecución de sus demandas. Sin embargo, lo anterior no es suficiente, para determinar científicamente si un movimiento social es efectivo o no; ya que el cumplimiento de los objetivos planteados no denota efectividad en todos los casos.

El éxito de un movimiento ambientalista puede ser resultado de una configuración de elementos relacionados con el contexto histórico, político, económico, social, e inclusive mediático. Por lo que es indispensable acotar la posesión de capital a estrategias viables con resultados representativos.

El documento está organizado en cinco capítulos. El capítulo I titulado “Los movimientos sociales como objeto de estudio: panorama general de sus teorías”, fungiría como revisión bibliográfica, planteándose una discusión sobre los principales enfoques que se han desarrollado en relación con la movilización ciudadana. Autores como Touraine, Melucci, Tarrow, Tilly, Habermas, entre otros, son analizados, comparándolos entre sí, y con respecto a la “Teoría de los Campos” de Pierre Bourdieu.

De acuerdo a lo anterior, se construyeron dos anexos en los que se profundizan las discusiones y se presentan entramados teóricos que no fueron abordados en la investigación parcial o totalmente, pero que merecen un espacio en la investigación. En el Anexo v. “Perspectiva geográfica del estudio de los movimientos sociales”, se configuro una representación de algunas de las teorías que han estudiado a los movimientos sociales urbanos en diferentes lugares del mundo. De América Latina a Estados Unidos, pasando por algunos casos europeos, para aterrizar en la frontera norte de México, y particularmente en Baja California.

De otra parte, el Anexo vi. “Inventario de “vicios y virtudes” de las teorías de los movimientos sociales” sugiere un debate entre cinco formas de estudiar a la movilización ciudadana no institucional; centrándose en paradigmas como el de la construcción de identidades, el paradigma de la movilización de recursos, los estudios marxistas, los desarrollos antropológicos, para finalizar con algunos teóricos posmodernos.

Tras la revisión bibliográfica se encuentra el espacio titulado “Razones para utilizar la Teoría de los Campos en el caso de estudio”, en donde se expone una argumentación esquemática relacionada con el enfoque teórico seleccionado para desarrollar la investigación. Este apartado es importante porque se aclara al lector las razones por las que se eligió la teoría de los campos, o porque es importante utilizarla en un caso así.

En seguida se estructura una “Reseña crítica de la Teoría de los Campos”, espacio en donde se precisan de forma breve los principales presupuestos conceptuales de Pierre Bourdieu; sin que se reconozca como el marco teórico de la investigación; aunque, teniendo una función orientada hacia la mejor comprensión del enfoque teórico detallado más abajo. Es importante explicitar que por ser una macro teoría sociológica, la teoría de los campos difícilmente podrá

ser explicada en un par de páginas, por lo que se hizo un esfuerzo para sintetizar al máximo los conceptos más generales.

Luego de la descripción del marco teórico, se decidió hacer dos apartados para acotar la teoría de los campos al caso de estudio. El primero se titula “Aplicación de la Teoría de los Campos al contexto mexicano”, buscando adaptar los conceptos de Bourdieu a la “realidad mexicana”; procurando evitar lo que el sociólogo francés llamo “*intelectual bias*” (intelectualismo), es decir, el intentar adaptar la realidad a los conceptos, y no a la inversa.

El segundo apartado se titula “La Teoría de los Campos y los movimientos ambientalistas”, siendo una reflexión sobre las posibilidades del enfoque bourdieano aplicado a la dinámica de los movimientos ambientalistas. Aquí se busca innovar, aclimatando conceptos de la teoría a la compleja problemática del ambientalismo.

En seguida, se construye el “Modelo de Efectividad de los Movimientos Ambientalistas”, el cual intenta explicar la efectividad de la participación ciudadana no institucional apoyándose en siete variables independientes sujetas a dos componentes de investigación. Al respecto, el primer componente se relaciona con la diversidad de especies de capital y contendría las variables relacionadas con el capital económico, cultural, social, y simbólico de los movimientos ambientalistas.

En el segundo componente de investigación se sugieren cuatro estrategias de poder que desde nuestra perspectiva permitirían al movimiento ser efectivo. Estas serían la vinculación con organizaciones internacionales, la utilización de recursos legales, el uso de los medios de comunicación, y la participación en foros de discusión. Finalizando el apartado con una sección titulada “Particularidades del modelo: el contexto como una variable interviniente”, en donde se hace un esfuerzo por acotar los planteamientos teóricos a características económicas, políticas, sociales, y ambientales.

A continuación está el capítulo II, el cual se caracteriza por referirse a las cuestiones metodológicas, o sea, el manual de investigación. En él se encontrarán los procesos relacionados con la construcción de la teoría, de las preguntas, variables, e hipótesis, hasta las

pruebas de hipótesis y los resultados. Especificando el método para construir, implementar, y comprobar las hipótesis. En resumen, el apartado metodológico esclarecerá los pormenores del trabajo de campo, desde la revisión documental, hasta el procesamiento e interpretación de los resultados, para llegar finalmente a las conclusiones del estudio.

El capítulo III, “Recuento de los hechos: El movimiento ambientalista en oposición al incinerador TEESA”, es la base de datos y la descripción del caso de estudio. La misma fue construida por medio de una exploración documental que incluyó análisis de bibliografía referente al caso, la revisión de textos legales, así como una revisión hemerográfica realizada en veinte periódicos del orden local, nacional, e internacional. Aunado a lo anterior, se incluye información de catorce entrevistas a profundidad aplicadas a actores clave.

La estructura del recuento de los hechos parte de un análisis de las luchas de poder en el campo político durante el periodo y un breve estudio de la construcción de la nueva política ambiental. Ambos apartados funcionan como soporte a la comprensión del contexto vigente durante el caso de estudio. Luego, se desarrolla una crítica a la política ambiental del periodo, explicando desde nuestra perspectiva sus virtudes y defectos, para estimar si su funcionamiento habría sido uno de los principales motivos para que la ciudadanía se movilizara.

Posteriormente se describe la estructura del campo político internacional con respecto a México, procurando visualizar el proceso de adaptación de la nueva política ambiental a los lineamientos internacionales. Para luego, describir el manejo de los residuos peligrosos en la frontera compartida por México y Estados Unidos.

El tema de los residuos peligrosos se profundiza en el apartado “La problemática de los residuos peligrosos en la frontera desde la óptica de los especialistas”, en donde se consulta a especialistas, tanto del sector académico, como gubernamental y empresarial, sobre la problemática citada, y se obtienen opiniones que se contraponen para mostrar al lector un mosaico representativo de la problemática.

El capítulo III finaliza con tres apartados relacionados con el movimiento ambientalista analizado en la investigación. Siendo el primero una descripción del proceso de instalación del incinerador TEESA en Tijuana; mientras que el segundo estaría enfocado en la construcción del movimiento ambientalista; y el tercero en las consecuencias prácticas de la movilización ciudadana.

“Análisis de la efectividad del movimiento ambientalista” se titula el capítulo IV, y tiene como objetivo principal el comprender el caso de estudio desde la óptica del modelo teórico construido, así como determinar la efectividad del movimiento con respecto a las variables independientes de la investigación

El análisis se desarrolla en torno a hipótesis simétricas a los componentes de las variables de estudio. Las hipótesis serían enfrentadas a sus respectivas pruebas de hipótesis. Para después cotejar las pruebas de hipótesis con indicadores cualitativos y cuantitativos. Las variables relacionadas con el componente “diversidad de especies de capital”, es decir, el capital económico, social, cultural, y simbólico del movimiento, se analizarían mediante indicadores cualitativos. Por otra parte, las estrategias de poder se evaluarían por medio de indicadores cuantitativos y cualitativos.

Posteriormente, se estudia el contexto del caso como variable interviniente para acotar los resultados a características históricas particulares en torno a la apertura económica al libre comercio, el contexto político autoritario, y la problemática ambiental compartida. Para finalmente hacer un resumen de resultados por variable independiente.

En el capítulo V, se describen los hallazgos y conclusiones de la investigación. Siendo la más general que se obtuvo que el movimiento habría sido efectivo por contar con una diversidad de especies de capital que le permitió desarrollar estrategias para presionar al gobierno y evitar la instalación del incinerador, cumpliendo así su principal objetivo/demanda.

Además, como un hallazgo interesante se destaca la utilización del capital simbólico del movimiento en ámbitos como los medios de comunicación o las cortes locales, nacionales, e

internacionales, interpretándose que el movimiento habría sido capaz de participar en la transformación de la Doxa del campo, para así modificar la lógica de las autoridades gubernamentales, y hacer, en términos prácticos, inviable un proyecto que en un principio era viable económica y políticamente para el gobierno federal.

I. SOBRE LOS MOVIMIENTOS AMBIENTALISTAS EFECTIVOS

En este capítulo se realiza una revisión bibliográfica del tema de investigación, detallando algunas de las principales teorías relacionadas con el objeto de estudio. Posteriormente, se discuten las razones para utilizar el marco teórico denominado Teoría de los Campos. Para luego realizar una reseña crítica del pensamiento de Bourdieu, acotándolo por medio de dos apartados relacionados con la aplicación de sus presupuestos teóricos al contexto mexicano, y a la problemática de los movimientos ambientalistas. Finalizando con una propuesta de “Modelo de efectividad de los movimientos ambientalistas”.

1.1. El movimiento social como objeto de estudio: panorama general de sus teorías

Múltiples perspectivas teóricas han abordado el tema de los movimientos sociales desde ángulos diversos; en ocasiones de forma coincidente o también en sentidos contradictorios; siendo analizadas diferentes parcelas del fenómeno y heterogéneos presupuestos teóricos, resultando en una complejidad tan importante, que –a nuestros ojos- pareciera que no se estudia el mismo objeto sino varios¹.

De forma general, pecando de un reduccionismo en ocasiones inevitable cuando se estudia el espacio social, podríamos agrupar artificialmente los enfoques teóricos mediante los cuales se ha abordado el objeto de estudio con base a dos funciones centrales: el “cómo” actúa un movimiento social; y el “porqué” se moviliza la población (Revilla, 1996).

La separación tendría el propósito de simplificar para efectos de esta investigación, la enorme cantidad de teorías que se han construido sobre los movimientos sociales. No es alarde la síntesis lo que se exhibe a continuación, sino modesta metáfora de los esfuerzos que han construido en su historia los gigantes de la ciencia social.

1 En el Anexo v. “Perspectiva geográfica del estudio de los movimientos sociales” se elabora una breve discusión sobre la forma como se ha estudiado el fenómeno de los movimientos sociales en diferentes geografías.

El “cómo” estaría relacionado con la teoría de la acción colectiva de Olson; la teoría de la acción racional de Elster; la teoría de la movilización de recursos, sustentada por McCarthy y Zald, así como por Jenkins; para también considerar la teoría de las estructuras de oportunidad política de Kitschelt.

Cabe decir que si bien estos enfoques teóricos son diferentes en sus principales postulados, es posible relacionarlos partiendo de que estudian a los movimientos sociales como una organización inteligente, centrándose en su funcionamiento, operación, y administración, sin presupuestar del todo su proceso de construcción de identidad, ni el paso de lo individual a lo colectivo, es decir, su origen y forjamiento.

Por otra parte, el “porqué”, pretende esclarecer las razones de la génesis y construcción progresiva de un movimiento social, y habría sido aproximado fundamentalmente por las teorías de los nuevos movimientos sociales, en dirección hacia un océano de autores que incluiría a Touraine, Melucci, Habermas, y Offe, entre otros.

La multitud de posibles objetos de estudio se profundiza al incluir movimientos ecologistas, de género e identidad sexual, comunidades de migrantes, e inclusive neo-nacionalistas radicales; por lo que proporcionalmente los autores se incrementan con respecto a la multiplicación de los fenómenos sociales.

A partir de lo cual, se utiliza como un común denominador de las propuestas conceptuales relacionadas con el enfoque de los nuevos movimientos sociales, la comprensión del objeto de estudio como un “esfuerzo” de construcción de identidad social para los grupos marginados o excluidos por las esferas de poder, o para superar el “déficit” de identidades (desidentificación) que algunos autores sugieren (Melucci, 1989).

A diferencia de las teorías del “cómo”, los paradigmas que intentan dar respuesta al “porqué” relacionan el análisis de los movimientos sociales a las condiciones estructurales en las que se desarrollan, por lo que la movilización ciudadana sería resultado de una configuración peculiar de sociedad con características específicas. Empero, no implica que las teorías que giran en

torno al concepto de identidad ignoren el contexto, empero, le dan un mayor peso a las acciones de los agentes que a la estructura objetiva.

Desde la perspectiva general del “cómo”, las acciones particulares, individuales, singularmente colectivas, determinan la composición y el accionar dinámico de los movimientos sociales; mientras que para la división del “porqué”, lo fundamental se encuentra en los conflictos constantes que se construyen y de-construyen en el universo social.

En otro sentido, también se puede seccionar a las posturas teóricas referidas a partir de tres conceptos nodales: comportamiento colectivo, acción colectiva, y movimiento social. A la vez, se podría catalogar tal distinción como de “forma”, es decir, incrustando no solo el “cómo” y el “porqué”, sino las características del proceso de análisis y su influencia sobre la conceptualización del fenómeno

Al alojar dicha triada conceptual en el capítulo, es relevante ubicar a los movimientos sociales dentro de la misma. Ya que existen una gran diversidad de fenómenos que podrían recaer en el marco de los comportamientos colectivos, y que sin embargo, no precisamente tendrían que responder a la definición de movimiento social.

Desde nuestra perspectiva, hay abundantes motivaciones para la conformación de un movimiento social; desde la exclusión y la pérdida de sentido de la acción individual, los cambios en las estructuras de poder que producen espacios o vacíos que pueden ser llenados por la acción colectiva; hasta la frustración de las expectativas colectivas de un grupo social, o la “invención” de nuevas necesidades. Por lo que lógicamente habría varias formas de conceptualizar a los movimientos sociales con base en sus motivaciones y demandas.

En primer término, el comportamiento colectivo sería construido por una reacción relativamente espontánea ante un suceso que tendría un impacto en uno o varios sectores de la población: los agentes perciben y responden a una situación que posiblemente ya existía, o se enfrentan a una reconfiguración que perciben como desfavorable. La reacción desataría un

comportamiento individual que en el amparo de una problemática compartida se transformaría en colectivo.

Sería interesante jugar un poco con la idea de que no tienen que ser precisamente situaciones “adversas” las que motiven un comportamiento colectivo. La victoria en un encuentro deportivo, o también la presencia de una estrella de rock, podrían motivar un comportamiento colectivo eufórico que podría sedimentar en violencia.

A la inversa, una situación “negativa”, bajo una configuración particular, podría derivar en actitudes de inconformidad en algunos sectores de la población. Tampoco el comportamiento colectivo, desde nuestra perspectiva, tendría que ser violento en todas las ocasiones, aunque al ser un fenómeno de respuesta relativamente rápida, la reacción consecutiva si podría presentar cierto nivel de convulsionamiento.

Circunscribiendo el hecho de que comportamientos colectivos como, por ejemplo, un motín en una cárcel ante un incendio, o la respuesta violenta de un grupo importante de personas ante la victoria de un candidato contrario a sus preferencias, no encajarían dentro del concepto de movimiento social, dado que una “masa” o “turba” no ha desarrollado (aunque podría hacerlo) una identidad colectiva, ni una estrategia conjunta que de forma relativamente coherente sus demandas y expectativas.

Porque quizás la principal semejanza entre un comportamiento colectivo y un movimiento social radicaría en que el primero estaría constituido por un conjunto de acciones individuales y espontáneas, relativamente aisladas; mientras que el segundo representaría una identidad constituida “intencionalmente”, y un accionar colectivo con base a demandas y expectativas comunes.

El problema cognoscitivo estaría en la racionalidad de la articulación de las demandas y expectativas de un movimiento social, es decir, en la comprensión de hasta qué punto podrían ser producto de procesos de racionalidad estratégica, o sea, resultado del análisis de la

posición y potenciales resultados de la movilización; o fruto de los procesos estructurales que acondicionan la lógica vital de los campos.

Las teorías de la movilización de recursos, de la elección racional, o de las oportunidades políticas, proponen que la racionalidad de los movimientos sociales favorece la maximización de sus recursos, permitiendo la toma de las decisiones “correctas”, y también el actuar en el “momento óptimo” ante una “ventana de oportunidad”.

A diferencia del comportamiento colectivo, la acción colectiva estaría dirigida colectivamente a los contrarios. La motivación de un individuo que integra su voluntad individual a un accionar colectivo tendría que ver con un interés de grupo, es decir, con un posible beneficio grupal, el cual a su vez sería uno de los principales generadores de identidad.

Para Olson (1971), la acción colectiva es la acción de las organizaciones dedicadas a la atención de los intereses colectivos y particulares de los individuos que la componen y destinada a la producción de bienes públicos asequibles a los miembros de la organización. Aunque el limitar la efectividad de una acción colectiva en torno a la producción de bienes públicos podría aplicarse más a la acción colectiva desde el ámbito institucional que a la no-institucionalidad (no sería anti-institucionalidad) de los movimientos sociales.

La acción colectiva supera la sumatoria de acciones individuales (comportamiento colectivo) y articula una colectividad basada en conjuntos de preferencias, necesidades, y expectativas que dan fuerza a la progresiva construcción de una identidad colectiva. Aunque la maduración de un proceso de identificación colectiva no tendría porque encerrarse en un periodo prolongado de tiempo, sino que dependerá de las características particulares del objeto de estudio.

En ese sentido un movimiento social es una acción colectiva, pues representa un sumatoria de acciones individuales dirigida hacia una expectativa común, la cual progresa hacia una identidad colectiva que reafirma las identidades individuales incluidas y a la inversa (de lo individual a lo colectivo). Sin embargo, en la sociedad se desarrollan muchas acciones colectivas, pero no todas podrían ser clasificadas como movimientos sociales.

Los sindicatos, los partidos políticos, y los grupos de presión son organismos que brotan de la acción colectiva y son “actores políticos colectivos”. Pero se diferencian de los movimientos sociales en que son estructuras cuyas identidades fueron definidas *a priori*, es decir, tanto en los sindicatos como en los partidos políticos y los grupos de presión, los individuos que se integran a la acción colectiva lo hacen también a una identidad definida por una estructura previa que incluiría un borrador de objetivos y expectativas (lo que no significa que el borrador no pueda ser reescrito).

Los movimientos sociales son actores políticos colectivos, porque aunque tienen enormes diferencias con los sindicatos, los partidos políticos, y grupos de presión, comparten entre otras características, una relativa estabilidad organizativa; una sociedad de objetivos y discursos entre sus miembros; una directriz organizada de acción colectiva; y una intención de incidir en el campo socio-político y sus conflictos (Martí, 2004).

Por otra parte, los movimientos sociales despliegan diferencias primordiales en relación a otros actores políticos colectivos. Martí (2004) destaca, entre otras, su débil estructuración orgánica, su discurso transversal, su ámbito de acción dirigido hacia la política no institucional, su orientación hacia la confrontación y los conflictos, y el carácter de sus recursos dispuesto hacia lo simbólico

La lista de características expuesta por Salvador Martí i Puig plasma de forma eficiente algunos de los elementos de análisis de los movimientos sociales, empero, es necesario confeccionar desde nuestro punto de vista algunas precisiones teóricas. En primer lugar, el autor refiere la débil estructuración orgánica, sin embargo, desde otro planteamiento, la supuesta debilidad podría traducirse en flexibilidad organizacional y una capacidad para adaptarse a un contexto cambiante.

Una segunda precisión apunta hacia una orientación a la confrontación y los conflictos, la cual es lógica y corresponde con la realidad de los movimientos tradicionales, pero habría que ser más cauteloso cuando se abordan los nuevos movimientos sociales, ya que su estudio no

siempre encontrará la definición ortodoxa de violencia y confrontación, sino que analizará nuevos formatos y nuevos conflictos.

Para nuevos actores sociales, nuevas formas de violencia y represión en nuevos conflictos sociales: en respuesta, adaptaciones innovadoras de la acción colectiva. Pensemos por ejemplo en un grupo de personas que enfrenta una problemática compartida y por ende tiene intereses similares. El problema está en que los agentes se encuentran desperdigados por el mundo, y solo estarían en contacto por medio de una red social en la Internet; empero, es probable que se logre constituir -a pesar de la distancia- una identidad colectiva.

Sería difícil que estas personas entraran en conflicto directo con sus opositores y posiblemente no serán los mismos para cada uno. Los nuevos problemas sociales, bajo la globalización, no siempre estarán “localizados”, o a veces lo están pero tienen implicaciones globales. Ergo, la movilización es posible en la era de la información, e inclusive se puede ejercer gran presión sobre las autoridades desde un ordenador.

Volviendo a las distinciones entre comportamiento colectivos, acción colectiva, y movimientos sociales, se necesitan dos componentes esenciales para que se cumpla la definición de Olson sobre acción colectiva; la generación potencial de valor público, y que existan incentivos particulares para la participación de los miembros en las actividades de la organización. Los movimientos sociales son capaces de producir valor público, empero, el debate se centra en su capacidad para incentivar selectivamente a sus miembros.

El problema, según Olson (1971), es que la acción colectiva frecuentemente encarna el problema del *free rider*: actor social que sería algo así como un individuo “oportunista” (polizón) que se beneficia de la acción colectiva para obtener sus prerrogativas, sin interactuar o formar parte significativa de las estrategias de la organización.

Según Olson el miembro en cuestión sería capaz de realizar un cálculo estratégico y llegar a la conclusión de que su esfuerzo particular no sería significativo para el colectivo, y que a la vez

sostendría un costo elevado, por lo que optaría por permanecer inactivo, dado que de cualquier manera obtendría su parte de las ganancias producidas.

Bajo esta lógica, organizaciones como los sindicatos, los partidos políticos, o los grupos de presión tendrían la capacidad de modular incentivos para que sus miembros no incurran en las prácticas estilo *easy rider*. Igualmente, la noción de que los incentivos podrían evitar el comportamiento “negativo” en la organización, supondría una fortaleza de los mismos que tendría que ser determinada caso por caso.

Entonces la problemática se bifurca, por un lado se supone que los movimientos sociales no tienen la capacidad de generar incentivos para que sus miembros eviten jugar el rol de *easy rider*; y además, desde la perspectiva de la teoría de la acción racional, no habría razón para que un individuo opte por participar en el movimiento si no obtendrá un beneficio superior al que lograría seleccionando la inactividad.

Por otro lado, si bien en los organismos citados podrían generarse indicadores para verificar el cumplimiento de los deberes u obligaciones normativas por las cuales obtienen un sueldo; en cuestión de los movimientos sociales la propia estructura relajada (no-institucional) podría impedir que se desarrollen incentivos para la participación

Con base a lo anterior, se considera a Hirschman (1977), quien propone los conceptos de voz, lealtad, y salida para explicar los incentivos y motivaciones que podrían tener los agentes sociales en torno a la acción colectiva. Para el autor, la dinámica de las organizaciones sociales está centrada en la interacción entre la voz, que es capacidad de participar y tener un “voto crítico”, y la salida, que tiene que ver con la ruptura con el grupo.

En Hirschman la opción salida se diluye ante la posibilidad de “tener voz” en la organización, lo cual es un incentivo para formar parte de la organización: tener voz significa tener un lugar de privilegio e impactar las decisiones del grupo. A los ojos del individuo, la voz hace viable la opción de cambio y mejora, además de fortalecer la identidad individual y colectiva; así, la

lealtad a la organización es el fiel de la balanza, pues disminuye la salida e incrementa la intención de contar con voz.

El nivel de lealtad determinaría la elección entre voz y salida: los miembros poco leales decidirán salir, mientras que los más leales elegirán la voz para intentar impedir el “deterioro acumulativo” de la organización. Sin embargo, es importante decir que la lealtad funciona cuando hay posibilidad de salir, es decir, en un sistema cerrado, la lealtad se desactiva o se vuelve discursiva, y la voz no se convierte en un incentivo de identidad.

De otra parte, la organización alimenta su identidad colectiva por medio de la lealtad, pero sobre todo por la salida, pues los miembros disconformes o conflictivos podrán elegir salir, a diferencia de los leales, que se quedan porque comparten intereses con los otros miembros y sobre todo en lo relativo a su identidad (fundada en su “voz”).

Al respecto, Pizzorno (1988) propone la inclusión de un concepto a la teoría denominado “identificador”, cuyo papel sería proveer de identidad a la organización y estructurar así también su propia identidad. La importancia de los identificadores es que son leales porque su identidad depende de la organización. Así, la principal motivación de los identificadores sería conservar su identidad, no tanto lograr los objetivos de la organización (aunque su identidad si sería orientada por los objetivos).

Los identificadores estarían profundamente vinculados con el concepto de lealtad y su expresión en la voz, pues la identidad se vería asegurada por la capacidad de los miembros de identificar (generar identidad) en la organización. Para Pizzorno el identificador es el sustento de la organización y podría ser representado no siempre como un líder, sino quizás también como un agente social que basa su identidad individual en la colectividad, por lo que tiene un interés central en su desempeño y persistencia.

Por lo tanto, retomando el análisis del *free rider*, y siguiendo a Revilla (1996), una importante motivación o incentivo para participar en un movimiento social sería la misma identidad

colectiva. Igualmente, insertarse en un proceso provee de beneficios a los individuos, incentivándolos a evitar buscar las ventajas del oportunista.

Se podría extraer una interpretación alternativa del problema del *free rider* de la teoría de los campos de Bourdieu (2006), en donde el incentivo del agente miembro de la organización es el capital simbólico logrado al contribuir. El capital simbólico es parte esencial de la identidad individual y colectiva de cualquier organización. Esta lógica se complementa con el enfoque de Hirschman, en donde el incentivo de voz, respaldado por la identidad, se interpretará como la adquisición de capital simbólico

El capital simbólico se utiliza como herramienta para posicionarse en la organización, reafirmando una identidad dominante en la estructura de la organización, e inclusive alentando la salida de opositores. Ergo, desde Bourdieu, lo que fue interpretado como lealtad por Hirschman, sería realmente una intención de acumular capital simbólico. La lealtad como concepto “positivo” en Hirschman es en Bourdieu un elemento de poder que configura la identidad colectiva.

Habiendo planteado algunas opciones para la resolución del problema *easy rider*, se considera relevante argumentar que para los movimientos sociales la identidad colectiva no se construye *a priori*, como en el caso de los partidos políticos o los sindicatos, sino en la sincronización de las acciones individuales en el marco de una acción colectiva, así como en la confluencia entre demandas y expectativas relativamente similares.

La anterior es una disimilitud fundamental en torno a la capacidad de un movimiento social para mantener su identidad independiente de los procesos de cooptación o control por parte de instituciones u otras organizaciones. La identidad colectiva es un elemento que se construye en la marcha y su principal herramienta es la acción. Sin acción colectiva no hay identidad colectiva, y viceversa.

Así, las diferencias de los movimientos sociales para con otras organizaciones caracterizadas por ser expresiones de la acción colectiva, arrojarían un papel diferente y un funcionamiento

peculiar para este tipo de organización. Se puede argumentar que los movimientos sociales actúan en espacios no institucionales y por ende tienen una función de cambio y ruptura.

Para Touraine (1985) un movimiento social, al generar espacios para la conformación de identidades, abre espacios democráticos en los cuales los agentes sociales pretenderán determinar las condiciones causales de producción de su vida y defender una representación alternativa de la sociedad y su futuro. El autor plantea la extensión y diversificación del espacio público como resultado del modo de producción de identidades vigentes, creándose nuevas formas de dominio y manipulación, a las que responderían nuevas versiones de la movilización social.

En esto coincide Touraine con Bourdieu (2002), pues ambos entienden la formación de identidades en el espacio social como resultado de la oposición y conflicto entre los intereses de actores en disputa por el poder. Aunque el segundo no da tanto peso a la identidad democrática sino al capital simbólico que a su vez produce los mecanismos causales que articulan las identidades.

El razonamiento de Pizzorno (1988) en cambio insinúa que los movimientos sociales serían uno de los modos de ofrecer “certidumbre valorativa” cuando en una sociedad se construye un nivel de incertidumbre; sosteniendo – contra Bourdieu y Touraine- que las relaciones sociales no necesariamente tendrían que estar en oposición; sino mas bien en relaciones de igualdad y diferencia.

La incertidumbre a la que alude Pizzorno se relaciona con los fenómenos que dificultan los procesos de conformación de identidades individuales y colectivas. En Melucci (1989) la llamada sociedad de la información es el origen de la incertidumbre que habría derivado en crisis de identidades. De tal forma, los movimientos sociales se comprenden como una respuesta a la incertidumbre, pues reafirman las identidades individuales a través de la identidad colectiva.

Para Habermas (1987), los movimientos sociales son la respuesta a la “colonización del mundo de la vida”, es decir, la invasión de la “racionalidad instrumental” en la vida privada de las personas elaborando nuevas formas de control y dominio. Así lo individual y privado se vuelve público, por lo que se presenta una crisis de identidades, y a la manipulación social en el nivel micro los movimientos sociales aportan una posibilidad de “reapropiación del sentido” de la acción individual y colectiva.

Considerando las sociedades complejas de la información, Melucci (1989) propone que el rol de los movimientos sociales habría emigrado de un espacio marginal y relacionado con “los excluidos”, hacia una función permanente y característica del sistema social. Lo que implicaría una respuesta a la incertidumbre social y una avenida en la cual transitar hacia la edificación de nuevas identidades producto de la acción colectiva.

Según Mario Diani (1992) habría cuatro enfoques principales para analizar los movimientos sociales. En primer lugar, la teoría del comportamiento colectivo, apoyada por autores como Smelser, Turner, y Killian; la teoría de la movilización de recursos, de McCarthy y Zald; la teoría del proceso político de Tilly; y finalmente, la teoría de los nuevos movimientos sociales, sustentada por Touraine y Melucci.

De otra parte, la clasificación de Diani tendría que incluir, según Revilla (1996), a autores como Olson, promotor de la teoría de la acción colectiva, y a los teóricos de la elección racional, como John Roemer y John Elster. Siendo la teoría de la elección racional actualmente poco aceptada, pues otras teorías han promovido la noción de que los sujetos sociales no siempre son racionales, ni eligen las opciones “óptimas”, sino que el comportamiento humano en sociedad es mucho más complejo y menos predecible.

En pocas palabras, y parafraseando en un sentido inverso a John Elster (1990), cuando la gente se enfrenta a varias opciones es probable que decida hacer lo que no tendrá un mejor resultado general; o sea, lo contrario a lo expuesto por la teoría de la elección racional, pues desde ese enfoque los individuos enfrentados con un dilema actuarían de forma racional.

En ese sentido, Diani excluyó este enfoque de su clasificación al juzgar que los movimientos sociales se componen de “personas normales”, no ejecutivos sociales que utilizan formulas para obtener la probabilidad y luego tomar decisiones. Las decisiones en un movimiento social se toman al calor del momento, lo que no necesariamente significa que no se realice un análisis de las perspectivas de la acción, pero el proceso emprendido, y los resultados generales, no siempre cabrían dentro del concepto de racionalidad.

Desde la perspectiva de Bourdieu (2002; 2005), la racionalidad de los agentes sociales es un concepto mucho más complejo que se ve cristalizado a partir de la teoría de los campos y significativamente si se incluye el concepto de habitus. En esta teoría los individuos son capaces de ser racionales, sin embargo, ven limitadas sus decisiones por su habitus.

La racionalidad en Bourdieu se construye a partir del contexto (campo) y la trayectoria de los agentes a través del espacio social. Las luchas de poder modifican el contexto, por lo que no es estático. Pero las acciones de los agentes son acotadas por la Doxa del campo y por la forma como ésta es socializada a través de su habitus. Por lo que un movimiento social tendrá la capacidad para subvertir el orden (improvisar), pero la racionalidad de sus acciones estará limitada por las estructuras objetivas y subjetivas. Al final, en Bourdieu la razón es una construcción histórica que surge de las luchas de poder.

Desde la perspectiva de la teoría de las oportunidades políticas, y retomando la discusión del “cómo”, “porqué”, y la “forma”, Sidney Tarrow (1994) propone que el “cuándo”, es decir, la coyuntura histórica es lo que facilita la aparición de los movimientos sociales. La coyuntura es lo que el autor denomina “estructura de oportunidades políticas”. Así, además de los recursos y la formación de su identidad, los movimientos sociales dependerán hasta cierto punto de los momentos en los cuales el contexto se vuelve “propicio” para el desarrollo de sus estrategias y el logro de sus objetivos.

Las oportunidades políticas se presentan en el campo político de manera consistente, desincentivando o fomentando la acción colectiva. El movimiento social deberá ser capaz de reconocer la oportunidad y actuar en el momento preciso. Tarrow (1994) argumenta que los

recursos exteriores (contextuales) son los que limitan costos para el movimiento, facilitan las alianzas, e iluminan las vulnerabilidades de las autoridades.

Los recursos aparecen cuando se desarrollan coyunturas de cambio que configuran “ventanas de oportunidad” para la acción colectiva. Según Tarrow, entre los recursos que generan las oportunidades está la posibilidad de vincularse con las elites gubernamentales, la disponibilidad de aliados influyentes, y la conexión con el “tiempo mundial”.

Para el autor, una coyuntura política en la que se presenten fisuras dentro de la elite política, facilitaría la vinculación por el hecho de que algunos sectores intentarían mejorar su posición en el campo político, y visualizarían la relación con el movimiento como un recurso utilizable. La coyuntura política también incrementa la probabilidad de relacionarse con aliados poderosos, como la iglesia o los medios de comunicación.

Asimismo, la conexión con lo que Tarrow llama el “tiempo mundial” tendría que ver con la “coincidencia” de un movimiento social con una coyuntura internacional favorable a sus intereses. Cuando un movimiento se encuentra en una coyuntura de este tipo magnificará su influencia y recursos.

En relación, Charles Tilly (1978) sostiene que los “picos de movilización” no siempre tendrán correspondencia con los “momentos” en los cuales se expresen de forma más clara las privaciones y necesidades de un sector de la población; dependiendo de cambios en la estructura de oportunidades políticas, como una muda de régimen, o un cambio en las preferencias electorales, o también, una caída en la “popularidad” de un gobierno que le obliga a prestar atención a problemas ignorados hasta ese momento.

Recapitulando, la teoría de oportunidades políticas, al centrarse en el contexto, nos explica que en ocasiones los movimientos sociales obtienen un poder significativo para presionar a las autoridades. De forma coyuntural, aprovechando las oportunidades que se abren, la acción colectiva se torna efectiva, pero también puede perder su solidez y capacidad con facilidad al mutar la estructura de oportunidades.

Desde el punto de vista opuesto a la teoría de las oportunidades políticas, autores como Gamson (1990) argumentan que las oportunidades condicionan la operación del movimiento social, y que a su vez las acciones del movimiento producen o incentivan la aparición de oportunidades en la estructura política

La perspectiva de Gamson podría complementarse con la de Snow y Benford (1992), autores que contribuyeron a la elaboración del análisis cultural de los movimientos sociales a partir de los “marcos de significación”, los cuales son estructuras cognoscitivas compartidas por los miembros de un grupo social que tienen la función de producir “orientaciones de atribución” y fomentar “orientaciones de articulación”.

La importancia de los marcos de significación es que se alejan de la perspectiva contextualista que reduce las acciones de un movimiento social a las oportunidades que se presentan como si fueran una especie de “milagros” inexplicables. Los marcos de significación permiten un acercamiento hacia la construcción de la coyuntura, es decir, se concurre en su comprensión, en una alternativa al estructuralismo que acota únicamente las acciones del ser humano a los cambios coyunturales del contexto (político).

Para Tarrow (1996), los marcos de significación de la acción colectiva se definen como constructos sociales que “guían” la operación de los movimientos sociales a partir de la “homología simbólica”; lo cual se vuelve significativo si se hace énfasis en el proceso de construcción del marco de significación, el cual nace de la interacción entre sus miembros, y la relación con el “exterior”. Esta teoría añade una racionalidad diferente a la de oportunidades coyunturales para la acción colectiva, partiendo desde “adentro”, en lugar de asumir una actitud “receptora” de los cambios.

Empero, así como la acción colectiva de un movimiento no dependerá exclusivamente de las coyunturas de la estructura social, tampoco es prudente argumentar que dependerá únicamente de la formulación “interna” de los marcos de significación de una organización y por ende de sus acciones como grupo.

Por otra parte, una vista atractiva es la que relaciona el capital simbólico desde la teoría de los campos de Bourdieu (2006) y la teoría de las oportunidades políticas. Interpretando a Bourdieu, la acción (posición y elección) se articula con base en la sincronía simbólica entre las estructuras objetivas (contexto coyuntural) y la subjetividad de los agentes o grupos de agentes (asemejándose con distancia a los marcos de significación).

El elemento que hace posible el proceso de sincronización sería el “habitus” (se define más adelante), a través del cual las estructuras objetivas influyen en los actores sociales al interiorizarse las disposiciones inscritas en los mecanismos de reproducción social. Pero por otro lado, los agentes tendrían la capacidad de modificar las estructuras sociales por medio de las luchas de poder.

La teoría de los campos aporta una metodología de análisis funcional para la comprensión del fenómeno de los movimientos sociales, absorbiendo un análisis estructuralista y una aproximación de las oportunidades políticas coyunturales; y siendo también un medio de estudio de la acción colectiva, partiendo de la subjetividad, como es ejemplo la teoría de los marcos de significación

El tratamiento teórico de los movimientos sociales se ha enfocado en algunas ocasiones en las oportunidades que el medio ofrece como incentivos o motivaciones para la acción colectiva. Sin embargo, es interesante recalcar que gran parte del desarrollo de los movimientos es logrado por sus propias acciones y no depende totalmente de las oportunidades.

Las acciones se “inscriben y se transmiten” siguiendo una línea cultural (Tilly, 1978). De ahí que se deduce que la acción colectiva se inserta en la cultura pública a la que pertenece, ubicándose los distintos grupos en un espacio particular, y contando con una memoria (cultural) entorno a sus acciones.

Se sigue que los movimientos sociales tendrían, desde la teoría de Tilly, una memoria cultural (particular y compartida) y formarían parte de una especie de archivo “vivo” de acciones

colectivas, es decir, una memoria, accesible a los agentes sociales, que recabaría en “tiempo real” las formas “conocidas” de acción colectiva”.

Dicha característica es denominada por el autor como un “repertorio de confrontación”, y como se comprende del término estaría relacionada con los elementos útiles o herramientas con los cuales el movimiento social podrá contar para desarrollar estrategias y obtener sus objetivos en una confrontación

Sin embargo, para Tilly, como en Melucci (1989), históricamente los movimientos sociales han estado relacionados con situaciones conflictivas particulares y con grupos de poder específicos; por lo que se deduce que la sociedad contemporánea permitirá la multiplicación y complejización de los conflictos y las relaciones potenciales entre los agentes.

En ese sentido, las teorías de los nuevos movimientos sociales parten de dos supuestos centrales. El primero se refiere a que el contexto de los mismos se desarrolla en una sociedad post-industrial, es decir, se habría avanzado hacia una etapa que sería estructuralmente distinta a los supuestos emanados de revolución industrial.

Son muchos los cambios que se aluden en torno al proceso histórico post-industrial, siendo quizás los más importantes el paso de una economía industrial a una de servicios y la transición de la materia prima hacia el conocimiento por medio de las tecnologías de la información

En segundo lugar, los nuevos movimientos sociales manifestarían características disimiles para con los movimientos tradicionales. Lo que produciría una extensa discusión que por motivos de espacio se podría sintetizar en el hecho de que estos movimientos no estarían orientados por motivaciones únicamente materialistas, sino que también defenderían causas más relacionadas con cuestiones alejadas de una lógica marxista de lucha de clases y materialismo.

Un ejemplo es el caso de los movimientos que se organizan en el ciber-espacio, conocidos como hacktivistas (Vicente, 2004), quienes tendrían como motivación la liberalización de la red y el libre (des-regulado) flujo de información; pues se comprende la Internet como una extensión del mundo “real”, con sus conflictos de poder y mecanismos de control social.

De ahí que ésta variante sería una buena representación de los nuevos movimientos sociales, en dos sentidos: primero, sus motivaciones no son claramente materialistas sino que se refieren a un sistema de ideales; segundo, la posibilidad de construcción de relaciones en diferentes espacios geográficos, manipulando, construyendo, y compartiendo, información en tiempo real, y por lo tanto, la participación en conflictos “distantes” y de maneras “alternativas”.

Por otra parte, la sociedad post industrial reconfiguraría los mecanismos de generación de identidad(es), dando pie a luchas y movilizaciones orientadas por la defensa de los espacios autónomos y originales. El caso de los movimientos indígenas para el reconocimiento de su identidad autónoma es importante porque refleja, primero una motivación extraña a la lógica de las luchas de poder; pues la construcción institucional de los espacios democráticos no incluiría a las identidades “marginales”, por lo que estos grupos se organizarían para “defender” su identidad, tanto individual como colectiva (Vargas, 2004).

A manera de conclusión, se argumenta que los movimientos sociales han sido estudiados desde múltiples perspectivas teóricas, pero centrándose esencialmente en dos líneas de investigación Una relacionada con la formación de las identidades, la otra orientada por la capacidad de movilizar recursos. De cualquier forma, se considera prudente afirmar que si bien los autores que corresponden a dichas líneas de investigación reconocen algunas de las deficiencias² de sus respectivos paradigmas, sería necesario realizar esfuerzos para construir una teoría que incluya tanto el análisis del curso de las identidades como el estudio de los recursos y estrategias de los movimientos sociales.

2 En el Anexo vi. Inventario de “vicios y virtudes” de las teorías de los movimientos sociales podrá encontrar una pequeña discusión sobre las ventajas y desventajas del uso y aplicaciones de algunas de las principales teorías sobre los movimientos sociales.

Encarando la problemática teórica planteada en el párrafo anterior, nos atrevemos a sugerir la “teoría de los campos” de Pierre Bourdieu como un acercamiento para abordar los componentes relacionados con la identidad colectiva de los grupos en movilización, así como los elementos de racionalidad instrumental por medio de los cuales un movimiento social podrá lograr sus objetivos.

1.2. Razones para utilizar la teoría de los campos en el caso de estudio

Destacamos seis razones por las que se eligió utilizar la teoría de los campos de Pierre Bourdieu para desarrollar el trabajo de investigación.

En primer lugar, el método de Bourdieu no ha sido utilizado a profundidad para trabajar los temas relativos a los movimientos sociales urbanos. Salvo al final de su carrera, de forma breve, y sobre todo centrado en el papel que deberían jugar los científicos sociales en torno a la movilización social (Bourdieu, 1999).

La teoría de Bourdieu enfatiza los elementos relacionados con la reproducción de las condiciones sociales por parte de los agentes, por lo que las posibilidades de ruptura o cambio como resultado de la organización social se verían limitadas por los mecanismos implícitos de la sociedad. Empero, esto no quiere decir que los movimientos sociales no tengan la capacidad para cambiar sus circunstancias, sino que los cambios que generen, así como sus estrategias para llegar a los mismos, estarán acotados por el contexto histórico.

Aunado a lo anterior, los movimientos ambientalistas no han sido normalmente uno de los temas de la investigación basada en Bourdieu, evadiéndose de esta forma una potencial aplicación de la teoría de los campos en una de las áreas de mayor debate o crítica de la filosofía científica del sociólogo francés.

Otra importante razón tendría que ver con la discusión en torno a los desarrollos teóricos enfocados a los paradigmas relacionados con la identidad y los que se orientan por la movilización de recursos. La teoría de los campos enfrentaría los procesos de identidad

individual y colectiva utilizando el habitus para comprender como los individuos adoptan características contextuales y las organizan interiormente para producir una posición social y tomar decisiones.

De otra parte, el concepto de capital, en sus variantes o especies, sería utilizado en la teoría de los campos para comprender la movilización de recursos materiales y simbólicos; diferenciándose de la teoría de la movilización de recursos en que Bourdieu daría prioridad al capital simbólico y, además, encuadraría la adquisición de capitales en las luchas de poder dentro de la lógica de los campos. Así, ambas vertientes teóricas podrían tener cabida dentro del paradigma de la teoría de los campos y arrojar un análisis integral.

En otro sentido, el desarrollo de las teorías relacionadas con Bourdieu en contextos distintos al europeo o estadounidense ha sido un fenómeno excepcional, sobre todo en el campo científico latinoamericano y en general a lo largo del denominado tercer mundo. De ahí que en la re-edición del año 2005 de “Una invitación a la sociología reflexiva” (Bourdieu y Wacquant) se haya dedicado una apartado al inicio de la obra titulado “Racionalismo y reflexividad: nota al lector latinoamericano”, en donde se invita a investigadores latinoamericanos no solo a aplicar la metodología de Bourdieu, sino a cuestionarla o modificarla para adecuarla a la realidad latinoamericana.

La quinta razón tendría que ver con la importancia de incluir el concepto bourdiano de reflexividad en la temática relacionada con los movimientos ambientalistas, pues al ser un trabajo que permitirá aportar insumos a los tomadores de decisiones con respecto a la administración de la política ambiental y las directrices del desarrollo sustentable, así como a los miembros de los movimientos sociales para su accionar efectivo, la reflexividad podría evitar caer en marcos de pensamiento o enfoques filosóficos determinados principalmente por el contexto y la historia personal.

Finalmente, la participación ciudadana, particularmente la que se desarrolla en los movimientos ambientalistas, es un recurso que debería ser administrado para fomentar el desarrollo sustentable y la correcta toma de decisiones en torno a los aspectos sociales de la

política ambiental, por lo que su estudio, a través de la teoría de los campos, no solo registra un intento por hacer un humildísimo aporte a la teoría social, sino que presenta un marco para diversificar la riqueza de los enfoques sobre los movimientos sociales desde una perspectiva alternativa.

1.3. Reseña crítica de la teoría de los campos

Para el desarrollo del marco teórico de la investigación se eligió el enfoque denominado “Teoría de los Campos” del sociólogo francés Pierre-Felix Bourdieu. Aunque se precisa que este sub apartado se refiere a una descripción de la teoría, dejando para los tres siguientes (1.3.1., 1.3.2., y 1.4.) la explicitación del enfoque particular y propio que se utilizará en la investigación

La teoría se caracteriza por la construcción del objeto de estudio a partir de su ubicación en el espacio social, su posicionamiento específico en una diversidad de campos posibles, y las interacciones entre los agentes en torno a luchas de poder, estableciéndose relaciones de dominio y dominación sustentadas en la adquisición y movilización de especies de capital.

El espacio social sería la geografía, física y abstracta, en la que se establecen las relaciones sociales de poder en su multiplicidad de posibles configuraciones. El estudio de la sociedad y sus fenómenos en la “Teoría de los Campos” se desarrolla con base al “pensamiento relacional”, es decir, el análisis sociológico se enfoca en las relaciones, no en los individuos; lo que modifica la antinomia en los estudios sociales referente al individuo y la sociedad como entes separados, y presenta una perspectiva científica articulada con base a las relaciones entre individuos, así como entre las instituciones y los individuos.

Las relaciones sociales son determinadas por los campos y a su vez estos se determinan por medio de la interacción social. Los campos son espacios en los que impera temporalmente un sistema de valores particular con respecto a la operación de los agentes, siendo útil un tipo de capital particular, y existiendo agentes dominantes y dominados que utilizan esa especie de capital para posicionarse en el campo.

Un campo es un espacio de conflicto en el cual los participantes compiten por el control sobre el tipo de capital útil para adquirir posiciones de poder, y tener la “autoridad legítima” para decretar la jerarquía y las formas de autoridad del campo de poder. Al competir y entrar en conflicto, los agentes toman posiciones y conservan o transforman la distribución de capital en el campo y por ende su estructura de poder, por lo que un campo es una “estructura de probabilidades sujeta a una cierta medida de indeterminación” (Bourdieu, 2007).

En otras palabras, el campo no es un espacio determinado mecánicamente por leyes inmutables, sino que es un espacio “vivo”, en el cual se desarrollan relaciones sociales que imbrican formas de poder específicas y temporales; las cuales se sostienen hasta que la configuración social de fuerzas entre agentes y grupos se modifica.

A su vez, los fenómenos sociales se determinan por las acciones de los agentes de un mismo campo, quienes presentan “patrones de reiteración”, conocidos como “habitus”, los cuales, representan características adquiridas con base en la posición social que tienden a moldear las acciones de los agentes.

Como resultado, se generan posiciones en el espacio social relativamente cercanas o lejanas entre los agentes que se enfrentan a procesos históricos similares: “el habitus consiste en un conjunto de relaciones históricas “depositadas” dentro de los cuerpos de los individuos bajo la forma de esquemas mentales y corporales de percepción, apreciación y acción”. (Bourdieu y Wacquant, 2005; 41-42).

Bajo el auspicio de la (re)configuración constante del campo resultado de las luchas de poder, se desarrollan mecanismos de reproducción social que aseguran la prolongación del sentido de los campos en particular, y del espacio social en general. Al respecto, los agentes que detentan temporalmente el poder, se benefician del sentido del campo, es decir, cumplen sus objetivos, deseando que la lógica del campo permanezca, por lo que alimentan la estructura de mecanismos de reproducción. De otra parte, los agentes dominados buscarán modificar el sentido del campo, incluidos los mecanismos de reproducción

Los procesos de condicionamiento y diferenciación que surgen de los mecanismos de reproducción social y del “vivir” de los agentes, influyen directa e indirectamente en la “forma de ser” de los agentes; es decir, la posición ocupada por un individuo en el espacio social refiere a una serie de características construidas socialmente, tanto por parte del individuo, como por los mecanismos de reproducción social (escuela, iglesia, gobierno, etcétera.). De tal forma, dos agentes que se han desarrollado en un espacio social similar probablemente destacaran características elementalmente similares, aunque su representación sea individualmente construida por los agentes.

De otra parte, los campos son entes históricos, por lo que no son rígidos, sino que se movilizan al interrelacionarse los agentes que los componen, así como al relacionarse con agentes de otros campos. Algunos agentes pueden formar parte de varios campos y esto tiene un impacto sobre su habitus. El habitus también se modifica a través de una trayectoria en un campo, o a través de varios campos.

Los campos se centran en la adquisición de tipos de capital, por lo que estarían principalmente dominados por agentes que poseen una especie (variante) de capital, considerando un periodo histórico en el cual esa especie particular es valorada. El agente que posee un mayor volumen de capital en un campo domina el campo durante un lapso de tiempo.

Coexisten en el espacio social campos relacionados con la política, la economía, las artes, etcétera. Estos tienen que ver con las formas de (re)producción, o utilizando el termino marxista, los medios de producción. Aunque es fundamental diferenciar entre ambas concepciones ya que las formas de (re)producción se refieren a la producción tanto física como simbólica, y no se limitan al capital económico, como en el caso de los medios de producción, sino que exploran el capital social, cultural, económico y simbólico.

La teoría de los campos presenta como argumento central que los seres humanos tienen como principal característica el interés por obtener poder; interactuando con base a intereses específicos que no deben ser limitados a lo económico, sino que podrían ser representados por elementos de tipo no económico también, como lo es el capital cultural, o el capital social.

Autores como Leszek Kolakowsky (2001) se contraponen a la comprensión de la sociedad a partir de una lógica exclusivamente relacionada con el poder. Argumentando que si bien el poder es una de las motivaciones que articulan la acción individual y colectiva, no es la única, al haber comportamientos humanos que no podrían ser explicados a partir del concepto de poder. Además, el autor considera que es complicado intentar explicar el universo de relaciones sociales a través de un solo concepto, es decir, la sociedad sería demasiado compleja para ser comprendida por medio de la motivación de poder exclusivamente.

Para Bourdieu (2006) la comprensión del poder no solo se reduce a contar con el capital necesario para manipular las acciones de otros agentes; sino en el fondo, a ser capaces de establecer un dominio con base en una lógica simbólica, o en otros términos, no solo imponer sino definir simbólicamente que es lo que impone las condiciones de dominio en un campo.

De ahí que para el sociólogo francés, el análisis social deba desarrollarse por medio de la reflexividad, es decir, utilizando como herramienta práctica, la capacidad de comprender la “propia” posición en el campo, el sistema de valores que hasta cierto punto nos “define”, así como la historia personal en relación con su potencial impacto en el fenómeno de estudio.

Entonces el sociólogo opera como un desmitificador de la “dominación simbólica” que se desarrolla por medio de los mecanismos de reproducción social. Comprendiendo la estructura de dominación oculta bajo la apariencia “natural” de los mecanismos de reproducción social.

En la teoría de los campos se intenta disolver la antinomia entre objetividad y subjetividad, individuo y sociedad, funcionalismo y fenomenología del individuo. Por lo que la capacidad de la sociología para realizar un análisis científico tendría que ver con el estudio de los fenómenos sociales a partir de una suerte de “complicidad ontológica”, es decir, una vinculación abstracta (y práctica) entre lo individual-subjetivo y las estructuras objetivas del campo.

En Bourdieu es un error analizar un fenómeno social a partir del comportamiento de los individuos, ya que estos se encuentran condicionados por las estructuras objetivas del campo;

de otra parte, tampoco es suficiente un análisis estructuralista de la sociedad, es decir, sustentado exclusivamente en las instituciones, dado que las mismas serían constituidas y modificadas por los individuos.

En la teoría de los campos no se utiliza por esa razón el concepto de individuo, sino el de agente, término que implica la propiedad de improvisar con cierta independencia de las instituciones, pero a la vez la capacidad de desarrollar procesos para agenciar sus intereses en el marco de las estructuras objetivas.

Desde esta óptica, es posible realizar una observación a la teoría de los campos. Si la misma busca el equilibrio entre lo individual y lo colectivo, es posible que su constitución debiera dar mayor peso a las acciones individuales, ya que si bien los agentes se presentan como entes articuladores de las estructuras sociales, su comportamiento es acotado por instituciones.

La visión de Norbert Elías (1995) es útil para elucidar la crítica vertida en el párrafo anterior, ya que el autor plantea la “cosificación” de los objetos de estudio. Para Elías los conceptos, incluidos los individuos y las instituciones, han sufrido un proceso histórico de cosificación, es decir, a partir del lenguaje que los define, la metodología que los aborda, y las decisiones cotidianas, se les ha conceptualizado como objetos aislados, separados del investigador.

El autor argumenta que no hay una separación entre individuo e instituciones, pues estas últimas están constituidas por individuos y por ende están “vivas”, por lo que no son objetos inmóviles que se manejen por motivaciones distintas a las de los individuos y sus luchas de poder.

En lo referente a la estructura de poder, según Bourdieu (2002) (haciendo eco del marxismo), esta surge de la confrontación de fuerzas que deriva en luchas de poder entre agentes con distintas especies y volúmenes de capital. Los agentes que dominan se interesan en controlar el campo para posicionar sus intereses y cumplir con sus objetivos, mientras que los agentes dominados buscan tomar el control y cambiar las “reglas del juego”.

Es importante tomar en cuenta que en la teoría de Bourdieu, el poder no se restringe a un campo en particular. No es una propiedad exclusiva del campo político o económico, sino que se presenta en el campo literario, el campo académico, entre otros. De tal forma, el poder no sería solamente la capacidad de movilizar especies de capital para lograr obtener un beneficio con base a intereses particulares, sino que tendría que ver con la capacidad de definir simbólicamente los principios de jerarquización

Por medio del poder, un grupo dominante domina a los dominados a través de la definición de los elementos que constituyen el dominio. El que domina nombra las “herramientas” que permiten a los agentes hacerse del control e influir en otros individuos. El grupo dominante define y da sustancia a las prácticas y metodologías que tienen como resultado la obtención de poder.

El dominio, expresión del poder, se establecería por medio de dos métodos elementales, la violencia física y la violencia simbólica (Bourdieu, 2007). Así los grupos de poder pueden utilizar métodos de coerción relacionados con la represión de sus rivales y también tienen la posibilidad de influir en el comportamiento de sus opositores por medio del control de las instituciones que ordenan el espacio social.

La violencia física se presenta en las confrontaciones visibles entre los individuos, es decir, las actitudes frontalmente represivas de un grupo de agentes para con otro grupo de agentes, como podría serlo una guerra entre dos naciones o la represión sobre grupos disidentes por motivos religiosos, culturales, o políticos

Cuando un grupo dominador se siente vulnerable ante la irrupción de un nuevo grupo con un sistema de valores alternativo, puede reaccionar de forma represiva para evitar que su sistema de valores, y por ende, su posición de dominio, se vea alterado o removido por un grupo retador.

Para Bourdieu, la violencia física es un estado que difícilmente podrá desarrollarse durante un periodo prolongado y de forma constante; los costos de la guerra, tanto económicos como en

vidas, son elevados, por lo que tendría que existir otro método para sostener la estructura de poder dominante.

Los agentes que detentan el poder intentan conservar el “estado de las cosas”, ya que adquieren beneficios. El poder arroja utilidades económicas, políticas, culturales, y sociales. Por otra parte, los agentes dominados, buscarán constantemente modificar la estructura de poder para insertar sus intereses y posicionarse como grupo dominante.

Sin existir violencia física para reprimir a los agentes dominados que buscan alterar el estatus *quo*, es un imperativo para el grupo dominante “crear” formas “menos perceptibles” de reproducción del sistema de valores dominante. Aunque es importante explicar que los mecanismos de reproducción se construyen a partir del entramado completo de relaciones sociales, no a iniciativa de un grupo dominante.

Por “menos perceptible” se comprende la serie de mecanismos que obligan/sugieren a los individuos funcionar de cierta forma y cumplir con “ciertos requisitos” sin que estos en general perciban un elemento de control/represión. El sistema de valores de la clase dominante coincide con los mecanismos de control, sin embargo, los dominados los comprenden y aprehenden como algo natural, como si hubiese sido siempre así.

Cuando los mecanismos de reproducción de una particular Doxa comienzan a ser percibidos por los agentes como elementos represivos, el campo entra en una nueva contienda por el poder. Como resultado se produciría un nuevo “estado de las cosas”, incluido un sistema de valores alternativo, y probablemente una actualización de la estructura de poder.

James Scott (2000) realiza críticas a la teoría de la dominación simbólica a partir del concepto de infra política, es decir, de las formas de dominación que se construyen en el plano cotidiano; aportando un análisis que incluye elementos como el encubrimiento lingüístico y los códigos ocultos, los cuales funcionarían como elementos de resistencia implementados por los dominados ante el dominio de los dominadores. El punto central de Scott recaería en que los mecanismos simbólicos de reproducción social no serían exclusivos de los grupos

dominantes, sino que también los grupos dominados serían capaces de desarrollar mecanismos para contravenir el dominio.

A pesar de la crítica, tanto Bourdieu como Scott coinciden en que los mecanismos de reproducción social son comprendidos (y construidos) de forma natural por los agentes sociales, al grado de que se “perciben” como elementos naturales del ecosistema social vigente.

Entendiendo que desde el enfoque de Bourdieu, la capacidad para presentar elementos arbitrarios como naturales, es decir, la propiedad que tienen los sectores dominantes para reflejar sus intereses como los intereses de todos, limita la capacidad de improvisación y ruptura de los agentes que no forman parte, en un momento específico de la historia, del grupo dominante.

Al respecto, es necesario precisar dos cuestiones. Primero, la dominación es resultado de las luchas de poder, por lo que los agentes dominantes y sus sistemas de valores, mecanismos incluidos, se modifican con el tiempo como resultado de la contraposición de las fuerzas sociales; por lo que, el grupo dominante, su sistema de valores, así como su principio de jerarquización (capital), podrán cambiar en el tiempo como resultado de los enfrentamientos entre los agentes que integran el campo.

Pero los cambios en la estructura de poder serían limitados, coartados, impedidos, por el embalaje de mecanismos de reproducción social que alimenta la estructura de poder. De ahí que los grupos interesados en posicionarse como dominantes tendrían que movilizar sus especies de capital de manera estratégica para contravenir la influencia de sus contrapartes.

En todo momento habrá agentes que buscarán establecer un sistema de valores diferente al que domina, por lo que intentarán evitar cumplir con los requisitos del sistema de valores, generando reacciones en el grupo dominante que pretenderá limitar la capacidad de acción de forma física o simbólica de los grupos percibidos como subversivos.

Por lo tanto, la reproducción social en un campo presentará un sentido histórico y un sentido práctico, siendo el primero el que tendría que ver con los comportamientos determinados por las circunstancias objetivas, estructurales, mientras que el sentido práctico respondería a los comportamientos relacionados con la ruptura individual de los patrones de control.

El campo se modifica o conserva su estructura según el comportamiento de los agentes dominantes y dominados que lo componen y (re)producen; sin embargo, el comportamiento de los agentes dominantes y dominados es acotado por las estructuras objetivas que (re)producen el sistema de valores dominante, el cual es promovido, consciente o inconscientemente, por los agentes dominantes y rechazado por los agentes dominados.

De otra parte, Norbert Elías (1995) defendía que las motivaciones sociales de los seres humanos responden a elementos históricos-genéticos no siempre comprensibles a los agentes; cuestiones como la clase social o la preparación académica tendrían un impacto en las decisiones de los agentes, quienes en algunos casos no estarían conscientes de tal relación

El elemento “psicogenético” aportado en la sociología por Elías sería retomado por Bourdieu en su concepto habitus. Presupuestos conceptuales como el socio análisis o la reflexividad serían herramientas precisamente creados para interrumpir la determinación inconsciente del accionar individual por elementos de la historia personal y colectiva instaurados como mecanismos de reproducción que proyectarían tendencias en la trayectoria social del agente en el campo.

Este último punto es importante porque alude a la comprensión de los mecanismos de reproducción social sin la pretensión de que un grupo dominante este en el fondo de su creación y manipulación. La separación entre dominador y dominados, presente en distintas teorías sociológicas, como por ejemplo en la lucha de clases del marxismo, sería cuestionada por la teoría de los campos, ya que para Bourdieu (2005), si bien los grupos dominantes dominan a los dominados, esto no necesariamente excluiría un dominio “dominado” de los dominados sobre los dominadores.

La perspectiva de Bourdieu aporta una conceptualización del poder como una fuerza no exclusiva a los grupos o clases dominantes; distribuyéndose entre los grupos de un campo de forma inequitativa, pero constante, como respuesta a la posesión de un capital determinado durante un periodo histórico

Además, la comprensión de la reproducción de las relaciones sociales como un macro-proceso únicamente desarrollado por individuos conscientes de sus acciones y de los resultados potenciales de las mismas, sin incluir una perspectiva inconsciente y por ende hasta cierto punto desconocida por los agentes, sería cuestionada también por Bourdieu (2005).

En la teoría de los campos se analiza el comportamiento individual de los agentes, pero lejos de realizar una apología de la libertad individual, se plantea el habitus como la materialización en el “cuerpo social” de elementos presentes en el campo. Así, un individuo presenta una “singularidad colectiva” (Corcuff, 2009), la cual responde a características del ecosistema social del agente, sin dejar de lado la personalidad individual, es decir, las características personales que se construyen con base en lo colectivo. Y a la inversa, lo colectivo se construye en torno a lo singular.

El poder no es exclusivo, sino que se distribuye a través del campo; además, los agentes, tanto dominadores como dominados, presentan comportamientos resultantes de la singularidad colectiva; por lo que sus estrategias orientadas a maximizar el capital que poseen no se construirían de forma totalmente consciente, sino que son resultado de procesos complejos que tienen que ver con estructuras objetivas y subjetivas.

En la teoría de Bourdieu (2006) los mecanismos de reproducción social son construcciones resultantes de la interacción social, no de una intención estratégica por parte de un grupo poderoso o clase social. Sin embargo, es importante argumentar que las acciones de los agentes sociales que logran acumular capital y, por ende, ser poderosos, “coinciden” con una configuración particular, en términos históricos, de los mecanismos de reproducción social.

Entonces las estructuras objetivas que reproducen el sistema de valores dominante pueden ser modificadas por los agentes dominados como resultado de las luchas de poder, destituyéndose progresivamente al grupo dominante, y haciéndose posible la institucionalización de un nuevo sistema de valores, el cual sería cuestionado de inmediato por los agentes que ahora ocuparían la posición de dominados.

También puede variar la concentración de poder en un campo, siendo posible el dominio del mismo por un grupo dominante, o en otro caso, la constelación de grupos de poder con bastiones específicos a lo largo del campo. Todo depende de las condiciones “locales”, determinándose la estructura de poder según los agentes existentes y las instituciones creadas.

Los cambios en un campo podrán derivar de los cambios en otros campos. Un cambio en el campo científico, como puede ser la creación de una nueva tecnología, o el desarrollo de un nuevo sistema de pensamiento político, puede promover cambios en el campo político o económico. Los cambios en el campo económico pueden influir en el campo académico, ya que éste “depende” del otro en el caso del financiamiento económico.

De tal manera se establecen mancuernas específicas entre algunos campos con base en la funcionalidad operativa de los mismos y las relaciones de los agentes. Es importante explicar que estas vinculaciones varían en el tiempo, generándose o disolviéndose como resultado de movimientos internos/externos de los campos particulares.

Los campos (re)configuran el campo de poder en la interacción entre sus agentes, tanto interna como entre agentes de diferentes campos. No implicándose la conformación de un campo aislado en donde se resuelven las cuestiones de poder, sino el desarrollo, análogo e integrado al de los campos particulares, de un espacio dimensional alterno en donde las relaciones de poder se expresan.

El campo de poder sería la manifestación simbólica de las relaciones de poder que se desarrollan entre los campos; físicamente sería como cuando se posiciona un mapa con características particulares sobre otro mapa de la misma región geográfica con diferentes

características; no implica dos espacios diferentes, sino dos dimensiones del mismo espacio (social).

El campo de poder es reflejo de la estructura de poder que es resultado de la posesión de capital. Entonces, un grupo dominante tiene acceso y da vida a las instituciones dominantes; la escuela, la iglesia, el gobierno, entre otras. Son instituciones que ordenan el espacio social con base a uno o varios “principios jerarquizantes” de poder, las cuales en su momento surgen de una configuración de fuerzas particular que responde estratégicamente a los intereses de una clase que domina la lucha durante un momento de la historia.

Sin embargo, en el espacio social y en los campos particulares, los sistemas de valores dominantes podrán sufrir modificaciones, junto con la lógica operacional de sus instituciones, y por consiguiente cambios en el impacto que estas estructuras estructurantes tendrían sobre los agentes estructurados, que a la vez tienen la capacidad de estructurar a las instituciones.

Los agentes dominantes reproducen su posición de dominio a través de mecanismos de reproducción social que objetivan en los “cuerpos sociales” un sistema de valores que representa los intereses de los dominantes. Este sistema es aceptado y considerado como natural por los agentes dominados, por lo que no es necesaria la violencia física. Basta con el acto simbólico para posicionar en un agente dominado, por medio de instituciones que cuentan con mecanismos de reproducción de la estructura de poder, un sistema de valores que respondería a los intereses de la clase dominante.

Es posible modificar las reglas de un campo, sin embargo, es necesario trascender las instituciones que favorecen la permanencia o conservación de la lógica vigente, además de contravenir el habitus construido en parte por la inserción del pensamiento aceptado en el agente individual. Lo no es un fenómeno mecánico, pues los agentes tienen un rango de improvisación, el cual es posible por el hecho de que los fenómenos sociales se modifican, alterándose la razón, que para Bourdieu (2005) es construida por la historia.

Entonces los dominantes tratan de modificar a su favor o conservar las reglas del campo, es decir, los elementos dóxicos, en ocasiones imperceptibles, que permiten funcionar de una forma particular el campo al que pertenecen. Cada campo funciona de diferente manera y se va modificando en el tiempo con base al accionar de los agentes que cohabitan en él. Sin embargo, los campos no son universos cerrados, al contrario, reciben la influencia de agentes provenientes de campos disimiles o influyen sobre otros campos.

Con una nueva relación de dominio puede presentarse un cambio en la “forma como se hacen las cosas”, un tipo de capital puede verse influido por otro tipo de capital, los agentes pueden imponer en las luchas de poder su “principio de jerarquización”. El espacio social está en constante movimiento.

La teoría de los campos presenta una sociedad en donde se realiza la improvisación acotada en los hechos sociales. Los agentes forman parte de un campo con características particulares y una historia en movimiento, por lo que tendrán (en teoría) características similares a las de otros agentes que forman parte del campo; empero, las similitudes de los agentes dan forma a un sistema basado en la “distinción” social, es decir, agentes de un campo tendrán un potencial y una capacidad de elección tanto incentivados, como acotados, por las estructuras objetivas del campo al que pertenecen.

Es importante aclarar que la teoría de los campos se aleja del funcionalismo a partir de que, si bien reconoce la presencia de regularidades objetivas en un campo, los agentes tienen la capacidad potencial de cambiar su posición en el espacio social. Por lo que las estructuras estructurantes, capaces de estructurar a los individuos con base a un sistema de valores, también serían estructuras estructuradas por el comportamiento y las acciones de los agentes.

Los agentes pertenecientes a un campo presentan “patrones de repetición” en torno a la construcción de identidades (habitus), sin embargo, para Bourdieu (2002) existe la “agencia individual” que está representada en la “capacidad de generación infinita de engendrar en total libertad (controlada) productos sociales limitados siempre por el contexto”. Esto es, que a pesar de que las estructuras objetivas determinan a los agentes, estos tienen la capacidad de

generar ideas, mecanismos, etcétera, innovadores en el marco del campo, lo que puede modificarlo.

La relación campo-agente está enmarcada en una dialéctica que aporta como producto el concepto de habitus, pues tanto el campo determina al agente, como el agente va determinando al campo. Hay un equilibrio entre lo totalmente previsible y lo totalmente imprevisible: “improvisación acotada”.

Las estrategias de los agentes se desarrollan por medio de la movilización de sus especies de capital en relación con el sentido del juego, es decir, el sentido práctico por medio del cual los individuos no siguen las reglas del juego a ciegas, sino que tienen nociones, percepciones, intuiciones, por su trayectoria en el campo.

El capital está formado por recursos, de diversas clases, que son o pueden llegar a ser efectivos en la lucha por la apropiación de los bienes que están en juego en el campo. La dinámica para adquirir las especies, o tipos de capital, tiene que ver con la Doxa del campo al que pertenece el agente que busca obtener y movilizar el capital.

Para Bourdieu (2007) hay cuatro tipos de capital; el capital económico, el capital social, el capital cultural, y el capital simbólico. El capital económico se refiere a los recursos materiales; el capital social a las relaciones sociales con las que cuenta un agente y por medio de las cuales puede obtener beneficios; el capital cultural puede ser adquirido en el seno de una familia y se expresa, por ejemplo, en un conocimiento cultural de temas tan variados como el arte renacentista y el gusto por el buen tabaco; aunque también puede adquirirse capital cultural en las instituciones bajo la forma de títulos académicos.

El cuarto tipo de capital es el simbólico, el cual se define como la forma que adoptan los diferentes tipos de capital una vez que son percibidos y reconocidos como legítimos, o sea, como la forma de dominación o principio jerarquizante natural en el campo; no el resultado arbitrario de las luchas de poder entre los agentes del campo (Bourdieu citado en Jiménez, 2005).

Lo que se explica comprendiendo la lógica interna de un campo; como por ejemplo, el campo económico, en donde el capital económico se ha establecido, con base a luchas de poder, como capital simbólico (principio jerarquizante), es decir, el que da sentido a las relaciones entre los agentes que pertenecen al campo.

El “dar sentido” a la lógica de un campo por medio de un principio jerarquizante (especie de capital) implica el establecimiento de una estructura de poder, con agentes dominados y dominadores, así como posibilidades e imposibilidades, castigos y premios, en general, las reglas del juego. Aunque también, los agentes sociales podrían utilizar la lógica del grupo dominante por medio de sus instrumentos para revertir el dominio y establecer un sentido distinto al vigente (Bourdieu; 1999).

Entre los principales críticos de Bourdieu está Corcuff (2009), autor que sugiere dos conceptos que reflejan las deficiencias de la teoría de los campos, primero, la “pendiente dominocéntrica”, es decir, el hecho de que los postulados teóricos se centran en la idea de la dominación como elemento central; luego, la tentación de reducir lo singular a lo colectivo, es decir, la singularidad colectiva.

En ese sentido Corcuff plantea que para Bourdieu los cambios sociales siempre podrán explicarse con base en una lógica de poder, planteamiento polémico que forma parte de un debate sociológico en el nivel macro. Además, el autor critica el concepto de habitus porque despersonaliza a los individuos e incluye un elemento, desde su punto de vista, colectivizante de la individualidad.

En otro sentido, para Bourdieu, los instrumentos legítimos de lucha se establecen desde la perspectiva dominante: “Las clases y otros colectivos sociales antagónicos están continuamente comprometidos en una lucha por imponer la definición de la realidad que resulta congruente con sus intereses particulares” (Bourdieu y Wacquant, 2005; 39).

Aunque esto no limita la posibilidad de que los agentes se organicen y reviertan el sentido del campo por medio de la utilización de los mecanismos de control de forma “conveniente” a sus

intereses; de tal forma, Bourdieu (2009) analizó el movimiento europeo sindicalista, extrayendo conclusiones relacionadas con la capacidad de los movimientos para utilizar los esquemas establecidos para modificar el orden de las cosas y obtener ventajas.

Sin embargo, Pierre Bourdieu (2009) también argumentaba la necesidad de hacer evidentes los mecanismos de reproducción social a la sociedad, ya que de esa forma la organización de los agentes sociales tendría un sustento sólido y la posibilidad de desarrollar estrategias de poder efectivas.

Para dominar el mundo, los agentes desarrollan estrategias de reproducción del sistema social, las cuales, “aunque no son el producto de una intención estratégica deliberada, (...) se apoyan en relaciones objetivas de sucesión temporal, interdependencia intergeneracional y solidaridad funcional tales que solo una totalización del conocimiento puede elucidar su coherencia interna y sus articulaciones externas” (Bourdieu y Wacquant, 2005; 54).

Bourdieu no se refiere a estrategias que tienen como característica la búsqueda intencional o premeditada de metas calculadas, sino al desarrollo de “líneas de acción”, objetivamente orientadas que obedecen a “regularidades y conforman patrones coherentes y socialmente inteligibles”, aún cuando no siguen “reglas conscientes” o apuntan a las metas premeditadas por un estratega.

Las estrategias se construyen en el espacio social como tendencias relacionadas con la estructura de poder, a la que buscan reproducir; empero, las estrategias de reproducción cambian cuando la estructura de poder cambia, y esta última se modifica cuando los agentes movilizan sus especies de capital para posicionarse en un nicho de poder. Entonces el espacio social no es una máquina de repetición infinita, sino una matriz de comportamientos probables, los cuales estarían determinados por la interacción de los agentes que cursan trayectorias históricas a través de distintos campos.

A pesar de las estrategias de reproducción que buscan reproducir el sistema de valores dominante en un campo, para Bourdieu (citado en Jiménez, 2005: 223) “la dominación no es

un simple efecto directo de la acción ejercida por un conjunto de agentes (“clase dominante”) investidos de poderes de coacción sino el efecto indirecto de un conjunto complejo de acciones que se engendran en la red de coacciones cruzadas a las que cada uno de los dominantes, dominado de este modo por la estructura del campo a través del cual se ejerce la dominación, está sometido por parte de todos los demás”.

1.3.1. Aplicación de la teoría de los campos al contexto mexicano

En diversas ocasiones, Bourdieu sugirió la utilización de la herramienta denominada reflexividad como un elemento crítico con respecto a los paradigmas conceptuales establecidos (Bourdieu y Wacquant, 2005; Bourdieu, 2006). De tal forma que inclusive el principal resultado de la carrera científica del sociólogo francés, la teoría de los campos, creada para intentar explicar el objeto de estudio que perturba los sueños de todos los sociólogos, la sociedad, no lograría escapar a la metodología bourdieana.

Bourdieu sugería constantemente a sus colegas y a sus lectores en general, la realización de una crítica sistemática sobre sus postulados teóricos. Buscando evitar la transformación de sus teorías en “fetichismos” científicos distantes de la “realidad”, es decir, nociones aceptadas a ciegas y sin la aplicación de una metodología científica rigurosa.

Así, lo establecido en el campo científico, y criticado también por autores como Elías (1995) y Foucault (1980), como preceptos aceptados como verdaderos y exentos de crítica, se pondría bajo la lupa rigurosa del análisis científico. A su vez, se buscaría evitar la “cosificación” de los objetos de estudio, ya que tal proceso los transforma en “cosas” transportables, limitables a un concepto exacto, sin vida, ni impacto sobre la realidad del investigador, a partir del lenguaje y el tratamiento científicos (Elías, 1995).

Para Bourdieu las teorías son solamente teorías, por lo que no deberán aplicarse indiscriminadamente a cualquier contexto, o realizarse generalizaciones sin tomar en cuenta las particularidades y excepciones. Las teorías deben ser cuestionadas en todo momento, y es tan valioso acreditar una teoría como desacreditarla.

En ese sentido, la teoría de los campos, podría presentar una perspectiva dual. Por un lado, se observa en ella un intento generalizador de conceptualizar la realidad, lo que ocurre con la mayoría de las macro-teorías sociológicas que buscan comprender el universo social; pero, por otra parte, la teoría aloja amplias posibilidades de adaptación a distintos contextos y temáticas. Todo depende del enfoque bajo el cual se observe y utilice la herramienta.

En el caso mexicano, y siendo el objeto de estudio un movimiento ambientalista local, es importante argumentar que la teoría de los campos fungiría como un esquema conceptual construido para intentar abordar a la sociedad en general, en toda su diversidad y formas culturales, aunque elaborada principalmente para la sociedad francesa contemporánea, lo que no excluye su uso para otros casos, pero implica acotaciones.

Este punto no debe ser tomado a la ligera, ya que las diferencias culturales son uno de los nodos centrales de la teoría y metodología de Bourdieu, reconociendo que a pesar de existir regularidades objetivas en los campos, las relaciones subjetivas entre los agentes resultarían en la necesidad de analizar “caso por caso” los fenómenos sociales.

Entonces, al utilizar la teoría de los campos los casos deberían ser analizados considerando sus características particulares, para no caer en un “intelectualismo” que se alimente de elementos adaptables a la teoría, para obtener resultados convenientes. Bajo esta lógica, cualquier teoría podría ser usada para responder a intereses, ya que el investigador que escribe estas líneas también forma parte de un campo y, por ende, es receptor de las luchas de poder que se desarrollan en el mismo.

En torno al caso de estudio, el movimiento ambientalista en oposición al incinerador, al contar con características específicas, es merecedor de un análisis científico conceptualmente localizado, es decir, desarrollado a partir de las herramientas provenientes de la teoría, pero acotando sus conceptos a la realidad mexicana.

Con base en lo anterior, sería fundamental realizar una adaptación de algunos de los conceptos de la teoría de los campos, para hacerlos funcionales, bajo un criterio sustentado en las

características económicas, políticas y sociales, relacionadas con el periodo de estudio. Cabe decir que el espacio y el tiempo dedicados a esta investigación, sin duda alguna, no serán suficientes para detallar con gran precisión estos elementos, por lo que se realizará un esfuerzo de representar el caso lo más cercano a la realidad posible, dejando para posteriores investigaciones su profundización

El periodo de estudio, el final de la década de los ochenta, se caracterizaba por la ruptura del sistema político y la apertura económica, así como por una efervescencia de la participación ciudadana en temas tan diversos como la solicitud de servicios públicos, la democratización de la vida política, y el ambientalismo (Valenzuela, 1991).

Los cambios políticos, es decir, la creciente democratización de la vida política nacional, daría pie al cuestionamiento de la estructura de poder que había gobernado hasta ese momento, bajo la forma de un partido de estado. El gobierno federal sería cuestionado ampliamente tras la elección presidencial de 1988, alegatos de fraude de un sector de campo político, la izquierda; demandas de participación y la movilización ciudadana; solicitud de una mayor libertad de expresión en los medios de comunicación; la llegada al gobierno de partidos distintos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como en el caso de Baja California. Estos elementos darían un sentido de particularidad al campo político mexicano, haciendo necesario el estudio del caso bajo una lente adecuada.

Sobre todo, es importante remarcar el hecho de que el campo político mexicano, en sus diferentes niveles, estaba enfrentando un proceso de reconversión en el cual se presentaban luchas de poder que ahora incluían nuevos protagonistas. El fortalecimiento de los partidos de izquierda y derecha, sobre todo el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática; el incremento de la relación con el exterior por medio de los tratados comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); así como el “relajamiento” forzado del autoritarismo resultante; motivaron un escenario en el cual los movimientos sociales podían interactuar con relativa libertad (con respecto a un pasado inmediato).

Por otra parte, en el ámbito económico la apertura resultante de las negociaciones del TLCAN y la atención mediática que esto generaba, tanto a nivel local como nacional, abrieron espacios para la protesta y la movilización ciudadana. En términos coloquiales, se volvió “complicado” el autoritarismo político para el gobierno, había consecuencias potenciales a la represión indiscriminada de las voces de los ciudadanos.

Además, la negociación del TLCAN y los tratados ambientalistas que se firmaron junto con el mismo, presionaron al gobierno mexicano para que este intentara adaptarse a las condiciones internacionales de legalidad y respeto a las garantías individuales. Aunque se pecaría de ingenuidad si se afirma que la problemática de la inclusión de la ciudadanía hubiera sido resuelta.

A su vez, algunos sectores de la ciudadanía “comprendieron” el momento histórico, y aprovecharon las condiciones para generar presión sobre el gobierno para que permitiera una mayor participación ciudadana. Fue un momento de ruptura y recomposición de la estructura del espacio social, en el que nuevos agentes adquirieron posiciones de poder y otros vieron limitada su capacidad de control sobre la ciudadanía.

Por lo tanto, tras la brevísima descripción de algunas de las principales características o procesos del periodo de estudio, misma que será abordada a profundidad en el Capítulo III; es importante puntualizar varios de los principales conceptos de la teoría de los campos en el marco histórico referido.

Al considerar el contexto mexicano, uno de los puntos fundamentales a analizar tendría que ver con la solidez de las instituciones sociales que sostienen los mecanismos de reproducción social. De ahí que la particular configuración estructural de las instituciones mexicanas, apoyadas en el autoritarismo (gobierno de partido único), no en una lucha de poder franca, aparece como esquema interesante para el análisis, dado que durante el periodo se articulaba una reestructuración del campo político-administrativo, lo que abría espacios para la movilización social.

Aunado a lo anterior, se argumenta que las especies de capital utilizadas por los movimientos ambientalistas eran herramientas útiles para resolver sus necesidades y cumplir con sus objetivos bajo el esquema mexicano. En otro tipo de contexto, con un mayor grado de autoritarismo, económicamente cerrado con respecto al exterior, la capacidad para utilizar los capitales podría haber sido acotada por la rigidez del campo político-administrativo

Por otra parte, en un contexto más abierto en términos políticos y económicos, el uso de las especies de capital sería distinto, ya que probablemente habría un mayor grado de desarrollo en las instituciones político-administrativas, en las normatividad y sus esquemas procedimentales, así como en los canales expresos para la participación ciudadana de forma normativo-institucional.

Es probable, en términos ideales, que la sociedad no tendría que organizarse de la forma como lo haría bajo un régimen autoritario. Habría canales institucionales para solicitar al gobierno la solución de una problemática, y los proyectos que no respondieran a los problemas de la ciudadanía serían modificados por el gobierno sin la necesidad de generar una movilización ciudadana.

El párrafo anterior no deja de significar una idealización de las posibilidades de un sistema político “desarrollado”, pues los movimientos sociales existen en sociedades “desarrolladas” y subdesarrolladas; siendo la motivación de la acción colectiva lo que va cambiando en el tiempo.

Posiblemente no tendrían las mismas necesidades un grupo de ciudadanos que vive en un país tercermundista que las de un grupo que opera en un país desarrollado, o al menos la misma jerarquización de necesidades. Y por ende el comportamiento de los movimientos sociales tampoco sería exactamente igual. Lo que no quiere decir que algunas necesidades serían superiores o más importantes que otras, pues su relevancia se determinaría según las características de la Doxa del campo.

Sin embargo, los modelos ideales no responden a la realidad de los fenómenos que estudian, solo son una guía para establecer parámetros. Por lo que, bajo la lógica de un contexto como el mexicano, durante el periodo de estudio, se intenta delimitar algunas particularidades con respecto al fenómeno analizado.

Se considera que el contexto mexicano potencializaría las capacidades de los movimientos ambientalistas, ya que se combinaba, durante el periodo de estudio, un gobierno autoritario en decadencia con las modificaciones en el campo resultantes de la apertura económica hacia el exterior y la inclusión progresiva de nuevos actores políticos.

Resultando en un efecto “corto circuito” en la estructura institucional del Estado, resquebrajándose el férreo dominio de la clase política priista en el orden federal (aunque gobernaría por una década más) y modificándose progresivamente la Doxa, es decir, las reglas del juego que imperaban hasta ese momento; para permitir, sino una mayor participación ciudadana por las vías institucionales inscritas en la normatividad; si la organización de la ciudadanía por vías no institucionales.

Así, el capital simbólico, bajo las condiciones descritas, tenía un mayor impacto que bajo otras condiciones, quizás menos rígidas; ya que en un periodo de transición, al intensificarse las luchas de poder, los agentes buscaron ocupar los espacios abiertos en la estructura de poder; y por el incremento de la contraposición de capitales simbólicos, se presentó la posibilidad de participar en contiendas anteriormente cerradas a nuevos agentes.

En un contexto de ruptura y cambio, los agentes tienen la posibilidad de movilizar sus formas de capital de maneras distintas a como lo harían en un contexto relativamente estable (sin ruptura coyuntural). Las organizaciones ciudadanas y los movimientos sociales se verían particularmente beneficiados, dada la diversidad de especies de capital que poseen, para activar sus recursos estratégicamente y presionar al gobierno.

En un contexto de ruptura y cambio, sobre todo cuando es resultado de un periodo de profundo autoritarismo que probablemente habría exacerbado las posturas de los

combatientes, se podrían magnificar las alianzas potenciales, puesto que los agentes en disputa estarían dispuestos a responder a las demandas de la ciudadanía para intentar lograr ventajas en el espacio social con respecto al dominio del campo político

Siguiendo con el argumento, los capitales, bajo las condiciones descritas, permitirían a los movimientos sociales desarrollar estrategias orientadas hacia el cumplimiento de objetivos que difícilmente habrían podido satisfacer en un periodo histórico diferente. Un par de ejemplos podrían iluminar la disertación

En un contexto autoritario estable, es decir, sin los elementos de ruptura que se presentaron durante el caso de estudio, la movilización de capitales, social, económico, y cultural, se hubiera enfrentado a instituciones mucho más solidas que posiblemente hubieran sido exitosas en la desarticulación de un movimiento ciudadano y, particularmente, en el control sobre la movilización de capitales. Aunque esto no deja de ser una hipótesis, pues en países con instituciones “solidas” también se moviliza la ciudadanía

Asimismo, una ausencia de relaciones económicas “fuertes” con el exterior probablemente tendría un impacto sobre la capacidad para presionar a las autoridades locales por medio de la movilización del capital social y político. Por lo tanto, el contexto si importa y es fundamental al utilizar la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, pues define el enfoque y la adaptación que se deben realizar según las condiciones del caso de estudio.

1.3.2. La teoría de los campos y los movimientos ambientalistas

Los movimientos sociales, incluidos los ambientalistas, no han sido uno de los temas esenciales del enfoque teórico de Pierre Bourdieu. Siendo una crítica recurrente a su trabajo, aunque quizás injusta al estimar la complejidad de la súper estructura teórica desarrollada; sobre todo si se conocen las diversas aplicaciones de su teoría y su amplio alcance en la interpretación de los fenómenos sociales.

El trabajo de Bourdieu es, como todas las macro-teorías que buscan explicar la sociedad, un proceso inacabado, ya que es improbable que por medio de un entramado conceptual se logre explicar la totalidad de relaciones cambiantes en el espacio social. No obstante, siguiendo un poco a Wittgenstein (2008), los conceptos serían como “una caja de herramientas”, es decir, utilizables de diferentes maneras en distintas circunstancias.

Ahora, lo anterior no implica la desarticulación de un marco teórico sólidamente construido, sino la relativización crítica de sus conceptos, y su aplicación hacia fenómenos que no fueron “considerados” por el autor, pero que podrían ser integrados a los presupuestos teóricos, sin que se pierda su esencia. Uno los fenómenos sugeridos es la compleja interacción en el espacio social de los movimientos sociales, ya que entre las críticas primordiales a la teoría estaría su incapacidad para reflejar cambios/rupturas en la lógica del sistema.

En el espacio social de la teoría de los campos pareciera existir un vacío con respecto a los movimientos sociales urbanos, a pesar de que las luchas de poder permiten la reconfiguración del espacio social, y por ende, la ruptura de la dominación y la subversión de los grupos oprimidos. Ergo, en la teoría, los movimientos sociales no ocupan un lugar preponderante, aunque desde nuestra perspectiva podrían hacerlo.

En su etapa final como investigador (a finales de los noventa), Bourdieu trabajó el tema de los movimientos sociales en el contexto de la Unión Europea; inclusive tomando parte en las luchas de los obreros con declaraciones mediáticas de apoyo a los sectores de izquierda y contribuyendo con aportes teóricos y prácticos en foros de debate y mítines.

De cualquier forma, en ese momento, la teoría de los campos no sería incluida del todo, sino que se abordaría la problemática social desde la trincheras: es irónico que Bourdieu comenzó en el campo de batalla, en Argelia, sus investigaciones; para luego alejarse de la participación directa en fenómenos sociales; finalmente regresando a su origen al apoyar y formar parte del movimiento obrero europeo.

Sin lugar a dudas fue extraño que Bourdieu, quien casi siempre se mostró distante con respecto a la toma de partido, enfocara sus últimos años en la participación ciudadana activa, empero, esto se observa en textos como “Repensar el movimiento social” (Bourdieu, 1999), en donde, el autor explica “mínimamente” lo que considera como las principales herramientas simbólicas de los movimientos sociales.

Asimismo, la metodología denominada “autoanálisis provocado y acompañado” (*provoked and accompanied self-analysis*) desarrollada por Pierre Bourdieu, comparable a la “intervención sociológica” de Alain Touraine, proponía rebasar la barrera entre el investigador y el objeto de estudio, facilitando la comprensión de los elementos de dominación simbólica a los agentes sociales inmersos en un conflicto de poder por medio de la provocación de autoanálisis y el acompañamiento hacia la acción colectiva (Hamel, 1997)³.

De otra parte, en su libro “Contrafuegos”, Bourdieu (2001) adquiere tintes anti neo-liberales y se manifiesta a favor de la izquierda obrerista europea que se opone a la desinstalación del estado de bienestar a través de la movilización. Componentes teóricos que denotarían un interés por incluir en sus objetivos de investigación a los movimientos sociales, aunque se entiende que esta habría sido una tarea inacabada.

La particular interpretación de la importancia de los movimientos sociales en Bourdieu surge de un par de nociones fundamentales. Primero, la idea de que la principal función de un científico social, que toma parte en un movimiento social debería ser el favorecimiento de la comprensión de los mecanismos de reproducción social que sustentan la estructura de poder.

3 Se han vertido amplias críticas en torno a esta metodología por el hecho de que no especifica de forma convincente como sostener la objetividad y no producir la acción colectiva, en lugar de provocarla y acompañarla (Hamel, 1997).

O sea, la ruptura de la barrera entre el científico y el objeto de estudio, cuestión ampliamente estudiada, pero que en el sociólogo francés adquiere características peculiares.

Para Bourdieu (1999) el científico social sería el facilitador, con respecto a la ciudadanía organizada, de la capacidad para comprender los mecanismos causales que estarían en la base de su posicionamiento “dominado” en el campo social; descubriendo así la lógica simbólica del sistema de opresión, con el objetivo de fraccionar los entramados de dominio.

Al contar con información relacionada con la manera cómo funcionan los mecanismos de control, el movimiento social podrá construir estrategias orientadas al ataque de la estructura de poder. Esto parece sencillo, quizás obvio, pero desde la perspectiva de Bourdieu (1999) la construcción de estrategias de poder efectivas se relacionara con el conocimiento de dichos mecanismos y la modificación de la Doxa.

Bourdieu argumentó en *El sentido práctico* (1991) que los individuos eran como jugadores que contaban con un “sentido del juego” que les permitía anticiparse o responder con naturalidad a los movimientos del rival: un conocimiento adquirido (inconsciente) por los agentes por medio de sus trayectorias culturales en el campo.

De contar información (no perfecta) referente a los mecanismos causales de dominio simbólico, como podría ser, por ejemplo, la comprensión de la lógica por la cual algunas reformas neo-liberales se han ligado a la desarticulación del estado de bienestar (Bourdieu, 1999), entonces los movimientos sociales podrían concertar respuestas basadas en su capital simbólico y por ende estrategias enfocadas en la modificación de las definiciones culturales compartidas (Doxa).

En segundo lugar, el sociólogo francés aportó una potencialidad simbólica a los movimientos sociales, ya que en contraste con teorías como el paradigma de la identidad o el de la movilización de recursos, el uso de capitales estaría apoyado en la comprensión y aplicación de una lógica simbólica “utilitarista”, es decir, para Bourdieu no bastaría con utilizar los recursos para presionar a las autoridades, sino que sería necesario utilizar el capital simbólico

para participar en las contiendas de poder e imponer un sentido en el campo, o sea, nuevas reglas del juego.

En otro sentido, la innovación de Bourdieu estaría radicada en su distanciamiento de la lógica de lucha de clases para entrar en una conceptualización basada en los campos y las especies de capital. Así mismo, la movilización de los capitales estaría segmentada en elementos culturales, sociales, económicos, y simbólicos, lo que aportaría una panorámica dividida en campos con sus características luchas de poder y definiciones sociales.

La conceptualización marxista de lucha de clases cimentada en el capital económico no alcanzaría a explicar –para Bourdieu- la complejidad de relaciones entre los agentes pertenecientes a distintos campos. Por lo que una comprensión basada en campos multiclase y operacionalizada en las especies de capital aportaría ingredientes importantes a la sociología. Como puede ser la descolectivización de los individuos, ya que con Bourdieu se plantea la noción de habitus como estructura de singularidad colectiva.

Los capitales serían la moneda de cambio en un campo con características particulares, detallándose su importancia según principios de jerarquización resultantes de la estructura de poder vigente. La teoría de los campos permite generar una visión amplia de la sociedad, a pesar de que no articula una postura totalmente definida para las posibilidades de cambio o ruptura a través de la movilización social.

Sin embargo, es factible utilizar algunos de los principales conceptos de la teoría de los campos para analizar los movimientos sociales, ya que estos últimos son agentes relevantes en el campo de poder, y tienen la capacidad de movilizar sus especies de capital, participando en las luchas de poder y obteniendo cambios en el campo. Recordando que para Castells (1983) los movimientos sociales urbanos serían uno de los principales motores de cambio social.

Existen algunas fisuras en la aplicación de la teoría de los campos a los movimientos sociales, como puede ser la comprensión de las estrategias de poder en Bourdieu no como elementos

conscientes de la estructura social, sino resultantes de la configuración constante de movimientos y respuestas que desarrollan la totalidad de los agentes sociales (inconscientes).

Por lo que el autor considera que las estrategias no coincidirían con las motivaciones explícitas de los agentes, sino que estarían conformadas por la dialéctica entre los grupos dominados y los dominadores. En coherencia con la comprensión del poder como un concepto dicotómico del que abrevan tanto los dominadores como los dominados, ambos actores incapaces de detentar todo el poder.

Norbert Elías (1995) hizo, en sus “modelos de juego” un intento por demostrar que el poder no pertenece exclusivamente a una clase dominante, explicando que los dominadores necesitan, sin lugar a dudas, el equilibrio de poder, aunque sea un equilibrio asimétrico; ya que en ausencia del mismo no es posible “jugar”.

Quizás la visión de Elías sería demasiado esquemática, olvidándose de la violencia terrible que sale a flote por momentos en la humanidad, pero en el fondo, al igual que Bourdieu, propone el hecho de que el poder es resultado de las acciones de los dominados y de los dominantes. Bourdieu (2006), llegando un poco más lejos, argumentó que la posición de los agentes dominados era resultado de un “acuerdo tácito” mediante el cual los dominados aceptaban su dominación

Es complicado imaginar que un individuo estaría dispuesto a aceptar una posición dominada en el campo al que pertenece, empero, cuando se aborda el análisis del individuo dominado desde la perspectiva de la violencia simbólica, y asumiendo que los grupos dominantes tienen la capacidad de crear discursos para dar sentido a su dominio, los cuales serían presentados a los dominados como legítimos y válidos, se entiende que la dominación es resultado probablemente de acuerdos “implícitos” entre dominados y dominadores.

Cabe en la teoría de los campos la idea de que los movimientos sociales sean conjuntos de agentes que bajo motivaciones conscientes, como una causa social o ambiental, actúen respondiendo a cambios producto de entramados de acciones inconscientes en la estructura

social resultado de las acciones de múltiples agentes, por lo que la motivación primaria sería inconsciente.

Como es descrito por Bourdieu (2007) en torno a las estrategias de poder, al expresar que estas no responden a las necesidades u objetivos de un grupo en particular sino que representan la suma de acciones relativamente individuales en el espacio social. Sin embargo, para el autor la sociedad no se mantiene estática, bajo un esquema de poder único y perenne, sino que es resultado de las modificaciones, aparentemente naturales, pero en el fondo arbitrarias, producto de las luchas de poder.

Las modificaciones en la estructura de poder serían esencialmente arbitrarias porque no responden a motivaciones explícitas, sino a la configuración de acciones individuales, empero los grupos dominantes, beneficiarios de los resultados de las luchas de poder, tendrían disposición de construir discursos legitimadores de su dominio por medio de su capital simbólico, contribuyendo a la elaboración de un “sentido” particular en el campo.

De otra parte, para autores posmodernos como Foucault (1980), la configuración del poder en la sociedad respondería a una “genealogía” que resultaría, de manera similar a Bourdieu, en configuraciones de poder específicas. La diferencia entre ambos estaría en que para Foucault las posibilidades de cambio están limitadas por un sistema de control que aportaría roles o espacios sociales “irrenunciables” a los elementos subversivos para estabilizarlos con base en un dominio oculto a la vista.

Por su parte, Bourdieu considera en la teoría de los campos que el universo social se encuentra en constante cambio como resultado de las luchas de poder, empero, normalmente estas modificaciones responden a los grupos en el poder y no a las instituciones físicas o abstractas; las transformaciones radicales no son frecuentes, empero, son posibles y forman parte de una guerra simbólica

Para Bourdieu (2005) el poder no se define como la simple movilización de recursos -especies de capital-, sino que se basa en el capital simbólico, es decir, en la capacidad de definir (las

definiciones del campo) o dar sentido al campo. Los agentes que definen los elementos definibles, inclusive definiendo lo que se puede o no definir, serían los ganadores. Ya que de otra forma, aunque se logre obtener el capital necesario para ocupar una posición de poder, se estaría actuando con respecto a las definiciones de otro grupo de poder; resultando en una suerte de “victoria pírrica”.

Esta diferencia puntual en la comprensión del concepto de poder hace de la teoría de los campos una herramienta distinta a otros paradigmas de investigación social, ya que construye su objeto de estudio bajo tres elementos centrales no presentes (de la misma forma), de manera conjunta, en otras teorías:

Primero, disuelve la antinomia entre el sujeto y la sociedad, lo subjetivo y lo objetivo. Esta teoría no limita el cambio social a las estructuras institucionales o, en contraparte, a acciones individuales. Por lo que es un campo propicio para la comprensión de los movimientos sociales, ya que desde nuestra perspectiva estos no dependen exclusivamente de las acciones de sus miembros, pero tampoco replican únicamente a los designios de las instituciones sociales.

Segundo, comprende el poder bajo una lógica dicotómica, alejándose de la visión centrada en los dominados para analizar su participación en la dominación. Es delicado afinar cuestiones morales al estudio de los movimientos sociales, justificar causas o acciones por el simple hecho de ser parte de los grupos dominados. Bourdieu propone que el poder es un concepto que no pertenece exclusivamente a un grupo, sino que se comparte y modifica con base en una multiplicidad de agentes.

Tercero, si bien se han desarrollado conceptos para abordar paradigmas como el de la movilización de recursos o la construcción de identidades, el sistema conceptual basado en las especies de capital, enmarcado en la lógica de los campos, así como el habitus de los agentes, complejiza la construcción de una imagen científica de los movimientos sociales.

Quizás el principal aporte de esta teoría sería la capacidad para analizar a los movimientos sociales en un marco amplio, es decir, a lo largo del campo, proyectándose entonces no solamente los resultados de la movilización sino un conjunto de elementos más profundo, por medio del cual se podría determinar la efectividad.

De otra parte, Touraine (1995) argumenta que los movimientos sociales tendrían como principal característica el poner en “entredicho” la definición social de los papeles, el “funcionamiento del juego”, y en general, el orden social. En la teoría de los campos las motivaciones de los agentes no solo consisten en la contraposición de dos o más intereses, o en el cuestionamiento del orden establecido, sino en el enfrentamiento práctico entre los capitales simbólicos de las partes por reescribir las reglas del juego e implementar acciones basadas en la posesión de especies de capital.

Siguiendo con el argumento, una adaptación de la teoría de los campos al estudio de los movimientos sociales urbanos sería la idea de que estos no podrán ser totalmente efectivos en la consecución de sus objetivos, si no logran modificar (de forma práctica) -no solo cuestionar- la estructura simbólica que los sujeta a una posición dominada.

Por lo tanto, para que un movimiento social sea capaz, en el marco de la teoría de los campos, de ser efectivo, no es suficiente el contar con especies de capital, ni con la movilización de las mismas por medio de estrategias dirigidas al cumplimiento de sus objetivos; para que un movimiento sea efectivo tendría que establecer un dominio simbólico sobre algunos de los patrones sociales involucrados en el conflicto.

Es complicado definir cuando un grupo ha logrado posicionarse y definir su capital simbólico como el principio jerarquizante natural para el campo en disputa. Sin embargo, este proceso tendría que ver con la utilización de recursos que su contraparte, el grupo dominante, hasta ese momento habría definido, y definirlos simbólicamente en torno a una variante que favorezca sus intereses. Es cambiar el sentido de la lógica de poder en el campo.

En la problemática de estudio, lo anterior se manifiesta cuando un grupo de agentes es capaz de presionar al gobierno, el grupo dominante, utilizando sus recursos físicos y simbólicos, para modificar la estructura de poder a su favor. El capital simbólico sería un componente significativo en la lucha de poder de los movimientos ambientalistas, ya que al final, tendrá más probabilidades de ganar el juego quien tenga mayor capacidad para definir los términos de la victoria, y posteriormente, dar sentido al nuevo juego.

Para los movimientos ambientalistas el capital simbólico es la herramienta por medio de la cual proyectan e intentan instituir su modelo de desarrollo. En resumidas cuentas, la motivación principal de los movimientos ambientalistas no es económica sino que se centra en aspectos no materialistas, como la calidad del aire o salud. Aunque está claro que los elementos no materialistas podrían tener impactos materialistas (económicos), es decir, costos y ganancias.

En ese sentido, los movimientos ambientalistas participantes en un conflicto estarían básicamente contraponiendo su modelo de desarrollo al de otros agentes sociales, quizás menos orientados los riesgos e impactos ambientales. Por lo que a través de los conceptos de la teoría de los campos se podrá explicar, utilizando las especies de capital, la forma como un movimiento ambientalista logra posicionar sus demandas y modificar la Doxa de un campo.

Así, no solo los movimientos ambientalistas, sino en general los denominados nuevos movimientos sociales, tienen motivaciones no materialistas resultantes de los cambios en la estructura post-industrial, las cuales se ven expresadas en acciones orientadas a modificar la Doxa del campo.

Cabe decir que las dos principales motivaciones de los movimientos ambientalistas, los impactos negativos sobre el medio ambiente y los riesgos sobre la salud de la población, a pesar de no responder al conflicto marxista entre trabajo y capital, si podrían referirse a elementos económicos de forma indirecta, sobre todo desde el ángulo de la teoría de la valoración económica, en la cual se estipula que todos los “bienes comunes” tendrían un valor

calculable por medio de la “disposición a pagar” de sus usuarios, es decir, lo no cuantificable podría serlo si se calculan los beneficios no económicos que estos bienes producen.

Para un movimiento ambientalista el poder se centra en la capacidad de “calificar “el poder; o en otros términos, no bastará con cumplir uno o varios objetivos sociales para tipificar a un movimiento como efectivo, sino que hay que especificar hasta qué punto se pudo construir definiciones en torno al tipo de acciones que se permiten (o no se permiten) en relación a la naturaleza, así como el formato que tomaría esta dialéctica

Partiendo de una definición de poder basada en la teoría de los campos, se considera que las luchas de poder de los movimientos ambientalistas se producen principalmente en dos campos.

En primer lugar, el campo cultural, pues se presentan disputas dirigidas a establecer una definición culturalmente compartida de la relación con el medio ambiente. Así, el principal objetivo del movimiento ambientalista no sería simplemente que se vean cumplidas sus demandas, sino realmente modificar dichas definiciones en el campo y reformar un aspecto (o varios) del fenómeno en cuestión

En llanos términos, la contienda en el campo cultural apunta a la alteración de la percepción de otros agentes (gobierno, ciudadanía, medios de comunicación, academia, etcétera.) para con un riesgo o impacto ambiental, es decir, siendo que el movimiento social define el comportamiento de una empresa o el gobierno como peligroso para el medio y la población en general, la lucha estaría en contraponer a esta visión un discurso alternativo.

Es importante comprender que los problemas ambientales son percepciones o definiciones culturalmente compartidas relativas a lo correcto/incorrecto, posible/imposible, benéfico/dañino, de una acción o conjunto de acciones para con el ambiente. En ese sentido los problemas ambientales son acotados por la construcción de las definiciones en el campo cultural. Para Bourdieu (2005) la razón de un campo se construye en la historia de las

relaciones entre agentes, por lo que no hay un “bien” o un “mal” definidos, o una acción racional o irracional *per se*, sino que estos conceptos se van definiendo en la marcha.

La capacidad del movimiento u otro agente para modificar la Doxa (definiciones culturales) depende parcialmente de la coyuntura económica, política, y cultural, en la cual se desarrolle la lucha de poder. Entonces la aptitud de un movimiento ambientalista para ser efectivo por medio de la movilización de sus recursos (estrategias) resulta de la configuración de los “hechos” del campo y la interacción de los agentes sociales.

La teoría de Bourdieu reconoce que los agentes sociales interactúan en contextos históricos y coyunturales generales que les aportan posibilidades y sentido a sus comportamientos y elecciones en el campo, pero también se comprende que el contexto tiene la fortaleza para acotar sus acciones con respecto a su posición en el espacio social y su habitus particular.

En segundo lugar, la lucha de poder entre los “proyectos” de los movimientos ambientalistas y los agentes económicos y gubernamentales, se desarrolla en el campo político-administrativo, ya que tras definir en el campo cultural el proyecto “victorioso” en torno a un proceso social, es necesario implementar acciones políticas y administrativas para llevarlo a cabo.

Ambas contiendas formarán parte de un mismo conflicto social, en referencia a lo cultural y lo político administrativo, y no necesariamente tendrían que ser continuas, sino que pueden desarrollarse de forma simultánea, avanzando en algunos aspectos de ambas de manera correlacionada. Sin embargo, sin la definición o redefinición de los aspectos de la Doxa relacionados con el medio ambiente, las acciones producto del campo político-administrativo no tendrían sustento en los cambios (sociales) profundos a los que alude Bourdieu en la teoría de los campos.

Como agregado final, sería pertinente explicar que el enfoque bourdiano tributa a las ciencias sociales la noción de “reflexividad” como herramienta de autocrítica. Insumo que al ser utilizado permite a los científicos sociales, construir un objeto de estudio alejado de la

empatía/rechazo que algunos enfoques teóricos desarrollan hacia los dominados; dejando de lado su participación en la construcción de la dominación

La aplicación de enfoques innovadores a temáticas ampliamente estudiadas facilita la ruptura con la dependencia hacia conceptos recurrentemente utilizados para explicar un fenómeno, lo cual es en sí, una forma de dominación en el campo intelectual. El riesgo es que en el esfuerzo por adaptar la teoría de los campos a la complejidad de los estudios sobre la movilización ciudadana, se establezca otra forma de dominio, expresada en la intención de empatar la realidad a un entramado conceptual, a costa de la veracidad de la investigación.

1.4. Modelo de efectividad de los movimientos ambientalistas

Se presenta un modelo por medio del cual analizará la efectividad de los movimientos ambientalistas con base en siete variables relacionadas con las especies de capital y las estrategias que los movimientos ambientalistas desarrollan para conseguir sus objetivos. Partiendo de una conceptualización del fenómeno, para luego analizar los recursos de los movimientos ambientalistas; finalizando con la explicación de los componentes del modelo científico y una discusión sobre el contexto como una variable interviniente.

1.4.1. Conceptualización del fenómeno

Se define a un movimiento ambientalista como una acción colectiva no institucional, articulada por agentes y organizaciones sociales, mediante la cual se promueven cambios en la relación, principalmente económica⁴, que los seres humanos sostenemos con el medio ambiente; concurriendo en el enfrentamiento con proyectos de desarrollo impulsados por grupos dominantes; para construir en el espacio simbólico, a través de la movilización estratégica de capitales y las acciones de resistencia, proyectos que introduzcan nuevas definiciones culturales (éticas, morales, legales, comerciales) que deriven en prácticas sociales

4 Aunque la relación de los seres humanos con el medio ambiente es compleja e implica componentes éticos, morales, políticos, y legales, quizás la principal crítica de los movimientos ambientalistas y las ONG estaría relacionada con el modelo económico que se centrar en la explotación indiscriminada de recursos, frente a las teorías de sustentabilidad.

alternativas en torno a la percepción de impactos negativos sobre el ambiente y los riesgos potenciales para la salud de la población

De esta forma, la definición de poder de Bourdieu (2005), en la que se da preponderancia a la capacidad de (re)definir el sentido (simbólico) del campo (Doxa), sugiere la capacidad de los movimientos ambientalistas para modificar el sistema cultural, subvertir el orden establecido, tergiversar los mecanismos de reproducción social, y cambiar las posibilidades e imposibilidades del sistema por un nuevo sistema de posibilidades e imposibilidades acorde a otra estructura de distribución de capital.

Quizás esta sería una de las principales diferencias de Bourdieu con respecto a las teorías revisadas en apartados anteriores. En la teoría de los campos existe el cambio social, y las estructuras de poder son temporales, así como los sistemas de valores. Aunque la temporalidad de las mismas depende de la multiplicidad de interacciones que ocurren en el espacio social. Sin embargo, los cambios definitivos, la ruptura total del juego y sus reglas, solo acontece cuando se desarticulan los mecanismos de reproducción social (Bourdieu, 1999).

Por lo anterior, el rol de los movimientos ambientalistas estará destinado a la desarticulación de los elementos “visibles” de la estructura de dominio, pero su participación se tornará efectiva para este modelo, al enfrentar la dominación simbólica inscrita de manera implícita, y no perceptible del todo, en los mecanismos de reproducción social. Es necesario originar cambios en las reglas del juego, para encontrar resultados disimiles con respecto al sentido ortodoxo del campo.

En llanos términos, no basta para la acción colectiva con enfrentar a los agentes dominantes de un campo, sino que es fundamental para un movimiento ambientalista re-definir los elementos que fabrican la dominación y los problemas referentes al medio ambiente (mecanismos causales). No queriéndose afirmar que haya que construir un sistema completo, sino que habría que utilizar el capital simbólico para orientar el sentido del campo hacia una lógica distinta para con el medio ambiente.

Los principales cambios en el espacio social son reflejo y producto de una genealogía del poder (Foucault, 1980), es decir, de un proceso de destilación y sedimentación que a través de la historia ha sufrido modificaciones constantes, sin que por esto se piense que existe una lógica central y única.

Las modificaciones históricas al espacio social (y sus campos) surgen de la configuración en múltiples dimensiones de las acciones “conscientes” de los agentes sociales en dinámicas complejas (inconscientes para los agentes) que llevan hacia resultados difícilmente predecibles en “tiempo real”: los agentes dominados contribuyen inconscientemente a su dominación mediante sus acciones conscientes; los agentes dominantes contribuyen inconscientemente a su caída a través de sus acciones conscientes.

Por lo tanto, los movimientos sociales juegan un papel esencial en la composición del universo social, particularmente por medio de su capacidad para subvertir el orden establecido, modificar la estructura de poder, y agilizar los cambios percibidos desde la trinchera de los dominados, para así incrementar las probabilidades de que el sentido de la relación con el medio ambiente sea otro.

Habiendo discutido sobre la función de los movimientos sociales, es necesario hablar sobre las motivaciones de los agentes sociales para desarrollar la acción colectiva. Particularmente por el hecho de que los movimientos ambientalistas no son organizaciones institucionalizadas con capacidad de incentivar económicamente a sus miembros, pero quizás tengan la capacidad de producir otro tipo de incentivos.

Las motivaciones de los agentes involucrados en un movimiento ambientalista se edifican con base en la percepción del riesgo, por lo que estas reflejan una determinación ética de los agentes miembro por cambiar algo que les preocupa de su entorno. Los impactos ambientales negativos y los riesgos potenciales sobre la población son construidos como problemas por el movimiento con base en la percepción y en el capital cultural de sus miembros; de otra parte, la legitimidad del proyecto contrario es construida por los agentes dominantes.

También hay otro tipo de motivaciones que no se relacionan tanto con el riesgo, como con una necesidad de un grupo social. La necesidad de agua, que se asocia con la contaminación de un río por una empresa, el gobierno, u otros sectores sociales. De esta suerte una motivación orientada por una necesidad se enlaza con una motivación estructurada por un riesgo percibido sobre la salud de la comunidad y los impactos sobre el ambiente. Interpretándose que las motivaciones no son únicas, ni específicas; al contrario, estas son múltiples y mixtas.

Existen motivaciones que se relacionan como beneficios esperados no materialistas. Como por ejemplo la mejora de la calidad del aire o el agua, una mejor calidad de vida como producto de la no instalación de proyectos potencialmente riesgosos para una comunidad, o el fortalecimiento de un sentido de comunidad a través de la concientización de la problemática ambiental local.

Al final, en un mismo movimiento podrán presentarse diferentes motivaciones alrededor de una causa común, juzgándose esta característica útil como fuente de capital económico, social, y cultural; e inclusive argumentándose que esta heterogeneidad funcionaría como una matriz de creatividad y recursos al interior del movimiento.

1.4.1.1. Los recursos de los movimientos ambientalistas

Los agentes miembro de un movimiento ambientalista se agrupan en referencia a fenómenos que son percibidos como riesgosos para la población y negativos para el medio. De tal forma, los agentes utilizan sus especies de capital, y particularmente el capital simbólico, para enfrentar a los grupos gubernamentales o empresariales, con el objetivo de modificar el sentido del campo y favorecer su causa.

Los movimientos ambientalistas participan de las luchas de poder por medio de estrategias relacionadas con la movilización de sus especies de capital. Las estrategias podrán vincularse con elementos sociales que se encuentren al alcance de los agentes del movimiento, como pueden ser la atención mediática, la relación con organizaciones ambientalistas internacionales, o la utilización de recursos legales.

Las especies de capital de los movimientos, o sea, el capital económico, social, y cultural, son tributados por los agentes que participan en el movimiento y también son producto de las relaciones sociales con agentes externos. De otra parte, el origen de las estrategias que los movimientos ambientalistas desarrollan estaría en el capital cultural y social que los miembros acumulen bajo la forma de experiencias exitosas de otros movimientos sociales, divulgada en los medios de comunicación o en bibliografía, así como en comunicaciones personales o participación en otras movilizaciones, aunque se entiende que el conocimiento práctico sobre la efectividad de los movimientos es un constructo social.

Se comprende en esta investigación que las luchas de poder al respecto de temas ambientalistas se ubican en dos campos: el social y el cultural. En el campo social se promueve la interacción con agentes que ostentan una visión similar y se construye el capital del movimiento. En el campo cultural se articula el discurso simbólico del movimiento y se contraponen el proyecto cultural de la organización a los proyectos de otros agentes sociales, como el gobierno, o los grupos empresariales.

La problemática de la contaminación del ambiente se liga al campo social, dado que los impactos ambientales y los riesgos sobre la población resultan de la matriz de relaciones sociales y tienen un efecto potencial sobre los agentes sociales. El medio ambiente es la fuente de recursos que alimenta al sistema económico global y de la cual dependen todos los seres vivos del planeta, por lo que hay una extensa gama de intereses y posiciones al respecto; así como proyectos de desarrollo que se contraponen en el espacio social.

Por otra parte, en el campo cultural se estructuran e impugnan los argumentos y discursos de la multiplicidad de agentes de un campo. Es ahí donde se definen parámetros, posturas éticas, límites, avances, pérdidas, ganancias, etcétera. El medio ambiente sostiene vínculos con los campos económico, social, político, y científico, bajo lógicas distintas y en ocasiones contradictorias. Lo que para el campo económico es un beneficio, para el campo científico podría ser un impacto negativo sobre el medio. La lucha por definir la función del medio ambiente y nuestra relación con él tendría sus trincheras en el campo cultural.

Los capitales sociales y culturales adquiridos se aprovechan como herramientas para desarrollar estrategias dirigidas a modificar el sentido simbólico de los campos. De ahí la importancia del capital simbólico, ya que las luchas de poder, serán esencialmente simbólicas. Además, se argumenta que la problemática social en relación con el ambiente es primordialmente construida al calor de la pugna simbólica entre agentes con concepciones de “vida” diferentes.

Entonces los movimientos ambientalistas efectivos no son aquellos que logran sus objetivos *per se*, sino los que modifican las estructuras simbólicas que dan sentido al campo cultural y social y, por ende, alteran la percepción de los demás agentes. O en otras palabras, cuestionan los mecanismos causales del problema, pues su principal objetivo es transformar la percepción social sobre una situación que no es comprendida como un riesgo o un impacto ambiental negativo por el gobierno o las empresas, pero que lo es para un conjunto de ciudadanos que deciden modificar el campo.

En otras palabras, se busca construir nuevas definiciones compartidas para generar cambio social. En ese sentido, la filosofía de Bourdieu se relaciona con la percepción del riesgo al comprender que es un concepto construido por agentes de un campo, en un momento histórico específico, y es producto de las luchas de poder; lo que no implica que la definición de lo que es riesgoso para la población o contaminante para el medio, no pueda ser modificada por medio de la contraposición de capitales.

Siguiendo los postulados de la teoría de los campos, el riesgo sería factible como concepto al tomar en cuenta condiciones específicas relacionadas con los procesos sociales en diferentes campos (contexto). La percepción de los impactos negativos sobre el medio se apoya en parámetros aceptables o inaceptables en relación con situaciones históricas particulares, tales como una hambruna o un derrame petrolero en el océano. El contexto da posibilidades de acción a los agentes sociales, acotando la acción y el discurso.

Así, en el campo cultural se establecen confrontaciones por definir cuestiones relacionadas con problemas sociales referidas en este caso al medio ambiente. Aquí se puede hablar de luchas de poder entre modelos de desarrollo opuestos o significativamente diferentes. Es la batalla por las definiciones que ha estado ahí desde el principio de la historia; cambiando o conservando los sistemas de valores que definen lo que es correcto e incorrecto, lo que es riesgoso o seguro, lo que es dañino para la salud o saludable (sustentable o insustentable).

En este marco es un imperativo comprender que las acciones de los agentes de un campo están parcialmente acotadas por las definiciones culturalmente construidas y compartidas. El habitus tiene un impacto directo sobre la manera como percibimos el riesgo sobre nuestras vidas y el medio, junto con el sistema de valores que da un sentido temporal al campo. Así la percepción de un ambientalista puede ser diferente a la de un empresario, o la de un biólogo respecto a la de un funcionario público. Teniendo un peso específico a la hora de tomar decisiones y adquirir posiciones en el campo.

En otro sentido, la forma como los agentes internalizan las definiciones construidas en el campo cultural también dependerá del habitus individual, es decir, de la trayectoria que el

agente habría solventado en el campo, la cual será relativamente simétrica a la de otros agentes pertenecientes a un campo específico, pero definitivamente individual en su constitución interna. El cuerpo socializado integra las definiciones del sistema de valores vigente, pero el internalizar es un proceso individual, por lo que no habrá dos individuos con un habitus exactamente igual: lo que Bourdieu (2005) llama la “singularidad colectiva”.

Por lo tanto, la complejidad de la problemática ambiental estaría radicada en que los agentes en conflicto forman parte de varios campos que “viven” lógicas distintas de interacción social y valoran diferentes formas de capital. A lo que se sigue un antagonismo entre sistemas de valores disímiles, dando pie a la confrontación entre las perspectivas de los agentes en relación con la percepción de un problema social con impactos sobre el medio ambiente y la salud de la población

Un movimiento ambientalista efectivo utiliza sus especies de capital para implementar estrategias orientadas a “atacar” la dimensión simbólica de la definición social a la que se enfrenta. No basta con que el movimiento cumpla con sus objetivos prácticos para ser efectivo, pues lo fundamental se encuentra en la reconfiguración de las definiciones que sustentan una problemática percibida como riesgosa.

Entonces los movimientos confrontan su definición de desarrollo y medio ambiente, con la de agentes provenientes de otros campos, como el económico y el político-administrativo. Construyendo la batalla más importante a la que podría enfrentarse un movimiento ambientalista, y a la cual destinaría sus especies de capital de forma abundante.

Sin embargo, la efectividad del movimiento ambientalista estará acotada por la coyuntura económica, política y cultural, la cual a su vez determinara las formas de acción y organización posibles para los agentes de un movimiento. O en otros términos, la razón se construye a partir de los hechos históricos en la teoría de los campos. Pero también, los hechos históricos son elaborados por los agentes sociales, lo que indica que es factible modificar las estructuras sociales por medio de la movilización ciudadana.

Es interesante argumentar que si bien los movimientos ambientalistas están integrados por agentes interesados en cumplir con una agenda de objetivos y en maximizar sus recursos, esto no significa que su organización dependa de procesos institucionales o ejecutivos, libres de intenciones estructuradas por la fuerza moral de sus integrantes y por comportamientos representativos de un grupo de personas sin una especialización en los temas de movilización social efectiva. No es un ejército, ni una empresa, por lo que hay un contenido de intuición e instinto en sus decisiones personales y en su accionar colectivo (el conocimiento práctico que se adquiere al participar en el juego).

1.4.2. Los componentes del modelo de efectividad de los movimientos ambientalistas

Estimando lo anterior, se proponen dos componentes básicos para determinar la efectividad de los movimientos ambientalistas: Diversidad de especies de capital y Estrategias de poder. Se eligieron las dos variables por representar dos ingredientes por medio de los cuales un movimiento ambientalista puede llegar a ser efectivo.

Se reconoce que ambos componentes (y sus subcomponentes) se encuentran en autores relacionados con el paradigma de la movilización de recursos, principalmente en McCarthy y Zald (1977), McAdam (1986), Gamson (1990) y Jenkins (1994), sin embargo, en el presente modelo se intentará dar un tratamiento teórico-práctico distinto, basado en la teoría de los campos de Bourdieu y en la preponderancia del capital simbólico como elemento de cambio social.

1.4.3. La diversidad de especies de capital

En esta sección se explica la forma como un movimiento ambientalista utilizará sus recursos económicos, sociales, culturales, y simbólicos para obtener sus demandas y ser efectivo. Eligiéndose desarrollar la argumentación de forma unificada, es decir, sin explicar los capitales por separado, para denotar como las especies de capital se vinculan y reproducen con base en la interacción social.

En primer lugar, se sugiere que un movimiento ambientalista es efectivo al contar con una diversidad de especies de capital significativa a través de sus miembros, es decir, cuando sus agentes poseen recursos de tipo económico, social, cultural, y simbólico, y pueden movilizarlos estratégicamente (depende del contexto) para contraponer su proyecto cultural al de otros agentes (gobierno, empresa) por medio de acciones prácticas que cambien el sentido de la Doxa.

El modelo considera la diversidad de especies de capital sobre la presencia de un único tipo de capital porque la diversidad de recursos incrementaría la efectividad potencial del movimiento al incluir una mayor cantidad de recursos potenciales para ser utilizados estratégicamente según las condiciones cambiantes en un campo.

Además, la diversidad haría factible la obtención de ganancias tanto materiales como no materiales para el movimiento (mejor calidad del aire, agua, seguridad, etcétera.), ya que si bien no se puede afirmar que los agentes que participan en una movilización tengan algún interés más allá de lo establecido en sus demandas, cabe la posibilidad de que se obtengan ganancias específicas según las características del objeto de estudio.

Considerando lo anterior, se define capital económico como los recursos, tangibles e intangibles, que permiten al movimiento, cuando son intercambiados con otros agentes, obtener beneficios expresados en la obtención de otros recursos, tanto económicos como sociales y culturales.

En ocasiones los beneficios podrán aparecer bajo la figura de cambios no cuantificables (al menos durante el conflicto) en la problemática, como puede ser una mejora en la calidad del aire de una zona, o la concientización de otros sectores de la población alrededor del medio ambiente.

Para Bourdieu (2002) todas las formas de capital se traducen en capital económico, por lo que aunque coincide con la interpretación marxista del capital económico como principal motor de la sociedad, se distancia cuando incluye otro tipo de recursos, como los sociales, culturales, y sobre simbólicos, para explicar el funcionamiento de los campos.

Por otra parte, el capital social es un recurso expresado en relaciones sociales favorables a los intereses del movimiento, permitiendo la vinculación estratégica con agentes que podrían aportar beneficios directos o indirectos al movimiento ambientalista, bajo la forma capital social o de otras especies de capital, es decir, recursos económicos, vinculación con otros agentes sociales, como el gobierno u otros movimientos sociales, e información relevante para el movimiento.

Al no ser una organización institucionalizada, los movimientos ambientalistas no tienen la capacidad de crear y multiplicar vínculos formales con agentes sociales convenientes para sus propósitos (no hay una normatividad o lazos institucionales), por lo tanto, el incluir un capital social significativo relacionado directamente con los miembros, aportará al movimiento un banco de recursos para ser efectivo o incrementar la probabilidad de éxito.

La identidad del movimiento ambientalista será resultado en gran parte de la mezcla singular de capital social que aporten sus miembros y asociados. Pero también consecuencia de la configuración del campo, es decir, del contexto. La relación entre ambos elementos, el capital social y lo contextual, tendrá como efecto la elaboración del habitus particular del movimiento.

El habitus es vital para los esfuerzos del movimiento ambientalista porque es su matriz de capital simbólico. En el génesis del movimiento social los habitus singulares de los miembros

se interrelacionan para constituir un habitus colectivo. Este habitus organiza las posiciones y elecciones, (im)posibilidades, (in)capacidades, capitales, etcétera., forjándose una identidad colectiva que no solamente responde a las identidades y acciones individuales, sino también a las regularidades objetivas del campo (instituciones, mecanismos de reproducción social, etcétera.).

A partir de la identidad colectiva constituida en los procesos relativos al habitus colectivo del movimiento ambientalista se produce un acervo de conocimientos y prácticas (capital cultural colectivo) que deriva en objetivos y estrategias para la acción colectiva. El habitus limita y/o posibilita los objetivos y demandas de un movimiento. Igualmente, el habitus es el filtro de las especies de capital del movimiento, pero su principal función es ser una matriz de capital simbólico útil para condicionar la continuidad de la Doxa vigente.

Entonces los movimientos sociales son entes acumuladores de capital cultural, empero, también en el interior de los mismos podrá articularse capital cultural por la interacción de los miembros del movimiento. En ese sentido, los movimientos sociales no solo serían un mecanismo de cambio social, sino también un acervo de conocimiento a través del cual otros agentes sociales podrían intentar cambiar la lógica del espacio social.

Una de las principales funciones de las instituciones sociales sería la de ser acervos de capital cultural útil para la “reproducción de la sociedad”, sin embargo, desde el enfoque bourdiano, dicho capital formaría parte de la Doxa promovida por los agentes dominantes del campo, por lo que los movimientos podrían funcionar como acervos culturales alternativos cuya función sería aportar elementos útiles para que otros agentes sociales accedieran al conocimiento (de esa particular experiencia) y lo usen para su propia causa.

En el caso de los movimientos ambientalistas, el capital cultural se refiere, en primer lugar, a los grados o reconocimientos que sus miembros podrían detentar y utilizar para obtener beneficios según los objetivos del movimiento. Por ejemplo, un movimiento ambientalista que tiene entre sus filas a especialistas en química probablemente será más efectivo en la presentación de sus argumentos científicos; de otra parte, un líder social formado en las luchas

del proletariado aportaría un importante capital cultural (prestigio) para presentar otro tipo de argumentos a un público distinto.

El hecho de contar con un conocimiento técnico relacionado con la problemática específica en la que participa el movimiento ambientalista, tendría como ventaja, el tener la habilidad para direccionar el discurso y las estrategias colectivas hacia una mayor diversidad de agentes provenientes de campos distintos.

Aunque no implicaría que un discurso menos técnico pudiera no ser considerado como capital cultural, dado que habría utilidad en las herramientas relacionadas con el conocimiento no técnico, o para ponerlo en términos de Bourdieu, un “sentido práctico” implícito en todos los jugadores del juego.

Necesariamente se tiene que considerar que las especies de capital son valiosas a partir del contexto en el que se implementan, es decir, las reglas del campo en el cual busca hacerse efectivo el capital; por ejemplo, un título nobiliario difícilmente sería efectivo para expresar los argumentos de un movimiento ambientalista en un contexto relacionado con la clase baja o media; en contraparte, un título académico, como el de profesor rural, si podría ser efectivo en la vinculación en un contexto como el citado.

En resumen, para la primera variable del modelo se tomo en cuenta capital económico, cultural, y social, aunque se menciona recurrentemente la inclusión del capital simbólico en función de su importancia para los presupuestos teóricos de Pierre Bourdieu. El motivo por el cual no se desarrolló un componente denominado capital simbólico tiene que ver con que todas las especies de capital podrán ser consideradas capital simbólico en circunstancias específicas (aunque no siempre lo sean).

Por lo tanto, el capital simbólico estará implícito tanto en las especies de capital citadas, como en las estrategias desarrolladas por los movimientos ambientalistas. Lo que nos lleva a pensar en los requisitos para activar la “cualidad” simbólica de un capital. Siendo la mejor respuesta

que podemos aportar la relacionada con el dominio de un tipo de capital en un campo específico a la manera de un “principio de jerarquización”.

El capital simbólico se transforma en “principio de jerarquización” al ser capaz de cuestionar el “sentido” (Doxa) del campo. Cuando un capital enfrenta el sentido ortodoxo de un campo (lo establecido por otros agentes poseedores de capital simbólico) podrá afirmarse que refleja su propiedad simbólica. Así, toda especie de capital tendría un potencial simbólico y sería capaz de alterar la estructura establecida, pero no todos los capitales serían utilizados de esa manera.

En ese sentido, junto con los tres componentes de la variable diversidad de especies de capital, se considera que el desarrollo e implementación de estrategias por parte de los movimientos ambientalistas tendría un impacto directo sobre su efectividad. Por lo que a continuación se presentan cuatro estrategias⁵ que harían efectivos a los movimientos ambientalistas bajo un contexto (variable interviniente) similar al del caso de estudio.

1.4.4. Las estrategias de los movimientos ambientalistas

Se reconocen cuatro estrategias de poder relacionadas con especies de capital. Siendo estas la vinculación con organizaciones internacionales, la utilización de recursos legales, el uso de los medios de comunicación, y la participación en foros de discusión. Detallándose en seguida su consistencia y relación con la diversidad de especies de capital.

5 Estas han sido abordadas de forma directa o indirecta por autores como McCarthy y Zald (1977), Gamson (1990), Kriesi (1988), y Jenkins (1994), entre otros. Sin embargo, como se menciona al inicio del apartado, en este trabajo se utilizan dichas estrategias bajo la lógica de la “teoría de los campos” de Bourdieu.

1.4.4.1. Vinculación con organizaciones internacionales

Los movimientos ambientalistas se interesan en vincularse con otras organizaciones para obtener recursos aprovechables en la lucha contra los grupos dominantes. Por lo que su motivación básica se adhiere a la lógica de incrementar sus recursos operativos, específicamente hablando de capital económico, capital cultural, y capital social.

De otra parte, la visión utilitarista de las estrategias de los movimientos ambientalistas no sería suficiente para explicar su vinculación con otras organizaciones. Hay en los movimientos una lógica de integración de identidades individuales hacia lo colectivo o de establecimiento de lazos más allá de las ventajas materiales. Relacionarse con otros movimientos sociales u organizaciones, en diferentes planos geográficos o temáticos es necesario para construir una identidad colectiva que no dependa únicamente de los recursos locales, sino que pueda trascender.

Si se considera que los movimientos ambientalistas no solamente tendrían motivaciones orientadas por las ganancias económicas directas, se podría plantear que la acción colectiva es también promovida por motivaciones enlazadas con procesos de producción de identidades colectivas. Entonces un movimiento ambientalista, al (re)producir su identidad en cada instante, acepta el capital simbólico de otras organizaciones para edificar una identidad propia (y modificar la de otras organizaciones), participando de un intercambio que puede orientarse hacia los recursos materiales, pero también contendrá un elemento de construcción de identidades.

Esto es importante porque en la sociedad contemporánea los espacios disponibles para las identidades que no forman parte de los grupos dominantes se reducen y limitan. Siendo los movimientos ambientalistas capaces de presentar resistencia y construir identidades alternativas con intereses y objetivos contrarios a los de grupos dominantes.

Por lo que, al relacionarse con otras organizaciones, en cualquier plano geográfico, y más allá de los beneficios expresados en capital económico, esta vinculación ofrece ganancias que en

un primer plano quizás no se transformen en recursos materiales, pero posteriormente podrían derivar en beneficios tangibles.

Desde una perspectiva simplista, los movimientos ambientalistas capaces de vincularse con ONG o movimientos ambientalistas en diferentes escalas geográficas podrán ser efectivos en presionar al gobierno por medio de la obtención y movilización de los recursos económicos, sociales, y técnicos, que estas organizaciones les aporten. Pero esta visión dejaría de lado los aportes de las organizaciones aliadas en lo referente al capital simbólico y la manera como este podría ser movilizado para promover nuevas definiciones compartidas.

La asociación con otros movimientos ambientalistas podría, por ejemplo, ayudar a legitimar demandas y discursos, vigorizar la presencia de la organización en los medios de comunicación y en otros puntos geográficos, construir un acervo de capital cultural compartido que podría beneficiar a ambos movimientos, promover las demandas ante agentes (instituciones) de otros niveles o escalas, entre otros elementos.

Sin embargo, se considera que el principal aporte de la vinculación estaría en el capital simbólico mediante el cual se tiene la capacidad de modificar el sentido del campo con respecto a la problemática. Así, el capital cultural, en la forma, por ejemplo, de relaciones con agentes relevantes para la causa (capital social), inaccesibles quizás al movimiento ambientalista, pero accesibles a organizaciones internacionales, le permitirán interactuar en espacios, que bajo un contexto favorable, podrían consolidar su postura y transmitir su mensaje.

El acceder a los espacios adecuados es importante para los movimientos ambientalistas porque al ser el espacio social una geografía de conflictos y luchas de poder, cabría la probabilidad de que el enfrentamiento con los agentes dominantes sea más efectivo al utilizar las herramientas y espacios determinados por la estructura de poder dominante de una forma alternativa.

En otros términos, y parafraseando a Bourdieu (1999), los movimientos sociales deberán aprovechar los mecanismos de reproducción social pero revertir o acotar el sentido simbólico

que producen y construir valiéndose de ellos un nuevo sentido o una serie de acotaciones a la Doxa dominante.

Cuando un movimiento ambientalista construye estrategias a partir de las instituciones que articulan los mecanismos de reproducción social, como pueden ser las cortes, la academia, los medios de comunicación, o las dependencias gubernamentales (inclusive los mecanismos de participación ciudadana son un mecanismo de reproducción social), existirá la posibilidad de que se vea absorbido o difuminado por el sistema.

Una demanda que entra en el sistema legal puede perderse en el mismo y “relajar” la movilización ciudadana. La construcción de teorías científicas sobre el movimiento ambientalista puede convertir a la organización en un objeto de estudio rígido, lo que Norbert Elias llamaba “cosificación”. Los medios de comunicación, bajo un régimen autoritario, tendrán la capacidad de realizar un cerco informativo al movimiento ambientalista, cancelando o limitando el apoyo de otros agentes sociales al movimiento.

El caso de la participación ciudadana institucional es interesante, porque la incapacidad de los mecanismos formales para cubrir las demandas ciudadanas sería quizás una de las principales motivaciones para la movilización en temas ambientales. De otra parte, considerando lo que Bourdieu (2005) llamaba “sentido práctico”, los movimientos ambientalistas no otorgarían gran importancia a la participación institucionalizada.

En ese sentido, los canales de participación ciudadana son mecanismos de reproducción de las estructuras de poder en el espacio social, cuya función en el campo simbólico, más allá de la operatividad político-administrativa, sería la asimilación de las demandas ciudadanas para dar respuesta a las mismas en los términos acotados de la Doxa del campo.

Por lo que sería a lo menos complicado que un instrumento construido para la reproducción de una estructura de poder juegue un papel de ruptura y subversión del *estatus quo*. Empero, en la teoría de los campos se establece que si bien los mecanismos de reproducción responden a una configuración del espacio social específica en el tiempo, la sociedad es una matriz “viva”

de interacción social, por lo que así como la estructura de poder muta, también los mecanismos van adaptándose en el tiempo a las nuevas condiciones.

Para Bourdieu el límite a la ruptura o subversión de la estructura dominante y sus mecanismos por parte de los agentes sociales es la desvinculación con las reglas del juego “no escritas” en la Doxa. El espacio social rechaza y margina a los agentes incapaces de adaptarse al juego. De ahí que en la teoría de los campos los movimientos ambientalistas no serán un agente *sui generis* sino un agente dominado que busca de una posición de dominio, lo que implica un proceso “natural” en el espacio social.

Volviendo a la vinculación práctica con las organizaciones sociales, y desde una perspectiva más orientada hacia la movilización de recursos; los movimientos ambientalistas podrían compartir intereses, demandas y motivaciones con otras organizaciones similares, por lo que el establecimiento estratégico de relaciones sería benéfico para ambas partes. Las organizaciones aportarían financiamiento para que el movimiento pueda desarrollar sus actividades, ya que la movilización social conlleva costos directos para sus participantes.

De otra parte, la vinculación con ONG o movimientos ambientalistas proyectará las demandas del movimiento local en otros contextos geográficos, a nivel nacional o internacional, ganando apoyo para sus causas, así como otro tipo de vinculaciones con agentes de campos diversos.

Bajo otra lógica, un elemento poco estudiado en torno a este tipo de relación sería el que tiene que ver con los enlaces por medio del uso de la Internet y de las relativamente nuevas herramientas de comunicación, como el email o las redes sociales. Los movimientos ambientalistas podrían no solo relacionarse con organizaciones sin tener que viajar, por medio de salas de conferencia o chats, sino que también podrían planificar acciones conjuntas en el ciber espacio.

La *world wide web* (*www*) es una herramienta útil para desarrollar estrategias que podrían ir desde la difusión de demandas hasta el hackeo de portales gubernamentales o de los sectores empresariales. Al ser el ciberespacio parte del espacio simbólico, la acción colectiva adquiere

características distintas al enfoque ortodoxo, sobre todo cuando las actividades (las de un ciudadano hasta las del gobierno) realizadas “*off line*” tienen más que ver con las actividades “*on line*” (Vicente, 2004).

Es importante acotar la efectividad de una vinculación con organizaciones nacionales e internacionales a la obtención expresa de capital, ya sea económico, o simbólico. A su vez, los recursos podrán expresarse en la forma de asistencia técnica, o sea, capital cultural; o también, en capital social mediante el apoyo físico en las manifestaciones públicas o la vinculación con otras organizaciones.

No basta con establecer una vinculación sin no se recibe un beneficio, tendiendo desde la perspectiva de esta investigación principalmente hacia lo simbólico, es decir, hacia la asimilación de elementos relacionados con la construcción de una identidad que podrían incrementar la efectividad de una organización.

Asimismo, el contexto limitará la efectividad de la vinculación con organizaciones o movimientos sociales. Un movimiento ambientalista que opera en un contexto político autoritario y cerrado al exterior tendrá menor capacidad de establecer relaciones con organizaciones internacionales; y en caso de vincularse, la intensidad de los beneficios estará acotada por la estructura de poder: inclusive el uso de las nuevas tecnologías podrá ser limitado por un gobierno autoritario, como en el caso de China y su restricción parcial al uso del buscador *google*.

1.4.4.2. Utilización de recursos legales

La principal motivación de un movimiento ambientalista para utilizar un recurso legal tendría que ver con la necesidad de intentar “hacer cumplir” una normatividad establecida con respecto a un conflicto de tipo socio ambiental, es decir, solicitar a las autoridades que hagan efectivos los supuestos legales referentes a lo ambiental. Sin embargo, la normatividad ambiental (federal, estatal, municipal) no siempre es representativa de la problemática; situación que se combina con las externalidades del proceso legal, como por ejemplo las

posturas laxas o inoperantes frente al cumplimiento de ley por parte de las autoridades, lo que deriva en corrupción o incapacidad técnica

Como resultado, en ocasiones los ciudadanos interesados en encontrar respuestas a una problemática toman la decisión de movilizarse y expresar sus demandas de manera no institucional, con tres resultados probables desde nuestra perspectiva: la normatividad se reforma y el movimiento logra modificar relativamente el sentido del campo; el movimiento se diluye o es reprimido, no modificándose la Doxa; o finalmente, la organización logra sus objetivos específicos (se cumplen demandas), pero no se modifica la normatividad o los procedimientos administrativos, por lo que el mecanismo causal del problema persiste.

En un primer sentido, los movimientos ambientalistas podrán abordar un problema por la vía institucional, ya que uno de los incentivos para permanecer en los canales formales es que su costo operativo podría parecer mucho menor que el de la vía no institucional. Aunque los procesos legales tienen un costo (honorarios abogado, transporte dentro y fuera de la ciudad o país), también la movilización ciudadana tiene costos (disminución de productividad laboral de los miembros, desatención de negocios, inversión en material para tácticas elementales de movilización).

Descartado el procedimiento ortodoxo de solución institucional, las instancias legales adquieren un matiz simbólico para el movimiento ambiental, y su valor se relaciona con factores externos al procedimiento jurídico útiles a la causa (ganancia), como la atención mediática (ciber medios incluidos), o el apoyo generado en la opinión pública a la no resolución de un conflicto, tanto a nivel local, como nacional, o inclusive internacional.

No obstante, a pesar de elegir la vía no institucional, los movimientos ambientalistas podrán continuar gestionando demandas ante las autoridades, combinando prácticas formales e informales; sugiriéndose entonces que la movilización ciudadana probablemente será más efectiva si incluye el aprovechamiento de los recursos legales, siempre y cuando estos formen parte de una estrategia (para Bourdieu las estrategias no necesariamente tienen que ser totalmente conscientes) para presionar a las autoridades.

En ese proceso de (re)definición de la utilidad de un recurso legal, de una instancia incapaz de responder a las necesidades del movimiento hacia una herramienta útil para lograr los objetivos, el contexto sería la variable interviniente que limite la capacidad para aprovechar las virtudes potenciales de un “arma” como podría ser el entramado legal, cuando se le utiliza estratégicamente para atacar el espacio simbólico

Las instancias legales son uno de los mecanismos para legitimar y dar validez (o invalidez) a los comportamientos sociales. Son mecanismos de reproducción social y tienen la particular característica de definir a los agentes sociales como miembros productivos de la sociedad, o individuos subversivos que deberán ser reprimidos/reformados. La eficacia de los dispositivos legales dependería de la que Bourdieu denomino “*illusio*”, es decir, la creencia en la validez y legitimidad del “estado de las cosas”. Si se deja de creer en las reglas del juego, un agente es tildado de subversivo y tendrá que enfrentar un proceso de (re)educación a través de los distintos mecanismos *a doc*, como la cárcel o el manicomio.

Para un movimiento ambientalista el uso de estos mecanismos a favor de sus objetivos es motivado por ganancias potenciales en especies de capital, como la presión sobre las autoridades, la difusión de sus demandas en los medios, o la empatía de algunos sectores de la población; empero, aunque el proceso legal finalice a favor de sus intereses no necesariamente significará un cambio en el campo simbólico

Los movimientos ambientalistas podrán ser efectivos en la obtención de sus demandas por medio de la presión ejercida sobre las autoridades cuando desarrollen estrategias relacionadas con la implementación de recursos legales, tanto en cortes locales como internacionales. El utilizar un recurso legal a nivel local, como un amparo o una demanda, permite que sus demandas sean procesadas por el sistema legal, lo que llama la atención de otros sectores de la población y abre ventanas de oportunidad política

El gobierno, salvo quizás en un sistema político dictatorial, intentara no aparecer como infractor de la ley ante los ojos de la población o los gobiernos de otros países, por lo que el movimiento ejercerá presión sobre las autoridades, incentivando la búsqueda de una salida

negociada. Aunado a lo anterior, la presentación de las demandas en los juzgados respectivos permitirá legitimar la movilización social, en caso de no obtener respuesta u obtener una respuesta no satisfactoria, además de colocar una “línea de tiempo” sobre el gobierno.

Por otra parte, la presentación de las demandas ante cortes internacionales tendría en principio dos ventajas potenciales, la difusión de las causas del movimiento a través de los medios de comunicación internacionales, lo que generaría presión tanto en el gobierno local, como en los gobiernos de otros países; y luego, la vinculación con otros movimientos ambientalistas con objetivos relativamente similares, lo que podría fortalecer al movimiento tanto en el sentido económico como técnico.

Para Bourdieu los campos pueden ser modificados en su interior por la interacción de los agentes, pero también sufren la influencia de agentes externos, produciéndose fisuras llamadas “polos heterónomos”, las cuales serían elementos de ruptura provenientes de otros campos.

Entonces el sentido de un campo se modifica con el aumento de la influencia promovida por la Doxa de otro campo, como ocurre cuando el campo político-administrativo de un país se ve influenciado por la lógica del campo político de otro país (socio o enemigo). Así, un país poderoso que comparte frontera con un país menos poderoso podrá influenciar progresivamente en los campos de su vecino.

En otro sentido, para que la utilización de recursos legales se considere una estrategia efectiva se tendrá que presionar al gobierno mediante la normatividad referente a los objetivos del movimiento ambientalista, misma que permita a los agentes presionar de forma vinculatoria a las autoridades para persuadirlas a que modifiquen su criterio.

De otra parte, al desarrollarse un proceso legal, el mismo sostendrá dos vías para presionar a las autoridades. Primero, la vía legal que obliga a las autoridades a modificar su criterio. En segundo lugar, la presión social generada por el resultado de un proceso legal percibido como incorrecto por la población, o un proceso legal cuyos resultados sean comprendidos como injustos para algunos grupos.

Igualmente, el utilizar recursos legales internacionales de forma efectiva implicaría primero un proceso legal estructurado y la posibilidad de proyectar obligaciones legales para los demandados. La inversión en capital económico sería mayor, por motivo del traslado de algunos miembros del movimiento; además, el capital social tendría que ser importante para relacionarse con agentes clave.

Otra utilidad sería la generación de presión internacional, como por ejemplo, una misiva diplomática respecto a un problema legal que toca los intereses de varios países, o el inicio de un diálogo para resolver la problemática. De tal forma las ganancias se observarían en la interpolación del conflicto de una arena local hacia una binacional o internacional, en donde la presión de gobiernos aliados, la opinión pública, o los medios, se intensifiquen.

También se puede considerar efectivo el recurso si se desarrollan medidas relacionadas con el comercio binacional o algún tratado comercial como resultado del proceso legal: los tratados comerciales en ocasiones llevan cláusulas relacionadas con temas externos a lo comercial, como los derechos humanos o la democratización.

En resumen, los movimientos ambientalistas serán efectivos cuando utilicen recursos legales para presionar a las autoridades. Sin embargo, el contexto político-económico y social determinara en gran medida los resultados de las estrategias de poder. Además, los campos tienen un efecto “momentum” (tiempos) singular que no coincide siempre con el de otros campos; por lo que no es factible realizar generalizaciones sin realizar un análisis científico, ya que contextos asimétricos podrían presentar procesos internos asimétricos con resultados diversos para los movimientos ambientalistas.

1.4.4.3. Uso de los medios de comunicación

Los movimientos ambientalistas se interesan en usar a los medios de comunicación en sus estrategias porque esto les permite difundir sus demandas y adquirir apoyo de otros sectores de la población

Además, considerando que en la actualidad la sociedad no solamente se encuentra interconectada por los medios de comunicación tradicionales (televisión, radio, prensa escrita), sino que hay una gran diversidad de nuevos medios de comunicación que tienen la propiedad de ser relativamente independientes (email, blog, redes sociales, comunidades *on line*, etcétera.), la capacidad de una organización para difundir sus demandas y presionar a las autoridades en teoría se vería incrementada.

En la sociedad del conocimiento (parafraseando a Castells) el principal insumo es la información. Sin embargo, los impactos de la comunicación a través del ciber espacio no han sido completamente descritos y capturados en las teorías de los movimientos sociales. La prensa escrita, la televisión, la radio, han aportado herramientas útiles para los ciudadanos interesados en difundir sus opiniones, pero también se han caracterizado en algunas ocasiones por ser censurables bajo gobiernos autoritarios o manipulables por los intereses políticos/empresariales de sus propietarios.

En ese sentido, los medios de comunicación relacionados con la Internet, desde los blogs hasta las redes sociales, aportarían nuevas herramientas a los movimientos sociales. Los nuevos medios de comunicación probablemente serían más difíciles de censurar, aunque algunos gobiernos han intentado interferir en el ciber espacio por motivos de seguridad. Lo que ha motivado la irrupción de movimientos sociales “en la web”, capaces de articular estrategias, hacer demandas, consolidar una membresía, y presionar a gobiernos.

Al respecto, probablemente habría que concebir nuevas estrategias basadas en la presión sobre los gobiernos a través de los nuevos medios de comunicación. Relacionándose con una crítica a la intención de crear movimientos masivos en la sociedad contemporánea, cuando quizás

funcionaría mejor un flujo descentralizado de micro organizaciones capaces de resistir a la burocratización sistemática de las organizaciones no institucionales y siendo también más difíciles de censurar en los medios de comunicación que un movimiento social de corte masivo.

Lo anterior no quiere decir que los movimientos sociales deberían desarticularse y dejar de ser un factor de cambio social, sino que los mecanismos de reproducción social se han complejizado a través de las nuevas tecnologías por lo que la acción colectiva tendría que evolucionar.

Aunque podría argumentarse lo contrario, que los cambios en las tecnologías de la información han inhabilitado las formas de control tradicionales. Permitiendo a los movimientos sociales intervenir de formas innovadoras en las luchas de poder.

De ahí que bajo la lógica de la sociedad de la información los movimientos sociales deberían, desde nuestra perspectiva, dar un giro hacia el uso estratégico de las tecnológicas de la información como mecanismos de presión y revalorar el valor de la información como un recurso fundamental para los agentes.

Así, los agentes sociales insertos en luchas de poder, sea esto el mercado, las campañas políticas, o el activismo, dependen en gran medida del uso de la información. El capital cultural determinará la forma y sentido del campo, las relaciones de poder, y las alianzas o enfrentamientos entre agentes.

Pensemos en los movimientos ciudadanos a favor de los derechos civiles en los Estados Unidos, o la movilización en oposición a la guerra de Vietnam. Hasta que punto fueron incapaces las autoridades para limitar el impacto mediático -traducido en presión y apoyo al movimiento- y controlar la situación. Los movimientos ambientalistas fueron efectivos bajo un contexto en el cual la mediatización de la sociedad no era tan compleja como lo es actualmente.

Es por eso que se sugiere como una importante herramienta de los movimientos ambientalistas, con respecto al uso de los medios de comunicación para presionar al gobierno, la elaboración de estrategias enfocadas en la generación de información desregulada a través de las nuevas tecnologías de la información

Aunque por otra parte, también existe el enfoque de la “resistencia civil electrónica” en donde los ciudadanos no solamente emiten información desregulada de manera pasiva, sino que “atacan” los espacios informativos (páginas web, archivos on line, servidores) de los grupos dominantes usando la tecnología para construir capital simbólico y competir en el campo.

Cabe decir que este tipo de enfoque requiere capital cultural, es decir, no todos los movimientos sociales tendrán la capacidad de manipular la tecnología para desarrollar estrategias innovadoras. Por lo que algunos movimientos utilizarán los medios de comunicación tradicionales, siendo sus estrategias efectivas en el marco de contextos cada vez más escasos y controlados.

La complejización del espacio social ha configurado un campo político-administrativo en el cual los gobiernos podrán sentir la presión de la ciudadanía a través de instrumentos como los emails, las redes sociales, o los planteamientos de los llamados “hacktivistas” (freenet movement). De tal forma muchos gobiernos actualmente incluyen en sus cálculos estratégicos la presión social en este aspecto.

De ahí que los nuevos medios de comunicación tengan un impacto sobre las decisiones de las autoridades, aunque este no sea siempre medido y analizado⁶. Sin embargo, tradicionalmente

6 En la campaña política que llevo a ser presidente de los Estados Unidos a Barack Obama en 2008 se utilizó como una de sus principales herramientas de recaudación de fondos las donaciones “on line”, además se difundieron sus propuestas de forma efectiva en la *web*, sobre todo en lo que se refiere a los sectores jóvenes de la población, por lo que algunos expertos consideran dicha herramienta de gran utilidad (De Haro, José Luis, 2008, *Obama descubre el inmenso poder del internet*, El Economista.com.es, consultada: 23/04/09, en: <http://www.economista.es/generales/noticias/362344/02/08/Barack-Obama-descubre-el-inmenso-poder-de-Internet.html>). Por otra parte, la pagina “Wikileaks” (<http://wikileaks.org/>) cuyo propósito es difundir información “filtrada” de interés público, ha revelado en diferentes ocasiones información “comprometedora” sobre el gobierno estadounidense y ha tenido un impacto sobre la opinión pública (no se ha medido), dado que el gobierno respondió a las notas publicadas (Navarro, Fernando, 2010, *Wikileaks: como destapar escándalos en internet*, El Pais.com.es, consultada: 14/05/10, en: <http://www.elpais.com/articulo/internacional/Wikileaks/destapar/escandalos/Internet/elpeuint/20100726elpe>

los medios de comunicación han jugado un papel en la política (cuarto poder), analizando y criticando a los gobiernos, difundiendo las opiniones de los ciudadanos.

Aunque también deberá considerarse que nunca los medios habían estado en manos de los ciudadanos como hoy en día (nos referimos a los medios independientes o las tecnologías que permiten funcionar como un medio independiente a un ciudadano común y corriente). En la *World Wide Web* (www) la información fluye, en teoría, sin restricciones, ni barreras significativas. El factor psicológico en las estrategias de los movimientos sociales en la red, podrá impactar positiva o negativamente a los gobiernos o a otros agentes sociales⁷.

En otro sentido, la forma como los campos interactúan con lo que ocurre en el ciber espacio, o inclusive en su “interior” (comunidades virtuales); y sobre todo las modificaciones simbólicas en el sentido de los campos resultantes de la influencia de movimientos virtuales, son temas poco estudiados desde la teoría bourdieana. En esta investigación se considera que el campo político-administrativo si podría enfrentar modificaciones en su estructura de poder cuando sus agentes utilicen el ciber espacio para competir y cuestionar la Doxa establecida.

Desde esta perspectiva, los medios de comunicación “tradicionales” intentan acotar su metodología a las nuevas tecnologías: pensemos en un periódico que publica una información

[puint 6/Tes](#)). De otra parte, la pagina “Recorded Future” (<http://www.recordedfuture.com>), financiada por la CIA y Google Venture, ofrece el servicio (por una tarifa establecida y planes específicos) de análisis de la información de la red y el análisis de tendencias generales en el ciber espacio, elementos que podrían constituir una espada de doble filo, útil tanto para un gobierno censor que busque controlar la información que llegue a los ciudadanos, como para incrementar la capacidad de distintos grupos sociales para conocer su capacidad para difundir sus propuestas y verificar los impactos de sus campañas mediáticas. De otra parte, en lo referente al control sobre la web, el gobierno de China ha establecido recientemente mecanismos de censura al “motor de búsqueda” de la empresa Google en un intento por limitar el acceso a la información de su población y silenciar los blogs de sus opositores (Alandete, David, José, Reinoso, 2010, *China censura Google por unas horas*, El Pais.com.es, consultada: 16/06/10, en: http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/China/censura/Google/horas/elpeputec/20100330elpeputec_10/Tes) Finalmente, en algunos países, principalmente europeos y asiáticos, las demandas de movimientos sociales a favor de un ciber espacio gratuito (*Free knowledge movement*), o su variante relacionada con las tecnologías “open source”, han comenzado a formar parte de la plataforma de los partidos políticos interesados en adoptar dicha causa, aunque esto ocurre de forma marginal (Anirbit, S/F, *Free Knowledge Movement*, Department of Theoretical Physics, Tata Institute of Fundamental Research (India), consultada: 30/07/10, en: <http://theory.tifr.res.in/~anirbit/free.pdf>).

7 Véase el caso del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México, organización que utilizo ampliamente las tecnologías de la comunicación relacionadas con la internet para difundir sus propuestas y granjearse apoyo nacional e internacional (Martínez, 2006).

poco confiable que favorece a un gobierno autoritarios; ahora imagine a un ciudadano filmando con un celular otra versión de los hechos, “subiéndola” primero a su blog y luego a una red social en la que millones de personas podrían tener acceso a ella.

Sin embargo, es necesario redimensionar y atemperar el papel de los nuevos medios de comunicación con respecto a su capacidad para presionar al gobierno. Ya que sin lugar a dudas existe un elemento de presión potencial sobre las autoridades, pero también está claro que durante la historia reciente se han presentado casos en los cuales a pesar de desarrollarse una cierta presión, las autoridades no han respondido a las demandas⁸.

La no respuesta de los gobiernos ante la presión social expresada en los nuevos medios de comunicación podría relacionarse fundamentalmente con dos factores. Primero, la relativamente incipiente “masificación” de las nuevas tecnologías de la información (particularmente de las redes sociales), cuestión que explicaría el proceso de aprendizaje de los cibernautas en torno a la organización y la presión sobre las autoridades. Aprendizaje en relación con la organización social, no tanto con respecto a la tecnología *per se*.

En segundo lugar, al evaluar la efectividad de los nuevos medios de comunicación para presionar a las autoridades se tiene que analizar hasta qué punto se comprenden sus impactos y sus “tiempos” (momentum). Recordando que una de las propiedades de la Internet es que se “vive” en “tiempo real”, elemento importante para sugerir que la presión sobre los gobiernos a pesar de ser “inmediata”, no tendría necesariamente que encontrar una respuesta “instantánea”.

Probablemente al profundizarse la relación entre las nuevas tecnologías, los movimientos sociales y los gobiernos, comenzaremos a ver una mayor responsividad o atención de las autoridades a las demandas ciudadanas articuladas por vías no institucionales; salvo en el caso de que se utilice la tecnología para elaborar procesos de censura y control de la información

8 Se puede pensar en la presión internacional de los medios sobre los casos de la violencia en Palestina, la represión a la oposición en Cuba, o los crímenes de guerra cometidos por el ejército estadounidense en Irak y Afganistán. ¿Hasta qué punto la presión mediática merma la capacidad de los gobiernos para sostener estos conflictos? ¿Aunque por otra parte, hasta donde los medios de comunicación han sido una herramienta de los gobiernos para “vender” las guerras?

Ergo, no basta con el hecho de que las demandas se publiquen en los medios de comunicación o que se utilicen medios propios para “subir” a la *web* información. Por lo que es necesario determinar una relación de causalidad entre las decisiones gubernamentales y la presión social en los medios de comunicación. Pues los motivos de las decisiones gubernamentales no siempre quedan a la vista y podría interpretarse una relación inexistente entre la presión mediática y un cambio en la postura del gobierno.

Además, siendo los medios de comunicación en general mecanismos de construcción de capital simbólico, su empleo estratégico por los movimientos ambientalistas sería instrumental en las luchas simbólicas de un campo. En el espacio social se elaboran mediante confrontaciones los esquemas de valores que determinan el sentido del campo, es decir, el capital que domina, y los grupos que dominan a través de su posesión, solo cambian cuando la Doxa se modifica.

Una de las principales formas para alterar la Doxa es la difusión de conceptos y definiciones alternativos a los que promueven los grupos dominantes; cambiar las definiciones culturales compartidas, pues estas son producto de una construcción colectiva. Aunque es complicado poder cambiar el sistema de valores de un campo, ya que las definiciones compartidas se construyen colectivamente y no por un par de acciones estratégicas; si es posible modificar algunas definiciones dominantes.

Las definiciones encarnan el núcleo de poder de los grupos dominantes, y a partir de ellas se legitiman sus acciones y se reproduce un entramado de relaciones entre dominadores y dominados. Por eso cuando un movimiento ambientalista contrapone sus definiciones a la estructura de poder establecida se torna ilegítimo su accionar y los agentes dominantes intentaran reprimir la oposición, para así eliminar lo que cuestione la continuidad de su dominio (reproducción social).

En ese marco, el contexto político-económico y social será fundamental para considerar las probabilidades de éxito de un movimiento ambientalista. Las “ventanas de oportunidad” se presentan con mayor o menor frecuencia si se observa el ambiente en el que se da la

interacción social. Por ejemplo, bajo un gobierno dictatorial que sostenga un firme control sobre la ciudadanía difícilmente un movimiento social podrá influir de inmediato en el campo político administrativo; mientras que en el extremo opuesto, un gobierno democrático que respeta la libertad de expresión podrá verse cuestionado duramente por la acción colectiva.

Los medios podrán ser utilizados para gestionar, solicitar, vigilar, auditar, difundir propuestas alternativas e información comprometedoras. La movilización ciudadana sería parte de un contexto “peligroso” para un gobierno consciente de los riesgos implícitos relativos a su control sobre los agentes del campo, pero también podría ser un insumo productivo para un gobierno democrático capaz de incorporar conceptos e ideas de la ciudadanía, a pesar de no emitirse por los canales formales.

1.4.4.4. Participación en foros de discusión

La capacidad de influir en otros contextos, logrando apoyo de agentes pertenecientes a diversos campos; el incidir en las relaciones diplomáticas o comerciales de los gobiernos para generar atención sobre sus demandas; el posicionamiento internacional para crear apoyo a una causa ciudadana relacionada con el medio ambiente; son solo algunas de las ganancias que los movimientos ambientalistas podrían obtener en el marco de la acción colectiva orientada hacia la modificación del sentido de un campo.

De tal forma, las motivaciones de los movimientos ambientalistas estarían imbricadas en sus objetivos particulares, los cuales tendrían como base (a veces no consciente para Bourdieu, 2005) la intención de modificar la estructura de poder establecida y por ende la “Doxa” de un campo. Asimismo, la sociedad contemporánea no podría describirse adecuadamente sin considerar el complejo entramado de relaciones internacionales que determina en gran parte la política local (y viceversa).

Por lo que las luchas de poder no solo se desarrollaran al interior de los campos, sino que los campos mismos tendrán variaciones en sus dimensiones y fronteras, no necesariamente

acotándose a la territorialidad de una ciudad, estado, o país; para más bien vincularse con otros agentes en el marco de la cotidianidad de las relaciones sociales.

Desde el punto de vista de Bourdieu, en el espacio social las luchas de poder se desarrollarían tanto en el interior de los campos como entre los campos. Así, un agente “externo” a un campo podría modificar el delicado balance de poder y establecer un “curso de acción” a favor de un grupo de poder; igualmente, un agente de un campo tendría la capacidad de trascender su espacio e influir en otros campos.

Los campos son espacios “vivos”, no son esferas rígidas que existen distantes unas de otras. Se desarrolla comunicación entre los campos, y las “trayectorias culturales” de los agentes sociales se cruzan con las de agentes de otros campos: las trayectorias podrán cruzar varios campos. El espacio social es una matriz de relaciones en donde las posibilidades serían probablemente “infinitas”.

Particularmente los conflictos sociales relacionados con el medio ambiente tendrían la amplitud para incorporar en su dinámica a agentes provenientes de múltiples campos. Los intereses académicos, económicos, políticos, sociales, y culturales, que suscitan los problemas en torno al ambiente articulan luchas de poder complejas que se disputarán en distintos ámbitos

Por lo tanto, el agente que tenga la capacidad de trascender su posición en el espacio social e interactuar en otros campos acumulará mayor capital. Ergo, el habitus acotará los cambios de posición y por ende las elecciones de los agentes; aunque este concepto no implicaría rigidez en el espacio, sino un “natural” afincamiento a una posición relacionada con la historia personal del individuo y la configuración estructural (sistema de valores vigente, instituciones y mecanismos de reproducción social) de su campo.

Se puede cambiar de posición en el espacio social, pero esto no será solamente resultado de la acción individual o colectiva, esta capacidad se construye en torno a los momentos coyunturales a los que se enfrenta un individuo. Las características personales de un agente

(capital cultural, capital económico, capital social) podrán darle ventaja, pero al final, su accionar estará supeditado por la lógica de del campo; siendo así hasta que la estructura simbólica se modifique con base en las luchas de poder.

En ese sentido, un movimiento ambientalista tendría interés en participar en foros de diálogo internacionales en primer lugar porque la problemática del medio ambiente no se restringe a un espacio físico, sino que trasciende fronteras geopolíticas y, por ende, requiere ser enfrentada en la escala global.

Y por otra parte, las discusiones llevadas a cabo en el marco de foros internacionales como la ONU o los tratados comerciales tendrían la posibilidad de impactar la política nacional directamente: recordemos que cuando los gobiernos se vinculan con organizaciones internacionales firman acuerdos y protocolos que determinan en parte su accionar, ya sea desde la perspectiva normativa (normas legalmente vinculatorias de un tratado), o por cuestiones diplomáticas (normas no vinculatorias en términos legales).

En la era de la globalización, salvo en el caso de los gobiernos autoritarios y aislados del ajedrez internacional, la presión efectiva ejercida en foros internacionales podría tener un impacto sobre las decisiones de los gobiernos cuando se presenta un contexto o coyuntura favorable al movimiento ambientalista.

Los tratados y acuerdos internacionales incluyen temáticas relacionadas con distintas problemáticas compartidas entre las partes firmantes. La problemática ambiental es un problema compartido, por lo que normalmente se establecen foros de discusión y estancias normativas internacionales para tratar de regular los impactos ambientales y los riesgos para la salud.

Los movimientos ambientalistas que sean capaces de movilizar sus capitales por medio de estrategias de presión en foros internacionales, desde la movilización hasta el uso de tecnología de la comunicación, serán efectivos en presionar al gobierno y en crear incentivos para que las autoridades modifiquen su criterio respecto a una problemática.

Los capitales de un movimiento le permitirán, no solo vincularse con otras organizaciones similares (capital social) o pagar los costos de un viaje a la ubicación donde se desarrolle un foro de discusión o una cumbre de líderes (capital económico), sino que también se favorecerá el incremento de sus conocimientos prácticos con respecto a la acción colectiva (capital cultural).

Por otra parte, el capital simbólico de una organización podría relacionarse con la capacidad del movimiento para construir un escenario en el cual sería imposible para las autoridades no intervenir en una problemática ambiental. La movilización en torno a un evento, la participación en discusiones, las opiniones vertidas en los medios de comunicación y en las redes sociales de la Internet, contribuirían a impactar el sentido del campo político y a cambiar las definiciones culturalmente compartidas.

Sin embargo, para que la estrategia sea efectiva, se considera en esta investigación que la participación en foros de diálogo deberá ser la causa de, a) la instauración de un proceso de investigación en organismos internacionales, b) la emisión de una misiva diplomática al respecto, c) el tratamiento en foros binacionales de la problemática, d) el acercamiento de autoridades de países participantes en el foro con el objetivo de tratar la medida o presionar al gobierno local para que modifique sus decisiones.

1.5. Particularidades del modelo: el contexto como una variable interviniente

Es importante argumentar que la efectividad de los movimientos ambientalistas dependerá parcialmente del contexto histórico en el cual se desarrolle el fenómeno, es decir, la situación (cambiante) política, económica, y socio-cultural, que tiene una influencia determinante sobre lo que es posible e imposible en el espacio social, restringiendo o posibilitando la acción colectiva y las modificaciones al sentido del campo.

Por lo tanto, la viabilidad científica de este modelo dependerá en gran parte de la capacidad del investigador para comprender las regularidades objetivas que se presentan frecuentemente en los movimientos ambientalistas, ya que a mayor similitud contextual mayor capacidad de repetición del experimento.

Las regularidades objetivas se refieren a las estructuras que permanecen de forma prolongada en el espacio social. A partir de ellas es posible extrapolar el modelo de análisis de un caso de estudio hacia otro y construir conclusiones sobre las limitaciones o posibilidades de la acción colectiva en un periodo específico.

En este caso, al tratarse de la efectividad de un movimiento ambientalista, las regularidades tendrían que ver con algunas condiciones históricas determinantes para implementación del modelo, como podrían ser las características del gobierno y sus mecanismos de participación ciudadana, el entramado de relaciones diplomáticas y la apertura económica hacia el mercado internacional, o los impactos del sistema económico sobre el medio.

El contexto se articula en Bourdieu por medio del concepto denominado habitus, construyéndose una dialéctica entre la acción individual y las estructuras objetivas de un campo. En ese sentido, la efectividad de un movimiento ambientalista dependerá tanto de la capacidad de desarrollar estrategias como de los condicionantes u oportunidades que se presenten en el espacio social.

El modelo se desarrolló con base en un fenómeno social que ocurrió bajo condiciones políticas, económicas, y sociales, específicas. Estas condiciones particularizaron el desarrollo del fenómeno, por lo que, al analizar un caso de estudio distinto, deberán considerarse las condiciones contextuales de generación del modelo, ya que de lo contrario su aplicación y resultados podrían ser deficientes.

En conclusión, sería interesante explicitar que la efectividad de un movimiento ambientalista no se comprende a partir de una fórmula rígida que difícilmente incluiría los elementos de improvisación y creatividad que desarrollan las personas en su vida cotidiana. Se reconoce que hay elementos impredecibles en el espacio social, motivaciones aparentemente irracionales, elecciones no-óptimas, alianzas improbables etcétera.; pero también se entiende que el proceso científico requiere de herramientas perfectibles que profundicen, paso a paso, la comprensión de los fenómenos sociales.

Por lo que en este modelo, la efectividad se refiere a la capacidad de los agentes sociales para modificar el sentido simbólico de un campo en torno a la problemática ambiental, independientemente del cumplimiento estricto de los presupuestos teóricos propuestos o de los matices que pudieran darse a las estrategias sugeridas.

Sin embargo, mediante el trabajo de investigación hemos llegado a considerar que las estrategias que comprende el modelo serían desde nuestro punto de vista algunas de las más efectivas en permitir que un movimiento no solo logre sus objetivos, sino que modifique el campo simbólico y las prácticas de otros agentes para con el medio ambiente.

Finalmente, el capítulo teórico de la investigación consistió en la revisión bibliográfica de algunas de las teorías más significativas con respecto al objeto de estudio; discutiendo sus principales presupuestos y contraponiéndolos a los de la Teoría de los Campos de Pierre Bourdieu. Así se construyó una argumentación en torno a la importancia del enfoque teórico elegido para el estudio del problema. Posteriormente elaborando un modelo científico que

comprendió siete variables de investigación relacionadas con la diversidad de especies de capital y las estrategias de poder.

El “modelo de efectividad de los movimientos ambientalistas” hizo referencia a dos cuestiones principales: la importancia de los recursos (especies de capital) que poseen los agentes de un movimiento para construir e implementar estrategias de poder que permitan generar presión sobre las autoridades y conseguir las demandas propuestas; y la capacidad del capital simbólico del movimiento para modificar la Doxa del campo y construir nuevas definiciones culturalmente compartidas que cambien algunas de las prácticas de los agentes sociales para con el medio ambiente.

II. METODOLOGÍA E HIPÓTESIS

En el presente capítulo se explicará la metodología desarrollada en referencia al objeto de estudio, partiendo de la construcción de las premisas teóricas, sus hipótesis y pruebas de hipótesis, el trabajo de campo, así como el procesamiento y análisis de la información para llegar a conclusiones. Es el manual metodológico de la investigación

Asimismo, la investigación se concentró en el análisis de la efectividad de los movimientos ambientalistas teniendo como sustento teórico el pensamiento del sociólogo Pierre Bourdieu.

Se podría afrontar desde distintas perspectivas las hipótesis de investigación referentes a los componentes de variables denominados “diversidad de especies de capital” y “estrategias de poder”; ambos dirigidos a explicar la efectividad del movimiento para ejercer presión sobre el gobierno, conseguir sus objetivos, y modificar el sentido del campo.

Sin embargo, en este trabajo, la solución a las hipótesis se elaboró a partir de la propuesta general de que las variables, acotadas por parámetros específicos relacionados con el contexto, explicarían los elementos esenciales de la efectividad de los movimientos ambientalistas en el marco de las luchas de poder que inciden en el sentido simbólico del espacio social.

La estrategia de investigación se desarrolló sobre algunos de los ejes principales de la denominada teoría de los campos, utilizando la metodología de Bourdieu para describir los campos, asignar capitales, y comprender los mecanismos causales y de reproducción social que orientaron el fenómeno hacia un resultado.

El supuesto general es que un movimiento ambientalista movilizará sus especies de capital por medio de estrategias construidas para presionar al gobierno para que este modifique sus decisiones en torno al proyecto de incinerador; es decir, la efectividad estaría en que por medio de la movilización de capitales, el movimiento ambientalista habría logrado cambiar la percepción (definición) de las autoridades en lo referente a la problemática. Comprendiendo que el movimiento será efectivo si articula estrategias que logren modificar, por medio del capital simbólico, la Doxa del campo.

Cabe decir que la efectividad de los movimientos ambientalistas se relaciona con la construcción/deconstrucción de definiciones culturalmente compartidas, las cuales serían la raíz del sentido simbólico que alimenta las prácticas dentro de los campos. Si bien se comprende que un movimiento podrá ser efectivo en un primer nivel al conseguir sus objetivos, en general se argumenta que estos serán efectivos en definitiva cuando sus acciones cambien las reglas del juego: el movimiento ambientalista define que es riesgoso para la salud y negativo para el ambiente instalar un incinerador en Playas de Tijuana.

Las reglas del juego no están escritas y definen el sentido del juego (campo); son la Doxa que define lo posible o imposible en el espacio social. Pero la Doxa cambia en el tiempo, y sus cambios responden a los enfrentamientos entre los agentes de un campo. Empero, la configuración del sentido implica elementos inconscientes resultantes de la interacción social, por lo que no se puede afirmar que la Doxa responda únicamente a los intereses (conscientes) de un grupo, sino que sería la mezcla de las acciones e intereses en el campo lo que arrojaría una configuración temporal que sería reconocida como legítima.

De cualquier modo, los agentes sociales si tienen una influencia consciente sobre el campo y pueden modificarlo. Los grupos que logran imponer sus definiciones dominan hasta que otro grupo logre imponer las suyas. En ese sentido, los movimientos ambientalistas tendrían la facultad, como cualquier otro agente social, de definir el espacio social, y modificar los comportamientos que consideran dañinos para el medio ambiente.

2.1. Construcción de los datos

Los datos provienen de dos fuentes, la revisión documental, y las entrevistas realizadas en trabajo de campo. Se eligieron los datos del año 1992 por ser el periodo más representativo del conflicto, y en el cual había una mayor abundancia de datos, principalmente hemerográficos sobre el caso de estudio.

En este trabajo se utilizó un enfoque cualitativo relacionado con la adquisición de la información, su procesamiento, y finalmente, el análisis para llegar a conclusiones. Para lo anterior, primero se desarrolló una revisión documental y un análisis de contenidos con

respecto a la bibliografía consultada, la revisión hemerográfica, así como un estudio de la normatividad relacionada con el caso de estudio.

Cabe decir que la revisión de bibliografía se emprendió durante varios meses y se relacionó con los textos fundamentales de Bourdieu, de algunos de sus principales intérpretes teóricos, y también lecturas sobre autores críticos de sus presupuestos teóricos. Asimismo, se incluyeron en la revisión bibliográfica textos sobre el manejo de residuos peligrosos, particularmente de los Bifenilos Policlorados (BPC).

También se hicieron amplias lecturas en relación con las principales teorías sobre movimientos sociales. Las teorías de la identidad, de la movilización de recursos, de la acción colectiva, de los nuevos movimientos sociales, serían algunos de los enfoques que se estudiaron para encontrar diferencias con el marco teórico de la investigación, y también para obtener insumos utilizables para el trabajo.

Se desarrollaron varios apartados en el capítulo uno en torno a la descripción pormenorizada de las teorías sobre movimientos sociales, explicándose las razones por las cuales se utilizó la teoría de los campos, y justificando el porqué no se utilizaron otras teorías quizás más difundidas en el campo académico.

De otra parte, para la revisión hemerográfica se eligió el año de 1992, dado que este refleja con claridad el conflicto en su máxima expresión. La revisión se desplegó a largo de veinte periódicos, tanto en el ámbito local, como nacional, e internacional; comprendiendo el archivo la cantidad de ochenta y cinco notas periodísticas (ver anexos II y III).

Las notas se estudiaron por medio de la técnica denominada análisis del discurso, construyéndose un archivo en el cual se dividió la información según su temática y potencial aporte a la investigación. Además, se aplicaron técnicas cuantitativas a la información para elaborar indicadores de frecuencia, tendencia, e impacto, relacionados con la efectividad del movimiento ambientalista.

En la siguiente parte del proceso se revisó y analizó la normatividad referente al manejo de residuos peligrosos durante el periodo de estudio, para así ubicar el cumplimiento procedimental tanto de las autoridades como de la empresa TEESA. El análisis se enfocó

principalmente en las leyes federales porque el incinerador de residuos peligrosos era responsabilidad del gobierno federal.

La revisión de la normatividad sirvió para enfocar la problemática desde el marco institucional y conocer las posibilidades formales del movimiento y las capacidades del gobierno para con fenómenos similares. También para conocer si la empresa y el gobierno cumplieron la ley, ya que esto tendría un efecto sobre la legitimidad de las acciones del movimiento, los agentes económicos, y el gobierno; aunque por otra parte, el cumplimiento de la ley no necesariamente querría decir que se estuvieran controlando eficientemente los impactos negativos ambientales.

Con respecto al trabajo de campo, se entrevistó a quince 15 agentes clave de los campos académico, económico, político, y social (activismo) (ver anexo I). Considerando a miembros del movimiento, funcionarios de gobierno durante el periodo, académicos, empresarios, así como especialistas en torno a los temas ambientales, particularmente el manejo de residuos peligrosos, y las políticas públicas.

Las entrevistas fueron de carácter semi-estructurado y se desarrollaron a profundidad. Elaborándose cuestionarios según las características profesionales del agente entrevistado, los cuales tenían como principal función el generar información específica útil para reconstrucción de los hechos. La información resultado de las entrevistas sería transcrita para posteriormente ser procesada.

Las entrevistas se llevaron a cabo principalmente en oficinas particulares o lugares públicos. Durante la reunión se transcribió la información a mano y además se utilizó una grabadora. Posteriormente se hicieron borradores de las entrevistas y se analizaron los resultados para integrarlos al capítulo relacionado con los hechos ocurridos.

Es importante comentar que se creó un protocolo de entrevista para cuidar los aspectos legales de la investigación. Siendo este leído en voz alta a los actores clave previo a la entrevista, para después de acordar los términos formales de la entrevista, proceder con las preguntas.

De otra parte, las entrevistas se planificaron para responder a temáticas centradas en los campos económico, político-administrativo, y socio ambiental. Sin embargo, es interesante

hacer notar que algunos de los entrevistados formaban parte de varios de los campos establecidos.

Con la información obtenida en la revisión documental y las entrevistas a agentes clave se construyó un recuento de los hechos, el cual fungió como base de datos sobre el caso de estudio. En el mismo se detallaban los hechos sociales relacionados con el movimiento ambientalista; mismos que serían insumo para el procesamiento y análisis de la información.

En el recuento de los hechos se articularon secciones referentes a la política ambiental, los conflictos sociales, las discusiones técnicas sobre el manejo de residuos peligrosos, y la construcción del movimiento ambientalista en cuestión. Los elementos desarrollados en este apartado serían útiles para introducirlos en el modelo de efectividad y luego para contextualizar el estudio de caso.

El análisis de la información se llevó a cabo por medio del modelo de efectividad propuesto en el capítulo teórico. El mismo estaba compuesto por dos componentes interrelacionados, diversidad de especies de capital y estrategias de poder; los cuales se descomponían en siete variables independientes: capital económico, capital social, capital cultural, vinculación con organizaciones internacionales, utilización de recursos legales, uso de los medios de comunicación, y participación en foros internacionales.

Es importante argumentar que el modelo de efectividad se elaboró por medio de la integración de componentes que se consideraron representativos para los movimientos ambientalistas, por lo que se comprende que es una herramienta teórica adecuada a las particularidades del fenómeno. Siendo el componente contextual abordado por una variable interviniente expresada en el apartado titulado “Particularidades del modelo”, en donde se discute brevemente sobre las limitantes del modelo respecto a las características históricas del caso de estudio.

En el marco del análisis de los datos recabados, se construyeron indicadores para establecer relaciones objetivas en torno a los distintos presupuestos teóricos. Entre los indicadores se cuentan una serie de tablas referentes al volumen y frecuencia de notas periodísticas en diferentes escalas geográficas, y en torno a conceptos como el apoyo o rechazo al movimiento.

Las cuales sirvieron para comprender el apoyo o el rechazo al movimiento en cantidades y porcentajes para cada escala.

A partir de las tablas relacionadas con las notas periodísticas se articuló la gráfica "Tendencia del comportamiento de los agentes 1992", la cual se centraba en tres componentes, la frecuencia de notas a favor o en contra del movimiento; la frecuencia de notas en donde las autoridades gubernamentales estaban a favor o en contra del movimiento; así como los procesos legales relacionados con el caso de estudio.

La gráfica comprendía líneas del tiempo a lo largo de 1992, siendo la convergencia o no convergencia de los picos y abismos de las líneas lo que podría determinar el apoyo o rechazo al movimiento, así como los periodos de mayor tensión o acuerdo entre las partes. La gráfica sería una síntesis de sucesos que aportaría las tendencias y los ritmos del conflicto.

A su vez, las pruebas de hipótesis se construyeron en dos sentidos. El primer sentido sería orientado por la consecución de los objetivos de la acción colectiva y estaría sub dividido en dos apartados, uno relacionado con las especies de capital, y el otro por las estrategias de poder. El segundo sentido se refería a la capacidad del movimiento ambientalista para modificar la Doxa del campo. En este trabajo se daría mayor peso al segundo sentido para llegar a conclusiones sobre la efectividad.

Finalmente, se desarrolló un apartado de conclusiones en donde se discutieron los resultados del modelo, planteándose las tendencias de las pruebas de hipótesis y haciéndose abstracción de algunos de los más importantes productos del trabajo de investigación. Para en último lugar detallar algunos cabos sueltos en la investigación y sugerir caminos viables para próximas investigaciones.

2.2. Construcción de las hipótesis

Se elaboraron siete hipótesis específicas para dar respuesta a las preguntas de investigación. Las hipótesis se agruparon en dos componentes explicativos. El primero relacionado con la diversidad de especies de capital, y el segundo con las estrategias de poder que desarrollan los movimientos ambientalistas.

Las hipótesis específicas buscaban dar sentido a una hipótesis general, la cual se centraba en la apuesta por que el movimiento fuera efectivo en presionar a las autoridades para que modificaran su opinión sobre el proyecto TEESA. Sin embargo, en el fondo de la lógica de investigación se encuentra el capital simbólico como elemento primordial para dar forma al sentido de un campo.

En general, la prueba de hipótesis general se relacionaría con la capacidad del movimiento para ser efectivo en el modificar los mecanismos causales en torno a la problemática socio-ambiental. El movimiento ambientalista efectivo será aquel que a través de la movilización estratégica de sus capitales logre modificar la Doxa del campo para imponer nuevas definiciones culturales compartidas y conducentes prácticas con respecto a la reducción de los impactos negativos ambientales y los riesgos para la salud.

Para la comprobación de la hipótesis general se plantearon hipótesis específicas relacionadas con la posesión de capitales y las estrategias que se desarrollaron para presionar a las autoridades. Sin embargo, algunas variables de investigación no fueron incluidas por no contarse con datos al respecto, como por ejemplo, la capacidad de organización, la facticidad del discurso, o el análisis de las organizaciones internas de los movimientos ambientalistas.

De las variables que si se consideraron, las primeras tres estarían relacionadas con hipótesis sobre las especies de capital y tenían la intención de especificar los tipos y volumen de recursos con los que se contaba en el movimiento. Siendo la metodología utilizada para solucionar las hipótesis el análisis de notas hemerográficas y las entrevistas a profundidad dirigidas a actores clave del movimiento.

Las restantes cuatro variables y sus cuatro hipótesis se enfocaron en las estrategias de poder creadas por los movimientos ambientalistas y orientadas a presionar a los agentes dominantes.

Teniendo la intención de explicar la manera como se movilizaron los capitales, de qué forma fueron utilizados para presionar al gobierno, y como se utilizaron para incrementar el capital global del movimiento social.

Para efectos de las hipótesis propuestas se define diversidad de especies de capital como el volumen y la variedad de recursos por medio de los cuales un movimiento tendría la capacidad de realizar estrategias de poder. Estos recursos estarían definidos como capital económico, social, cultural, y simbólico. La diversidad de especies de capital se determinó por medio del análisis de cada uno de sus componentes.

En primer lugar, el capital económico, es decir, la capacidad del movimiento para movilizar recursos monetarios, se definió a partir de la posición en el campo que ocupaban los miembros del movimiento. Cabe decir que la mayoría formaba parte de la clase media. El estatus de los agentes se verificó a partir de entrevistas dirigidas tanto a miembros del movimiento como a actores clave del gobierno y las empresas durante el periodo. Además, se analizaron, por medio de la revisión hemerográfica, las notas en las que se expresaban las actividades del movimiento, por lo que se interpretaron cualitativamente los costos relativos de la movilización.

Como prueba de hipótesis para la variable económica se debe considerar el hecho de que los movimientos ambientalistas no son organizaciones formales, por lo que no tendrán la capacidad de incentivar económicamente a sus miembros, al menos de forma recurrente. Por lo tanto, se analizó la inversión económica en el movimiento y sus ganancias a partir de entrevistas a los miembros en las que se preguntaba si habían incurrido en costos económicos durante la movilización; si el tiempo invertido en el movimiento había influido su situación económica; y si pensaban que había ganancias económicas tras el movimiento (aunque no fueran típicamente cuantificadas), como una mejora en la calidad del aire o el agua para la zona, o el decremento de la percepción de riesgo en la comunidad.

Para analizar la efectividad del capital económico del movimiento se plantearon tres supuestos. Un movimiento efectivo necesita de la inversión directa o indirecta de capital económico por parte de sus miembros: capital que podría invertirse en otro tipo de actividades con una remuneración directa; tiempo que podría ser utilizado para producir recursos

particulares. Empero, para el capital económico lo que determinaría su efectividad estaría vinculado con las ganancias económicas directas o indirectas que habría conseguido el movimiento ambientalista para su comunidad.

En segundo lugar, el capital social, o sea, la capacidad del movimiento para beneficiarse de las relaciones sociales que poseían sus miembros, así como construir a partir de ellas otras relaciones con agentes ubicados en campos significativos. El capital social se analizó desde los indicadores cualitativos referentes al análisis hemerográfico, y también, sobre todo, partiendo de entrevistas a actores clave que nos explicaron la calidad del capital social del movimiento y también sus potencialidades. A su vez, al hacerse una revisión de las posiciones sociales de los agentes se interpretaron sus vínculos con agentes de otros campos.

El capital social de la organización se determinó por medio de las entrevistas realizadas y el análisis de las notas periodísticas. En las entrevistas se construyó un entramado de relaciones a través de las cuales el movimiento obtendría ventajas y concesiones para su causa. Además, se cuestionó a los actores clave sobre la importancia de estas relaciones, buscando establecer dos cuestiones: primero, que el movimiento tenía relaciones con agentes significativos para sus intereses; y segundo, que el movimiento utilizó esas relaciones para obtener recursos utilizables en sus estrategias.

Sin embargo, no bastaría con tener capital social y utilizarlo para obtener ventajas, sino que las ganancias tendrán que ser relacionadas con las estrategias de poder del movimiento. Por ejemplo, el capital social se podría ver expresado en una relación con los medios de comunicación, pero esto tampoco implicaría una efectividad del capital social a menos que la información relacionada a la organización signifique un apoyo directo a su causa.

En tercer lugar, el capital cultural, es decir, los recursos del movimiento relacionados con capacidades académicas, técnicas, o intelectuales; así como posiciones de poder en campos específicos, como la academia, el sector empresarial, o el gobierno. La importancia del capital cultural radica en la capacidad del movimiento para movilizar el recurso para tener acceso a espacios a partir de los cuales podría exponer sus demandas, como los medios de comunicación o las cortes. Además, su valor se comprende a partir de una capacidad técnica,

académica, o intelectual, para argumentar sus demandas y construir definiciones culturales alternativas para competir en el campo.

El capital cultural se analizó por medio de entrevistas y un análisis hemerográfico, así como mediante un análisis de las acciones estratégicas de los agentes del movimiento y las respuestas que obtuvieron de agentes ubicados en posiciones de poder. Sin embargo, las ganancias del capital cultural serían lo que determinaría su efectividad. La construcción de nuevas definiciones compartidas en el campo cultural, teniendo como resultado practicas mejoradas en torno a la problemática, sería un factor relevante para conocer la efectividad del capital cultural.

El capital simbólico no se expresó en términos de variables por el hecho de que cualquier capital es simbólico cuando es capaz de definir una situación en un campo. El capital que domina un campo establece un principio jerarquizante mediante el cual se da sentido al campo.

En esta investigación el capital simbólico se estudia por medio de la comprensión de las especies de capital del movimiento ambientalista y su capacidad para por medio de ellas contraponer definiciones. El capital simbólico es difícil de medir, pero su principal característica visible al análisis sería la creación de nuevas reglas del juego.

Si el movimiento ambientalista impone su proyecto cultural como legítimo, es decir, si evita que se instale el incinerador y produce cambios positivos en la manera como se desarrolla la política ambiental en la región, así como las practicas informales de los ciudadanos, entonces podrá decirse que el capital simbólico de la organización fue empleado de forma efectiva.

De otra parte, la segunda variable explicativa, estrategias de poder, se relacionaría con la capacidad del movimiento para presionar a las autoridades de forma articulada por medio de la movilización y aprovechamiento de sus recursos económicos, sociales, y culturales. Las estrategias se definen como las acciones planificadas de los movimientos ambientalistas, las cuales buscarían como objetivo principal el generar presión sobre los agentes dominantes del campo para lograr el cumplimiento de sus demandas y objetivos.

El primer componente de la segunda variable se denomina vinculación con organizaciones nacionales e internacionales. Esta vinculación estaría explicada por medio de indicadores hemerográficos y entrevistas, y se relacionaría con la capacidad del movimiento, primero de establecer contacto con otras organizaciones, y luego, con la capacidad para beneficiarse de la situación

Los beneficios podrían calificarse como asesoría técnica, donación de recursos económicos, vinculación con otros agentes clave, o apoyo mediático a la causa del movimiento. Para que estos elementos sean validos en torno a la efectividad del movimiento tendrían que ser utilizados en las estrategias de poder y ayudar a cumplir con los objetivos del grupo.

El segundo componente se titula utilización de recursos legales, y se explica como la capacidad para utilizar las vías institucionales para exponer sus demandas; empero, la mera exposición no es suficiente, sino que habría que darle una utilidad alternativa en torno a la efectividad del movimiento.

La utilidad del recurso fue verificada por medio de una revisión a la normatividad, para comprender el carácter vinculatorio de los resultados de los procesos legales. A su vez, en una segunda dimensión, el recurso legal aportaría la posibilidad de utilizar un mecanismo del gobierno en su contra, es decir, modificar su lógica. Este segundo punto es relevante porque bajo un sistema autoritario las herramientas que provee el estado difícilmente funcionarán en su contra o a favor de la ciudadanía organizada.

La prueba de hipótesis para los recursos legales se elaboró en dos sentidos; primero, la vía institucional, según la cual una respuesta positiva en términos legales a las demandas del movimiento sería calificada como efectividad de la estratégica; en segundo lugar, siguiendo un camino no institucional, los procesos legales iniciados por el movimiento ambientalista (en las diferentes escalas) serían efectivos cuando por medio de ellos (indirectamente) se difundan las demandas del movimiento, se obtenga apoyo de organizaciones con objetivos comunes, avanzando hacia las cortes internacionales o los foros de resolución de controversias de los tratados comerciales; o se logre en el terreno diplomático el apoyo a su causa y la presión sobre el gobierno federal.

El tercer componente se relaciona con el uso de los medios de comunicación para generar presión sobre el gobierno. Y se define como la capacidad para exponer sus demandas en los medios y tener un impacto sobre las decisiones de las autoridades. El principal valor de este componente está en su capacidad de generar capital simbólico. Para demostrar el uso del componente se utilizaron indicadores cualitativos y cuantitativos.

Los cualitativos se refieren a las entrevistas a actores clave, particularmente a funcionarios públicos del periodo, para saber si realmente se les presionó. Los cuantitativos se refieren a tablas de frecuencia mensual y anual referentes a la publicación de notas periodísticas relacionadas con el tema. Por medio de las tablas de frecuencia se creó una línea del tiempo en la cual se establecieron relaciones directas entre las decisiones de las autoridades, el apoyo/rechazo al movimiento, y la tendencia de las notas periodísticas.

Para usar a los medios de comunicación de manera efectiva, el movimiento ambientalista tendría que presionar a las autoridades y encontrar respuesta a sus demandas. Para esto habría que determinar una relación entre presión mediática y acciones del gobierno, o sea, comprobar que el cambio fue influido por el papel de los medios. Entre otros factores que podrían calificar a este recurso como efectivo estaría la vinculación con otros agentes sociales resultado de la difusión en los medios de comunicación, y la atracción de otros medios de comunicación al caso.

El cuarto componente es la participación en foros internacionales. Se define como la capacidad de exponer en foros las demandas y objetivos del movimiento. Para que sea efectivo, el componente deberá generar presión sobre las autoridades locales por medio de algún documento emitido. Aunque bastará con la generación de presión mediática en el exterior como resultado de la exposición en el foro. El análisis del componente se detalló a partir de las entrevistas a miembros del movimiento y la revisión hemerográfica, por lo que fue esencialmente cualitativo.

En conclusión, la efectividad del movimiento ambientalista se calculó de forma principalmente cualitativa, al estimar la diversidad de capital en sus tres aspectos, económico, social, y cultural, para encontrar las ganancias del proceso y su impacto sobre las decisiones de las autoridades. Pero por otra parte, se analizaron algunas estrategias de poder en los

rubros expuestos, observándose la manera cómo actúan los movimientos en un campo, pero lo más importante, como modifican las condiciones del campo y construyen nuevas definiciones culturales en torno a la problemática socio-ambiental.

Finalmente, el apartado metodológico caracterizó la investigación según sus diferentes procesos y etapas. Enfocándose primero en una breve acotación de la construcción de la teoría; para luego desarrollar dos apartados relacionados con la construcción de los datos y de las hipótesis. El peso del capítulo estuvo centrado en la construcción de las variables de investigación y de las hipótesis, insumos básicos para el modelo de efectividad de los movimientos ambientalistas.

III. RECUENTO DE LOS HECHOS: EL MOVIMIENTO AMBIENTALISTA EN OPOSICIÓN AL INCINERADOR TEESA

El capítulo III representa la base de datos de la investigación, por lo que contiene elementos que reflejan el contexto social, económico, político, y ambiental, de la problemática en estudio. En el recuento de los hechos se articularon secciones referentes a la política ambiental durante el periodo de estudio, los conflictos sociales, las discusiones técnicas sobre el manejo de residuos peligrosos, y la construcción del movimiento ambientalista en oposición al incinerador TEESA. El objetivo central del apartado es articular insumos relevantes para alimentar el “modelo de efectividad de los movimientos ambientalistas”.

3.1. Las luchas de poder en el campo político y el posicionamiento de nuevos agentes

A finales de la década de los ochenta se desarrolló un contexto particularmente interesante a nivel nacional desde varias perspectivas. En primer lugar se encontraba un campo político en el que se articularon cambios en el posicionamiento de los agentes, tanto a nivel federal como estatal y municipal, por lo que las estructuras institucionales de la administración pública mexicana se enfrentaban a un proceso de modificación y ruptura del estatus *quo*

Un ejemplo de lo anterior tiene que ver con el hecho de que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegaría en 1988 al poder bajo sospecha de fraude electoral, por lo que en la esfera del poder público el centralismo autoritario que había imperado en México desde hacía décadas, comenzaría su disolución hacia una estructura de polos de poder representada por los gobernadores de los estados.

Bajo riesgo de simplificar el análisis, es necesario expresar que nuevos agentes invadían la estructura de poder procedentes de grupos distintos a los que habían dominado desde el periodo posterior a la revolución mexicana, teniendo como resultado el progresivo

debilitamiento del control del PRI sobre la esfera político-administrativa, y permitiendo la inclusión de agentes del sector dominado del campo en la lucha por el poder⁹.

Otra lectura, sugiere que la presencia de los nuevos agentes en la arena política no siempre debería tomarse como una confirmación de un cambio en las reglas del juego en el campo político, ya que la ubicación marginal de un porcentaje limitado de agentes no pertenecientes al sector dominante en la estructura de poder podría funcionar como un elemento legitimador de la autoridad de los grupos dominantes desde el enfoque de un discurso relacionado con la apertura democrática calculada en la que los nuevos agentes formarían parte de una estrategia de conservación de la estructura de poder vigente.

Comprendiendo que al mismo tiempo que se generaba un proceso de apertura política, se perpetuaba la condición dominada de la oposición en la aceptación de posiciones marginales en el campo de poder, adoptándose el papel de agentes dominados y un poder marginal acotado por el dominio de los agentes dominadores del campo.

Para Bourdieu (2005) este tipo de modificaciones en los campos favorecen la conservación de la Doxa, es decir, las reglas del juego, dado que “los dominados rara vez escapan la antinomia de la dominación”, lo que quiere decir que en su intento por romper con la dominación, se posicionan en nichos a partir de los cuales pueden ser dominados por los dominadores a pesar de que son capaces de ejercer un cierto dominio.

Por lo tanto, a pesar de que los nuevos agentes lograron conquistar posiciones de poder, la inclusión no aseguraba la ruptura de las estructuras causales que inhibían la participación de partidos políticos o grupos de ciudadanos distintos al PRI, como por ejemplo los instrumentos inscritos en la normatividad electoral, por lo que desde esta óptica, la llegada al poder del Partido Acción Nacional (PAN) o posteriormente el Partido de la Revolución Democrática (PRD), no implicaba necesariamente un cambio profundo en las reglas del juego.

9 Comentarios obtenidos de la entrevista al Dr. José Manuel Valenzuela, investigador de El Colef.

En ese sentido, cabe decir que en 1989 el panista Ernesto Ruffo Appel ganaría la elección en Baja California y habría de ser el primer gobernador de un partido distinto al PRI; mientras que en Tijuana vencería en los comicios el panista Carlos Montejo Favela¹⁰, lo que convirtió al estado en escenario de enfrentamientos entre el gobierno central y los gobiernos panistas. A su vez, los enfrentamientos se daban tanto entre partidos como al interior de los mismos. El gobierno de Carlos Montejo Favela o el de Ernesto Ruffo Appel, por ejemplo, serían motivo de presión por los gobiernos priistas y por los miembros de Acción Nacional de otras facciones.

Las victorias panistas en el estado norteño aportarían capital simbólico a la construcción de un polo de poder distinto al que había imperado hasta ese momento, cuestionando las reglas del juego mientras que los agentes dominantes buscaban conservarlas. Algunos de los cuestionamientos tenían que ver con las modificaciones a la normatividad electoral con el objeto de posibilitar la llamada alternancia, cambios en la redistribución de los impuestos por medio de los mecanismos federales e inclusive críticas directas al sistema de valores que daba sustento al discurso dominante.

Empero, aunque en el campo político los agentes dominados presionaban para hacer modificaciones a las estructuras relacionadas con los mecanismos de adquisición de poder, desde la perspectiva de Carlos Montejo Favela, el periodo podría ser calificado como “un momento de gran dificultad para las nuevas administraciones, ya que no se contaba con los recursos técnicos y políticos para gobernar de forma eficiente”.

En conjunto, desde la perspectiva de Jorge Escobar¹¹, ex funcionario federal, la fragilidad institucional de los nuevos gobiernos y su falta de experiencia en el manejo de los asuntos gubernamentales, en coordinación con el debilitamiento del gobierno federal y su incapacidad para negociar con el sector social, desembocaron en un escenario en el que la ciudadanía se posicionó como un capital por el cual los agentes del campo político competían para

10 Se entrevistó al ex alcalde Carlos Montejo Favela en la Secretaría de Desarrollo del estado de Baja California el 09 de Marzo de 2009.

11 El 29 de Marzo de 2010 se entrevistó al Biólogo y Maestro en Ciencias, Jorge Escobar, jefe del departamento de Prevención y Control de la Contaminación de Sedue (1988-1990) y subdelegado de Sedue en Baja California (1990-1992). Actualmente es propietario de un despacho de consultoría ambiental.

legitimarse y conservar o modificar su posición en el campo de poder, lo que permitiría a los ciudadanos ejercer presión sobre el gobierno para concretar sus demandas.

De tal forma el capital social que se revalorizó durante las luchas por el poder entre los agentes políticos era útil para que los agentes políticos se posicionaran en el sector dominante del campo político, lo que a la inversa funcionaba para los agentes sociales como un elemento estratégico para ubicar sus demandas en la agenda de gobierno por medio de la presión sobre las autoridades.

La lógica de los enfrentamientos entre los agentes políticos por el capital social permitiría a la ciudadanía reflejar algunas de sus demandas por medio de la negociación con el gobierno, cuestión que en otro periodo hubiera sido a lo menos complicado, ya que las autoridades federales no consideraban el recurso de la participación ciudadana como un insumo valioso para la administración pública.

Y aunque han existido durante la historia de México diferentes formas por medio de las cuales la ciudadanía ha manifestado sus demandas al gobierno, las condiciones estructurales del periodo histórico analizado posibilitaron la inclusión progresiva de nuevos agentes sociales en la estructura de poder del campo.

Consideremos por ejemplo la fragilidad de la imagen del gobierno priista tras las elecciones federales de 1988, la llegada al poder de los gobernadores y presidentes municipales de oposición, los enfrentamientos que las relaciones PRI-oposición arrojaban sobre la vida pública, o el desmantelamiento de las estructuras sociales bajo el modelo neoliberal: espada de dos filos, por un lado el gobierno liberaba recursos capturados por el mantenimiento de las paraestatales, por otro, los programas sociales de gobierno funcionaban como un mecanismo de control parte de una estrategia de reproducción del sistema, por lo que la desaparición de las enormes estructuras de gobierno limitaba esta posibilidad y restaba capital social al gobierno federal.

De otra parte, en la incipiente reconfiguración de las reglas de la estructura de poder no existían, durante el periodo de estudio, instrumentos normativos y mecanismos institucionales que permitieran la participación ciudadana, por lo que la actuación de los agentes sociales estaba limitada por las ventanas de oportunidad que resultaban de los enfrentamientos políticos y la contraposición de diversas especies de capital.

Por lo tanto, al no haber una vía institucional, la ciudadanía habría de desarrollar estrategias para intentar posicionar sus demandas en la agenda de gobierno, organizándose para aprovechar las ventanas de oportunidad que promovía la nueva lógica del campo de poder y movilizar sus especies de capital en el vertiginoso escenario de la política a finales de los ochenta.

Entre los temas que surgieron durante el periodo se encontraba el relacionado con el manejo de los residuos peligrosos a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, por lo que se formaron organizaciones ciudadanas en el marco de un movimiento ambientalista con el objetivo de evitar la instalación de proyectos de este tipo en ambos lados de la frontera.

Este movimiento ambientalista entraría en contacto con un escenario político polarizado, ya sea a nivel local o nacional, o inclusive a nivel binacional con la firma de acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN) o el Plan Integral Ambiental Fronterizo (PIAF). Por lo que, para Roberto Sánchez, junto con una participación activa de distintos sectores de la ciudadanía (como se tratara más adelante), el contexto político inestable iba a ser determinante para la construcción del movimiento ambientalista.

3.2. La construcción de una nueva política ambiental

Aunado a los cambios en el campo político, el gobierno federal desarrolló durante los ochenta diferentes modificaciones a la normatividad e instituciones en diversos ámbitos gubernamentales; partiendo de los cambios en el modelo económico a principios de la década de los ochenta, con el paso del estado de bienestar hacia el modelo neoliberal que buscaba

reducir el tamaño burocrático del gobierno y limitar los programas sociales, dando un enfoque al comercio exterior como motor del desarrollo.

Bajo el contexto de reformas estructurales, se implementaron cambios en el área ambiental al crearse Secretaría de Pesca en 1982 y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) en 1983, estableciéndose una bifurcación inicial de políticas públicas relacionadas con el medio ambiente que se mantendría hasta mediados de los noventa.

Desde la óptica de Carlos de la Parra, la bifurcación de la política ambiental en distintas secretarías promovería el abordaje de los temas ambientales de forma desagregada, es decir, desde distintas trincheras de gobierno, lo que complicaba la estructuración de una política ambiental integral.

En el caso de Sedue, su creación transformó el enfoque de la política ambiental que se abocaba principalmente a la salud humana, eje central de la primera Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente creada en el seno de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en 1972, hacia una perspectiva relacionada con la protección del ambiente acotada por las necesidades urbanísticas de la sociedad.

Por otra parte, la Secretaria de Pesca aportaba a la situación de la política ambiental, la visión centrada principalmente en la administración de los recursos naturales procedentes del mar, lo que a su vez implicaba una comprensión poco integral del medio ambiente, pues la mayor parte del universo de recursos naturales era administrado por una secretaría (Sedue), mientras que la Secretaría de Pesca se encargaba de los recursos procedentes del mar, cuando lo óptimo desde la perspectiva de especialistas como Roberto Sánchez y Carlos de la Parra, hubiera sido la construcción de una dependencia encargada de establecer política pública en torno a la problemática ambiental.

El nuevo enfoque de la política ambiental, a pesar de no ser integral, fue significativo por el hecho de que por primera vez se visualizaba la protección del ambiente como parte importante de la política de estado y se daba un espacio, aunque acotado por el ordenamiento urbano, para

la conservación del medio ambiente como un requisito indispensable en el desarrollo de los seres humanos.

Posteriormente, se desligaría la política ambiental del enfoque urbanista de Sedue con la creación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), enfocando la política ambiental en los aspectos relacionados con el campo social, viraje que destacaría los aspectos humanos del desarrollo sustentable.

Pero sería hasta 1994 cuando se buscó dar un enfoque integral a la administración de los recursos naturales al crearse la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), cambiándose de golpe la lógica de la política ambiental al integrarse la Secretaría de Pesca a la nueva dependencia y al separar a Sedesol de la política ambiental.

Para el 2000, se estableció la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuyo propósito fundamental fue “fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable” (Ley Orgánica de la Administración Pública, Artículo 32 bis reformada en el DOF del 25 de febrero de 2003).

Los cambios de la política ambiental se sustentaron a su vez en los avances internacionales a los que México buscaba adherirse, por ejemplo, el establecimiento de la Comisión Mundial Sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas en 1984 y el informe Brundtland o Nuestro Futuro Común publicado en 1987 donde se mencionó por vez primera el concepto de desarrollo sustentable. Aunado a esto, las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica incluían un capítulo y foros relacionados con la política ambiental, por lo que el gobierno federal buscaba actualizarse al respecto.

Sin embargo, es fundamental hacer notar que con la creación de la Sedue se desarrollaron avances como la creación del primer Procedimiento de Impacto Ambiental de la Ley Federal de Protección al Ambiente en el que se incluía el concepto de estudio de riesgo; cambiando

sustancialmente la forma de desarrollar proyectos urbanos, ya que bajo la nueva normatividad se establecían mecanismos para limitar los riesgos potenciales para la población y el medio.

Sin embargo, fue hasta 1986 cuando se instituyó la Subdirección de Riesgo de la Sedue, desarrollándose también el primer Procedimiento para Evaluar Proyectos de Instalaciones que Manejen Sustancias Peligrosas, lo que dio la posibilidad a las autoridades ambientales para ejercer sus facultades con mayor efectividad, aunque la especificidad de dicho procedimiento se complementarían posteriormente con la constitución de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización publicada en 1992 y las Normas Oficiales Mexicanas en 1993, las cuales reemplazarían a las Normas Técnicas Ecológicas.

Para 1988 se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente junto con el primer Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, el cual contemplaba la realización de Estudios de Riesgo y la elaboración de Programas para la Prevención de Accidentes, dándose un paso importante en lo que se refiere a la administración de los recursos ambientales y por ende, se habría avanzado en la constitución de la política ambiental como un elemento individual de la política pública federal, lo que fue un parte aguas en la institucionalización de la protección y conservación del medio ambiente.

A su vez, en la LGEEPA se contemplaba la gestión de los residuos peligrosos en el capítulo V, además de tipificar los delitos del orden federal asociados con la contaminación de suelos y residuos peligrosos en sus artículos 184-186. De igual forma, se publicó también en 1988 el Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos, en el cual se enunciaba que las disposiciones relacionadas con los residuos peligrosos eran de índole federal; ergo, fue hasta 1990 cuando se publicó el Primer Listado de Actividades Altamente Riesgosas (por manejo de sustancias tóxicas), especificando las actividades que debían ser reguladas por la normatividad ambiental¹².

12 En 1992 se publicó el Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas (por manejo de sustancias explosivas e inflamables).

Para el biólogo Jorge Escobar, ex subdelegado de Sedue en Baja California, a pesar de existir una normatividad ambiental, aspectos importantes como los procedimientos de inspección ambiental no estaban articulados con base a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que los procedimientos de inspección ambiental sufrían de un alto nivel de discrecionalidad por parte de los funcionarios, es decir, no había un ejercicio de verificación de las actividades que desempeñaban los funcionarios de Sedue.

Para Escobar el establecimiento de las primeras Normas Oficiales Mexicanas (NOM), fue un paso importante para la política ambiental mexicana porque estas vendrían a reemplazar a las Normas Técnicas Ecológicas, las cuales no eran vinculatorias en términos legales, pues en caso de no cumplirse se incurría en una falta de tipo administrativo, no penal, lo que claramente influía en el comportamiento de los posibles infractores.

Además, el ex funcionario de Sedue, comentó que las Normas Técnicas Ecológicas podrían considerarse un símbolo de la postura de las autoridades mexicanas con respecto a la política ambiental¹³; ya que junto con la no vinculación legal, tenían una característica particular, eran muy cerradas, pues no incluían consensos con la ciudadanía o los empresarios, siendo también en algunas ocasiones imprácticas para los sectores que se verían regulados por ellas al contener parámetros que distaban de la realidad o eran demasiado exigentes.

Pero la principal falla de la política ambiental mexicana, desde la perspectiva de Escobar, tenía que ver con el hecho de que no se incluía a la ciudadanía¹⁴ en la construcción, toma de decisiones e implementación de la normatividad ambiental: “La participación ciudadana era una palabra hueca, pues no había mecanismos para incluir a los ciudadanos”¹⁵.

13 Un ejemplo tiene que ver con el hecho de que la Delegación de Sedue en Baja California solo contaba con “cinco inspectores en el periodo 1988-1990 para manejar los problemas de contaminación”, por lo que a pesar de la prolijidad de la normatividad, su implementación *per se* era complicada.

14 Para el ex subsecretario de Sedue, una de las primeras veces en que hubo participación ciudadana en temas ambientales fue durante una reunión en 1987, cuando se invitó al especialista Roberto Sánchez a realizar una ponencia en Sedue sobre el manejo de los residuos peligrosos de las maquiladoras en Tijuana. Reunión a la cual asistirían funcionarios de Sedue, sin embargo, al final, Sánchez habría terminado “hablándole a las paredes”.

15 Según Escobar, hasta después de 1992, “con la creación del Plan Integral Ambiental Fronterizo, se incorporó la participación ciudadana, ya que antes no existía. Las primeras expresiones de interés público que atestigüé ocurrieron en 1986. Y la línea que se me daba era no los dejes entrar... temas ambientales binacionales son a puerta cerrada, la participación ciudadana no es bienvenida... y si hay intereses se tocan fuera”.

La falta de democratización de la política ambiental se reflejaba a finales de los ochenta en el nivel municipal y estatal, ya que no había instituciones y reglamentos dedicados a la protección del medio ambiente, por lo que los órdenes que entraban en contacto directo con los potenciales agentes generadores de impactos para el medio y riesgos para la población, no tenían instrumentos y mecanismos para implementar la política ambiental federal.

En conjunto con lo anterior, Escobar argumentó que no había flexibilidad para negociar con las autoridades centrales, por lo que era muy difícil negociar, ni se podía desahogar localmente los proyectos. En su opinión las delegaciones no eran poco más que una oficina de correspondencia donde lo que entraba se tenía que canalizar a la dirección de Sedue que le tocaba, era una orden directa de la Subsecretaría de Ecología”¹⁶.

A principios de los noventa se registró un esfuerzo de las autoridades federales por re-definir las atribuciones de las dependencias referentes a los diferentes niveles de gobierno, creándose así una gran cantidad de órganos de gobierno con atribuciones descentralizadas o inclusive desconcentradas, reformándose progresivamente de esa manera la visión centralista que impregnaba la política ambiental hasta ese momento.

Un ejemplo de lo anterior se dio en Baja California donde se creó una Dirección General de Ecología bajo el gobierno de Ernesto Ruffo Appel (1989-1995), estableciéndose también en 1992 la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Baja California¹⁷, la cual desde la perspectiva del Dr. Carlos de la Parra era una copia fiel de la LGEEPA.

También se creó en 1992 el Instituto Nacional de Ecología (INE) en la Secretaría de Desarrollo Social, órgano encargado de realizar investigaciones relacionadas con el medio ambiente y aportar insumos a los tomadores de decisiones. La creación del INE fue un avance para la política ambiental mexicana porque el campo político estaba modificando su Doxa para incluir

16 Según Jorge Escobar había 5 departamentos en Sedue durante el periodo de estudio, Prevención y Control de la Contaminación, Protección y Restauración Ecológica, Flora y fauna, Laboratorio y Áreas naturales protegidas.

17 Elaborada por Jorge Barrozo, primer director de Ecología en Baja California.

elementos aportados por agentes provenientes del campo científico, lo que a la larga permitiría en teoría hacer política pública más efectiva.

Luego se estableció la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual por primera vez establecía un mecanismo exclusivo para perseguir los delitos cometidos en contra del medio ambiente y procurar el cumplimiento de la normatividad ambiental, siendo este un paso fundamental en la historia de la política ambiental mexicana, al pasar de una visión relacionada una calidad de segunda clase para los temas ambientales a un intento por evidenciar la relevancia de la problemática ambiental en los instrumentos normativos.

Parte de la trascendencia de la Profepa tuvo que ver también con la introducción de las Auditorías Ambientales, las cuales serían realizadas por inspectores encargados de verificar el cumplimiento de la normatividad en los proyectos que implicaban impactos ambientales negativos; lo que era innovador porque aunque existía una normatividad ambiental que buscaba limitar los impactos ambientales, en muchos casos los agentes económicos podían eludir sus responsabilidades, por lo que la figura de auditoría ambiental se presentaba como mecanismo para reforzar la aplicación de la política ambiental.

En conclusión, es posible delinear una serie de cambios positivos con respecto a la política ambiental mexicana, partiendo del esfuerzo por construir instituciones y normatividad vinculante para sustentar las necesidades de la política ambiental mexicana, para luego buscar descentralizar las funciones hacia los gobierno locales, esto en medio de un proceso cuantificación de los insumos que recibían los tomadores de decisiones. Ergo, los procesos no se cumplieron en todos los casos de forma óptima, como se verá a continuación.

3.3. Perspectiva crítica de la política ambiental y sus instrumentos

Durante el periodo de estudio se transitó de una estructura rígida relacionada con los instrumentos y mecanismos de la política ambiental que reflejaba una lógica de campo sustentada en el control jerárquico y la minimización de la influencia de otros agentes, hacia un cierto nivel de descentralización hacia los gobiernos locales y la inclusión relativa de

agentes provenientes de diversos campos en los procesos de elaboración e implementación de la política ambiental.

En opinión del arquitecto Héctor Castellanos, titular de Desarrollo urbano y ecología en el municipio de Tijuana durante el periodo 1989-1991, a pesar de existir una normatividad específica en lo que se refería al manejo de residuos peligrosos a nivel federal, tanto a nivel estatal como municipal no había instituciones explícitamente dedicadas a la cuestión ambiental¹⁸, por lo que la problemática quedaba siempre en manos de la federación.

Reforzando la opinión de Castellanos, el biólogo Jorge Escobar considero que “no había durante el periodo una voluntad del gobierno para descentralizar las funciones en el tema de la política ambiental, ni tampoco se desarrolló un marco de referencia para descentralizar las funciones. Solo había una autoridad ambiental en el país“.

Lo anterior es interesante porque a pesar de realizarse modificaciones en la estructura institucional de la política ambiental, los procesos relacionados con la descentralización y la desconcentración de funciones estaban acotados por el control de las autoridades federales sobre el contenido de la política ambiental; es decir, la normatividad federal (LGEEPA) era al final el marco en el que tenían que acotarse el universo de problemas locales relacionados con el medio ambiente, lo que implicaba que dicha ley debía presentar principios generales aplicables a cualquier caso posible, o al menos posibilitar la traducción de los principios generales a lo local.

Ergo, la problemática ambiental se podría diferenciar de otras áreas en las que la política pública debe presentar soluciones en su nivel de complejidad y los esfuerzos interdisciplinarios que se deben realizar para construir instrumentos lo suficientemente complejos para que puedan ser efectivos.

Morín (1990) hacía referencia a la Ley de Ashby en donde se alude a la necesidad de construir instrumentos complejos para abordar problemas complejos, buscando comenzar a explicar la

18 En 1989 Castellanos creó Desarrollo Urbano y Ecología en el ayuntamiento de Tijuana.

complejidad del problema de la incapacidad de los instrumentos de política ambiental para comprender la complejidad del medio ambiente.

Siguiendo a Enrique Leff (1986), el intento constante por universalizar las soluciones institucionales en torno a los problemas ambientales específicos de una localidad y construir instrumentos generales, como la LGEEPA, acarrea la antinomia relacionada con la imposibilidad práctica de contar con leyes específicas para todos los casos y su opuesto, la potencial inoperancia de un instrumento universal capaz de resolver cada problema específico que se presente.

Empero, la falta de mecanismos generadores de capacidades institucionales a nivel municipal derivó en la imperiosa necesidad de priorizar la elaboración de instrumentos y mecanismos de política ambiental orientados a ordenar los esfuerzos de las instituciones de lo general a lo particular, es decir, partiendo de la creación de una secretaria federal para proseguir hacia la descentralización de las funciones en el orden estatal y municipal.

Para el arquitecto Enrique Romero¹⁹, encargado de Control Urbano en Tijuana durante el gobierno de Carlos Montejo Favela, a nivel municipal no se contaba con instrumentos de política ambiental adecuados a la realidad de los problemas de la ciudad, por ejemplo, un reglamento de protección al ambiente²⁰, por lo que la instalación de proyectos con potenciales riesgos ambientales no era regulada por el ayuntamiento, ya que no se tenía la capacidad técnica ni presupuestal para resolver ese tipo de problemas.

Según Castellanos, requisitos como el permiso de uso de suelo eran solventados con facilidad, ya que la zonificación urbana no era lo suficientemente específica con base al tipo de proyecto, además de no desarrollarse estudios de impacto ambiental a nivel municipal. El arquitecto atribuyó dicho defecto a una “falta de consciencia” por parte de las autoridades locales en materia de la temática ambiental y a que hasta ese momento la política ambiental había sido conducida por las autoridades federales.

19 El Arq. Enrique Romero fue entrevistado en las instalaciones del Tecnológico de Tijuana el día 04 de Marzo de 2010.

20 El primer reglamento de protección al ambiente para el municipio de Tijuana se publicó en el 2001.

En relación con los estudios de impacto ambiental, considerando el orden federal, el Dr. Roberto Sánchez²¹, arguyó que durante el periodo solo existía el requisito de la manifestación de impacto ambiental (LGEEPA) la cual era “muy simple e incluía algunos elementos básicos, como la dirección de los vientos dominantes, pero no existía un estudio previo de impacto ambiental en forma”, por lo que la manifestación funcionaba como un requisito para la legitimación de un proyecto ante las autoridades ambientales, quienes no ahondaban en el tema cumplido el requisito.

Actualmente la manifestación de impacto ambiental es un requisito establecido en el artículo 3 de la LGEEPA, en donde se define como “el documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo y atenuarlo”. Detallándose en el artículo 28 de la misma ley las obras y actividades que habrían de requerir previa autorización de las autoridades y por ende presentar una manifestación de impacto ambiental²².

Para el Dr. Roberto Sánchez, en la LGEEPA de 1988 había deficiencias claras en lo que se refería a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por lo que en 1996 se buscaría reformarla para fortalecer el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) y dar mayor certeza legal y menor discrecionalidad a la implementación de la política ambiental mexicana.

Por su parte, el ex delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado de Baja California (1996-1997), Dr. Carlos de la Parra²³, consideró que aunque “existía un marco de ley, el mismo no estaba siendo cumplido (durante el periodo de estudio), por el hecho de que la manifestación de impacto ambiental no era realizada de forma acotada a la normatividad, además de no ser un documento público”.

21 El Dr. Roberto Sánchez era director del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente de El Colef, fue entrevistado el 05 de Marzo de 2010 vía Skype.

22 En el apartado IV se incluye a las instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos.

23 El investigador de El Colef, Carlos de la Parra fue entrevistado en El Colegio de la Frontera Norte el 24 de febrero de 2010.

De la Parra, agregó que actualmente, hay muchos países en los que la EIA se considera un instrumento de planeación, alejándose de la concepción tradicional en la que se le asignaba un papel posterior al proyecto o realizable en las últimas etapas del proyecto con el objetivo de legitimar la obra ante las autoridades ambientales y cumplir con un mero trámite.

El cambio de percepción en torno a la EIA como un instrumento de evaluación aportó la posibilidad de trascender el simple cumplimiento de un trámite para direccionar el procedimiento hacia un elemento de planeación que considera las diferentes etapas de un proyecto, buscando no solamente limitar los impactos ambientales negativos inmediatos, sino analizar de forma integral el caso para implementar medidas a mediano y largo plazo.

Por lo tanto, con la reforma de 1996 a la LGEEPA se inauguró un proceso de cambio en las instituciones encargadas de implementar la política ambiental, modificándose la perspectiva de lo que deberían ser los instrumentos de política pública y sus mecanismos.

3.4. Estructura del campo político en el ámbito internacional: el proceso de adaptación de la política ambiental mexicana a los lineamientos internacionales

Con respecto al campo político en el ámbito internacional, el gobierno federal había comenzado a negociar en 1987 un Acuerdo Marco para la posterior firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN (entrada en vigor en 1994); surgiendo en las negociaciones una serie de problemáticas compartidas a lo largo de la frontera, entre las que se encontraba la relacionada con el medio ambiente, por lo que se buscó establecer una normatividad binacional referente al tema.

En el artículo 1114 del TLCAN se expresaba que era “inadecuado alentar la inversión por medio de un relajamiento de las medidas internas aplicables a salud o seguridad o relativas a medio ambiente”. Por lo que “ninguna parte debería renunciar a aplicar o de cualquier otro modo derogar, u ofrecer renunciar o derogar, dichas medidas como medio para inducir el establecimiento, la adquisición, la expansión o conservación de la inversión de un inversionista en su territorio”.

En caso de controversia entre las partes se establecieron foros relacionados con la agenda binacional referente al TLCAN; para el tema del medio ambiente se creó la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), la cual se estableció como un espacio binacional en el que se podrían ventilar los problemas inherentes a la dinámica entre comercio y ambiente.

A su vez, también se firmaría un acuerdo denominado, Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) paralelo al TLCAN en el cual se buscaba especificar la política ambiental adecuada a la zona comercial, lo que significó un hito en la política ambiental mexicana por el hecho de que se buscaba equiparar la normatividad mexicana a la estadounidense.

Siendo lo anterior reflejo la estrategia del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, por medio de la cual se intentaría construir una política ambiental competitiva en el marco internacional, dándose énfasis de esa forma a los problemas ambientales nacionales, los cuales habían sido relegados en gran medida hasta ese momento.

Para Carlos De la Parra el gobierno de Salinas promovió los cambios en la política ambiental mexicana como un elemento para proyectar a México en el comercio internacional, no como una medida para limitar los impactos ambientales del comercio, empero, el nuevo escenario presentó oportunidades para que los ambientalistas expusieran sus demandas.

La estructura del campo político se modificaría con la entrada de nuevos agentes y nuevas posibilidades para el diálogo y la ruptura. Desde esta perspectiva, la situación de cambio constante durante el periodo de estudio implicó ventanas de oportunidad potenciales para el posicionamiento de las demandas ciudadanas en los foros binacionales e internacionales.

No obstante, antes de firmar el TLCAN y el ACAAN, se firmaron varios acuerdos relacionados con el medio ambiente, entre los que se encontraba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica de 1983 sobre “Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza“, mejor conocido como

“Convenio de la Paz” (1983), según el cual, ambos países acordaron prevenir, reducir o eliminar las fuentes de contaminación de aire, agua y suelo.

Es elemental hacer notar que en dicho convenio también se acordó que no se instalarían plantas de tratamiento de residuos peligrosos a 100 Km. de la frontera binacional²⁴. Lo que significaba que en temas de seguridad relacionados con el manejo de residuos peligrosos se tenía un punto de acuerdo para operar una problemática creciente en ambos lados de la frontera.

Posteriormente, México firmaría en 1986 un convenio bilateral con los Estados Unidos para controlar los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos²⁵, considerando dos puntos relevantes, la obligación de tener una respuesta coordinada en caso de una contingencia relacionada con el manejo de residuos peligrosos en la frontera, así como la obligación de las maquiladoras de devolver los residuos peligrosos al país de procedencia de los insumos.

Ambos puntos fueron relevantes en su momento porque redimensionaban el papel de la política ambiental en el marco de las relaciones exteriores. El primero se refería a un intento de establecimiento de estrategias conjuntas para administrar el riesgo con respeto a los residuos peligrosos a lo largo de la frontera, dando énfasis a la respuesta bilateral en caso de una situación de riesgo; empero, es curioso que se construyera un mecanismo de respuesta pero no de prevención, siendo la única limitante a la instalación de plantas de residuos peligrosos los 100 Km. de distancia de la frontera establecidos en el Convenio de la Paz.

Un segundo punto tenía que ver con la importación de residuos peligrosos para los procesos productivos de las maquiladoras instaladas en el norte de México, estableciéndose la obligación de devolver los insumos al país de origen. Este punto fue relevante porque el crecimiento económico de la zona implicaba la posibilidad de importar grandes cantidades de residuos peligrosos, los cuales podrían permanecer en México y producir impactos

24 En una nota del San Antonio Express News (02/03/92) se explicaba la preocupación de las autoridades de Sedue por la instalación de los basureros de residuos peligrosos, quienes cuestionaron la legalidad de los mismos con base al Convenio de la Paz.

25 Tras este convenio, México firmó en 1989 el Convenio de Basilea (D.O.F. 06-VII-90) con el objetivo de regular los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos.

ambientales negativos y riesgos para la población. Lo que también era importante porque al ser un tratado de libre comercio no existían demasiadas limitantes al flujo de bienes y servicios, a lo que las partes respondieron creando salvaguardas y acuerdos paralelos.

El periodo descrito reveló los contrastes del campo político: en un sentido había apertura y negociación hacia el exterior en temas como la política ambiental, de otra forma, esta apertura no se reflejaba en el interior del país, en donde la lógica centralista con respecto a la toma de decisiones imperaba, aunque en discurso la descentralización y el diálogo con la ciudadanía estuvieran en proceso de construcción.

A lo cual, Roberto Sánchez, miembro de la ONG Proyecto Fronterizo durante el periodo, comentó que el gobierno federal tenía en esa época un “control total de la incipiente política ambiental, lo que en algunas ocasiones creaba enfrentamientos entre el gobierno y la sociedad”; por lo que la potencial proyección internacional de los conflictos relacionados con el medio ambiente predisponía a las autoridades al diálogo y a la conciliación.

No obstante, para el biólogo y ex funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), Jorge Escobar, aunque “había un control jerárquico de la política ambiental por parte de las autoridades federales, y el TLCAN era un reflejo de tal control; el tratado ayudó a construir muchos de los cambios necesarios para la política ambiental mexicana, ya que entre otras cosas por primera vez se contaba con grupos de trabajo que motivaban al gobierno federal a actualizarse en política ambiental”.

Aunado al acuerdo paralelo al TLCAN, el gobierno buscó constituir una imagen progresista en lo referente a la problemática medio ambiental, por lo que se creó el Plan Integral Ambiental Fronterizo (PIAF) (1992), el cual se presentó como una oportunidad para las organizaciones no gubernamentales (ONG) para proyectar en las discusiones algunos de los problemas ambientales de la región fronteriza²⁶.

26 En una nota periodística publicada el periódico Excélsior el 15 de Abril de 1992, se hacía referencia al hecho de que comisiones legislativas de ambos lados de la frontera revisarían en la reunión anual interparlamentaria las acciones del PIAF, así como algunos de los principales problemas ambientales de la frontera.

El PIAF se basaba en el Acuerdo de la Paz y tenía como principal objetivo el fortalecer la cooperación continua entre México y los Estados Unidos para el mejoramiento del ambiente en la zona fronteriza, a lo largo de 100 Km. de cada lado de la frontera, así como de la salud y bienestar públicos.

Roberto Sánchez, quien participó activamente en la revisión del PIAF²⁷ expresó que una de las problemáticas que se planteaban constantemente en los foros de trabajo, era la relacionada con el manejo de residuos peligrosos en los estados de la frontera México-Estados Unidos, ya que en distintas ciudades fronterizas se planeaba instalar plantas de manejo de residuos peligrosos.

La firma y puesta en marcha del PIAF permitió la construcción de un espacio de diálogo, inexistente hasta ese momento, en el que los agentes sociales podían discutir abiertamente los temas ambientales; por medio del PIAF el gobierno federal favorecía el diálogo sobre el autoritarismo, posibilitando el consenso como una herramienta más de la política ambiental.

Al respecto, el Arquitecto Roberto Díaz²⁸, presidente del Foro Ecologista de Baja California, criticó en su momento el PIAF porque, desde su perspectiva, postulaba que el desarrollo económico de la frontera generaría contaminación que sería solventada con recursos del desarrollo²⁹

La crítica de Díaz se centraba en una visión –desde su punto de vista- tecnocentrista de las autoridades de ambos países, la cual indicaba que los niveles de contaminación se resolverían con el desarrollo económico y los avances tecnológicos en la frontera; además, se pensaba que el gobierno de Salinas había creado el PIAF como una medida para desviar la atención de los proyectos de manejo de residuos peligrosos que se deseaba instalar en el norte del país.

27 En una nota de La Jornada (28/02/92) Sánchez criticó la decisión de los gobiernos de México y Estados Unidos de dar a conocer la autorización de la operación de la Chemical Waste Management en Baja California y Texas, solo 24 horas después de que se hizo público el Plan Integral Ambiental Fronterizo.

28 Roberto Díaz García fue entrevistado vía Skype el 17 de Marzo de 2010. El arquitecto fue secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado (SAHOPE) durante el gobierno de Milton Castellanos en Baja California (1971-1977) y delegado de Sedue en Sonora (1988-89).

29 La revista Proceso publicó un artículo el 02 de Marzo de 1992 titulado “El nuevo Plan ambiental, juego de relaciones públicas”, en el cual se vierte el escepticismo que imperaba en algunos sectores de la sociedad con relación al PIAF.

En perspectiva, a pesar de que el gobierno federal manifestó en diversas ocasiones su inconformidad con respecto a la decisión de las autoridades estadounidenses de permitir la instalación de plantas de manejo y disposición de residuos peligrosos a lo largo de la frontera³⁰, para Roberto Díaz dicha actitud posiblemente formaba parte de una estrategia para desviar la atención de la instalación de ese tipo de proyectos en territorio mexicano³¹.

En el entorno trazado, el campo político había incluido nuevos agentes y nuevos instrumentos de política pública, por lo que el control jerárquico de la política entraba en una etapa de cambio en la que la ciudadanía y los agentes económicos jugarían un papel principal.

3.5. El manejo de los residuos peligrosos en la frontera México-Estados Unidos

El manejo de los residuos peligrosos ha sido uno de los principales problemas a los que se enfrentan los gobiernos de una región comercial en la que los flujos económicos conllevan un gran dinamismo³². Los potenciales impactos negativos sobre el ambiente y los riesgos para la población funcionan a partir de una especie de balanza en la que no es posible priorizar los beneficios económicos sobre la seguridad y salud de la población, bajo riesgo de producir desequilibrios tanto económicos como ambientales.

Igualmente, el priorizar lo económico sobre lo ambiental puede resultar en complicaciones para los agentes económicos que lógicamente se benefician de los recursos naturales, por lo

30 En una nota del diario *Zócalo* (Coahuila) (18/01/92) se publicó lo siguiente: “El secretario (...) Chirinos, protestó ante la *Environmental Protection Agency* (EPA) por la solicitud que presentó una empresa estadounidense para construir cementerios nucleares a unos cuantos kilómetros de la frontera con México”. Sin embargo, en una nota de la Jornada del 04 de Marzo de 1992 se dio una ruptura a la coherencia del discurso del gobierno, cuando el presidente de la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Yunes, declaró que “México no puede presionar a Estados Unidos para que no construya confinamientos de desechos industriales o radioactivos (en su territorio) (...), (ya que) nuestro país también ha construido depósitos de desperdicios en estados fronterizos...”.

31 El Dr. Roberto Sánchez apoya este argumento señalando que durante el periodo existía una intención estratégica del gobierno federal para mantener los temas relacionados al ambientalismo.

32 “En 2004, México importó 128.000 millones de dólares en productos estadounidenses y exportó a ese país 69.000 millones de dólares, cifras que contrastan con las de los años previos al TLCAN. Por ejemplo, en 1986 México había importado de Estados Unidos solo 20.000 millones de colares y exportó 16.000 millones” (US Census Bureau, <<http://www.census.gov/foreign-trade/www/>>.)

que hay un efecto de retroalimentación. A la par, es improbable sostener una economía funcional sin contar con los insumos necesarios para alimentar el aparato productivo.

Entonces se construye un problema para las autoridades encargadas de normar tanto los flujos comerciales como la protección del medio: ¿Cómo favorecer el comercio sin ir en detrimento de la salud de la población y el medio ambiente?

No se dará respuesta a la pregunta, sin embargo, el caso de estudio proyecta claramente la disyuntiva entre medio y comercio por el hecho de que las autoridades mexicanas tenían, durante el periodo de estudio, un gran interés en motivar la economía nacional por medio de la desregulación del comercio, aunque también poseían la obligación de proteger la salud de la ciudadanía y el medio ambiente. Este es quizás el principal dilema la política pública contemporánea.

Quizás un caso emblemático con respecto a esta discusión sería el de Monsanto, empresa estadounidense que fue una de las primeras en producir el compuesto denominado bifenilos policlorados (BPC), el cual es una mezcla de hasta 209 compuestos clorados cuya apariencia es de un líquido aceitoso, también conocidos como askareles³³.

Según un reporte de Greenpeace (2005), la importancia de los BPC tiene que ver con sus riesgos para la salud y sus impactos negativos sobre el medio, pues se les considera Compuestos Orgánicos Persistentes (COP), ya que difícilmente pueden ser biodegradados por el ambiente. En la tabla 1 se presentan las ventajas tecnológicas de los BPC en comparación con las desventajas para la salud humana.

33 El askarel es el producto, el BPC es el compuesto. Los askareles son los aceites que contienen de 40 a 70 % de BPC (Semarnat, 2005).

Tabla 1. Ventajas y consecuencias de la utilización de los BPC

Ventajas tecnológicas	Consecuencias en la salud
Baja volatilidad	Difícilmente biodegradables
Baja polaridad	Persistentes (COP)
Alta propiedad dieléctrica	Bioacumulables
Estabilidad térmica	Cancerígenos
Ininflamabilidad	Alteraciones inmunológicas
Estabilidad química	Danos al sistema nervioso

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (2002)

Entre sus principales consecuencias para la salud se encuentran el cáncer de hígado y del tractobiliar, la insuficiencia renal, así como alteraciones neurológicas e inmunológicas y del aparato reproductivo. Su producción industrial fue resultado de la expansión de la industria petroquímica y de la demanda de la industria eléctrica³⁴.

El problema de los askareles es que al ser COP difícilmente pueden biodegradarse³⁵, por lo que se bioacumulan y son altamente persistentes, lo que tiene serías implicaciones para el medio y la salud de la población. En otro sentido, se dispersan con facilidad a través de la atmosfera, el agua, o la tierra.

Cabe decir que los BPC se desarrollaron para resolver los problemas de flamabilidad de los aceites minerales utilizados principalmente en la producción de electricidad, por lo que a pesar de sus efectos negativos sobre la salud y sus impactos negativos sobre el medio ambiente, si tienen grandes ventajas en términos tecnológicos; como por ejemplo una baja volatilidad, lo que permite que se pueda producir electricidad a altas temperaturas sin el riesgo pronunciado de la flamabilidad.

Otra ventaja tecnológica sería que tiene un alta propiedad dieléctrica, es decir, que conduce con gran eficiencia la energía eléctrica. Lo que reduce costos y mejora la eficiencia en la

34 Bejarano, Fernando. Guía Ciudadana para la aplicación del Convenio de Estocolmo. RAPAM. 2004.

35 La bioacumulación hace referencia a la “acumulación neta, con el paso del tiempo, de metales (u otras sustancias persistentes) en un organismo a partir de fuentes tanto bióticas (otros organismos) como abióticas (suelo, aire y agua)” (*Greenfacts*, 2010).

producción de energía. Por otra parte, su estabilidad térmica y química contribuyen a que los askareles sean poco flamables, mejorando los estándares de seguridad para los trabajadores y la población en general.

Sin embargo, a pesar de sus grandes ventajas tecnológicas los BPC también acarrearán en su uso graves impactos negativos sobre el medio ambiente y riesgos para la salud de la población. Entre los principales efectos sobre el medio (descritos en la tabla 2) está su elevada persistencia y su bioacumulación, lo que quiere decir que persisten y no se degradan con facilidad; lo que en conjunto con la acumulación, es decir, con la capacidad de acumularse en seres vivos y permanecer en el largo plazo; potencialmente genera un escenario no deseable para el medio y la población.

Aunado a lo anterior, los BPC se dispersan con facilidad a través de múltiples vías, como puede ser el agua, el suelo, la atmósfera cuando son incinerados y producen dioxinas y furanos; siendo elevadamente tóxicos para los animales y los seres humanos y siendo factor de incrementos en la incidencia de enfermedades diversas.

Tabla 2. Efectos de los BPC sobre el medio ambiente

Efectos BPC sobre el medio
Elevada persistencia
Bioacumulación
Dispersión global
Elevada toxicidad sobre animales

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (2002)

A finales del siglo XIX se desarrolló el método de la incineración para eliminar los BPC; ergo, las implicaciones de una disposición ineficiente persuadieron a distintos grupos sociales para oponerse a la instalación de plantas de tratamiento de este tipo de residuos peligrosos durante el siglo XX.

En el caso de la empresa Monsanto, una comunidad afroamericana en Anniston, Alabama y en Krummrich, Illinois, que había sufrido los estragos de la producción de askareles durante décadas denunció el caso y logró a mediados de los noventa que las autoridades estadounidenses prohibieran la producción de BPC.

La producción de BPC es una actividad ilegal en México, así como su incineración, aunque históricamente el compuesto fue utilizado por la Comisión Federal de Electricidad en sus transformadores, capacitores y equipos de transferencia de calor.

Según el ingeniero bioquímico Carmelo Zavala, propietario de una planta de manejo de residuos peligrosos, la CFE empleaba los BPC en sus plantas de generación de electricidad por ser sustancias química y térmicamente estables, es decir, no son inflamables, lo que favorece la disminución del riesgo de incendios.

Estos compuestos se descomponen por acción del calor solo a temperaturas muy intensas, razón por la cual los incineradores deberán ser muy efectivos al disponer de los materiales a temperaturas específicas; aunado a esto son dieléctricos, es decir, no conducen electricidad, por lo que pueden ser utilizados como aislante.

Otra virtud de los BPC es que no son corrosivos con los metales y descomponen lentamente materiales como el caucho, la goma sintética y los plásticos comunes; con base en esto el material se presentaba como una opción muy productiva para los trabajos de generación de electricidad.

Según el PNUMA (2002) se cuenta con aceites dieléctricos que pueden emplearse como alternativa a los BPC en el caso de los transformadores utilizados para producir energía eléctrica. En la Tabla 3 se presentan algunas de las principales alternativas al BPC. Sin embargo, cabe decir, que las ventajas van de la mano de desventajas casi siempre económicas, por lo que las empresas en rara vez las implementan.

Por ejemplo, los aceites minerales no desarrollan los riesgos para la salud de los humanos que implican los BPC; empero, esta tecnología, antecedente a los askareles, si tiene la característica de ser altamente flamable, lo que históricamente llevo a los productores de energía a elegir opciones menos peligrosas.

De otra parte, los fluidos de silicona no contienen cloro, lo que limita las reacciones químicas que bajo condiciones específicas podrían impactar negativamente al medio; pero son sensibles al agua, lo que es un tema delicado cuando se produce electricidad y por ende potencialmente tendrán un mejor rendimiento eléctrico

Tabla 3. Alternativas al uso de los BPC

Alternativas de fluidos	Descripción
Aceites minerales	Aceites convencionales, mayor flamabilidad
Fluidos de silicona	No contienen cloro, sensibles al agua, menor rendimiento eléctrico
Aceites de éster sintético	Buenas propiedades eléctricas, mayor costo

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (2002)

En nuestro país se han otorgado licencias a empresas encargadas de la incineración de BCP y otros residuos peligrosos, como es el caso de Altecín S.A. de C.V, entre otras, la cual contaba con una licencia (expedida el 31 de Marzo del 2004) para incinerar askareles y otros residuos peligrosos en El Higo, Veracruz.

Actualmente, al autorizarse proyectos de este tipo, Semarnat infringe la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como el Convenio de Estocolmo (2007), que obligan a México a desarrollar tecnología que arroje un menor impacto ambiental y a eliminar las fuentes de generación de los COP.

Es conveniente esclarecer que el artículo 63 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos señala la obligación de evitar la incineración de residuos peligrosos en caso de existir opciones menos contaminantes³⁶. Desde la perspectiva del Ing. Bioquímico, Carmelo Zavala, hoy en día se cuenta con tratamientos alternativos y empresas autorizadas para disponer los BPC, como por ejemplo, los procesos físicos, químicos y biológicos, así como la exportación hacia países receptores.

En el Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos Persistentes (COP) adoptado en el 2001 se apoya el enfoque que busca priorizar las tecnologías alternativas sobre la combustión o incineración. En el artículo 5 (c) se establece que las partes del Convenio están obligadas a “promover” procesos y “prevenir” la formación y liberación de químicos tales como dioxinas, furanos, bifenilos policlorados (BPC). Mientras que los apartados (d) y (e) se obliga a las partes a promover el uso de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) y Mejores Prácticas Ambientales (MPA) para prevenir y reducir las liberaciones de COP en fuentes nuevas.

En asociación con el artículo 63 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos el artículo 67 fracción III habla sobre la imposibilidad de confinar BPC en México; asimismo, el mismo artículo, fracción IX, prohíbe “la incineración de residuos peligrosos que sean o contengan compuestos orgánicos persistentes y bioacumulables; plaguicidas organoclorados; así como baterías y acumuladores usados que contengan metales tóxicos; siempre y cuando exista en el país alguna otra tecnología disponible que cause menor impacto y riesgo ambiental”.

De otra parte, es muy importante recalcar que fue hasta la publicación de la LGEEPA en 1988 cuando se empezó a tratar estos temas a profundidad en la normatividad; por lo que, sin interés de justificar, se debería considerar la contextualidad del fenómeno para evitar caer en juicios sustentados en información incorrecta.

El manejo de los residuos peligrosos en la frontera México-Estados Unidos es un tema vibrante y que constantemente se actualiza, siendo una de las razones de ello, el importante

36 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre del 2003.

flujo comercial que se presenta a lo largo de la región. En ese marco, el problema de los residuos en la frontera es un caso representativo a nivel mundial porque es difícil encontrar dos economías tan integradas como la mexicana y la estadounidense³⁷.

Como ejemplo una nota del diario El Universal (21/06/91) titulada “Serán 28 los basureros tóxicos en la franja fronteriza”³⁸ en la que se relata cómo una comisión de legisladores mexicanos denunció la instalación de los tiraderos de residuos peligrosos en territorio estadounidense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos³⁹.

Dentro del universo de casos que han ocurrido en la frontera, el de la recicladora Alco Pacífico en 1987, del lado mexicano de la frontera, fue importante en su momento porque comprendía el almacenamiento ilegal de baterías con residuos de plomo en las inmediaciones del municipio de Tijuana.

La especialista Dra. Gabriela Muñoz detalló al ser entrevistada que el plomo es un metal pesado que no es necesario para el funcionamiento normal de los seres vivos, el cual debido a su tamaño y carga puede sustituir al calcio, siendo uno de sus sitios de acumulación, los tejidos óseos.

Así mismo, la exposición a la contaminación con plomo puede producir daños en los riñones, en el tracto gastrointestinal, en el sistema reproductor, así como en los órganos productores de sangre y el sistema nervioso.

Otro caso significativo para la frontera se presentó en 1988 en la ciudad de Kettleman City, California, en donde se instaló un incinerador de residuos peligrosos de la empresa Chemical

37 México es uno de los principales socios comerciales de los Estados Unidos, mientras que este último es el principal destino de las exportaciones mexicanas con un impresionante 87 % dirigiéndose hacia el mercado del vecino país del norte (Benítez, 2006).

38 “La instalación de estos basureros violará el Convenio entre Estados Unidos y México sobre la Cooperación para la Protección y el Mejoramiento del Medio Ambiente en el Área Fronteriza”. Nota periodística Excelsior (27/12/91).

39 Aunado a lo anterior, se publicó una nota en el diario Uno más Uno (28/02/92) en la cual se hablaba de un “inadecuado almacenaje de residuos peligrosos en 450 lugares a lo largo de la frontera sur de E.U.”

Waste Management⁴⁰, a lo que la población, compuesta principalmente por migrantes mexicanos dedicados a la agricultura, se opuso públicamente hasta que fue revocada la licencia de funcionamiento por las autoridades californianas.

A su vez, en los condados texanos⁴¹ de Sierra Blanca, Spofford y Dryden, colindantes con la frontera de México, se buscó instalar basureros para residuos peligrosos, a lo que la entonces diputada (PRD) Liliana Flores⁴², respondió estableciendo una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por “negligencia, indiferencia, permisibilidad y anuencia de las autoridades responsables de la inminente construcción de los confinamientos de residuos peligrosos⁴³”.

Sería complicado describir el historial completo de casos relacionados con la instalación de plantas de tratamiento de residuos peligrosos a lo largo de la frontera, empero, la complejidad, tanto en políticas públicas como en lo que se refiere a impactos ambientales negativos y riesgos para la salud de la población fronteriza, merece un análisis desde el punto de vista de los especialistas, el cual se presenta a continuación.

40 Según una nota periodística de La Jornada (12/03/90) *Chemical Waste Management, Inc.* era en ese momento una de las empresas más polémicas de su campo, pues había sido acusada en diversas ocasiones de prácticas negligentes y diversas organizaciones del sector civil habían interpuesto demandas en los Estados Unidos.

41 Durante ese periodo era gobernadora de Texas la republicana Ann Richards. En una nota de Excelsior (14/03/92) titulada “Exigen posponer los proyectos de desechos tóxicos en Texas: Envían carta a Ann Richards diputados y varios alcaldes”, se hace referencia a la influencia de la gobernadora y de la Comisión de Agua Texana (otorgaba los permisos de uso de suelo) con respecto a la instalación de los basureros.

42 Nota periodística publicada en el diario La Jornada el 09 de Septiembre de 1992.

43 Se cuenta con una copia del documento fechada 15 de Septiembre de 1992.

3.6. La problemática de los residuos peligrosos en la frontera desde la óptica de los especialistas

A pesar de la oposición de diversos sectores de la ciudadanía en torno a la instalación y operación de plantas de tratamiento de residuos peligrosos, es un hecho que la generación de los mismos es ineludible actualmente por razones tecnológicas y de economía⁴⁴.

La economía y sus procesos productivos demandan insumos de forma acelerada para elaborar productos que el mercado demanda y devora con voracidad. La ciencia responde a las demandas del sector económico, pero no siempre tiene la capacidad para desarrollar tecnologías que no generen riesgos para la población o impactos sobre el medio, o dichas tecnologías son desarrolladas pero su costo es elevado.

Los residuos de los procesos productivos en muchas ocasiones son peligrosos, sin embargo, el mercado no incluye en el precio de los productos resultantes el costo por disposición de los residuos, o la normatividad es laxa, lo que significa un problema para las autoridades en términos de política pública, ya que una necesidad de mercado produce un problema socioambiental.

El mercado difícilmente limitara su espiral de consumo; los agentes económicos probablemente no renunciarán al capital económico resultante de la satisfacción de las necesidades del mercado; el campo científico, hasta el momento, no ha tenido la capacidad de desarrollar tecnologías que al mismo tiempo limiten los riesgos para la población y el medio, y sean económicas para los empresarios. Todo esto es la disyuntiva que se va a tratar en este breve apartado.

44 Las activistas de Proyecto Fronterizo Laurie Silvan y Margarita Díaz en una entrevista realizada el 08 de Febrero de 2010 expresaron que si bien su organización se manifestó en contra de la instalación del incinerador, es necesario encontrar soluciones distintas al denominado “*not in my back yard*” por medio de la negociación y los avances tecnológicos.

Para la especialista en contaminación atmosférica, Dra. Gabriela Muñoz, si bien el problema del manejo de los residuos peligrosos es complejo y no proyecta salidas fáciles, es necesario considerar en todo momento la seguridad de la población y los potenciales impactos negativos sobre el medio, ya que aunque se ha desarrollado tecnología de punta que minimiza la probabilidad de una contingencia, las condiciones ambientales (topográficas, geológicas, atmosféricas, etcétera.) influirán de forma determinante en la probabilidad de riesgo, por lo que ésta no puede ser solamente una decisión de tipo político o sustentada en un razonamiento economicista⁴⁵.

El caso de los incineradores de askareles representa la problemática del manejo de residuos peligrosos de forma efectiva porque contiene los elementos de riesgo e impacto ambiental, junto con la imperiosa necesidad de resolver un problema social que no puede desaparecer por sí mismo.

Por lo tanto, se presenta una contra argumentación entre los especialistas entrevistados relacionada con los incineradores de askareles, considerando los riesgos e impactos potenciales sobre el medio, para intentar iluminar a manera de síntesis, un panorama general del campo científico con respecto a este tema.

Para José Carmelo Zavala, quien es propietario de una empresa de manejo de residuos peligrosos, si hay un elemento de riesgo para la población fronteriza cercana a un incinerador de residuos peligrosos con respecto a las emisiones atmosféricas, el principal a considerar debería ser la transportación de los residuos, teniendo en cuenta que los mismos provendrían de distintas partes de la república⁴⁶, por lo que su traslado incrementaría el riesgo sobre la población y los potenciales impactos ambientales.

45 Actualmente se cuenta con cuatro métodos para la eliminación de los residuos peligrosos; los cuales consisten en la reducción de la generación, como tecnologías limpias, reciclaje; el tratamiento físico, químico y biológico; la incineración y finalmente, el confinamiento controlado.

46 La Comisión Federal de Electricidad (CFE) iba a ser el principal cliente del incinerador de askareles, ya que a nivel nacional no había durante el periodo la tecnología necesaria para el manejo del contaminante, por lo que era necesario exportarlo a otros países, lo que implicada un gasto importante.

En contraparte, para el Dr. Roberto Sánchez, el proceso de incineración que se lleva a cabo en una planta de residuos peligrosos implicaría una serie de emisiones atmosféricas potenciales, sobre todo en caso de un incinerador que no cumpla con sus procesos de forma efectiva, en particular la presencia de dioxinas, elemento tóxico fuerte y cancerígeno; además, los residuos podrían ser bioacumulados por el suelo afectando a la población aledaña en el largo plazo.

La perspectiva del Dr. Sánchez es importante porque apunta hacia una de las principales críticas hacia el método de incineración en el caso de los askareles, la emisión de dioxinas y furanos, y el impacto que podrían tener sobre la población. El especialista explicó que las dioxinas son compuestos químicos obtenidos a partir de procesos de combustión que implican la presencia de cloro, por lo que son químicamente estables, poco biodegradables y ampliamente solubles en grasas, por lo que tienen una tendencia a acumularse en tejidos orgánicos y suelos.

Agregando que los furanos son compuestos orgánicos en la forma de un líquido claro y sin color, teniendo como sus principales características la alta inflamabilidad y la volatilidad, con un punto de ebullición cercano al de la temperatura ambiente. Estos compuestos son altamente tóxicos y pueden llegar a ser cancerígenos.

El principal problema de la incineración de askareles es que el proceso implica especificaciones tecnológicas y niveles de efectividad importantes, como una temperatura elevada y constante en el horno, ya que de otra forma los cambios en la intensidad de la flama del incinerador podrían generar las condiciones para que se produzcan reacciones químicas que tengan como resultado dioxinas y furanos, los cuales en caso de ser emitidos por la chimenea del incinerador podrían transportarse hacia áreas pobladas y por su repetida exposición causar estragos en la población aledaña.

Un punto relevante es el que tiene que ver con el hecho de que en la naturaleza no se encuentra el concepto de frontera, por lo que las barreras humanas no limitan la capacidad de un contaminante para transportarse por diferentes vías. Es por eso que la comprensión de los sistemas de cuencas atmosféricas e hidrológicas que comparten las ciudades fronterizas podría

ser un elemento fundamental en torno al establecimiento de estrategias que reduzcan el riesgo para la población y el impacto ambiental de los residuos peligrosos.

En otro sentido, el Dr. Sánchez consideró que deberían valorarse otro tipo de impactos y riesgos al tratar el tema de los residuos peligrosos, como por ejemplo los impactos económicos sobre un territorio en el que se instala un incinerador de residuos peligrosos, pues la contaminación del suelo y los riesgos a la salud de la población demeritan su valor⁴⁷, sobre todo en áreas de tipo turístico o sitios de potencial expansión urbana”.

De tal forma se construye en el campo académico una discusión en torno a las posibilidades de la tecnología relacionada con el manejo de los residuos peligrosos y la reducción de los riesgos para la ciudadanía y el control de los impactos ambientales, empero, la descripción del siguiente capítulo reflejará el hecho de que en política ambiental no necesariamente se incluyen los argumentos científicos en el proceso de toma de decisiones.

47 En una nota publicada en el semanario Zeta (13 al 19 de Marzo de 1992) el presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana dijo que “aún antes de empezar a funcionar, el incinerador estaba teniendo efectos (...) (como) la baja en los precios de los terrenos de Playas de Tijuana”.

3.7. El proceso de instalación del incinerador de residuos peligrosos en Tijuana

En combinación con la disputa por establecer un discurso dominante en el campo científico, se presentaron modificaciones en la estructura de poder del campo político administrativo, por lo que se abrieron algunas ventanas de oportunidad bajo el espectro de una normatividad ambiental institucionalmente incipiente.

En otras palabras, en el contexto de cambio político y su relación con una problemática ambiental, se presentan oportunidades, las cuales pueden ser aprovechadas por agentes de diversos campos, bajo la lógica de distintas especies de capital.

Es así como a mediados de la década del ochenta un agente del campo económico, como Guillermo Ruiz Hernández⁴⁸, aprovecharía la ventana de oportunidad en el campo político⁴⁹, e iba a establecer una relación profesional con la empresa Chemical Waste Management Inc.

Es importante mencionar que Ruiz Hernández era propietario de la planta de reciclaje denominada Tratamientos Industriales de Tijuana, S.A. (Titisa)⁵⁰, filial de la trasnacional norteamericana, por lo que la instalación del incinerador produjo una reacción de rechazo en algunos agentes del campo social.

Como resultado de la triangulación Sedue, Chemical Waste Management, Inc. y Titisa, se iba a constituir un convenio entre Sedue y esta última⁵¹, para la instalación de un incinerador de

48 Reconocido abogado y empresario de la ciudad de Tijuana, entre otras cosas por un supuesto vínculo con la familia Arellano-Félix, como lo han descrito distintas crónicas periodísticas publicadas en el Semanario Zeta (s/f).

49 A pesar de no ser un marco teórico, sino un recuento de los hechos, es ineludible observar la ejemplificación en la práctica del concepto de “polo heterodoxo” construido por Pierre Bourdieu. Ya que un agente proveniente del campo económico habría de influir en la lógica interna de otro campo, creando así un polo de poder, el cual habría de retar el esquema dóxico del campo político.

50 Titisa estaba ubicada en el Km. 14.5 de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, con licencia de funcionamiento (1989) No. 4453 para almacenar, recolectar, transportar y tratar, así como para el reciclaje y reuso de residuos peligrosos (consultar anexo vii. Ubicación geográfica del incinerador TEESA).

51 El Dr. Carlos De la Parra se enteró del convenio Sedue-TEESA porque apareció información al respecto en una columna publicada en La Jornada por el Dr. Iván Restrepo en Octubre de 1988. Posteriormente, como lo relata en la entrevista, De la Parra llamó por teléfono a Martha Rocha, reconocida activista y presidenta de la ONG Amas de Casa de Playas de Tijuana, para informarle al respecto. Así un agente del campo académico tendría una influencia sobre el campo social.

otra empresa propiedad de Ruiz Hernández de nombre Tijuana Equilibrio Ecológico, S.A. (TEESA).

Es fundamental reflejar que aunque la planta Titisa y lo que sería el incinerador TEESA estarían instaladas en el mismo predio, las funciones serían distintas, así como los riesgos e impactos potenciales. Titisa era una empresa instalada y operante, mientras que el incinerador TEESA iniciaba los trámites para operar.

La primera era un planta de reciclaje de residuos peligrosos, TEESA en cambio iba a ser un incinerador de residuos peligrosos, específicamente askareles; en referencia, Carmelo Zavala, explicó que los riesgos e impactos ambientales de Titisa no podían compararse con los relacionados a TEESA, ya que un manejo deficiente del incinerador, inclusive cuestiones relacionadas con el error humano, podrían derivar en una situación muy riesgosa tanto para la población como para el medio.

El incinerador era un equipo semimóvil, lo que permitía su traslado según las necesidades del propietario, instalándose en el Km. 14.5 de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, específicamente en el área denominada como La Jolla. El equipo funcionaba por medio de cuatro subsistemas primarios: un Sistema de alimentación de desechos, en donde se daba entrada a los residuos peligrosos, siendo este el punto inicial del sistema; un incinerador de horno rotatorio y remoción de ceniza, encargado de eliminar los residuos y dejar como producto la ceniza; un quemador secundario para apoyar el proceso; así como un sistema lavador de gases.

El trámite institucional de TEESA se inició con la Ley Federal de Protección al Ambiente (antecedente directo de la LGEEPA) en un ambiente denominado por Jorge Escobar como “una especie de conformidad en las reuniones binacionales de las autoridades mexicanas bajo el contexto de las negociaciones del TLCAN”, es decir, las autoridades federales tenían el objetivo de que se firmara el tratado, por lo que estaban dispuestas a modificar decididamente su política ambiental.

Según Escobar, las autoridades ambientales mexicanas se habrían confiado en sus cálculos relativos al caso TEESA, considerando que al ser una zona fronteriza, podría proyectarse como deseable el aplicar la normatividad del país más estricto con base en el TLCAN, es decir, Estados Unidos, lo que a sus ojos mejoraría la imagen del proyecto y sus probabilidades de que funcionamiento.

Dicha expectativa, concordante con la necesidad de manejar los residuos peligrosos, en particular los askareles de la CFE, habría hecho pensar a las autoridades mexicanas que el sitio que mejor respondería a la aplicación de las leyes relacionadas con impactos ambientales sería la frontera norte.

Desde otra óptica, con base en los argumentos de Escobar, es factible que para el gobierno federal hubiera parecido conveniente ubicar en la frontera los proyectos relacionados con residuos peligrosos por dos razones.

Primero, porque -según Escobar- la tradición centralista condicionó la visión de las autoridades federales, es decir, el gobierno elaboró un razonamiento en el que la frontera era un lugar distante donde la sociedad no sería capaz de organizarse y enfrentar las decisiones del gobierno. Y de otra parte, se pensaba que la cortina de humo que articularía la política ambiental binacional sustentada en el TLCAN, funcionaría como un elemento legitimador de sus decisiones.

Es fundamental comprender que durante el periodo de estudio no había una normatividad para incineradores, por lo que se pretendía calificar el proyecto con estándares de los acuerdos binacionales. Empero, si había un procedimiento que cumplir en el marco de la Sedue.

El primer paso del procedimiento era la autorización del proyecto en relación con la evaluación de impacto ambiental ante la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto ambiental de la Sedue. En referencia, Escobar, detalló que el proyecto pasó por la delegación en Baja California, empero, por el tipo y tamaño del proyecto, se habría enviado al Distrito Federal, directamente a la Dirección de Ordenamiento Ecológico de la Sedue.

Posteriormente, en la ciudad de México se emitió la autorización de impacto ambiental, previo estudio de impacto ambiental⁵², por lo que el siguiente paso habría sido obtener la licencia de funcionamiento, la cual se tramitaba en la Dirección de Prevención y Control de la Contaminación.

En el caso de Titisa se contaba con una licencia de funcionamiento, mientras que el incinerador no obtuvo una licencia para operar, ya que inclusive, de la normatividad requerida por las autoridades ambientales, TEESA consiguió solamente el permiso de uso de suelo emitido por el gobierno del estado de Baja California⁵³.

En la tabla 4 se presentan los requerimientos establecidos en la normatividad, el orden de gobierno encargado de emitirlos, así como los permisos obtenidos por TEESA.

Tabla 4. Requerimientos normativos para la instalación de un incinerador de residuos peligrosos

Requerimiento	Permiso obtenido	Orden de Gobierno	Dependencia
Uso de suelo	X	Estado	SAHOPE
Licencia de operación		Federal	Sedue
Evaluación de Impacto Ambiental	X	Federal	Sedue
Autorización de impacto ambiental	X	Federal	Sedue

Fuente: Elaboración propia con información recabada en entrevistas.

Para el Dr. Carlos de la Parra, las razones por las que TEESA no obtuvo una licencia de operación tuvieron que ver en primer lugar con la forma como se hacía política pública durante el periodo, es decir, en un sentido discrecional y en muchas ocasiones por encima de la ley; en segundo lugar, era común que primero se instalaran los proyectos, para cumplir *a posteriori* con los requisitos inscritos en la normatividad. El Dr. Carlos de la Parra lo resume de forma jocosa en la siguiente oración: "... al rato hacemos el papeleo".

52 El cual fue realizado por el Ingeniero Químico Francisco Cota, primer Director General de TEESA.

53 Según De la Parra, en este caso no era necesario obtener un permiso de construcción por el hecho de que era un incinerador semimóvil que se instalaría en el predio de Titisa.

El párrafo anterior denota como se desarrollaban las “estrategias de reproducción” de la estructura de poder en el campo político. Al establecerse el convenio para la instalación del incinerador TEESA, el paso siguiente hubiera sido el cumplimiento de la normatividad ambiental, incluidas las evaluaciones y manifestaciones de impacto ambiental; sin embargo, la versión “tradicional” de la política mexicana si bien construía instrumentos y mecanismos institucionales, se movilizaba por medio de prácticas informales, como la no aplicación estricta de la normatividad y la discrecionalidad por parte de los funcionarios.

Es relevante hacer notar que TEESA no contaba con una licencia de funcionamiento, lo cual se mantuvo en secreto, como lo demuestran las declaraciones del secretario Patricio Chirinos, Titular de Sedue (1988-92), quien aludía a una licencia “condicionada”, cuando el término⁵⁴ desde la perspectiva de Carlos de la Parra, no era una figura jurídica presente en el marco de la normatividad ambiental⁵⁵.

Desde otro punto de vista, el biólogo Jorge Escobar, ex subdelegado de Sedue, explicó que la figura de licencia condicionada es una especie de vacío legal por medio del cual las autoridades se benefician, pues aunque no tiene un sustento en la normatividad: “Todas las licencias son condicionadas ya que vienen acompañadas de condicionantes establecidas con base operación, (por lo que) en todas las licencias viene la leyenda "en caso de encontrar rechazo justificado esta licencia se dará por cancelada”.

En ese sentido, la figura de “licencia condicionada” es un mecanismo por medio del cual la autoridad se “lava las manos” y se permite un espacio “fuera de la ley” para maniobrar con base a las necesidades del campo político y las ventanas de oportunidad. Lo que es un abismo legal, pues quien determina la justificación de una cancelación no son las leyes, sino el interés político.

54 En una nota del 03 de Abril de 1992 del Diario 29 el secretario de Sedue utilizó el término “licencia condicionada”.

55 El Dr. Carlos de la Parra, ex delegado de Semarnat, refutó en la entrevista realizada con motivo de esta investigación, la legalidad de la figura denominada por Chirinos “licencia condicionada”.

En otro sentido, en una nota publicada por el semanario Zeta (13 al 19 de Marzo de 1992) se hacía referencia a una visita de Chirinos a la ciudad de Tijuana, en la que habría declarado como necesarios los incineradores de desechos tóxicos, pero que no se otorgaría el permiso de operación a Chemical Waste Management, a menos que se cumplieran con todas las pruebas requeridas para su nuevo incinerador⁵⁶.

Por su parte Mario Raúl Taméz, responsable de Planeación y Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Tijuana⁵⁷ expresó en una nota publicada por El Sol de Tijuana el 18 de Marzo de 1992, que fue un gran error de las autoridades estatales y federales el haber extendido los permisos (operación) y la licencia de uso de suelo a la Chemical Waste Management sin haber consultado a la sociedad y a la autoridad local; por lo que es posible comprender que inclusive los actores gubernamentales no estuvieran informados con respecto a la inexistencia de la licencia de operación.

Una prueba relativa a la no existencia de una licencia de funcionamiento (operación) fue el hecho de que algunos activistas, como Carlos de la Parra y Roberto Díaz, presidente del Foro Ecologista de Baja California, junto con Amas de Casa de Playas de Tijuana⁵⁸, solicitaran un amparo en contra de TEESA, el cual habría sido negado por improcedencia, ya que Sedue no había expedido una licencia de funcionamiento, por lo que se llegó a la conclusión de que el incinerador no podría iniciar operaciones en Tijuana.

También se llevó a cabo un juicio de interdicto⁵⁹, el cual fue promovido por los regidores Jorge Ortiz Díaz y Víctor Martínez Cruz pertenecientes al gobierno del alcalde Carlos

56 En nota publicada el 28/02/92, Chirinos declaró: “Esa planta reúne los requisitos que el gobierno mexicano solicita para poder instalarse, presentó el proyecto de impacto ambiental y, de acuerdo con la normatividad ecológica, no representa riesgo para la población”.

57 El Arq. Héctor Castellanos habría sido cesado del cargo en 1991.

58 Organización no gubernamental (ONG) dirigida por Martha Rocha. Fue una de las principales organizaciones del movimiento, junto con el Movimiento Ecologista de Baja California y el Foro Ecologista de Baja California.

59 En comunicación personal el abogado y funcionario del Poder Judicial de la Federación, Cristian Mariche, definió juicio de interdicto como un “juicio breve y por vía rápida en el que se resuelve una reclamación provisional por daño inminente o por alguna posesión”.

Montejo Favela⁶⁰; sin embargo, activistas como Carlos de la Parra⁶¹ y Roberto Díaz, consideraron que el mismo fue un ejercicio político para liberar tensión sobre la administración municipal, ya que se dejaron correr las fechas y se agotó el recurso de forma poco clara.

En palabras de Roberto Díaz, Tijuana carecía de gobierno municipal, y en su opinión el cabildo no debió desistirse de representar a los residentes de Playas. Esto coincide con lo que relató Carlos de la Parra en torno a la irrupción de algunos miembros del movimiento en el cabildo para solicitar al mismo que los representara en el juicio de interdicto⁶²; según De la Parra, al irrumpir en la sesión de cabildo, los regidores se negaron a sus peticiones, empero, tras dialogar, accedieron a representar a los sectores ciudadanos que exigían la no instalación del incinerador.

Posteriormente, Carlos Montejo Favela expresó al respecto que “se habían agotado las instancias legales para la reubicación (de las plantas)”, y que “aunque el gobierno a su cargo tenía la facultad legal para oponerse a la apertura de las tratadoras de residuos tóxicos, la palabra final la tenía el gobierno federal”.

En una nota publicada en Diario 29 (03/05/92) Montejo también declaró: “Ya oímos a las señoras e intervenimos jurídicamente, la respuesta está en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología”. Sin embargo, lo anterior no fue considerado por el movimiento como una buena respuesta, ya que en la misma nota Amas de Casa de Playas de Tijuana y el Foro Ecológico de Baja California expresaron su descontento calificando al alcalde como “poco serio”, por lo que desde su perspectiva “el XIII ayuntamiento (...) traicionó en su lucha en Pro de la reubicación (del incinerador)”.

60 Nota en el Mexicano 04 de Marzo de 1992, titulada “Los regidores de XIII Ayuntamiento de Tijuana Jorge Ortiz Díaz y Víctor Martínez Cruz, ratificaron ayer la determinación del cabildo tijuanaense de seguir adelante, en el juicio de interdicto en contra de las plantas Titisa y TEESA”.

61 Columna publicada en La Jornada (s/f), además durante la entrevista el agente reiteró la declaración del periódico.

62 Nota del periódico “Baja California” (04/03/92) titulada “En forma abrupta se suspendió la sesión ordinaria de cabildo”.

Es pertinente detallar en este punto que el gobierno de Montejo Favela estaba profundamente dividido en el interior, como se puede observar en los constantes cambios de funcionarios de alto rango⁶³; además, siendo el primer gobierno de extracción panista en la ciudad, tenía dos frentes de combate: por un lado con la oposición, y en otro sentido con otras facciones panistas que buscaban posicionarse; lo que producía -según Montejo- un “efecto parálisis” en el gobierno municipal.

A pesar de la negativa del gobierno federal a las peticiones de los grupos ambientalistas, especialistas como el Dr. Roberto Sánchez o Dr. Carlos de la Parra, manifestaron que la zona en la que se iba a instalar el incinerador era inadecuada desde la perspectiva de los riesgos para la salud y los impactos ambientales negativos.

Para Sánchez, el incinerador implicaba un mayor nivel de riesgo para la población, ya que la tecnología utilizada para incinerar (durante el periodo de estudio) presentaba fallas como la inconsistencia de la flama o las emisiones no registradas.

En complemento, el ex subdelegado de Sedue, Jorge Escobar, señaló que durante el periodo de estudio no existía una eficiente zonificación de la ciudad (carta urbana) con base a los usos del suelo, es decir, la ciudad no contaba con un ordenamiento urbano con base a las necesidades, funciones y tipos de actividades económicas de los habitantes, por lo que a pesar de que en la evaluación de impacto ambiental se solicitaba al interesado proponer alternativas de ubicación para el proyecto, la zonificación no contemplaba (como tampoco lo contempla actualmente) el establecimiento planificado de proyectos relacionados con plantas de manejo de residuos peligrosos, y particularmente los incineradores.

De otra parte, el biólogo Jorge Escobar arguyó que “la ubicación del incinerador era buena, aunque no la óptima; ya que uno de los principales elementos para la selección de sitios que tienen que ver con la calidad del aire es la meteorología; por lo que en términos ambientales,

63 Como ejemplo del alto nivel de despido de funcionarios se presenta un ejemplo: Hubo cuatro funcionarios en el cargo de Secretario General de Ayuntamiento: Alejandro González Alcocer, Juan Francisco Franco Ríos, Carlos Martín Gutiérrez, Alberto Sandoval Franco.

la meteorología de la zona costera es la que mejor se puede pronosticar y con la que mejor se pueden establecer escenarios de contaminación, y reducir los riesgos”.

A lo que Escobar agregó que la ubicación “era buena porque estaba en una microcuenca en cañada, lo que le permitía limitar la dispersión del contaminante, permitiendo implementar medidas para proteger a la población”. Sin embargo, para el ex subdelegado de Sedue, el principal argumento de los que se oponían a la instalación era que no existían los estudios específicos para la planta.

Desde otra perspectiva, el subsecretario de Ecología de la Sedue, Sergio Reyes Luján, afirmó en una visita a Tijuana que el incinerador no representaba un peligro, ya que el “peligro existe al tener miles de transformadores de la Comisión Federal de Electricidad con aceites refrigerantes en bodegas, que al volcarse pueden derramarse y contaminar la tierra”⁶⁴.

En respuesta a las declaraciones de Reyes Luján, la Dra. Lilia Albert, especialista en toxicología, declaró que “no hay en el mundo ningún incinerador que sea capaz y seguro para producir una llama uniforme durante nueve segundos, y que la tecnología no ha superado hasta hoy las deficiencias de incineradores defectuosos que al quemar los askareles, producen dioxinas, que son elementos químicos más fuertes que los mismos askareles”⁶⁵.

64 Nota periodística publicada en el semanario Presencia del 24 al 30 de Noviembre de 1991 con información recopilada del diario La Jornada.

65 Nota periodística publicada en el semanario Presencia del 24 al 30 de Noviembre de 1991 con información recopilada del diario La Jornada.

En la Tabla 5 se muestran algunos de los principales riesgos potenciales en torno a la operación de un incinerador de residuos peligrosos durante el periodo de estudio⁶⁶.

Tabla 5. Riesgos potenciales del proceso de incineración de residuos peligrosos

Riesgos potenciales de un Incinerador	Resultado	Riesgo Salud	Impacto ambiental
Combustión incompleta	Emisión de dioxinas y furanos	X	X
Escasa eficiencia en los sistemas de tratamiento	Emisión de dioxinas y furanos	X	X
Incorrecta operación de la planta	Exposición de operarios	X	
Disposición incorrecta de cenizas	Exposición a cenizas	X	X
Manejo inadecuado de lodos	Exposición a lodos	X	X

Fuente: Elaboración propia con información de especialistas entrevistados

Entre los riesgos enumerados se encuentra la combustión incompleta, proceso que tiene que ver con la incapacidad del incinerador para sostener la temperatura de forma estable (como se menciona más arriba), lo que permite interactuar con la atmosfera a algunos compuestos incluidos en los askareles, lo que generaría reacciones químicas que posibilitarían la emisión de dioxinas y furanos.

Es importante considerar que a pesar de la eficiencia actual de los incineradores, cercana al 100 %, durante el periodo de estudio las deficiencias eran mayores, por lo que los riesgos se incrementaban. Según la *Environmental Protection Agency* (EPA) se debe alcanzar como mínimo una destrucción del 99,99 % para los compuestos, es decir, que no más del 0,01 % de la sustancia utilizada puede ser emitida a la atmósfera. En caso de incinerar BPC o dioxinas el porcentaje de destrucción debe alcanzar el 99,9999 %.

En lo que se refiere a la emisión de cenizas y lodos, se busca controlar el grado de incineración midiendo el contenido de carbono en las escorias y cenizas. Según la Comunidad Europea este contenido no puede superar el 3 %.

⁶⁶ Es importante considerar que en tiempos recientes se ha desarrollado tecnología que limita algunos de estos riesgos.

A pesar de los riesgos explicitados por los especialistas, el ex alcalde de Tijuana, Carlos Montejo Favela, se inclinó a supeditar su accionar al del gobernador Ruffo Appel, quien nunca estuvo muy interesado en el incinerador o al menos no lo expresó públicamente⁶⁷; mientras que director de Desarrollo Urbano y Ecología, Héctor Castellanos, relacionó la ubicación del incinerador con una decisión unilateral del gobierno federal, por lo que “habría sido imposible negar el permiso de uso de suelo para las autoridades estatales⁶⁸”.

Las razones por las que el permiso de uso de suelo fue entregado en el caso por las autoridades estatales tuvo que ver -según Escobar- con la “costumbre” de pasadas administraciones según la cual todos los proyectos a instalarse fuera de la ciudad, solicitaban el permiso del uso de suelo a las autoridades estatales, en este caso la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado (SAHOPE), específicamente a la dirección de Asentamientos Humanos.

Desde la óptica empresarial, la Chemical Waste Management, empresa que buscó instalar el incinerador en Kettleman City, California, con resultados negativos, ya que un juez del condado de San Joaquín había prohibido la instalación, ahora negociaba con el gobierno federal para instalarlo en Tijuana⁶⁹, junto con otros dos incineradores ubicados en Jalisco y Veracruz⁷⁰.

Bajo esta lógica, el proyecto de instalación del incinerador en Tijuana sería una respuesta de la Chemical Waste Management a la sentencia del juez, ya que la normatividad ambiental mexicana, a pesar de encontrarse en un proceso de crecimiento y profundización, era laxa en

67 El Dr. Carlos de la Parra hizo referencia a la desatención de Ruffo Appel relacionándola con su formación empresarial, así como con la actitud poco incluyente del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con respecto a los temas de índole federal. Según De la Parra, cuando Ruffo se enteró de la cancelación de la licencia de operación del incinerador, “se encabronó”.

68 En este caso el permiso de uso de suelo fue otorgado por el gobierno del estado durante el periodo del gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera (1983-86).

69 En una nota publicada en el diario El Norte (Monterrey) se estableció el vínculo entre el caso Kettleman City y TEESA: “Un incinerador de sustancias químicas que provoca problemas de tipo canceroso funcionará en Tijuana, Baja California, porque en San Joaquín, California, no se autorizó su funcionamiento por un juez del Condado de Kings”.

70 Nota publicada en La Jornada el 26 de Febrero de 1992. En otra Nota, publicada el 23/02/92 en El Porvenir (Diario de Monterrey) se destacaba que una corte californiana había rechazado el proyecto del incinerador en Kettleman City porque “consideró que la empresa encargada del mismo no estaba (tomando en cuenta) los impactos ambientales que causaría”.

comparación con las leyes norteamericanas⁷¹. De tal forma, un proyecto que había sido considerado por las autoridades estadounidenses como riesgoso para la salud de la población sería adoptado por las autoridades mexicanas como viable.

Posteriormente, en un desplegado publicado en el Semanario Zeta (13-19 de Marzo de 1992) la transnacional hizo pública su postura y expresó que “la empresa no (era) responsable de los daños a la salud que se le (imputaban) ya que el incinerador no (era) una fuente contaminante (sic) y aún no inicia (ba) su operación”. Expresando también que “la incineración no contamina, al no tratar los residuos si se contamina, tratemos a los residuos para evitar contaminación”.

El argumento de la corporación internacional se sustentaba en la lógica de que los residuos no tratados son residuos peligrosos para el medio y la población, a lo que había que responder por medio de la implementación de procesos tecnológicos dirigidos a tratar los residuos.

La postura de la Chemical Waste Management, coincidía relativamente con la del gobierno federal⁷², y era en cambio la contraparte de los especialistas De la Parra y Sánchez, quienes de forma individual dijeron haber revisado la manifestación de impacto ambiental, misma que nunca se hizo pública, siendo el documento, desde su perspectiva, limitado y poco efectivo en la proyección de los impactos ambientales.

Mientras que por su parte, Jorge Escobar, detalló que “la manifestación de impacto ambiental era típica de la época, por lo que dejaba mucho que desear, ya que la revisión de recursos naturales y la revisión de riesgos era muy pobre. (Por otra parte) lo que era sólido era la descripción de proceso y las tecnologías de control de la contaminación. La cuenca binacional no estaba atendida, ni los riesgos (ambientales)”.

71 Jorge Escobar afirmó en entrevista que el incinerador si se había trasladado de Kettleman City, aportando una perspectiva interesante: “el traslado del incinerador de Kettleman City a Tijuana, tras el juicio, era algo normal y coherente con la práctica de los agentes económicos que se dedican a ese negocio. Sobre todo considerando la vida útil de los incineradores y el costo, así como la normatividad laxa (visualizada desde la óptica de un agente económico como una ventana de oportunidad), provocaba que los empresarios buscaran reubicar su negocio”.

72 En la misma entrevista, Escobar argumentó que “TEESA le apostaba mucho al respaldo de la autoridad”.

De tal forma se configuraron en el campo de poder las posiciones de los agentes con base a las especies de capital, determinándose posiciones dominantes y dominadas, bajo la lógica de estrategias de reproducción de la estructura de poder. Con esto no se busca afirmar que el campo de poder se reproduce implícitamente con base a estrategias inevitables; al contrario, ya que a pesar de que existe una estructura de dominio, la misma puede verse modificada por las acciones de los agentes. Es entonces cuando se hace visible la importancia del campo social y en particular de los grupos que buscan subvertir el orden establecido de las cosas.

Retomando lo planteado en el primer apartado, el campo político enfrentaba cambios en su estructura, por lo que se abrió un espacio en la estructura de poder, el cual los gobiernos estatales y municipales buscaron cubrir; empero, el momento histórico de la política mexicana, incluida la proyección internacional resultante del TLCAN y la presión política que implicaba, construyeron un escenario en el cual el férreo control del gobierno central se vería cuestionado por la conformación de una serie de movimientos sociales urbanos bajo la temática del ambientalismo.

3.8. La construcción del movimiento ambientalista en oposición al incinerador

Como respuesta a la instalación del incinerador TEESA se constituyó un movimiento ciudadano compuesto por agentes provenientes de los sectores académico, social, así como económico; movimiento que presentaba una gran flexibilidad en lo que se refiere a la diversidad de posturas y estrategias que podía asumir en torno a la consecución de sus objetivos.

Los agentes del campo académico eran principalmente investigadores de El Colegio de la Frontera Norte, como el Dr. Roberto Sánchez o el Dr. Carlos de la Parra, quienes asesoraban a las ONG, lo que no implicaba que hubiera distancia entre el trabajo práctico del movimiento, es decir, entre lo relacionado con el posicionamiento de las demandas a través de la movilización, y el trabajo relacionado con la elaboración del discurso. Al contrario, los académicos del movimiento participaron en las actividades de movilización de forma proactiva.

De otra parte, los agentes del campo económico, tenían la característica de ser empresarios relacionados de alguna manera con la problemática ambiental, como el Ing. José Carmelo Zavala, quien era propietario de una planta de tratamiento de residuos peligrosos. Algunos actores formaban parte de varios campos, siendo este el caso de Zavala, pues junto con labor empresarial, había sido académico en El Colef y en UABC.

La composición del movimiento también incluía agentes relacionados con el campo político-administrativo, como la Diputada del PRD Liliana Flores Benavides, quien se opuso a la instalación de las plantas de manejo de residuos peligrosos en la frontera de México con los Estados Unidos.

Se debe analizar en el caso de los agentes de gobierno la manera cómo influye en su comportamiento el formar parte de un sector del campo político-administrativo dominado, es decir, como afecta al agente el ser miembro de la oposición en términos de su respuesta a la postura de los agentes del sector dominador del campo, o sea, el partido en el poder a nivel federal.

A su vez, el movimiento se nutrió de activistas pertenecientes al campo social, como por ejemplo, las Amas de Casa de Playas de Tijuana A.C. o el Foro Ecologista de Baja California. Los grupos ciudadanos estaban afincados principalmente en la delegación Playas de Tijuana, por lo que tenían gran interés en evitar la instalación del incinerador en las inmediaciones de la misma.

Aunado a lo anterior, el movimiento estaba constituido en su mayoría por agentes provenientes principalmente de la clase media de la delegación de Playas de Tijuana⁷³, quienes realizaban estrategias en torno a sus distintas especies de capital con el objetivo de enfrentar las decisiones de agentes pertenecientes a otros campos.

73 Delegación ubicada al noroeste del municipio de Tijuana, caracterizada por ser un suburbio de clase media.

En este trabajo se utiliza la definición de clase social⁷⁴ de Bourdieu (1980:100) en la que se explica que en términos sociológicos los individuos son similares cuando son el producto de las mismas “condiciones objetivas y están dotados del mismo habitus”; de ahí que existe una mayor probabilidad de que individuos formen una clase cuando “han hecho las mismas experiencias y en el mismo orden”.

En esta definición se pueden encontrar ecos de Max Weber, quien definió la clase social con base a tres conceptos: estatus económico, estatus político y prestigio; lo que determinaría en parte las condiciones objetivas de las que habla Pierre Bourdieu.

El primero se refiere a la riqueza definida por los ingresos económicos; el segundo al poder, es decir, a la capacidad para determinar la voluntad de otros con respecto a nuestro interés; y el tercero a la capacidad que un individuo tendría para influir sobre los demás a través de una propiedad “carismática”.

Entonces la clase media estaría definida como un grupo de agentes que presentan similitudes resultantes de las condiciones objetivas del espacio social que habitan y el habitus que se ha ido formando a lo largo de sus vidas; por lo que no solo debe considerarse un ingreso económico para definir la clase media, aunque quizás esta especie de capital sea la que determine principalmente la condición de los agentes.

Debería considerarse el capital social de los agentes, es decir, la capacidad para establecer redes sociales y beneficiarse de las reciprocidades que resultan de las mismas en el marco de la obtención de objetivos mutuos; así como el capital cultural que tiene que ver con cuestiones que van desde la percepción de la manifestación del sistema de valores en cuestiones como el arte y su potencial modificación, hasta la adquisición de un título académico o nobiliario.

Aunado al capital simbólico que tiene que ver con la capacidad para transformar la calidad arbitraria del tipo de capital que se posee en una calidad natural, es decir, considerar que una

74 Se evito la definición de clase social de Karl Marx por el hecho de que se sustenta principalmente en el capital económico, dejando de lado otros tipos de capital (cultural, social, simbólico).

riqueza económica, por ejemplo, proviene de una estratificación natural de la sociedad y no de una configuración arbitraria de los sucesos sociales.

Por lo tanto, las especies de capital de los ejemplos, económico y cultural, sirven para que los agentes se posicionen en un campo e influyan en el sistema de valores imperante (Doxa), conservándolo o modificándolo, lo que les permite colaborar en la determinación del sentido de las cosas, es decir, las reglas del juego.

Todo tiene un sentido simbólico. Las especies de capital son especies de capital simbólico. Sin embargo, en el momento en que un agente logra posicionar de forma dominante su “principio jerarquizante” en el campo, o sea, su tipo de poder como el poder dominante, es capaz de estructurar el sentido de dominio de las relaciones sociales hasta que llega otro agente con otra especie de capital y modifica el orden establecido.

Recapitulando, el movimiento ambientalista estaba compuesto en un primer sentido por agentes provenientes de diversos campos, lo que aportaba diferentes especies de capital al esfuerzo colectivo, las cuales podían utilizarse en las estrategias orientadas a la consecución de sus demandas.

En otro sentido, los agentes que conformaban el movimiento ambientalista provenían de la clase media, por lo que -siguiendo a Bourdieu que sigue a Weber- detentaban tanto capital económico, como social, y cultural, de forma representativa, lo que les permitiría interactuar con otros agentes en el espacio social, establecer relaciones de dominio, y posicionar sus demandas de forma efectiva.

En llanos términos, el movimiento contaba con un capital económico importante⁷⁵, el cual le permitía influir sobre otros agentes, así como contar con el tiempo necesario para desarrollar estrategias y ponerlas en práctica. Si se observa el caso de un movimiento social configurado por agentes del proletariado, son fundamentales tanto los recursos económicos como el recurso tiempo, ya que bajo riesgo de crudeza, los individuos de las clases bajas no tendrían la

75 Es interesante observar que las colonias proletarias y subproletarias que estaban ubicadas en los alrededores del incinerador no se organizaron, ni formaron parte del movimiento social.

capacidad para sustentar a sus familias por un tiempo prolongado sin volver a su trabajo, el cual normalmente es controlado por los agentes a los que precisamente buscan enfrentar.

Las huelgas laborales son ejemplo de esto, sin embargo, la efectividad de las mismas no es motivo de esta investigación, a lo que es necesario agregar que si bien es posible en teoría ser efectivo en el posicionamiento de las demandas, tanto para un movimiento proletario como para un movimiento de clase media, la distribución social de la riqueza favorece al segundo, lo que si bien no determina mecánicamente su efectividad, si le permite establecer vínculos y actuar en campos difícilmente asequibles para el proletariado.

Continuando con el ejemplo anterior, es factible decir que el movimiento ambientalista contaba con un capital social que le permitía sostener relaciones con agentes económicos y políticos, así como una importante vinculación con los medios de comunicación⁷⁶ y con organizaciones civiles estadounidenses⁷⁷.

De otra parte, el capital cultural del movimiento tenía que ver con los títulos académicos que portaban una gran cantidad de sus miembros, sobre todo en las áreas relacionadas con los estudios sobre medio ambiente y política pública; característica que facilitaba tanto el diálogo con los agentes económicos y políticos, como la discusión de temas que normalmente los movimientos sociales no tendrían capacidad de discutir.

A la vez, el historial académico de los miembros del movimiento ambientalista les permitía explicar mejor sus demandas en los medios de comunicación y en los foros de discusión que se organizaron al respecto. Ergo, el capital cultural no era uniforme en el movimiento, siendo

76 Un ejemplo es que tanto Amas de Casa como el Foro Ecologista de Baja California lograban posicionarse en la prensa escrita con relativa facilidad. Ver notas periodísticas: El Sol de Tijuana (04/03/92), Diario 29 (29/02/92) y (02/03/92), La Jornada (28/02/92).

77 Desde la perspectiva de Carlos de la Parra, el movimiento ambientalista contra el incinerador se gestó primordialmente del lado mexicano de la frontera, aunque si existía una relación intermitente con ONG internacionales como Greenpeace y estadounidenses como la Environmental Health Coalición. El interés de Green Peace es claro en la nota titulada “Pretenden expandir sus proyectos de desechos tóxicos a México” publicada por Excélsior 30 de Marzo de 1992. En una nota de La Jornada (29/03/92), en la que se tomaba información del New York Times, se explicaba que se estaba fortaleciendo una alianza binacional contra los tiraderos de residuos peligrosos en Texas.

ejemplo de esto el hecho de que la líder de la ONG Amas de Casa de Playas de Tijuana, Martha Rocha, no tenía un título universitario.

La diversidad de especies de capital permitía al movimiento construir múltiples estrategias que representaban los intereses que componían las demandas del movimiento. Lo que no necesariamente significa que el movimiento fuera un organismo social sin una jerarquía de objetivos coherente, sino que había, dada la diversidad del mismo, enfoques variados alrededor de la demanda principal.

En otro orden de ideas, el movimiento de Tijuana formaba parte de una estructura más amplia, en términos geográficos y de intereses, como lo fue el movimiento ambientalista binacional en oposición a las plantas de tratamiento de residuos peligrosos que se gestó a lo largo de la frontera México-Estados Unidos; recogiendo experiencias de Ciudad Juárez⁷⁸, Ciudad Acuña⁷⁹ y Monterrey⁸⁰; así como las de algunas ciudades estadounidenses californianas y texanas⁸¹.

El formar parte de un meta movimiento a escala fronteriza era una propiedad importante para el movimiento, permitiéndole utilizar sus especies de capital en un mayor espacio geográfico para proyectar sus demandas, coordinándose con agentes de otros estados o inclusive del otro lado de la frontera, y posicionando sus demandas en el plano más amplio.

Las siguientes tablas nos muestran las tendencias de las notas periodísticas durante 1992 relacionadas con la influencia del movimiento en diferentes escalas geográficas. Se eligió este año por el hecho de que fue el más significativo en referencia a la publicación de notas relacionadas con el caso y porque durante ese periodo se desarrollaron los principales acontecimientos para el caso de estudio.

78 El Universal (30/05/92) “Iniciaron en Juárez lucha contra el cementerio nuclear”.

79 Zócalo (Ciudad Acuña) “Protesta contra EU por basurero toxico: afectaría a PN-E. Pass, Acuña-Del Río”.

80 El Universal (21/06/92) “Serán 28 los basureros tóxicos en la franja fronteriza”, nota periodística centrada en el movimiento ambientalista de Monterrey.

81 La Jornada (30/05/92) “Rechazan pobladores la compra del rancho Faskin: La operación, para instalar un basurero nuclear en ese predio texano”.

En la tabla 6 se observa como las publicaciones a nivel local (Baja California) se incrementaron de Febrero a Marzo de 1992; incremento que se enfocaría en el apoyo al movimiento, sobre todo en Marzo, aunque el mayor apoyo se daría en Abril. Es importante considerar que aunque Abril fue un mes importante para el criterio "Apoyo" (A), también lo sería para el criterio "Rechazo" con casi la mitad de las notas publicadas por el primer criterio.

Tabla 6. Tendencia Local

Tendencia Local	1992											
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Apoyo al movimiento		2	10	13								
Rechazo al movimiento			2	5								
No determinado				2								

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica

Por su parte, la tabla 7, proyecta un apoyo irrestricto para el movimiento, sobre todo para el mes de Marzo. En esta tabla se consideraron notas publicadas en diarios nacionales, manteniéndose un interés o enfoque relacionado con el movimiento ambientalista que se desarrollaba en Tijuana.

Tabla 7. Tendencia nacional (movimiento local)

Tendencia Nacional (Movimiento local)	1992											
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Apoyo al movimiento	1	6	10	1								
Rechazo al movimiento												
No determinado												

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica

La tabla 8 es interesante porque toma en cuenta notas publicadas en periódicos de distribución nacional, pero con un enfoque orientado hacia el metamovimiento que se desarrollaba paralelo al movimiento de Tijuana a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. En esta tabla la tendencia es el apoyo al movimiento, sobre todo en el mes de Marzo, coincidiendo con la tabla "tendencia nacional (movimiento local).

Tabla 8. Tendencia nacional (metamovimiento)

Tendencia Nacional (Metamovimiento)	1992											
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Apoyo al movimiento	1	3	16	1	1	1			5			
Rechazo al movimiento			1									
No determinado			2									

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica

Finalmente, la tabla 9 denominada "tendencia internacional" refleja un nivel bajo de atención con respecto al movimiento ambientalista, aunque las notas recabadas coinciden con las dos tablas anteriores al posicionar marzo como el periodo de mayor interés mediático.

Tabla 9. Tendencia internacional

Tendencia Internacional	1992											
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Apoyo al movimiento			2									
Rechazo al movimiento												
No determinado												

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica

La siguiente tabla 10, recopila la información de las anteriores, aportando un enfoque global en relación con los niveles y los criterios.

Tabla 10. Escala

Escala	A	%	R	%	N.D.	%	T
Local	25	73,53 %	7	20,59 %	2	5,88 %	34
Nacional	18	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	18
Nacional Meta	28	90,32 %	1	3,23 %	2	6,45 %	31
Internacional	2	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	2
Total	73	85,88 %	8	9,41 %	4	4,71 %	85

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica

Del universo de notas analizadas (85), 73 correspondieron al criterio "Apoyo", 8 a "Rechazo", y 4 a "No determinado". Del total de notas, 34 pertenecen al nivel "Local", 18 a "Nacional (enfoque local)", 31 a "Nacional (Metamovimiento)", y 2 a "Internacional". A su vez, el criterio (A) representó el 85.88% del total, mientras que (R) y (N.D.) un 9.41% y un 4.71% respectivamente. Siendo lo más relevante el importante apoyo al movimiento social en los cuatro niveles analizados.

En concordancia con lo anterior, Roberto Sánchez, quien fuera uno de los líderes sociales, argumentó que el movimiento contra TEESA fue parte de un movimiento a escala fronteriza, que si bien no trabajaba en conjunto y bajo las mismas estrategias, si entablaba una comunicación más o menos constante resultado del interés a lo largo de la frontera por comprender lo que estaba pasando en Tijuana⁸².

En algunas ocasiones si fue posible encontrar estrategias que manifestaban la integración de un movimiento a lo largo de la frontera, como por ejemplo el bloqueo a los cruces fronterizos de distintas ciudades, el cual se realizó el 21 de Marzo y contó con la participación de sectores sociales de Ciudad Juárez, Tijuana y Ciudad Acuña⁸³.

Inclusive un sector campo político-administrativo estuvo presente en dicho bloqueo, ya que la diputada Liliana Flores Benavides⁸⁴ se interesó por el caso desde 1992, como lo refleja el siguiente comentario de tipo personal:

"Fíjense la gravedad de la declaración (en relación con una declaración de Miguel Ángel Yunes en la que expresaba que México no podía presionar a Estados Unidos para que no

82 La vinculación del movimiento en contra del incinerador se comprende mejor a la luz de las notas periodísticas que se publicaron en periódicos como Zócalo de Ciudad Acuña, El Norte de Monterrey y El Diario de Ciudad Juárez (no se cita porque las notas se han citado a lo largo del trabajo). En los mismos podía verse con frecuencia que los temas locales se entremezclaban con los temas de otras ciudades, por lo que los medios de comunicación fueron un importante vehículo para el movimiento ambiental binacional. Junto con los periódicos de las ciudades mexicanas, también se recopilaron notas relacionadas con el caso de estudio en el New York Times y en el San Antonio Express.

83 Se hace referencia en Diario 29 (02/03/92), El Porvenir (09/03/92) y en una columna de Carlos de la Parra publicada en La Jornada (s/f).

84 Agente gubernamental que formaba parte del grupo dominado del campo político (oposición), por lo que estaba posicionada en contra de las decisiones del grupo dominante (oficialismo).

instalara plantas de tratamiento de residuos en la frontera⁸⁵). Por eso no nos queda más que la organización ciudadana. Es vital el acto del 21 de Marzo⁸⁶.

Las demandas del movimiento ambientalista quedaron inscritas en un manifiesto el cual se transcribe a continuación⁸⁷:

“Las asociaciones y sociedades abajo firmantes, habiendo revisado los antecedentes de las plantas de desechos tóxicos de la compañía Chemical Waste Management que evidencian el constante mal funcionamiento de las mismas por sus múltiples irregularidades, accidentes, violaciones a leyes y reglamentos, etcétera. y que por lo mismo el pueblo y las autoridades del vecino país del norte obstaculizan y desaprueban cada vez más sus actividades, ya que a ellos no les pueden seguir engañando con sus promesas de seguridad, y considerando la amplia información existente sobre los efectos de las sustancias de que nuestro ambiente se impregnará (sic) como resultado de esas actividades, efectos como el cáncer, malformaciones fetales, esterilidad, inmunodeficiencia y otros daños permanentes”.

La postura del movimiento ambientalista se basaba en una demanda fundamental, el estricto cumplimiento del Tratado de La Paz donde se establecía que toda los residuos peligrosos deberían regresar a su país de origen; además, manifestaba su inconformidad con la presencia de las plantas tan cerca de la población y las zonas urbanas, por lo que se exigía la clausura de las mismas a la brevedad.

Aunado a esto el movimiento consideraba que las autoridades estadounidenses estaban presionando al gobierno mexicano, como lo afirmaba Roberto Díaz, quien dijo en una nota periodística que “no es posible que la Sedue consulte a su homólogo de la Environmental Protection Agency (EPA) para tomar una determinación con respecto a otorgar o negar la reubicación de la planta⁸⁸”.

85 La Jornada 04 de Marzo de 1992 titulada: “No presionará México contra la instalación de depósitos nucleares”.

86 El comentario es auténtico y se cuenta con una copia del mismo en una nota publicada en La Jornada el 04 de Marzo de 1992.

87 Se cuenta con una copia del manifiesto original del movimiento ambientalista en la cual se muestra la demanda de un sector ciudadano para que no se instale el incinerador.

88 Diario 29 (03/05/92) nota titulada “Agresiva manifestación de Amas de Casa de Playas de Tijuana”.

A diferencia de Roberto Díaz, Jorge Escobar consideraba que “los gringos se reían del manejo de los residuos peligros, sobre todo porque los residuos que se buscaba tratar eran mexicanos. No presionaban a las autoridades mexicanas porque no veían como opción que se creara una infraestructura en la frontera para mandar sus residuos, ya que desde 1988 se expidió un “Decreto de importación y exportación de residuos peligrosos”, el cual prohibía la importación de estos materiales con el objetivo de eliminarlos en plantas de tratamiento mexicanas”.

Considerando lo anterior, se propone que la efectividad del movimiento social para presionar a las autoridades federales y obtener sus demandas podría ser comprendida en un primer término a partir de la complejidad de los agentes que formaban parte del movimiento, es decir, considerando las especies de capital de los miembros y la clase social a la que pertenecían.

Para, en segundo término, tomar en cuenta la particularidad el contexto histórico relacionado con los procesos de apertura económica de México hacia el exterior (TLCAN, ACAAN, PIAF), con las implicaciones que este hecho tenía para la política ambiental; así como la ruptura o modificación de las reglas del sistema político-administrativo nacional, lo que permitía la inclusión de nuevos agentes en la competencia por el poder, incluida la sociedad organizada.

Tomando en consideración dichos argumentos, es probable que en algún momento del proceso de negociación e instalación del incinerador, la ventaja por la instalación del mismo se transformara en una desventaja para el agente gobierno; aunque también es probable que la ventaja obtenida por la no instalación se magnificara, sobre todo porque al “obedecer” la “voluntad popular” el gobierno federal podría presentarse como un gobierno democrático y sensible a la problemática del medio ambiente⁸⁹

Es así como se constituyó un movimiento social que se insertaba por su amplitud y complejidad en una lógica de lucha de poder y establecimiento de capital simbólico⁹⁰ en el

89 En una nota periodística del Diario 29 (27/02/92), titulada “Bienestar del pueblo sobre otros intereses”, el secretario Chirinos detalló la voluntad democrática del gobierno federal, cuando unos meses atrás no se había considerado la opinión de los ciudadanos en el caso TEESA.

90 El “capital simbólico” se comprende en esta investigación como un recurso por medio del cual el agente que logra posicionarse como dominante en el campo establece su tipo y volumen de capital y las

campo social, enfrentando en combate simbólico a las estructuras de poder imperantes, y en particular intentando modificar las “reglas del juego”.

3.9. Consecuencias de la movilización social

En el marco de la presión social que se estaba generando⁹¹, la decisión de cancelar o revocar la licencia de operación el dos de abril de 1992, sorprendió tanto como la llegada a Tijuana del secretario de Sedue⁹². Inclusive algunos de los miembros más activos del movimiento, como Carlos De la Parra, Roberto Sánchez, Roberto Díaz y José Carmelo Zavala enfatizaron por separado su sorpresa cuando el secretario Chirinos declaró públicamente la revocación de la licencia.

La presión social se observaba en la atención mediática que recibía el caso, como se puede ver en la siguiente tabla.

Tabla 11. Atención mediática (escala)

Atención mediática (Escala)	Frecuencia	%
Notas locales del total	34	40,00 %
Notas nacionales del total	18	21,18 %
Notas nacionales meta del total	31	36,47 %
Notas internacionales del total	2	2,35 %
Total	85	100,00 %

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica

Considerando que la frecuencia de las notas en los tres primeros niveles era importante, pero sobre todo en los niveles, local y nacional (metamovimiento). Esto quiere decir que había una gran atención mediática en el caso, inclusive a nivel nacional, lo que sin lugar a dudas tendría un efecto sobre las autoridades y sus decisiones.

consecuencias del mismo como algo natural -no arbitrario-, por lo que puede dar “sentido” a lo que ocurre en el campo.

91 La Jornada (21/03/92) “Gestionar la cancelación de los cementerios nucleares, piden más de cien grupos sociales: En un manifiesto colectivo exigirán al gobierno encabezar la inconformidad pública”.

92 “Bienestar del pueblo sobre otros intereses”, Diario 29 (27/02/92). “Desautorizan la incineración de askareles”, La Jornada (03/04/92).

En las siguientes tablas se muestran los criterios (A), (R), (N.D.), haciendo énfasis en el porcentaje alcanzado por cada uno en los cuatro niveles.

Tabla 12. Medios locales

Medios locales	Total	%
Apoyo	25	73,53 %
Rechazo	7	20,59 %
No Determinado	2	5,88 %
Total	34	73,53 %

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica

Tabla 13. Medios nacionales (Referencia local)

Medios nacionales (Referencia local)	Total	%
Apoyo	18	100,00 %
Rechazo	0	0,00 %
No Determinado	0	0,00 %
Total	18	100,00 %

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica

Tabla 14. Medios nacionales (Metamovimiento)

Medios nacionales (Metamovimiento)	Total	%
Apoyo	28	90,32 %
Rechazo	1	3,23 %
No Determinado	2	6,45 %
Total	31	100,00 %

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica

Tabla 15. Medios internacionales

Medios internacionales	Total	%
Apoyo	2	100,00 %
Rechazo	0	0,00 %
No Determinado	0	0,00 %
Total	2	100,00 %

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica

A partir de las tablas anteriores, es posible establecer una tendencia general en torno a la publicación de notas relacionadas con el movimiento, siendo claramente de apoyo a las demandas de los ciudadanos. En la siguiente tabla se resume el criterio "Apoyo", dando como resultado un 85.88 % del total de notas recabadas.

Tabla 16. Atención mediática (aceptación)

Atención mediática (Aceptación)	Total	%
Apoyo	73	85,88 %
Rechazo	8	9,41 %
No Determinado	4	4,71 %
Total	85	100,00 %

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica

La postura del gobierno se había modificado, por lo que desde ese momento estaba claro que el incinerador de askareles no podría instalarse en el lugar planificado. Y a pesar de que las razones de la revocación se relacionaron con dos causas principales⁹³,

A) Las condiciones en donde se operaría se habían modificado, esto con respecto al crecimiento demográfico y urbano de la delegación de Playas de Tijuana,

B) Se presentó extemporáneamente la manifestación de impacto ambiental.

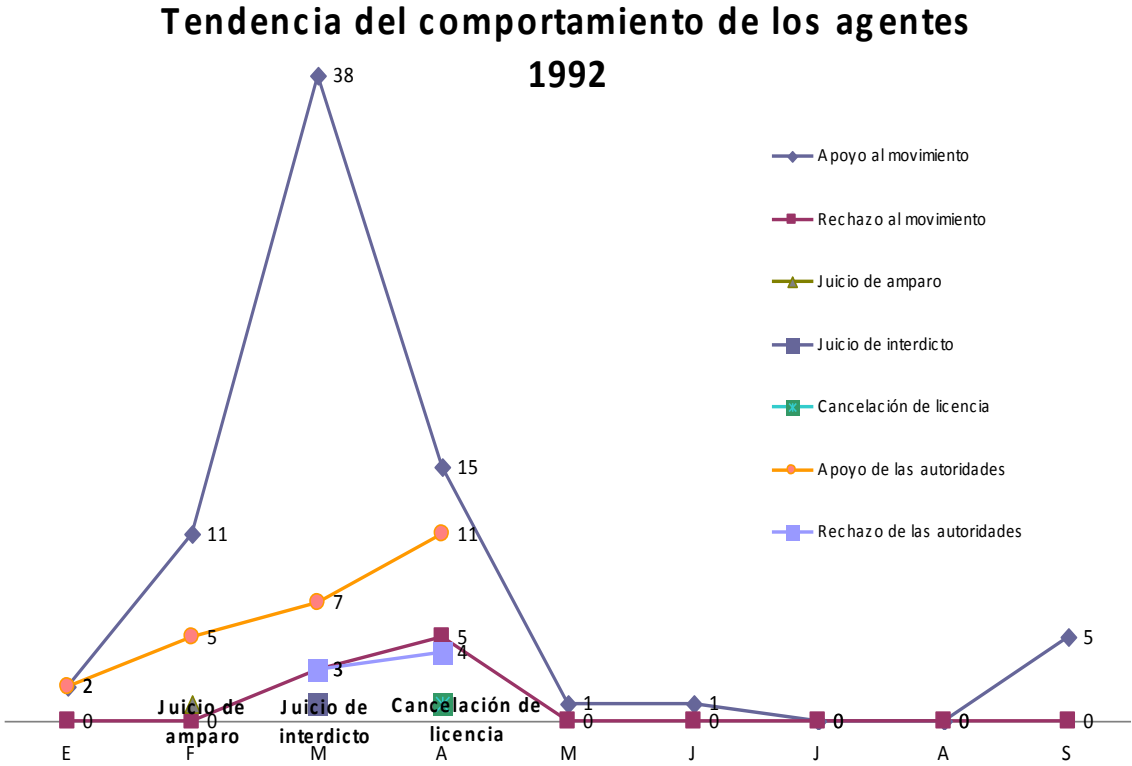
Según Jorge Escobar, "la causa de la revocación de la licencia fue el rechazo social del proyecto"⁹⁴. Aunque considera desde su perspectiva que la licencia de funcionamiento nunca fue expedida, por lo que se intuye una manipulación de la información por el secretario Chirinos⁹⁵.

93 Nota publicada en Diario 29 (03/04/92) titulada: "Revocada la licencia al incinerador de Playas de Tijuana".

94 Esto se relaciona con la leyenda en la que se explica que "en caso de encontrar rechazo justificado a esta licencia se dará por cancelada".

95 En algún momento se pensó que la decisión de Chirinos estaba relacionada con una estrategia del secretario para posicionarse en los medios en torno a su candidatura al gobierno de Veracruz, pero la opinión de Jorge Escobar es que la creación del PIAF atrajo una gran cantidad de recursos a Sedue, los cuales fueron utilizados para otras campañas políticas (no la de Chirinos) por vía de fondos ambientales para la frontera, los cuales no llegaban a la misma, sino que se regresaban a la capital en donde se redistribuían.

En la gráfica "tendencia del comportamiento de los agentes 1992" se visualiza el proceso de presión social que llevo a las autoridades a modificar su decisión y a no instalar el incinerador de askareles. En la gráfica se cruza la temporalidad de los procesos legales, la frecuencia mensual de notas, y la postura de las autoridades.



Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica y de entrevistas.

En la línea del tiempo se considera el apoyo al movimiento, la cual se fortalece, junto con el apoyo de las autoridades, en los meses de marzo y abril, teniendo su pico más importante sobre todo en marzo. Ambas líneas coinciden con los periodos en los cuales se desarrollaron procesos legales, juicio de amparo y juicio de interdicto; para concluir con la cancelación de la licencia de funcionamiento a principios de abril.

De otra parte, las líneas de rechazo al movimiento y rechazo de las autoridades, no fueron significativas cuantitativamente, empero, se reflejan con mayor fuerza también en los meses de marzo y abril, lo que posiblemente proyecta los mayores niveles de tensión entre las partes.

Al final, el objetivo principal del movimiento en oposición al incinerador se había cumplido, el incinerador no se había instalado, lo que serviría como un gran apoyo para el movimiento binacional a lo largo de la frontera.

Y aunque no están totalmente claras las razones que motivaron al gobierno federal para ceder ante la presión social, si es posible afirmar que hubiera sido muy complicado que el presidente modificara su decisión sin la presión que el movimiento ambientalista producía⁹⁶. La experiencia de Jorge Escobar fundamenta este punto, ya que desde su análisis, “sin movimiento el gobierno hubiera dejado funcionar el incinerador”⁹⁷.

Finalmente, el gobierno federal encontraría una solución al problema de los askareles de la CFE, siendo ésta la encapsulación y exportación de los BPC hacia Inglaterra, en donde se les estabilizó en una matriz sólida (cemento)⁹⁸.

96 Roberto Sánchez, Carlos de la Parra, Roberto Díaz, J. Carmelo Zavala y Laurie Silvan, llegaron individualmente a la conclusión de que hubiera sido muy difícil que el gobierno federal tomara la decisión de no instalar el incinerador bajo otro contexto, ajeno al movimiento social.

97 Aunque Escobar puso el dedo sobre la llaga cuando afirmó al ser entrevistado que “algunos activistas luego fueron funcionarios de la Chemical Waste Management, como Nashely López del Movimiento Ecologista de Baja California (Mebac), por lo que desde su perspectiva, se desarrollaba un juego de relaciones políticas dentro del movimiento social”.

98 Información proporcionada por Jorge Escobar.

IV. ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DEL MOVIMIENTO AMBIENTALISTA EN OPOSICIÓN AL INCINERADOR TEESA

El análisis se centra en la efectividad del movimiento ambientalista en oposición a la empresa TEESA. Movilización que ocurrió entre 1988 y 1992 en el municipio de Tijuana. Siendo la principal motivación del movimiento la percepción del riesgo sobre la salud de la población y de los impactos potenciales sobre el ambiente, resultantes de la instalación de un incinerador de residuos peligrosos en las inmediaciones de la delegación de Playas de Tijuana.

El movimiento tenía como objetivo general la no instalación del incinerador de residuos peligrosos y sus objetivos específicos se relacionaban con la distribución de capitales entre sus miembros y la forma como estos se utilizaron para presionar al gobierno; así como con estrategias orientadas por la vinculación con organizaciones internacionales; el uso de recursos legales y medios de comunicación; y finalmente, la participación en espacios o foros de diálogo en materia ambiental.

Analizándose el movimiento ambientalista según sus “inversiones” y “ganancias”, tomando en cuenta el hecho de que no siempre estos elementos representarán recursos económicos, sino otras especies de capital como el capital cultural, social, o simbólico. Las inversiones así podrían referirse tanto a cuestiones materiales, como dinero invertido o recibido, o también, no materiales, como asesoría o difusión en los medios.

Por otra parte, se hace particular énfasis en la producción y uso del capital simbólico del movimiento ambientalista. Proponiéndose que la modificación de las definiciones culturalmente compartidas imprimirá un sello específico a las luchas de poder, y daría la posibilidad de analizar la manera como una organización de este tipo construye estrategias para apoyarse en su capital simbólico y conseguir sus demandas.

De otra parte, también se estudia aquí el papel del contexto como una variable interviniente propuesta en el marco teórico (capítulo I). El contexto del caso como estructura que limita o permite la acción colectiva. Con características particulares que abren las probabilidades de

efectividad, o las cierran según las condiciones económicas, político-administrativas, y sociales que rodean al fenómeno social. Así, el contexto histórico del campo se complementa con la trayectoria cultural de un movimiento para explicitar la acción colectiva.

En ese sentido, en este capítulo se aplicarán al caso de estudio los presupuestos establecidos en el marco teórico, es decir, se utilizarán las herramientas conceptuales del modelo diseñado para analizar la efectividad del movimiento ambientalista en la consecución de sus objetivos y en su capacidad para cambiar la Doxa del campo (reglas del juego).

En el modelo se consideraron siete variables relacionadas con dos componentes, la diversidad de especies de capital y las estrategias de poder de los movimientos ambientalistas. A través de las variables de investigación se analiza el desarrollo de la movilización y su capacidad para ser efectivos.

El primer componente, diversidad de especies de capital, se divide en tres variables: capital económico, social, y cultural. Mientras que el segundo componente se estructura en cuatro variables relacionadas con la vinculación con organizaciones internacionales, la utilización de recursos legales, el uso de los medios de comunicación, así como la presentación de las demandas en foros de discusión internacionales.

De tal forma, el modelo buscaría determinar la efectividad del movimiento ambientalista con base en la diversidad recursos que este posee, considerando el capital económico, social, y cultural; en conjunto con la capacidad para movilizar dichos recursos en torno a estrategias dirigidas a obtener objetivos específicos. A continuación se presentan hipótesis y pruebas de hipótesis

4.1. Diversidad de especies de capital

4.1.1. Capital económico

4.1.1.1. Prueba de hipótesis

Hipótesis: El movimiento ambientalista contaba con una diversidad de especies de capital significativa, lo que le permitió movilizar el capital económico necesario para desarrollar una campaña de difusión de sus demandas relacionada con los medios de comunicación y la manifestación en espacios públicos, generando presión sobre las autoridades a modificar su decisión de instalar el incinerador.

Según la información recabada durante el trabajo de campo, el movimiento ambientalista tenía una fuente de recursos económicos significativa con respecto a las necesidades del movimiento, a partir de la inclusión de agentes pertenecientes principalmente a la clase media de la ciudad de Tijuana, Baja California.

Para la mayoría de los miembros del movimiento entrevistados durante el trabajo de campo, la organización estaba compuesta esencialmente por personas provenientes de la clase media afincados en el suburbio conocido como Playas de Tijuana, lo que incrementaba la capacidad del movimiento para desarrollar sus actividades en el marco de la movilización.

Considerando lo anterior, se interpreta que el hecho de que los agentes formaran parte de la clase media, permitía al movimiento ambientalista contar con un capital económico significativo para desarrollar estrategias de posicionamiento de sus demandas en distintas escalas geográficas, así como entablar relaciones con otros movimientos para realizar acciones conjuntas.

Es importante aclarar que la participación de un agente en un movimiento ambientalista implica la inversión constante de recursos económicos para desarrollar actividades relacionadas con el movimiento; así como el desgaste del recurso “tiempo”, el cual podría ser utilizado en otro tipo de actividades generadoras de recursos, por lo a su vez, de forma

indirecta, la inversión de tiempo en un movimiento social se traduce en una inversión indirecta de capital económico.

A su vez, el agente que invierte tiempo y capital económico en un movimiento ambientalista deberá tener la capacidad para solventar el hecho de no percibir una retribución de su inversión económica, al mismo tiempo que deja de percibir recursos económicos relacionados con actividades distintas a la movilización ciudadana.

En este punto es necesario diferencia entre los movimientos tradicionales y los nuevos movimientos sociales. Los tradicionales se guiaban por motivaciones relacionadas con la redistribución del capital y las luchas de clase. Los nuevos movimientos tienen motivaciones que no siempre se relacionan con el capital económico y por ende no se pueden explicar eficientemente utilizando la interpretación marxista de lucha de clases.

En ese sentido, la inversión de capital que pudiera realizar un movimiento tradicional tendría como ganancia una mejora en su nivel económico; mientras que un movimiento ambientalista que forma parte de los nuevos movimientos sociales invertiría sus especies de capital teniendo como objetivo (ganancia) no solamente la obtención de capital económico, sino también, cultural, social, y sobre todo, simbólico

Entonces las ganancias del movimiento ambientalista no siempre estarían representadas por motivaciones materialistas, sino que habría una arista ideológica en sus acciones y por ende su inversión en capital económico no estaría supeditada a la perspectiva marxista de lucha de clases; sino que sus ganancias se podrían reflejar en elementos no materialistas como una mejora en la calidad del aire, el agua, o el suelo.

El movimiento estaba formado por agentes que podrían tipificarse en cuatro categorías básicas, empresarios, académicos, políticos y líderes sociales de clase media; por lo que se entiende que los miembros contaban con por lo menos una fuente de recursos relativamente estable y un control sobre la disposición de su tiempo u horario.

Los agentes del sector académico eran investigadores en centros de investigación pública, los cuales desarrollaban, como parte de su trabajo, el seguimiento y asesoría, en el contexto de su participación en actividades relacionadas con el movimiento, por lo que no existía una pérdida de recursos, tanto económicos como en lo relacionado al tiempo; sino al contrario, los investigadores cumplían con una función en el movimiento y en el campo académico.

De otra parte, en lo que se refiere al campo político, uno de los agentes del movimiento detentaba el cargo de diputado federal durante el periodo de estudio; agente que por su posición en el espacio social tenía la capacidad para viajar, tanto en el país como fuera del mismo, e invertir tiempo y recursos económicos en el movimiento ambientalista. También está el caso de un agente que se había desempeñado como funcionario de SAHOPE y Sedue, y durante la movilización tenía un despacho de arquitectura, lo que le aportaba una relativa capacidad económica y relaciones sociales con el sector gobierno.

Otro ejemplo podría ser el del agente propietario de una empresa de manejo de residuos peligrosos, a la vez que fungía como catedrático universitario, lo que le facilitaba recursos económicos, conocimiento técnico sobre el tema de los residuos peligrosos, y relaciones tanto con la académica como con el sector económico en la rama de manejo de residuos peligrosos. Este agente tenía la capacidad para mediar en el diálogo con los agentes económicos que se oponían a las demandas del movimiento ambientalista.

Un caso interesante es el de los agentes de las ONG que participaban en el movimiento (Amas de Casa de Playas de Tijuana, Foro Ecológico de Baja California, etcétera.), quienes vivían en una zona de clase media y clase media alta, y contaban con recursos económicos suficientes para sostener actividades relacionadas con organizaciones no gubernamentales. Inclusive desde la perspectiva de algunos de los entrevistados, las ONG eran manejadas como un negocio y aportaban dividendos a sus propietarios.

El caso es *sui generis*, dado que las Amas de Casa de Playas de Tijuana realmente eran amas de casa, por lo que no tenían que cumplir con obligaciones de tipo laboral, ni horarios establecidos, fuera de sus actividades en el domicilio (lo que por su puesto es trabajo

respetable en sí). Una cualidad interesante de este grupo de agentes era que al ser amas de casa, legitimaban socialmente las demandas del movimiento desde la perspectiva de algunos sectores sociales y llamaban la atención de los medios de comunicación.

Junto con su capacidad económica y disponibilidad de horario, los agentes del movimiento tenían poder de decisión sobre sus acciones y una relativa independencia con respecto a las organizaciones o grupos sociales de los que formaban parte, es decir, el hecho de manifestarse en contra de un proyecto de gobierno no implicaba la pérdida de un empleo o un altercado con un superior en una empresa. Los agentes probablemente podían movilizarse y demandar al gobierno sin vulnerar de manera riesgosa su economía y su posición en el espacio social.

Además de su capacidad económica, el movimiento logró proyectar sus demandas en el plano local, nacional y binacional, ya que a lo largo de 1992 se publicaron 85 notas periodísticas relacionadas con el movimiento. Como resultado, es visible que la escala local fue importante en la proyección de sus demandas y la generación de presión sobre las autoridades, publicándose 34 notas; sin embargo, fue en el nivel nacional en donde se dio mayor atención al caso, con 49 notas publicadas (incluidas las del metamovimiento).

Por otra parte, la escala internacional no fue significativa, aunque es importante reconocer que el caso trascendió mínimamente las fronteras nacionales, sobre todo considerándose que existía un acuerdo binacional referente a la no instalación de plantas de manejo de residuos peligrosos a lo largo de la frontera (Acuerdo de la Paz).

Al respecto, se asocia la capacidad de difundir o proyectar las demandas del movimiento al hecho de que contaba con recursos económicos suficientes para desarrollar actividades relacionadas con la exposición de las demandas de manera constante en los medios de comunicación en diferentes escalas geográficas, así como la opción de viajar a otros estados de la república o a los Estados Unidos para vincularse con otros movimientos y organizaciones no gubernamentales similares y hacer un frente común.

Cuando se discute sobre los medios de comunicación nos referimos a los tradicionales (televisión, radio, prensa escrita), ya que las nuevas tecnologías de la información, si bien ya estaban siendo desarrolladas, no se habían masificado aún y por lo tanto no eran viables como herramientas de participación ciudadana.

En la tabla 11. “Atención mediática (escala)”, se refleja como el 40.00 % de las notas relativas a las actividades del movimiento se publicaron a nivel local, un 21.18 % a nivel nacional, pero con un enfoque hacia el movimiento local, mientras que a nivel nacional (metamovimiento), se dio un 36.47 %, lo que supera ampliamente el porcentaje de notas publicadas en Baja California. Lo anterior quiere decir que el movimiento no solo tenía la capacidad para expresar sus demandas al gobierno en Tijuana, o al estado, sino que podía proyectar sus demandas en la escala nacional, e inclusive en el orden binacional.

Las notas fueron publicadas en algunos de los principales diarios o semanarios a nivel nacional y también en periódicos de ciudades como el D.F., Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez, entre otras. Reflejando que el movimiento contaba con la capacidad económica para viajar a diferentes puntos de la república con el objetivo de manifestar sus demandas en diferentes contextos, aunado al establecimiento de relaciones con organizaciones nacionales e internacionales.

Aunque también en algunas ocasiones es posible que los periodistas se interesaran en el caso y viajaran a Tijuana, ergo, hay evidencia en las notas revisadas en trabajo de campo de que los agentes se trasladaron a otras ciudades para difundir su problemática y demandas; estableciendo vínculos con otros movimientos en oposición a proyectos de manejo de residuos peligrosos a lo largo de la frontera, aprendiendo de sus experiencias y compartiendo información, así como desarrollando en algunos casos estrategias conjuntas, lo que se enmarcó en el proceso de construcción de un meta movimiento de escala fronteriza e impactos binacionales.

La conformación del meta movimiento⁹⁹, cuestión fundamental para la generación de presión sobre las autoridades a nivel nacional, no hubiera sido posible si los agentes del movimiento de Tijuana no contaran con el capital económico suficiente para viajar y establecer dichos vínculos, además de sostenerlos durante el proceso de movilización.

En el anexo II, titulado “Publicaciones 1992” se presentan los diarios y semanarios en los que se publicaron notas periodísticas relativas al movimiento ambientalista, es interesante mostrar que las demandas del movimiento fueron difundidas en diversos estados y ciudades de México y los Estados Unidos.

Se comprende que la atención mediática nacional o binacional podría referirse al interés por un caso local llamativo o fuera de las prácticas sociales comunes, dado el contexto político autoritario y la escasa participación ciudadana durante el periodo de estudio. Empero, el movimiento desarrolló estrategias conjuntas tanto a nivel nacional como binacional con otros movimientos, es decir, estableció vínculos con grupos de agentes que estaban ubicados en otras ciudades del país o en el exterior, lo que sin lugar a dudas provocó que los medios de comunicación prestaran atención a sus demandas.

Aunado a lo anterior, el movimiento desarrolló procesos legales a nivel local e internacional, lo que a su vez implicó costos relativos a gastos económicos y a inversión de tiempo. Esto es visible sobre todo en el caso del proceso legal que se llevó a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde uno de los agentes del movimiento se trasladó en 1992 hacia la sede para exponer sus demandas.

El agente detentaba el cargo de diputado federal, por lo que podía cubrir los gastos de un traslado fuera del país, abordar el proceso legal desde una posición de autoridad o influencia al ser congresista, así como tener un mayor acceso a los medios de comunicación nacionales e internacionales.

⁹⁹ Se comprende por el término metamovimiento, la conjunción de agentes provenientes de diversos movimientos sociales bajo una temática general relativamente homogénea. No teniendo objetivos específicos comunes, pero si un conjunto de causas relativamente compartidas por los agentes. Basándose su relación en la complementariedad de sus postulados, en necesidades comunes e intercambio de recursos (capitales), así como en estrategias complementarias o inclusive comunes.

En otro sentido, la participación de un diputado federal en un movimiento social, su interés en el caso, pudo haber funcionado como un elemento legitimador de las demandas del movimiento para algunos sectores sociales, mientras que para otros pudo significar una amenaza y una señal de que era necesario dar una respuesta al movimiento ambientalista.

En contraparte, a nivel local se desarrollaron dos procesos legales, primero un juicio de interdicto y luego un juicio de amparo (ambos desarrollados en 1992). Para ambos procesos tuvo que invertirse dinero y tiempo, por lo que el capital económico de los agentes miembro fue determinante para llevar el proceso a un buen desenlace, lo que significó el incremento de presión sobre las autoridades.

Con base en la información recabada es posible establecer una vinculación entre la exposición mediática de los argumentos del movimiento en diferentes escalas geográficas, los procesos legales en contra de la instalación del incinerador, y el cambio de postura de las autoridades gubernamentales (ver gráfica titulada “Tendencia del comportamiento de los Agentes 1992” pág. 171).

Por lo que se explica el hecho de que la exposición de las demandas y el desarrollo de los procesos legales, difícilmente se hubieran podido llevar a cabo de forma exitosa sin contar con un capital económico significativo para funcionar como soporte a las estrategias del movimiento; lo que habría ido en detrimento de la capacidad del movimiento para presionar al gobierno.

Asimismo, la inversión de capital económico estaría enmarcada en ganancias potenciales, ya sean estas económicas o de otro tipo. De tal manera, los agentes del movimiento ambientalista invirtieron capital económico y obtuvieron como ganancia elementos relacionados con motivaciones ideológicas (no económicas), pero que sí tendrían un impacto económico indirecto. Cuestiones como la mejora de la calidad del aire (o su no contaminación), la disminución de la percepción del riesgo en la comunidad, la concientización de la ciudadanía, o evitar que las viviendas y los terrenos de los agentes pierdan valor en el mercado, representan indirectamente beneficios económicos para la población.

Es importante argumentar que el contexto de apertura económica y renovación de política ambiental (normatividad), facilitaron la relación entre el capital económico del movimiento y los resultados expresados en difusión de las demandas y presión sobre el gobierno. De haberse presentado la movilización bajo condiciones de sustitución de importaciones y una normatividad menos incluyente, las estrategias del movimiento potencialmente hubieran sido menos efectivas o se habrían enfrentado a mayores obstáculos

El capital económico del movimiento ambientalista se volvió importante porque el tema ambiental estaba en proceso de incluirse en la Doxa del campo con motivo de las negociaciones del TLCAN. El gobierno estaba interesado en “cuidar” los aspectos ambientales a nivel nacional, y estando localizado el incinerador en la frontera se volvía un punto llamativo a nivel internacional.

Por lo tanto, el capital económico del movimiento supero al capital económico de TEESA porque proyectó su potencial simbólico en el campo e influyó sobre el sentido del juego. Quizás en otro contexto el capital económico de una empresa como TEESA (filial de una transnacional), que a su vez resolvería un creciente problema del gobierno, el manejo de los residuos de la Comisión Federal de Electricidad, hubiera sido determinante para que las autoridades no cambiaran el curso de sus decisiones; pero el contexto descrito en el capítulo II, relacionado con la creciente debilidad del estado mexicano, la apertura comercial, el fortalecimiento normativo de la política ambiental, y el creciente interés de la ciudadanía por el medio ambiente, dieron un giro a la postura del gobierno.

Finalmente, se concluye, con base al proceso de análisis desarrollado, que el capital económico fue un factor determinante en la generación de presión sobre las autoridades, por lo que se puede afirmar que si influyó en la efectividad del movimiento ambientalista con respecto a la consecución de sus objetivos.

4.1.2. Capital social

4.1.2.1. Prueba de hipótesis

Hipótesis: El movimiento ambientalista contaba con una diversidad de especies de capital, lo que le permitió movilizar el capital social de sus miembros para establecer relaciones con el gobierno, el sector económico, así como otros movimientos sociales, facilitándose la proyección de sus demandas y la generación de presión sobre las autoridades para que modificaran su decisión de instalar el incinerador.

El movimiento ambientalista estaba compuesto por agentes pertenecientes a diferentes campos, los cuales contaban con diversas especies de capital. Los agentes provenían de los campos económico, académico, social, y político, por lo que sus recursos se podrían resumir en capital económico, capital social, así como capital cultural. Algunos agentes eran dueños de varias especies de capital por participar en más de un campo.

El contar con una diversidad de especies de capital favoreció al establecimiento de relaciones con agentes externos al movimiento, por lo que el capital social de los miembros sería utilizado como una herramienta para generar vínculos útiles con agentes diversos, los cuales en algunas ocasiones facilitarían el desarrollo de estrategias orientadas hacia la obtención de las demandas.

La composición del movimiento incluía académicos en áreas relacionadas con las ciencias naturales y las políticas públicas. Estos agentes sostenían relaciones con el sector gobierno, o con agentes académicos o políticos en otros estados del país; también tenían contacto con instituciones académicas o instituciones gubernamentales, nacionales e internacionales, así como con organizaciones no gubernamentales nacionales y en el exterior; lo que se presentaba como una herramienta útil para el movimiento ambientalista en cuestiones como la exposición de las demandas, la vinculación con agentes de interés para sus fines, o la obtención de recursos económicos y asesoría técnica.

Los vínculos de los agentes académicos con ONG internacionales, permitieron al movimiento ambientalista realizar, por ejemplo, viajes a los Estados Unidos, financiados por dichas organizaciones, para entrevistarse con movimientos sociales similares que les proporcionaron información técnica relacionada a las estrategias que en su caso habrían utilizado para presionar al gobierno.

Los agentes académicos serían clave en el análisis de la problemática del incinerador, el planteamiento de estrategias y los argumentos ante la opinión pública, y sobre todo en la exposición de las demandas en los medios de comunicación y en los foros de discusión locales relativos a la problemática o a los procesos de apertura económica.

El papel que jugaron algunos de los agentes académicos del movimiento en la elaboración del PIAF habría sido un elemento valioso para el movimiento, ya que en el foro se proyectaron sus demandas no solo a nivel nacional, sino en la escala binacional. En otro sentido, estos agentes permitieron al movimiento debatir con sus opositores en los foros de discusión organizados en Tijuana en relativas condiciones de igualdad en torno al conocimiento técnico del problema.

Lo anterior fue clave para la articulación de una red social de apoyo al movimiento, ya que al contar con agentes con experiencia en el manejo de residuos peligrosos, hubiera sido complicada una manipulación de la información relacionada con el incinerador; por lo que, dados los riesgos e impactos ambientales del mismo, diversos sectores de la población, los medios de comunicación, y otras organizaciones sociales, manifestaban su apoyo al movimiento o por lo menos no estaban en desacuerdo con sus demandas.

Es importante recalcar que el movimiento no era un ente homogéneo, por lo que existían agentes con diferentes posturas dentro del mismo, los cuales planteaban sus propios argumentos, distanciándose en algunas ocasiones del sector académico de la organización.

La capacidad del movimiento para presentar sus argumentos se reflejó sobre todo en la prensa escrita, en donde el 85.88 % (ver tabla 10. “Escala”) de las notas recabadas fueron de apoyo al

movimiento, lo que en este caso se asocia sobre todo a la capacidad para emitir las demandas y cuestionamientos de una manera que se percibía como legítima por otros agentes sociales.

La presentación de los argumentos del movimiento como legítimos se sustentaba en la composición del movimiento y en sus especies de capital. El contar con agentes del campo académico que legitimaban el discurso de la organización desde la perspectiva científica; o el conocimiento operativo y tecnológico de los empresarios relacionados con el manejo de residuos peligrosos; permitieron al movimiento construir apoyo social hacia su causa y vínculos sociales que fueron determinantes en la consecución de sus objetivos.

También la participación de agentes relacionados con el campo político aportó capital social útil sobre todo en el desarrollo de procesos legales y en el posicionamiento de las demandas en los medios de comunicación, ya que los agentes políticos contaban con un conocimiento de los entramados de la administración pública y desarrollaban relaciones habituales con los medios de comunicación y agentes de gobierno a nivel nacional e internacional.

Las ONG que formaban parte del movimiento brindaron relaciones sólidas con sectores de la población con los que trabajaban con regularidad en distintos proyectos ambientalistas; cuestión que incrementó la participación social en las actividades del movimiento ambientalista y generó presión sobre las autoridades.

La principal aportación de los grupos de activistas fue el liderazgo social que otros agentes del movimiento carecían, elemento que enfatizó la efectividad de la organización desde la perspectiva de la movilización masiva y el potencial incremento de los miembros del movimiento ambientalista.

En la gráfica “Tendencia del comportamiento de los agentes 1992” (capítulo II) se relaciona en el tiempo, de forma incremental, el apoyo reflejado en las notas periodísticas y los procesos legales que se llevaron a cabo, con el apoyo de las autoridades a las demandas del movimiento.

Cabe decir que el capital social fue la base por medio de la cual el movimiento se relacionó con agentes de diversos campos, particularmente con los medios de comunicación, lo que aunado a los procesos legales que se desarrollaron, generó presión sobre las autoridades. Un ejemplo de esto es que algunos de los agentes académicos se desempeñaban en el ámbito periodístico nacional como columnistas.

Es posible afirmar que los agentes invirtieron un importante capital social en el movimiento ambientalista, lo que a su vez proyectó, además del capital social resultante, algunas ganancias en capital cultural. Como por ejemplo, el prestigio adquirido tras la movilización, el cual ayudó a varios agentes a ocupar posiciones importantes en el campo económico, desarrollando empresas relacionadas con el tratamiento de los residuos peligrosos y la asesoría ambiental.

Algunos agentes del campo académico ocuparon posiciones en el campo político a nivel estatal, nacional, e internacional. De otra parte, los agentes del campo político adquirieron capital político (social) y lo aprovecharon para mejorar su posición. Igualmente, algunos agentes sociales (activistas) se ubicaron en el campo político con la intención de desarrollar una carrera, aunque los resultados fueron mixtos.

No cabe duda de que el movimiento ambientalista invirtió capital social, beneficiándose del mismo durante la movilización, y obteniendo ganancias para sus miembros. Sin embargo, es muy importante destacar que el manejo que se dio al capital social del movimiento fue esencialmente posible dado el contexto que se configuró durante el conflicto.

La apertura comercial con el exterior facilitó la relación con agentes útiles para el movimiento, como los medios de comunicación u otros movimientos. La efervescencia de los temas ambientales durante el periodo facilitó la relación con el meta-movimiento y la articulación de estrategias conjuntas. Los medios de comunicación tenían un gran interés en lo ambiental porque era uno de los principales temas de la firma del TLCAN. Por lo que se afirma que difícilmente la inversión de capital social se hubiera dado con la fluidez que se desarrolló bajo un contexto político menos abierto y sin el interés de diversos sectores de la población

En consecuencia se interpreta que el capital social permitió al movimiento desarrollar, a través de sus miembros, relaciones con el gobierno, otras organizaciones ambientalistas, y los medios de comunicación, cuestión que fue fundamental en la articulación de las estrategias orientadas a lograr los objetivos de la organización.

Concluyéndose con base en el análisis que el capital social fue un factor determinante en la generación de presión social sobre las autoridades para que modificaran su decisión de instalar el incinerador de BPC; por lo que habría sido un componente trascendental en lo que se refiere a la efectividad del movimiento ambientalista.

4.1.3. Capital cultural

4.1.3.1. Prueba de hipótesis

Hipótesis: El movimiento ambientalista contaba con una diversidad de especies de capital, lo que le permitió movilizar un capital cultural relacionado con la formación y ámbito laboral de sus miembros en torno a los estudios del medio ambiente y las políticas públicas, aunado al conocimiento técnico relacionado con el manejo de residuos peligrosos, generándose presión sobre las autoridades para que modificaran su decisión.

El movimiento ambientalista tenía entre sus filas agentes que poseían un capital cultural relacionado con el campo académico, económico (empresarial), y social (activismo organizado y política institucional). Los agentes académicos estaban orientados hacia las ciencias naturales, particularmente los estudios relacionados con la sustentabilidad urbana y el manejo de residuos peligrosos.

Los agentes económicos tenían conocimientos relacionados con el manejo de residuos peligrosos y la asesoría ambiental, siendo propietarios de empresas del ramo. Por otra parte, los agentes sociales eran activistas de ONG establecidas como Amas de Casa de Playas de Tijuana o el Foro Ecologista de Baja California, lo que aportaba conocimientos relacionados con la movilización ciudadana y la operación de una organización no institucional.

A su vez, los agentes del campo político-administrativo contribuían conocimiento del medio político y los mecanismos institucionales. Así como un sentido práctico del accionar de las autoridades, lo que sería muy favorable para la construcción de las estrategias de poder del movimiento ambientalista.

La compleja combinación de agentes miembro dio al movimiento social una capacidad de diálogo con agentes de varios campos; así como la posibilidad de exponer sus demandas tanto en medios de comunicación, como en foros técnicos en la escala local y binacional.

Recordemos que durante el periodo se negociaba la firma de PIAF, por lo que las organizaciones ambientalistas buscaban formar parte del proceso y utilizar el espacio para presionar al gobierno. Este aspecto del movimiento (a través del meta-movimiento) le dio la posibilidad de formar parte del diálogo que se llevaba a cabo a principios de la década del noventa en torno a la apertura comercial y sus implicaciones, particularmente en lo relativo a la política ambiental.

El contexto de constante debate entre las autoridades mexicanas y estadounidense, considerándose la inminente firma del TLCAN, aportó oportunidades para las organizaciones ambientalistas que deseaban exponer sus demandas, pero que bajo el sistema autoritario mexicano habían sido excluidas.

Los trabajos relacionados con los intentos por homogeneizar la política ambiental de ambas naciones se capitalizaron en los foros de diálogo relacionados con el PIAF. En estos foros las organizaciones y movimientos ambientalistas a lo largo de la frontera buscaron proyectar sus demandas para tener un mayor impacto sobre las decisiones de las autoridades.

Entre los agentes que debatían en los foros del PIAF se encontraban algunos de los miembros del movimiento en oposición al incinerador TEESA, o también, agentes relacionados indirectamente con el movimiento; situación que dio una ventaja al movimiento y le abrió el camino para presionar a las autoridades.

Es importante recalcar que el meta-movimiento ambientalista utilizó el foro del PIAF para exponer sus demandas en los medios de comunicación binacionales, ya que el evento llamaba la atención de los medios. De las 85 notas recabadas en trabajo de campo, 18 estaban relacionadas con el PIAF, lo que denota no solo un gran interés por los esfuerzos para mejorar las condiciones ambientales de la frontera, sino una estrategia del movimiento ambientalista enfocada en asociarse a las discusiones sobre el PIAF.

La importancia de la atención mediática en los foros de discusión o debate en los que participó el movimiento radica en que la mayoría de las notas que se publicaron como consecuencia eran de apoyo a las demandas de los ambientalistas (ver tabla 10. “Escala“), lo que sin lugar a dudas, como se confirmó en entrevistas a funcionarios públicos del periodo, tuvo un impacto en las decisiones que tomaron las autoridades al respecto.

En el plano local también se desarrollaron foros de diálogo y debate sobre la política ambiental, destacando los que sirvieron para dirimir el conflicto relacionado con el incinerador de residuos peligrosos. En estos debates las partes interesadas, gobierno, empresarios, y activistas ambientales, presentaron sus argumentos y dialogaron sobre las posibles soluciones a la problemática.

La inversión de capital cultural en foros de diálogo permitió al movimiento ambientalista desarrollar su capital cultural, expresado en conocimiento sobre temas ambientales, económicos, y de política pública; proyectando sus demandas en un mayor espectro social, y presionando a las autoridades desde diferentes frentes.

El resultado fue que un proyecto, en el cual sus promotores no habían expresado todos los riesgos e impactos ambientales, era criticado abiertamente desde un enfoque técnico, lo que sorprendió a las autoridades y a los empresarios; ya que los agentes del movimiento ambientalista eran capaces de presentar argumentos sólidos en lo que se refiere a discusiones técnicas

Por lo tanto, cabe decir que el hecho de que todos los miembros del movimiento entrevistados contaran con un grado académico o inclusive un posgrado, fue un factor determinante en la consecución de los objetivos del movimiento. Aunque también había miembros del movimiento que no tenían un acervo de capital cultural técnico, sino que su aporte a la organización estaba más relacionado con un conocimiento práctico sobre la movilización social.

Aunado a la contraposición de argumentos, el movimiento ambientalista tendría como característica relevante el desarrollo de un proyecto cultural alternativo al del gobierno en lo que se refiere al manejo de residuos peligrosos. O al menos, una serie de definiciones sobre lo que es posible o imposible hacer con relación a los impactos negativos sobre el ambiente y los riesgos sobre la salud de la población

La construcción de definiciones culturales compartidas es en esencia una inversión de capital cultural para obtener poder. En ese sentido el movimiento ambientalista hizo inversiones en el campo cultural para intentar definir la problemática del incinerador y producir elementos que favorecieran prácticas con menores impactos para el medio, así como riesgos para la salud.

El capital cultural invertido arrojó ganancias que se relacionaron con el posicionamiento favorable de la organización en la estructura de poder. Sin embargo, la no instalación del incinerador no habría modificado totalmente la Doxa del campo, y tampoco alteraría las prácticas resultantes de las definiciones de los grupos dominantes en el campo (se instalaría posteriormente una planta de manejo de residuos peligrosos en la misma ubicación).

Sin embargo, considerar que el contexto autoritario vigente durante el periodo de estudio, la capacidad del movimiento para presionar al gobierno y lograr que no se instalara el incinerador, o al menos ser un factor importante; llevaría a argumentar que si bien no se modificó la Doxa del campo, si hubo cambios en el accionar de las autoridades en torno a la problemática ambiental. Lo que nos hace concluir que el movimiento utilizó de forma efectiva su capital cultural y acotó las definiciones culturales compartidas apoyadas por los grupos de poder.

4.2. Estrategias de los movimientos ambientalistas

4.2.1. Vinculación con organizaciones nacionales e internacionales

4.2.1.1. Prueba de hipótesis organizaciones nacionales

Hipótesis A: El movimiento ambientalista se vinculó con un meta movimiento ambientalista en la escala fronteriza binacional, lo que le permitió proyectar sus demandas a nivel local, nacional, y binacional, presionando a las autoridades para que modificaran su decisión.

Con respecto a la primera hipótesis, se encontraron evidencias en la revisión hemerográfica y en las entrevistas realizadas a agentes miembro del movimiento que relacionaban al movimiento en oposición al incinerador con un meta movimiento en la escala fronteriza.

En la revisión hemerográfica se localizaron 31 notas que hacían referencia a la relación entre el meta movimiento y el movimiento de Tijuana (ver tabla 14. “Medios nacionales (metamovimiento), de las cuales el 90.32 % reflejaban el apoyo a las demandas, mientras que un 3.23 % eran de rechazo a los ambientalistas.

En las notas se denotaba una vinculación estratégica, ya que si bien el meta movimiento estaba compuesto de diversos movimientos locales, tenía la capacidad de desarrollar estrategias de forma conjunta. Ejemplo de ello fueron los bloqueos que se dieron a lo largo de la frontera el 21 de Marzo de 1992, en donde organizaciones de distintas ciudades, incluida Tijuana, se movilizaron para protestar por una agenda de demandas que incluía cuestiones tan lejanas como el caso del incinerador TEESA o los cementerios nucleares en Texas.

Otra estrategia conjunta fue la demanda interpuesta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuestión que no impidió que se manifestaran también las demandas de otros movimientos a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.

Además, diversos miembros del movimiento de Tijuana, interactuaban frecuentemente con los miembros de otros movimientos, como es el caso de algunos agentes políticos y académicos que se relacionaban habitualmente con los organismos que integraban el meta movimiento.

El caso de los agentes académicos del movimiento de Tijuana que participaron en la elaboración del PIAF es un ejemplo de cómo las distintas organizaciones ambientalistas interactuaban en un sentido común, aunque sus demandas eran disímiles y las autoridades a las que buscaban presionar no eran siempre las mismas.

Con base a la revisión hemerográfica es posible afirmar que los agentes de los distintos movimientos ambientalistas manifestaban interés en la problemática de otras organizaciones fronterizas, por lo que con frecuencia se encontraban declaraciones relativas a las demandas de otros movimientos o referencias en las notas a los diversos movimientos que integraban el meta movimiento.

En torno a las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, los agentes del movimiento en contra de TEESA manifestaron que sostenían comunicaciones frecuentes con otros movimientos fronterizos, aunque dejando en claro que las actividades del movimiento de Tijuana eran autónomas.

De los agentes del campo político administrativo entrevistados, los de nivel municipal no dieron respuestas claras sobre la supuesta presión sobre el gobierno como resultado de la vinculación con el metamovimiento; sin embargo, en el nivel federal, el funcionario de Sedue entrevistado expresó que la relación del movimiento con otras organizaciones fronterizas había generado presión sobre las autoridades federales, sobre todo en el nivel de la Delegación de Sedue en Baja California.

La escasa claridad de las respuestas de las autoridades municipales tendría que ver con que la presión del movimiento se enfocó principalmente en las autoridades federales, pues la problemática era de su competencia; sin embargo, si existieron manifestaciones de inconformidad ante el ayuntamiento, junto con solicitudes de apoyo legal e intervención ante

la federación. Empero, el objetivo del movimiento era presionar a las autoridades federales para que modificaran su decisión.

Por otra parte, no es posible determinar la efectividad de la estrategia vinculatoria con el meta-movimiento sin considerar que se configuraron una gran cantidad de situaciones, en ambos lados de la frontera, los cuales posibilitaron la interacción entre los movimientos ambientalistas.

Los cementerios nucleares en Texas y los movimientos de oposición tanto en Estados Unidos como en México; el rechazo al incinerador en California y su traslado hacia Tijuana; los amplios debates sobre la problemática ambiental a nivel nacional e internacional; así como la amplia atención de los medios de comunicación en la región; incrementaron las probabilidades de interacción entre movimientos que se habrían mantenido dispersos e incomunicados bajo otras condiciones.

Por lo tanto, al respecto de la primera hipótesis de este apartado, se comprende que el movimiento ambientalista tuvo la capacidad para exponer sus demandas a nivel local, nacional, e internacional, generando presión sobre las autoridades para que modificaran su decisión de instalar el incinerador. Dado que la vinculación con el meta-movimiento abrió un horizonte de actuación más amplio para el movimiento, teniendo acceso a la prensa nacional, y en algunos casos a la internacional.

4.2.1.2. Prueba de hipótesis organizaciones internacionales

Hipótesis B: El movimiento ambientalista se vinculó con ONG internacionales obteniendo beneficios como asesoría técnica y recursos económicos que fueron utilizados para presionar al gobierno.

En torno a la segunda hipótesis planteada en este apartado, sobre la vinculación del movimiento ambientalista con organizaciones no gubernamentales en la escala internacional; cabe decir, con base en la revisión hemerográfica y las entrevistas de campo, que el movimiento ambientalista si sostuvo relaciones con ONG internacionales, aunque de forma limitada, por lo que los recursos económicos y la asesoría técnica que las organizaciones aportaron a la organización no fueron elementos significativos.

La relación se dio principalmente con Greenpeace y con algunas organizaciones regionales ubicadas en el estado de California. Las aportaciones que hicieron las ONG estuvieron referenciadas principalmente al apoyo a sus demandas en los medios de comunicación nacionales e internacionales, así como asesoría técnica en torno a las estrategias que se debían desarrollar para presionar al gobierno.

Al respecto, de las publicaciones recabadas hubo cinco notas en donde *Green Peace* (ver anexo III “Desglose de notas periodísticas”) manifestó su apoyo al movimiento ambientalista, lo que no fue significativo si se considera primero, que las cinco notas se dieron en periódicos de circulación nacional, no internacionales, y en segundo término, el hecho de que en algunos casos se reflejara una falta de información de la ONG internacional en relación con los aspectos técnicos del caso.

Un ejemplo de la vinculación tiene que ver con el viaje que realizaron algunos agentes del movimiento a Kettleman City, California, en donde se había desarrollado un movimiento ambientalista para evitar que se instalara el incinerador que posteriormente acabaría en Tijuana. En la reunión los agentes de ambos movimientos compartieron experiencias y sus

estrategias para presionar al gobierno, lo que fue valioso porque el movimiento californiano había logrado que el incinerador no se instalara en su ciudad.

El caso refleja como una organización internacional, como Greenpeace, funcionó como un elemento vinculante entre dos movimientos ambientalistas con demandas similares que operaban en diferentes países, lo que permitió al movimiento no solamente asimilar conocimiento sobre las estrategias para presionar al gobierno, sino también una exposición mediática en ambos lados de la frontera.

Para los agentes del movimiento entrevistados, si bien existía una relación con algunas organizaciones no gubernamentales de escala internacional, la misma no era constante, ni tampoco aportaba recursos o asesoría técnica con frecuencia durante el tiempo que el movimiento desarrolló operaciones.

De otra parte, para el funcionario de Sedue entrevistado, el movimiento operó principalmente de forma nacional, específicamente en la frontera, relacionándose marginalmente con organizaciones internacionales, por lo que la ayuda, tanto económica como técnica, habría sido limitada.

Aunado a lo anterior, cabe decir que en la mayoría de los foros de diálogo que se realizaron en Tijuana no hubo presencia de organizaciones internacionales, salvo el caso de la *Health Coalition* de San Diego que se presentó a un foro, empero, su papel fue secundario.

Por lo tanto, se concluye que la vinculación con las ONG internacionales, propuesta en la segunda hipótesis de este apartado, no fue un factor decisivo para la efectividad del movimiento ambientalista, dado que los aportes, específicamente recursos económicos y técnicos, que hicieron las organizaciones no fueron significativos para la causa del movimiento.

4.2.2. Utilización de recursos legales

4.2.2.1. Prueba de hipótesis

Hipótesis: El movimiento ambientalista utilizó recursos legales, como el amparo a nivel nacional o la denuncia en las cortes internacionales, para exponer los riesgos a la salud y los impactos ambientales del incinerador, a nivel nacional e internacional, logrando presionar a las autoridades de forma efectiva para que modificaran su decisión.

El movimiento ambientalista desarrolló durante 1992 (para una línea del tiempo de los dos primeros procesos ver gráfica “tendencia del comportamiento de los agentes durante 1992” en el capítulo III) tres procesos legales para oponerse por vías institucionales a la instalación del incinerador de residuos peligrosos de la empresa TEESA.

El primero fue un interdicto¹⁰⁰ promovido por el movimiento ambientalista, particularmente por Amas de Casa de Playas de Tijuana y el Foro Ecologista de Baja California, ante un juzgado civil de Tijuana. Relacionándose este proceso con la peligrosidad de instalar un incinerador en una zona urbana.

El segundo proceso se refiere a un amparo constitucional en contra de Sedue promovido en un juzgado civil del municipio de Tijuana por Amas de Casa de Playas de Tijuana y por Carlos de la Parra. Argumentando que las condiciones en las que operaría el incinerador de TEESA serían riesgosas para la salud y seguridad de la población.

El tercer proceso se desarrolló en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de 1992, promovido por la diputada Liliana Flores Benavides. Siendo el objetivo central la exposición de la problemática fronteriza (ambos lados) relacionada con los basureros nucleares en Texas y las plantas de tratamiento de residuos peligrosos.

100 Por interdicto se entiende, la acción que pone en marcha un procedimiento rápido y breve, por el cual se solicita a un juez que adopte determinadas medidas encaminadas a la protección de cierta posesión. Estas medidas no resuelven ni prejuzgan el derecho mismo a la propiedad o la posesión, que se resolverá en su caso en el oportuno proceso declarativo (<http://www.abogadosconjuicio.com/glosario2/interdicto/78.html>).

El juicio de interdicto se desarrolló a nivel municipal y en un principio contó con el apoyo del cabildo, el cual se sintió presionado por las demandas del movimiento como se reflejó posteriormente en los comentarios del presidente municipal en turno durante la entrevista que se realizó y en las notas publicadas por varios periódicos locales.

Sin embargo, el juicio de interdicto no cumplió con las instancias legales requeridas y se dejó inconcluso. Lo que desató un conflicto entre el movimiento y las autoridades municipales, cuestión que incrementó la presión sobre el gobierno y magnificó la atención mediática sobre el caso.

Las razones por las que el gobierno municipal no apoyo el juicio de interdicto no quedaron claras, sin embargo, agentes del movimiento declararon en medios de comunicación y al ser entrevistados para la investigación que el ayuntamiento no había sabido manejar la problemática, por lo que cedió a la presión social y manifestó su apoyo al juicio, para luego retractarse ante la presión del gobierno federal.

Es importante recordar que el contexto político durante el periodo se caracterizaba por el autoritarismo, por lo que desde la perspectiva del presidente municipal, el gobierno federal controlaba las decisiones de los demás niveles de gobierno. Por lo que a partir de ese momento, el orden municipal se desentendió del conflicto, aunque siguió siendo blanco de la presión del movimiento.

Por otra parte, la solicitud de amparo en contra de Sedue tuvo como resultado que el juzgado estableciera como improcedente el recurso, dado que la autoridad no había otorgado una licencia de operación a TEESA, por lo que no se estaba en condiciones de verificar si se vulneraron los derechos de la población

El movimiento interpretó el resultado del proceso legal como una victoria ante las autoridades, ya que el no otorgamiento de licencia había expuesto el hecho de que TEESA no había cumplido con la normatividad referente al caso. Sin embargo, con respecto a la revisión

hemerográfica no se detectó ninguna nota que diera tal interpretación al suceso, publicándose únicamente la información referente la improcedencia del amparo.

Para un funcionario de Sedue entrevistado el amparo demostró que las autoridades federales habían desarrollado una estrategia de autoprotección acorde a las prácticas autoritarias de la época; es decir, no otorgar una licencia a un proyecto que podía implicar riesgos para la población, confiando en el control que el poder ejecutivo tenía sobre el poder judicial para mantener en secreto la información, y a su vez, condicionar a TEESA el otorgamiento de la licencia de operación con base a resultados.

Además, es importante tomar en cuenta el hecho de que la discrecionalidad con respecto a la normatividad era una práctica común bajo el sistema autoritario de gobierno y que la normatividad relativa a la política ambiental era muy reciente, por lo que no había instituciones del orden estatal y local que se encargaran de verificar el cumplimiento de la normatividad o estas todavía no operaban en su máxima capacidad.

El resultado del proceso de amparo fue la exposición de los riesgos e impactos del incinerador, así como la incapacidad de las autoridades para desarrollar un proceso institucional con respecto a un proyecto de dicha índole. Aunque, si bien la información se reflejó en los medios de comunicación de forma limitada, es decir, con respecto a la hemerografía recabada, solo se explicitó que el juzgado había rechazado el amparo, no las razones.

Por lo que la población en general posiblemente no interpretó el rechazo del recurso legal como una victoria para el movimiento ambientalista, y como una exposición pública del manejo ilegal que las autoridades habían dado al caso de TEESA. Sin embargo, se interpreta que el suceso si incrementó sustancialmente la presión sobre las autoridades y en opinión de algunos agentes miembro del movimiento, fue el suceso clave que motivó el cambio de opinión del gobierno en torno al incinerador.

El tercer proceso legal estuvo relacionado con una demanda interpuesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por uno de los agentes relacionados con el movimiento

ambientalista. La demanda se planteó en el marco de las demandas de la mayoría de los movimientos ambientalistas que operaban durante el periodo a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.

La relevancia de la demanda en la CIDH tuvo que ver con la vinculación de las demandas de los movimientos ambientalistas fronterizos (meta-movimiento), las cuales se plantearon en un contexto binacional, por lo que no solo se presionaba al gobierno mexicano, sino al estadounidense. Dicha situación promovió el diálogo entre las autoridades de ambos países, y produjo el interés de los medios de comunicación.

En la revisión hemerográfica se encontraron cinco notas con información relacionada con la demanda en la CIDH, además, las mismas se presentaron en los momentos de mayor intensidad del conflicto (ver gráfica “Tendencia del comportamiento de los agentes 1992” en el capítulo III).

Cabe decir que el mayor apoyo de las autoridades registrado por las notas periodísticas se dio relativamente en una progresión similar a la de los procesos legales desarrollados por el movimiento ambientalista. Por lo que se interpreta que existió una relación directa entre los tres procesos legales y el mayor apoyo de las autoridades al movimiento.

Ergo, es fundamental comprender que el movimiento tuvo a lo largo de su ciclo vital una limitada oposición de parte de las autoridades (ver tabla 10. “Escala), por lo que no se puede establecer en este caso una relación directa entre el cambio de la postura del gobierno federal y los procesos legales del movimiento, pues únicamente se registra un incremento del apoyo al movimiento, por parte de las autoridades, en fechas cercanas a la cancelación del proyecto TEESA.

Se concluye que la utilización de recursos legales a nivel nacional e internacional fue un factor determinante en la efectividad del movimiento ambientalista, pues no solo incrementó la presión sobre el gobierno a través de los medios de comunicación locales, nacionales y binacionales que pusieron atención en los procesos jurídicos, sino que expuso públicamente

los riesgos sobre la salud de la ciudadanía y los impactos ambientales que eran inherentes a la instalación del incinerador TEESA en una zona urbana.

La principal ganancia de los procesos legales habría sido la exposición de las irregularidades procedimentales que desarrollaban las autoridades federales en torno a proyectos con impactos negativos potenciales sobre el medio ambiente, elemento utilizado por el movimiento para ejercer presión sobre el gobierno y para ganarse adeptos y simpatizantes para su causa; o sea, capital en las relaciones favorables, y capital simbólico en la capacidad de definir al gobierno como negligente y corrupto.

4.2.3. Uso de los medios de comunicación

4.2.3.1. Prueba de hipótesis

Hipótesis: El movimiento ambientalista utilizó a los medios de comunicación, locales, nacionales, e internacionales, para incrementar su influencia y proyectar sus demandas en diferentes ámbitos gubernamentales, tanto a nivel nacional como internacional, generando presión sobre el gobierno mexicano para que modificara su decisión.

Una de las principales herramientas del movimiento ambientalista fue el uso de los medios de comunicación para exponer sus demandas y generar presión sobre las autoridades. La afirmación se sustenta en las 85 notas relacionadas con el conflicto, las cuales fueron recabadas durante el trabajo de campo.

Por otra parte, los funcionarios de gobierno entrevistados, tanto el funcionario de Sedue, como el Presidente Municipal durante el periodo, expresaron la gran capacidad que tenía el movimiento para difundir sus demandas en los medios de comunicación, aunque ninguno relacionó su toma de decisiones a este hecho.

El significativo uso de los medios de comunicación como una herramienta para presionar a las autoridades demuestra la capacidad del movimiento para difundir sus demandas valiéndose de

su capital social expresado en relaciones con agentes que facilitaron el posicionamiento de sus demandas en los medios de comunicación; y beneficiándose también de su capital cultural para construir argumentos orientados a influir en el sentido del campo.

Considerando la tabla 16 titulada “Atención Mediática (aceptación)”, se observa que el 85.88 % de las notas reflejaron apoyo al movimiento, mientras que el rechazo fue de 9.41 %, siendo el resto relacionado con la no determinación de una tendencia en la publicación.

Aunado a lo anterior, el 85.88 % de las notas a favor del movimiento se podrían desagregar a nivel local en un 73.53 % de aceptación. Mientras que a nivel nacional, las notas con un enfoque de apoyo al metamovimiento representarían el 100.00 %, y las publicaciones que apoyaban al movimiento local serían un 90.32 %. El orden internacional no fue significativo en volumen de notas, aunque si describió un 100.00 % de apoyo al movimiento.

Es interesante recalcar que el rechazo al movimiento ambientalista además de ser reducido, se manifestó casi exclusivamente en la escala local. De las 34 notas publicadas a nivel local (ver tabla 12 “Medios locales”) el 20.59 % se asocian al rechazo por las demandas del movimiento, mientras que el 73.53 % están a favor, siendo el resto no determinadas.

No se encontraron razones claras para explicar el significativo rechazo al movimiento en la escala local, sobre todo cuando se le compara al apoyo casi total recibido en las notas publicadas en diarios nacionales. Esto es claro cuando se observa que la cantidad de notas nacionales (49) supera a la cantidad de notas locales (34).

Se interpreta al respecto que a nivel local el espacio social se encontraba enrarecido por una multiplicidad de intereses que tenían un impacto sobre los medios de comunicación, además de existir diarios propiedad del gobierno federal en Tijuana. Mientras que en el nivel nacional, los medios eran menos proclives a ser influenciados por un problema que, a pesar de ser del orden federal, siempre estuvo centrado en la frontera norte del país.

En otro sentido, al analizar la gráfica “Tendencia del comportamiento de los agentes 1992” (capítulo III) se puede establecer una relación directa entre la frecuencia de notas de apoyo al movimiento y el incremento del apoyo a las demandas de la organización por parte de las autoridades.

Por lo que se interpreta que el incremento de la frecuencia y volumen de notas de apoyo al movimiento habría tenido un impacto directo sobre la frecuencia y el volumen de las notas periodísticas en las que las autoridades se habrían declarado a favor del movimiento.

Dicha relación es fundamental para comprender la forma como los medios de comunicación difundieron las demandas del movimiento, incrementando la presión sobre las autoridades al ritmo en que aumentaba la frecuencia de publicación de notas que apoyaban al movimiento.

En contraparte, es conveniente considerar que a pesar de que el rechazo al movimiento fue marginal, el mismo se incrementó al mismo tiempo que aumentaba el apoyo del gobierno, lo que se interpreta como el periodo de mayor intensidad y lucha entre las partes.

En medio de las luchas de poder, el apoyo al movimiento aumentó, lo que posibilitó que algunos agentes del campo político fueran progresivamente adhiriéndose a la causa del movimiento, ya sea porque la instalación del incinerador generaría menos beneficios que la cancelación de la licencia, o porque se habían convencido de que los ambientalistas presentaban la mejor argumentación.

De otra parte, algunos agentes reafirmaron sus posiciones en el campo posiblemente porque tenían intereses claros en el proyecto del incinerador. Esto produjo un enfrentamiento reflejado en el principal momento de tensión entre las partes, el mes de abril de 1992, cuando estaba a punto de finalizar el conflicto; siendo claro el fenómeno si se observa el incremento de notas tanto a favor como en contra del movimiento, aunque en el segundo caso de forma no significativa.

Otra cuestión relevante se relaciona con el hecho de que si bien el 40.00 % del total de las notas recabadas eran locales, de las cuales el 73.53 % eran de apoyo; el 57.65 % de las notas eran del orden nacional, bifurcándose en el enfoque metamovimiento con un 36.47 % y enfoque local con un 21.18 %. Restando un 2.35 % referente a las notas internacionales (ver tabla 11 “Atención Mediática Escala” y tabla 12 “Medios locales”).

La importancia de las cifras del párrafo anterior radica en que si bien el apoyo global al movimiento representaría un 85.88 % (ver tabla 10 “Escala”), este tendría que analizarse considerando el apoyo al movimiento local, así como el apoyo al metamovimiento; ya que las notas que favorecían al metamovimiento no necesariamente brindaban su apoyo al movimiento de forma directa, sino a través de sus vínculos con otras organizaciones que tenían demandas en común y estrategias compartidas.

De tal forma, el total del apoyo al movimiento comprendido en las notas nacionales con enfoque orientado hacia el movimiento se sumó al apoyo al movimiento local, pues se considera que este desempeñó una función determinante en la capacidad del movimiento para proyectar sus demandas en conjunto con las de otros movimientos, y porque fue relevante para aumentar la presión sobre las autoridades.

Es interesante destacar que si bien el movimiento fue capaz de difundir sus demandas en la prensa nacional, en el plano internacional no desarrolló la estrategia de forma prolija, considerando la casi nula existencia de notas sobre el movimiento en periódicos internacionales.

En conclusión, se considera que el uso de los medios de comunicación en diferentes escalas geográficas para generar presión sobre distintas autoridades gubernamentales fue un factor determinante para incrementar la efectividad del movimiento con respecto a la difusión de las demandas y la generación de presión sobre las autoridades para que modificaran su decisión.

4.2.4. Participación en foros de discusión

4.2.4.1. Prueba de hipótesis

Hipótesis: El movimiento ambientalista presentó sus demandas en foros de discusión binacionales auspiciados por las negociaciones del TLCAN, produciéndose reacciones negativas en las autoridades estadounidenses que llevaron a que ejercieran presión sobre el gobierno mexicano para que modificara su postura y cancelara la licencia del incinerador.

Según la información recabada, no hay evidencia de que el movimiento ambientalista hubiera participado en foros relacionados al TLCAN. Sin embargo, este criterio no niega el planteamiento de la hipótesis por el hecho de que en el contexto de negociación para la firma del tratado comercial se desarrollaron otros foros que no necesariamente dependían de la estructura del TLCAN, pero que si tenían una relación indirecta con el mismo.

En ese contexto se articularon los foros de discusión del PIAF (1992) en los cuales participaron agentes del movimiento ambientalista, exponiendo sus demandas ante autoridades de ambos lados de la frontera y participando en las discusiones sobre las principales problemáticas de la zona, incluidos los temas relativos al manejo de los residuos peligrosos.

Si bien el PIAF se basaba en el Convenio de la Paz, y el movimiento ambientalista sustentaba sus demandas en la normatividad binacional resultante de dicho convenio, el PIAF no era un espacio en el que se tomaran decisiones importantes en materia de política ambiental, aunque si podía funcionar como un foro en donde difundir y proyectar las demandas del movimiento frente a las autoridades encargadas de la política ambiental, ante los medios de comunicación, y probablemente ante algunos sectores de la población interesados en la problemática del medio.

Sin embargo, según información aportada por un agente académico miembro del movimiento que participó constantemente en el proceso de creación del PIAF, el gobierno de los Estados Unidos no estaba interesado en la problemática de TEESA y el incinerador, ya que el caso era

visto como responsabilidad de las autoridades mexicanas, dado que los residuos peligrosos que se pretendía incinerar eran mexicanos, principalmente de la CFE.

Además, existía un decreto en la normatividad mexicana que impedía la importación de residuos peligrosos para su tratamiento en territorio nacional, por lo que a pesar de que TEESA era filial de una trasnacional estadounidense, había una especie de acuerdo implícito en el cual se estableció que el gobierno mexicano resolvería el problema por su cuenta.

Según el subdelegado de Sedue en Baja California durante el periodo, las autoridades estadounidenses en ningún momento intentaron presionar al gobierno mexicano para que instalara el incinerador o cancelaran la licencia de operación de TEESA.

Por lo que a pesar de que el movimiento expuso sus demandas en los foros del PIAF, no se logró impactar lo suficiente al gobierno de los Estados Unidos para que se interesara en el caso y ejerciera presión sobre el gobierno federal mexicano.

Por lo tanto, aún cuando la presentación de argumentos en el PIAF por parte del movimiento ambientalista permite asignar un sentido positivo a la estrategia relacionada con la participación en foros internacionales; el argumento de la hipótesis se demuestra inválido cuando se explica que dicha presentación no tuvo un efecto directo sobre las autoridades estadounidenses, por lo que en definitiva no se desarrolló una presión sobre el gobierno mexicano desde el exterior.

En conclusión, la estrategia denominada “participación en foros de discusión” no fue un factor determinante en la efectividad del movimiento con respecto a la generación de presión sobre las autoridades para que modificaran su decisión de instalar un incinerador de residuos peligrosos en Tijuana.

4.3. El contexto como una variable interviniente

Es importante considerar que el modelo de efectividad de los movimientos ambientalistas desarrollado se aplicó bajo un contexto histórico particular, por lo que el resultado del mismo, con respecto a otros casos de estudio, estará acotado por la similitud relativa de las condiciones económicas, políticas, sociales, y ambientales.

4.3.1. Apertura económica hacia el exterior o negociaciones comerciales que impliquen la integración comercial

El movimiento ambientalista fue capaz de realizar estrategias específicas para presionar al gobierno mexicano valiéndose de algunas de las condiciones que regularmente se presentan durante un periodo de negociación para la apertura comercial.

Estas condiciones se relacionan con elementos como pueden ser un gran interés de los medios de comunicación de ambas naciones en los temas locales; la necesidad de las autoridades por homologar aspectos de la política pública, como los temas ambientales; la creación de foros de discusión binacionales; la existencia de una legislación binacional o espacios para dirimir conflictos; un interés de organizaciones no gubernamentales internacionales por comunicarse con organizaciones locales; y finalmente, la receptividad de un gobierno que busca evitar problemas locales que se proyecten en sus negociaciones comerciales.

4.3.2. Contexto político autoritario en su etapa de relativa apertura

El movimiento ambientalista se desarrolló en el contexto político autoritario de la década de los ochenta, sin embargo, el interés del gobierno por modificar el modelo de desarrollo hacia el libre mercado, relativizó las estructuras de control, permitiendo mayor participación ciudadana en temas diversos.

A su vez, los medios de comunicación comenzaban a configurar un mayor nivel de crítica en diferentes sentidos y diferentes temáticas. Junto con una progresiva alternancia en los

gobiernos de los estados, lo que multiplicaría los intereses de los gobernantes, dando un mayor rango de incertidumbre en el campo.

En condiciones distintas, el movimiento podría haber utilizado otro tipo de herramientas y estrategias, o quizás hubiera optado por la vía institucional, la cual no estaba garantizada en términos de legalidad por el sistema autoritario. En otro sentido, bajo otro contexto el gobierno autoritario podría haber reaccionado de forma represiva, o simplemente ignorar las demandas del movimiento.

4.3.3. Problemática ambiental compartida por dos o más países

El movimiento ambientalista aprovechó el contexto en el cual había una problemática medioambiental compartida; intenciones de las autoridades de ambas naciones por mejorar las condiciones del medio a través de la regulación binacional; foros de debate sobre la problemática ambiental binacional; así como interés de las organizaciones ambientalistas internacionales y de los medios de comunicación en sus demandas.

Las problemáticas ambientales no son restrictivas a las fronteras geopolíticas, por lo tanto, estas siempre serán compartidas por los países vecinos, aunque sus gobiernos no lo reconozcan. Sin embargo, lo anterior no es suficiente para que se generen condiciones similares a las del caso de estudio.

Una problemática ambiental compartida no asegura que los gobiernos implementen políticas como respuesta o mitigación del daño, o inclusive que trabajen en conjunto para resolver un problema mutuo.

Probablemente, sin un contexto relativamente similar al del caso de estudio, tampoco existirían foros de discusión sobre la temática ambiental, o los mismos no serían considerados como relevantes por las autoridades. Cuestión que definitivamente no implica que los movimientos sociales no sean capaces de ser efectivos, solo que tendrían que implementar otras estrategias.

Además, probablemente podría afirmarse que los vínculos con organizaciones no gubernamentales de diferentes países manifestarían un menor grado de solidez; mientras que para los medios de comunicación los impactos potenciales sobre el medio ambiente pasarían a segunda plana o no serían tan rentables como objetivos políticos

4.4. Resultados del análisis

A continuación se presenta un resumen de los resultados del proceso de análisis y prueba de hipótesis con respecto a los presupuestos teóricos del modelo de efectividad de los movimientos ambientalistas. Se divide en resultados del componente diversidad de especies de capital y resultados de las estrategias de poder, abordándose cada una de las variables del modelo.

4.4.1. Resultados del componente diversidad de especies de capital

4.4.1.1. Capital Económico

A) Los agentes miembro del movimiento formaban parte de la clase media, lo que les permitió contar con los recursos económicos y la disponibilidad de horario para desarrollar estrategias de presión sobre el gobierno. Reforzándose este resultado cuando se analizan las posiciones en los campos de los agentes y el habitus colectivo del movimiento.

B) El movimiento ambientalista poseía el capital económico necesario para difundir sus demandas en diferentes escalas geográficas, es decir, a nivel local, nacional, e internacional.

C) Los agentes del movimiento utilizaron sus recursos económicos para generar vínculos con organizaciones ambientalistas que operaban en otras escalas geográficas.

D) Los agentes del movimiento tenían un significativo poder de decisión sobre sus acciones, así como una relativa independencia con respecto a las organizaciones o grupos sociales de los

que formaban parte, lo que les daba autonomía para manifestarse en contra de las decisiones del gobierno sin vulnerar su economía y su posición en el espacio social.

E) El movimiento contaba con los recursos económicos necesarios para desarrollar actividades relacionadas con la exposición de las demandas de forma constante en los medios de comunicación respectivos a diferentes escalas geográficas.

F) Los agentes del movimiento ambientalista tuvieron la capacidad económica para costear los procesos legales, sobre todo en el caso de las demandas realizadas en cortes internacionales.

G) Por lo tanto, se concluye al respecto que el capital económico fue un factor determinante en la generación de presión sobre las autoridades, por lo que se puede afirmar que influyó significativamente en la efectividad del movimiento ambientalista.

4.4.1.2. Capital Social

A) El capital social permitió al movimiento desarrollar vínculos con el gobierno, otras organizaciones ambientalistas, las empresas, los medios de comunicación, y la academia, cuestión que fue fundamental en la articulación de estrategias orientadas a la consecución de los objetivos y en la adquisición de otras especies de capital.

B) Los agentes detentaban posiciones dominantes en sus respectivos campos, por lo que aportaron al movimiento vínculos naturales con el sector gobierno, el ámbito académico, las empresas, y las organizaciones sociales.

C) Dada su composición, el movimiento estaba integrado por especialistas de diferentes áreas del conocimiento, lo que le permitía expresar sus demandas utilizando argumentos científicos y comprender los argumentos de sus adversarios; facilitando su participación en foros de discusión y la crítica al discurso de los especialistas del gobierno y de TEESA.

D) Al integrarse el movimiento se adquirió la base social que aportaron las organizaciones que se convirtieron en sus miembros; por lo que el movimiento ya contaba con un elemento de liderazgo social desde su origen.

E) Por lo tanto, se concluye al respecto que el capital social fue un factor determinante en la generación de presión sobre las autoridades, por lo que se puede afirmar que influyó significativamente en la efectividad del movimiento ambientalista.

4.4.1.3. Capital Cultural

A) El movimiento ambientalista poseía capital cultural expresado en conocimientos relacionados con la problemática ambiental y las políticas públicas, lo que le permitió desarrollar una capacidad de diálogo con agentes de campos diversos, así como la habilidad de exponer sus demandas en diferentes contextos, desde los medios de comunicación, hasta foros de diálogo, en diferentes escalas geográficas.

B) El movimiento se benefició de su contexto, particularmente la apertura política y económica del país, para aprovechar su capital cultural y construir vínculos con agentes de campos como el político, el mediático, o el económico, y utilizarlos para difundir sus demandas en diferentes espacios geográficos, en ocasiones en ambos lados de la frontera.

C) La posición dominante en sus respectivos campos, facilitó a los agentes del movimiento ambientalista el influir de manera decisiva en otros campos, como el mediático, el legal, o el gubernamental, para difundir sus demandas y presionar a las autoridades a través de distintos frentes.

D) Se encontró una relación entre el capital cultural de los agentes que formaban parte del movimiento y la capacidad de la organización para utilizar estratégicamente sus conocimientos sobre la problemática, vinculándose con otros agentes, y obteniendo otras formas de capital, para desarrollar estrategias específicas de presión sobre las autoridades.

E) El capital cultural fue utilizado para construir definiciones culturales alternativas a las expuestas por los grupos dominantes, teniendo un impacto sobre la Doxa del campo, y por ende, modificando las prácticas de las autoridades con respecto al ambiente.

F) Por lo tanto, se concluye al respecto que el capital cultural fue un factor determinante en la generación de presión sobre las autoridades, por lo que se puede afirmar que influyó significativamente en la efectividad del movimiento ambientalista.

4.4.2. Resultados del componente estrategias de los movimientos ambientalistas

4.4.2.1. Vinculación con organizaciones nacionales e internacionales

4.4.2.1.1. Vinculación con organizaciones nacionales

A) Se encontraron evidencias hemerográficas y relacionadas con entrevistas por medio de las cuales se determinó una relación estratégica entre el movimiento en oposición al incinerador y el meta movimiento en la escala fronteriza. Sin embargo, esto no quiere decir que el movimiento local formara parte del metamovimiento, sino que ocasionalmente desarrollaban acciones de movilización con base en intereses comunes.

B) Con base a la revisión hemerográfica fue posible afirmar que los agentes de los distintos movimientos ambientalistas manifestaban interés en la problemática de otras organizaciones fronterizas, por lo que con frecuencia se encontraban declaraciones relativas a las demandas de otros movimientos o referencias en las notas a los diversos movimientos que integraban el meta movimiento.

C) Se demostró con base en entrevistas que la relación del movimiento con otras organizaciones fronterizas había generado presión sobre las autoridades federales, a través del desarrollo de estrategias de movilización conjuntas y la difusión de las demandas de otros movimientos en los medios de comunicación y viceversa.

D) El movimiento ambientalista desarrolló la capacidad para exponer sus demandas a nivel local, nacional, e internacional, generando presión sobre las autoridades, dado que la vinculación con el metamovimiento magnificó las posibilidades del movimiento, teniendo acceso a la prensa nacional, y en algunos casos a la internacional.

4.4.2.1.2. Vinculación con organizaciones internacionales

A) Con base en la revisión hemerográfica y las entrevistas de campo, se determinó que el movimiento ambientalista se vinculó con ONG internacionales de forma limitada, lo que resultó en que los recursos económicos y la asesoría técnica que le aportaron no fueran elementos significativos.

B) Las aportaciones que hicieron las ONG estuvieron referenciadas principalmente al apoyo a sus demandas en los medios de comunicación nacionales e internacionales, así como asesoría técnica en torno a las estrategias que se debían desarrollar para presionar al gobierno.

C) En algunos casos las organizaciones internacionales funcionaron como un elemento vinculante entre movimientos ambientalistas con demandas similares que operaban en dos contextos geográficos distintos, lo que permitió al movimiento no solamente asimilar conocimiento sobre las estrategias para presionar al gobierno, sino también una exposición mediática en ambos lados de la frontera.

D) El movimiento se desarrolló principalmente de forma nacional, específicamente en la frontera, relacionándose marginalmente con organizaciones internacionales, por lo que la ayuda, tanto económica como técnica, habría sido limitada.

E) Por lo tanto, la vinculación con ONG internacionales no fue un factor decisivo para la efectividad del movimiento ambientalista, dado que sus aportaciones, expresadas en especies de capital, no fueron significativas para el movimiento.

4.4.2.2. Utilización de recursos legales

A) Se desarrollaron tres procesos legales, dos en el plano local, y uno en la CIDH. Estos procesos contribuyeron a ejercer presión sobre las autoridades, a pesar de que el juicio de interdicto no desarrolló su proceso, el amparo fue desechado por la corte, y la demanda en la CIDH a pesar de cumplir con su proceso no finalizó con una recomendación para el gobierno mexicano.

B) El resultado de los procesos legales en contra de TEESA fue la exposición, ante la ciudadanía, otros agentes políticos, y los medios de comunicación, de los riesgos e impactos del incinerador, así como la incapacidad de las autoridades para desarrollar un proceso como tal en términos institucionales, por lo que se generó presión sobre las autoridades respectivas.

C) La demanda en la CIDH sirvió para vincular las demandas de los movimientos ambientalistas fronterizos, presionando no solo al gobierno mexicano, sino al estadounidense, lo que promovió el diálogo entre las autoridades de ambos países, fortaleció las relaciones entre los movimientos ambientalistas fronterizos, y produjo el interés de los medios de comunicación.

D) No se logró establecer una relación entre el supuesto cambio de postura del gobierno federal y los procesos legales del movimiento, pues únicamente se registra un incremento del apoyo al movimiento en fechas cercanas a la cancelación del proyecto, pero no se obtuvieron datos significativos para argumentar que las autoridades habrían modificado su decisión como resultado de los procesos legales.

E) La utilización de recursos legales a nivel local e internacional fue un factor determinante en la efectividad del movimiento ambientalista, pues no solo incrementó la presión sobre el gobierno a través de los medios de comunicación locales, nacionales y binacionales, sino que expuso públicamente los riesgos sobre la salud de la ciudadanía y los impactos ambientales que eran inherentes a la instalación del incinerador TEESA en una zona urbana.

4.4.2.3. Uso de los medios de comunicación

A) El movimiento ambientalista usaría los medios de comunicación (locales, nacionales e internacionales) para exponer sus demandas en diferentes escalas geográficas y generar presión sobre las autoridades de diversos niveles.

B) El significativo uso de los medios de comunicación como una herramienta para presionar a las autoridades demuestra la capacidad del movimiento para difundir sus demandas valiéndose principalmente de su capital social expresado en relaciones con agentes que les facilitaron el acceso a los medios de comunicación.

C) Hay una relación directa entre la frecuencia de notas de apoyo al movimiento y el incremento del apoyo a las demandas de la organización por parte de las autoridades. El incremento de la frecuencia y volumen de notas de apoyo al movimiento tuvo un impacto directo sobre la frecuencia y el volumen de las notas periodísticas en las que las autoridades se habrían declarado a favor del movimiento.

E) A pesar de que el rechazo al movimiento fue marginal, el mismo se incrementó al mismo tiempo que aumentaba el apoyo del gobierno, lo que se interpreta como el periodo de mayor intensidad y lucha entre las partes.

F) Se considera que el uso de los medios de comunicación en diferentes escalas geográficas para presionar a las autoridades fue un factor determinante para incrementar la efectividad del movimiento con respecto a la difusión de las demandas y la generación de presión sobre las autoridades para que modificaran su decisión.

4.4.2.4. Participación en Foros de Discusión

A) No hay evidencia de que el movimiento ambientalista participara en foros relacionados al TLCAN. Sin embargo, se desarrollaron los foros de discusión del PIAF en los cuales si participaron agentes del movimiento ambientalista.

B) Sin embargo, el movimiento no logró presionar al gobierno de los Estados Unidos a través de la exposición de sus demandas en los foros del PIAF, dado que los residuos peligrosos eran mexicanos, por lo que las autoridades de ese país consideraban el asunto como responsabilidad del gobierno mexicano; además, de existir un decreto que impedía la importación de residuos peligrosos para su tratamiento en la República Mexicana.

C) A su vez, se comprobó que las autoridades estadounidenses en ningún momento intentaron presionar al gobierno mexicano para que instalara el incinerador o cancelaran la licencia de operación de TEESA.

D) Por lo tanto, la participación en foros internacionales no fue un factor determinante en la efectividad del movimiento con respecto a la generación de presión sobre las autoridades para que modificaran su decisión de instalar un incinerador de residuos peligrosos en Tijuana.

4.5. Conclusión del capítulo

Se puede afirmar que en el capítulo de resultados se lograron comprobar la mayoría de las hipótesis de investigación planteadas, salvo la relacionada con las ONG internacionales y la de los foros de diálogo. Aprobándose también la hipótesis general de investigación en el sentido de que el movimiento ambientalista habría sido capaz de presionar a las autoridades para que cumplieran su principal demanda, la no instalación del incinerador.

En ese sentido, se argumenta que el movimiento fue un factor determinante para la modificación de la Doxa del campo (sentido); pues aprovechando una configuración contextual favorable (apertura económica, liberalización política, conciencia ambientalista en

la ciudadanía) y el hecho de contar con un acervo significativo de especies de capital, el movimiento ambientalista desarrollo estrategias de poder que además de lograr los objetivos de la organización, articularon un contraproyecto cultural que sería efectivo en desarticular el proyecto de los grupos dominantes.

V. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo principal de esta investigación fue analizar la efectividad del movimiento ambientalista que se opuso a la instalación de un incinerador de residuos peligrosos en Tijuana a finales de los ochenta. Se eligió dicho caso de estudio porque se consideró representativo de lo que podría calificarse como un movimiento exitoso en el contexto mexicano de finales de los años ochenta y principios de los noventa.

Sin embargo, es necesario expresar que el hecho de que un movimiento ambientalista logre cumplir sus objetivos y obtenga sus demandas no necesariamente implica que haya sido efectivo. Pues en este trabajo se relaciona la efectividad con la capacidad de alterar la estructura simbólica del poder y, por ende, el sentido (lógica) del campo.

Por lo tanto, se argumentó en el estudio que la efectividad de los movimientos sociales dependería en última instancia -mas allá de la consecución de objetivos- de las modificaciones realizadas a la Doxa de los campos; ya que sin realizarse cambios a las definiciones culturalmente compartidas en el espacio social y por ende a las practicas resultantes, difícilmente podría resolverse de manera efectiva una problemática socio-ambiental como la planteada en el caso de estudio.

En ese sentido, se construyó como uno de los principales insumos del estudio un modelo científico orientado a explicar la efectividad de la participación ciudadana (acción colectiva) con respecto a la modificación de la relación sociedad-ambiente y sus definiciones culturalmente compartidas.

De ahí que el modelo sea potencialmente útil para los tomadores de decisiones en el ámbito de la política ambiental, comprendiéndose la utilidad del recurso de la participación ciudadana para los gobiernos, y particularmente enfocándose en la aportación de directrices “desde abajo”, y la aplicación de soluciones colectivas a problemáticas que afecten a la población en general.

Igualmente, también se podría utilizar el modelo en el campo académico para profundizar las investigaciones que se han realizado sobre la acción colectiva, aportando una visión diferente a los tradicionales enfoques de investigación divididos entre el análisis de las características subjetivas y objetivas.

Por otra parte, el modelo de efectividad podrá ser un recurso provechoso para los ciudadanos que se organicen de manera no institucional por medio de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales. Brindándoles una guía que coadyuve a la configuración de acciones colectivas exitosas. Aunque es importante tomar en cuenta las limitantes del modelo respecto al contexto social, económico, y político, necesario para encontrar resultados repetibles y similares a los expuestos.

Ya entrando en materia, para analizar la efectividad del movimiento se consideraron siete variables relacionadas con la diversidad de especies de capital y las estrategias poder. Las variables se referían en primer término a la posesión y control de recursos, particularmente, capital económico, cultural, social, y simbólico. Para luego plantear la vinculación con organizaciones internacionales, la utilización de recursos legales, el uso de los medios de comunicación, y la participación en foros de diálogos como estrategias efectivas para la movilización ciudadana.

No obstante, es fundamental expresar que esta investigación implicó un esfuerzo por innovar en lo que se refiere a la introducción del pensamiento de Bourdieu en la teoría de los movimientos sociales, particularmente bajo la temática del ambientalismo; por lo que aceptamos que no estará exenta de errores y cabos sueltos, los cuales sin lugar a dudas motivarán otras investigaciones o por lo menos señalaran algunos caminos difíciles de transitar.

A continuación se presentan las principales conclusiones de la investigación, tomando en cuenta los resultados logrados mediante el análisis y la prueba de las hipótesis. Estas se entregan al lector siguiendo un principio de lo particular a lo general, es decir, primero

interpretando los resultados de las pruebas de hipótesis específicas, para luego dar una conclusión general sobre la investigación.

Comenzando por la variable “diversidad de especies de capital”, la primera hipótesis refería al capital económico utilizado por el movimiento para presionar a las autoridades. Esta hipótesis se aprueba pues el movimiento ambientalista contaba con el capital económico necesario para difundir su postura en diferentes ámbitos

Entre los resultados más interesantes se encontró que los miembros del movimiento eran principalmente de clase media, lo que les permitía contar con la posibilidad de sufragar los gastos que implicaba el movimiento, así como invertir el tiempo necesario. Por otra parte, el capital económico fue también utilizado por los agentes para difundir sus demandas en diferentes lugares del país y en los Estados Unidos. Estableciéndose en el marco de la promoción de las demandas a nivel internacional vínculos con organizaciones ambientalistas.

A su vez, el uso de los medios de comunicación implicó inversiones económicas, sobre todo considerando la diversidad de espacios en donde se difundieron las demandas. Junto con lo anterior, y siendo uno de los principales factores, los recursos legales utilizados funcionaron como un elemento de presión, dado el hecho de que México pertenece a la CIDH. Se llevaron tres procesos legales por parte del movimiento, dos del orden local, y el último mencionado: no es posible ignorar que éstos conllevan un costo económico implícito

Cabe decir que desde nuestra perspectiva, el capital económico no fue el principal motor de efectividad para el movimiento ambientalista, pues pesaron mucho más las relaciones sociales (capital social) que sostenían los agentes con el gobierno y los medios de comunicación, así como los conocimientos (técnicos y prácticos) de sus miembros, es decir, el capital cultural.

El capital económico apoyo las actividades relacionadas con las otras especies de capital, pero en el fondo, el principal activo del movimiento ambientalista era su capacidad de utilizar el capital cultural para construir un capital simbólico e influir, a través de las estrategias

orientadas a medios y a las cortes, en la Doxa, es decir en la percepción de la ciudadanía y de las autoridades.

El movimiento tuvo la capacidad de magnificar su capital simbólico y proyectar sus argumentos como los más sólidos ante la opinión pública, inclusive al grado de alterar la percepción del gobierno federal en torno a un proyecto que en un principio era económicamente viable y políticamente seguro, y que luego se transformo en algo que generaba problemas y era un foco de atención negativa para el gobierno tanto a nivel nacional como internacional.

A partir de lo anterior se argumenta que la principal herramienta de los movimientos ambientalistas, de características similares al estudiado, sería el capital simbólico. Ya que los conflictos relativos a la problemática ambiental se desarrollan en el campo cultural, en donde se contraponen formas de vida, modelos económicos, ideologías. En el campo cultural se libran las batallas simbólicas por definir lo que define las reglas del juego, por instaurar los mecanismos causales que reproducen las estructuras sociales y por construir las definiciones culturalmente compartidas.

El capital económico es importante, y tiene un impacto sobre la efectividad de un movimiento ambientalista, pero es principalmente un recurso para sustentar estrategias de poder relacionadas con el capital cultural. No es posible desarrollar un movimiento ambientalista sin recursos económicos, pero a la vez, es la capacidad de competir en el espacio simbólico lo que incrementa las posibilidades de éxito para la organización ambientalista.

En ese sentido, la definición de poder de Bourdieu aporta elementos valiosos para el análisis de los movimientos sociales; ya que si bien los agentes que interactúan en un campo juegan un rol específico bajo reglas relativamente claras y una estructura de poder definida, estas condiciones son modificables, e inclusive se modifican constantemente: como la decisión del gobierno de cancelar el incinerador, que hubiera sido impensable unos meses antes.

Desde otra perspectiva, el capital económico finalmente no acabó siendo el principal criterio que promovió el cambio de parecer del gobierno federal, sino el capital simbólico resultante de la capacidad del movimiento ambientalista para proyectar su capital cultural en la forma un proyecto cultural alternativo al de los grupos dominantes. Al final, las autoridades no decidieron por razones económicas, pues TEESA contaba con un capital transnacional que apoyaba su causa y era muy superior al del movimiento.

El gobierno federal cambió su decisión porque el movimiento ambientalista fue capaz de articular estrategias que tenían el objetivo de subrayar definiciones culturales capaces de enfrentarse a las definiciones de las autoridades federales y los empresarios (grupos dominantes).

En otro sentido, se podría iniciar una larga discusión sobre la capacidad de los movimientos para racionalizar sus acciones; medir su discurso simbólico, invertir su capital, planificar sus estrategias. No está claro hasta qué punto los agentes tuvieron control de sus estrategias y calcularon sus resultados. Es probable que no hubiera tal precisión estratégica, sin embargo, al final, lo que importa para el movimiento ambientalista es el resultado.

La segunda hipótesis también fue aprobada. Esta tenía que ver con el capital social del movimiento ambientalista y su capacidad para generar otros tipos de capital y redes sociales con agentes importantes para el caso. Entre los resultados más interesantes se encuentra que el capital social facilitó al movimiento sostener una red social que le habría permitido relacionarse con agentes clave que pusieron a su disposición importantes recursos.

Es fundamental explicar que los miembros del movimiento detentaban posiciones dominantes en sus respectivos campos, por lo que aportaron al movimiento vínculos “naturales” con agentes del sector gobierno, el ámbito académico, las empresas, y las organizaciones sociales. Aunado a las relaciones sociales, la mezcla de agentes sociales aportaba un capital cultural muy útil para el movimiento: así capital social generaría capital cultural.

El movimiento contra TEESA tuvo la capacidad de ser efectivo en su heterogeneidad, es decir, era una estructura compleja que pendía de un delicado equilibrio. Sin embargo, el movimiento ambientalista demostraba flexibilidad al dar cabida a agentes de múltiples campos y al estructurar un sentido relativamente homogéneo a sus objetivos y demandas.

La tercer hipótesis fue comprobada, y aludía al conocimiento práctico y técnico (capital cultural) que tenían los miembros del movimiento y que les permitió no solo participar en los foros y expresar opiniones coherentes en algunos espacios, sino presentarse a sí mismos como especialistas y simbólicamente dar verosimilitud a las demandas de la organización ante la sociedad en general.

El movimiento contaba con elementos que le permitían ser reconocido como un organismo legítimo ante la ciudadanía. Sus especialistas formaban parte de instituciones respetables. Había empresarios dedicados al ramo de manejo de residuos peligrosos que se oponían al proyecto de incinerador. Se destacaba el grupo de Amas de Casa de Playas de Tijuana como ciudadanas preocupadas por los intereses de sus familias y vecinos. El movimiento contra TEESA configuró un proyecto cultural alternativo capaz de enfrentar las definiciones culturales de los grupos dominantes.

Sin el capital cultural, se hubiera perdido la capacidad para presentarse como una organización confiable frente a la ciudadanía, y considerando la lógica autoritaria del campo político-administrativo vigente, se podría pensar que difícilmente las autoridades federales hubieran tenido razones “sólidas” para modificar su criterio. Debe quedar claro que TEESA era un proyecto promovido por la cúpula de la estructura de poder en el campo político-administrativo; siendo que el incinerador resolvería un problema que comenzaba a ser difícil de enfrentar, el manejo de los residuos peligrosos de CFE.

Sin embargo, el movimiento ambientalista fue favorecido por el contexto: particularmente por la liberalización política y económica del país; lo que le permitió aprovechar su capital cultural y relacionarse con agentes de la política, los medios de comunicación, o la economía, y

utilizarlos para difundir sus demandas en diferentes espacios geográficos, en ocasiones en ambos lados de la frontera.

Al desarrollarse el fenómeno en un contexto de cerrazón política y económica total, el resultado podría haber sido distinto; lo que nos refiere al hecho de que en la teoría de los campos los agentes dependen en gran parte de las condiciones contextuales del campo; pero también es importante saber reconocer las ventanas de oportunidad y reaccionar.

Una virtud del movimiento fue que la posición dominante de algunos de sus miembros en sus respectivos campos, facilitó a los agentes del movimiento ambientalista el influir de manera decisiva en otros campos, como el mediático, el legal, o el gubernamental, para difundir sus demandas y presionar a las autoridades a través de distintos frentes.

Al final, si se encontró una relación entre el capital cultural del movimiento y la capacidad para utilizar estratégicamente sus conocimientos sobre la problemática, y generar vínculos con otros agentes, obtener otras formas de capital, y desarrollar estrategias específicas para presionar de forma efectiva a las autoridades.

El componente denominado “diversidad de especies de capital” fue útil para explicar por medio del análisis de los recursos del movimiento, como se elaboraron estrategias de presión sobre el gobierno. Observándose las causas del éxito de varias estrategias, y comprendiendo los mecanismos causales de cómo el movimiento articuló su efectividad al presionar a las autoridades.

Es necesario discutir un poco el término estrategias para deslindarlo de un sentido casi militar o ejecutivo. Partiendo de la concepción, inscrita en la teoría de los campos, de que las acciones son resultado de la combinación entre el habitus y las estructuras colectivas, ambos elementos presentes en un momento histórico con características específicas.

Entonces las estrategias de los movimientos estarían acotadas por las posibilidades del contexto del campo y por el habitus de sus miembros. No implicando necesariamente que

estos patrones sociales sean imposibles de desviar; pues como cualquier otro elemento del espacio social, son modificables. Pero dicha modificación implica una inversión afortunada de capitales y un cambio del sentido del campo.

Las primeras hipótesis de la segunda variable se referían a la capacidad del movimiento para asociarse con otras organizaciones similares con el objeto de ser más efectivo en varios niveles. En primer lugar, se buscaba difusión de las demandas del movimiento ambientalista, así como la proyección en distintos planos regionales; para incluir también la adquisición de recursos a través de la vinculación con organizaciones nacionales o internacionales.

La asociación se planteaba en dos sentidos, primero en la relación con un metamovimiento fronterizo que comenzaba a englobar las demandas de distintos movimientos locales. En segundo lugar se suponía la relación con ONG internacionales, de la cual se obtendría asesoría y recursos económicos. La primera hipótesis se comprobó, la segunda fue rechazada.

Entre los resultados de mayor interés con respecto a la primera hipótesis están los siguientes. Por medio de evidencias hemerográficas y entrevistas se comprobó que el movimiento sí tenía un vínculo con el metamovimiento. Sin embargo, esto no sería suficiente, sino que habría que detallar la forma como el primero se había beneficiado de la relación.

A partir del procesamiento de la información, se comprobó que agentes del metamovimiento manifestaban interés en la problemática del movimiento de Tijuana; además, se demostró que la relación del movimiento con otras organizaciones fronterizas presionó a las autoridades federales, a través del desarrollo de estrategias de movilización conjuntas y la difusión de las demandas de otros movimientos en los medios de comunicación.

También se logró detallar que el movimiento ambientalista aprovechó sus vínculos con el metamovimiento para difundir sus demandas a nivel nacional e internacional, teniendo un alcance que difícilmente hubieran conseguido por sí mismos.

La relación con el metamovimiento no fue algo casual, se construyó a partir de las especies de capital que poseía el movimiento ambientalista. El capital económico necesario para transportarse. El capital cultural para establecer diálogos con otros especialistas que actuaban en el metamovimiento. Y el capital social para encontrar relaciones en diversos ámbitos y favorecer su causa.

Aunado a lo anterior, la constitución de lo que parecía un movimiento ambientalista a lo largo de la frontera norte de México preocupó a las autoridades y los hizo actuar con cuidado en sus declaraciones en prensa y en sus apariciones en público. Este hecho tuvo un peso simbólico que se extendió no solamente en los distintos niveles del gobierno mexicano, sino del otro lado de la frontera, en donde tenían sus propias problemáticas; recordemos que las protestas del metamovimiento en algunos casos se referían a casos en los estados sureños de los Estados Unidos.

El metamovimiento fue para el movimiento ambientalista el fiel de la balanza. La relación con otras organizaciones ambientalistas aportó experiencia, poder en los medios de comunicación, y la capacidad de articular demandas apoyados en una mayor cantidad de irregularidades. Asimismo, el capital social (político) que poseían dichas organizaciones era cada vez más atractivo para las autoridades y, en comparación con el capital económico de TEESA, se fortalecía y relativizaba las opiniones emitidas por el gobierno.

De otra parte, la hipótesis que proponía la vinculación con las ONG internacionales fue rechazada por las siguientes razones. En primer lugar, se determinó que aunque el movimiento ambientalista si estableció vínculos con ONG internacionales, como por ejemplo Green Peace, esta relación fue limitada y no representó recursos económicos, asesoría técnica, o apoyo significativo expresado en medios de comunicación.

Lo anterior nos habla de la cualidad regional del movimiento ambientalista, el cual a pesar de estar ubicado en una zona fronteriza, no logró trascender, salvo algunas notas periodísticas, a los medios internacionales. El hecho de que la problemática de los askareles fuera exclusivamente mexicana, tuvo una influencia también en la situación

Empero, aunque la problemática era del gobierno mexicano, existen cuencas atmosféricas e hidrográficas compartidas que dada la cercanía del incinerador podrían haber sido receptoras de los impactos negativos. Igualmente, el tratado de la paz estipulaba que no se instalarían plantas de manejo de residuos peligrosos a 100 km de la frontera. Resultando atípico que las autoridades estadounidenses no tomaran partido en el conflicto, y que solo una ONG californiana, Health Coalition, asistiera a los debates sobre el incinerador.

Es probable que al igual que las autoridades mexicanas, las estadounidenses estuvieran intentando mantener un alto nivel de cordialidad en sus relaciones diplomáticas con México, pues negociaban la firma del TLCAN. Asimismo, se comprobó que el incinerador TEESA había sido transportado del norte de California, en donde un movimiento ambientalista bloqueó su operación, por lo que probablemente era un tema que había salido de la agenda.

La segunda hipótesis propuesta como estrategia, sería la utilización de recursos legales en diferentes espacios geográficos. Esta hipótesis fue comprobada. Entre sus resultados significativos estuvo el hecho de que el movimiento ambientalista utilizó recursos legales como el juicio de interdicto y el amparo a nivel nacional, así como la denuncia en las cortes internacionales, para exponer los riesgos a la salud y los impactos ambientales del incinerador, a nivel nacional e internacional.

Comprobándose en la investigación que el resultado de los procesos legales en contra de TEESA fue la exposición, ante la ciudadanía, otros agentes políticos nacionales e internacionales, y los medios de comunicación, de los riesgos e impactos del incinerador, así como la incapacidad de las autoridades para desarrollar un proceso como tal en términos institucionales.

Por lo que se determinó que la utilización de los recursos legales fue un factor determinante en la efectividad del movimiento ambientalista, pues no solo incrementó la presión sobre el gobierno a través de los medios de comunicación locales, nacionales y binacionales, sino que expuso públicamente los riesgos sobre la salud de la ciudadanía y los impactos ambientales que eran inherentes a la instalación del incinerador TEESA en una zona urbana.

La importancia de los procesos legales se relaciona con la cualidad simbólica de sus resultados. El juicio de amparo resultó en improcedencia; el de interdicto fue desechado por las autoridades municipales al no cumplirse los plazos institucionales. Ambos resultados, a pesar de no ser los ideales en términos jurídicos, modificaron radicalmente los posicionamientos de los agentes confrontados. Ahora el movimiento ambientalista había cubierto los procesos institucionales, siendo los resultados de los juicios útiles para probar la incapacidad o negligencia de las autoridades.

En ese momento el capital simbólico del movimiento ambientalista se incrementó exponencialmente, pues habían utilizado el mecanismo institucional de reproducción social a su favor, convirtiéndolo en una herramienta del movimiento, y elaborando a partir de él definiciones culturales. Una lección interesante para los movimientos sociales podría ser que no basta con desarrollar estrategias que se vinculen con los mecanismos del sistema, es necesario cambiar el sentido de estos, y re-definir los resultados del proceso.

El movimiento ambientalista logró definir, por ejemplo, al gobierno como corrupto o ineficiente por no ser capaz de desarrollar un proceso institucional con base a la normatividad o simplemente por no tener la intención de cumplir las leyes; mientras que a la empresa TEESA, independiente de sus argumentos científicos, la calificó como negligente y criminal para la comunidad y el medio ambiente.

Lo anterior refleja como en el espacio social en general, y en los campos en particular, el poder de un agente se concentra en su capacidad para definir las cosas. El poder de definir lo que es correcto o incorrecto, más allá de lo normativo, pues la legalidad/ilegalidad respondería a un sistema de valores establecido, no a los intereses siempre cambiantes de los múltiples sectores sociales.

En ese punto, el movimiento social se convierte en un factor de cambio y re definición social. Actuando como un elemento necesario (a la Melucci) y no marginal que tendría como principal función la modificación de las estructuras de poder que dan vida a la sociedad.

Aunque habría que limitar el sentido ético-mesiánico del movimiento para remplazarlo por una conceptualización relacionada con un proceso social de cambio que responde a las modificaciones naturales de la Doxa que resultan de las luchas de poder en el campo.

El movimiento ambientalista fue efectivo primero en cumplir con los requisitos normativos estableciendo tres procesos legales vinculatorios. Luego, al obtener negativas, se dedicó a modificar el sentido de los veredictos, utilizándolos como herramientas de combate simbólico. Tal situación, en conjunto con las luchas simbólicas que se articulaban en los medios de comunicación, presionó a las autoridades y las incentivó para cambiar de parecer.

En simetría con la utilización de recursos legales, la hipótesis tres (componente dos) sería una de las más importantes de la investigación Sugiriendo que el movimiento ambientalista utilizó a los medios de comunicación locales, nacionales, e internacionales, para presionar al gobierno federal. Dicha hipótesis fue aprobada por medio de un análisis hemerográfico y el análisis estadístico de la información

De los resultados obtenidos, se confirma por el volumen de notas y su contenido, que el movimiento si logró llamar la atención de los medios de comunicación, pues se publicaron una gran cantidad de notas al respecto y un alto porcentaje se interpretaron como a favor de la causa del movimiento o al menos lo presentaban de una manera favorable.

La capacidad para llamar la atención de los medios y difundir sus demandas se concretó gracias a dos factores. El capital social de los agentes, expresado en relaciones sociales que alimentaron la estrategia, así como las posiciones dominantes que ocupaban los miembros del movimiento en áreas como la academia. De otra parte, el capital cultural de sus miembros facilitó una eficiente exposición de sus demandas, ya que discursivamente el movimiento podía llegar a diferentes sectores sociales.

Pero el descubrimiento más significativo de la investigación se presentó cuando, al procesar la información, se encontró una relación directa entre la frecuencia de las notas de apoyo al movimiento, los procesos legales, y el cambio de discurso de las autoridades en la prensa

escrita. De ahí que se aprobara la hipótesis, y esencialmente, se le diera un peso relevante al capital simbólico, pues tanto los procesos legales como la estrategia de medios se dedicaron a producir capital simbólico para el movimiento.

El capital simbólico fue la principal herramienta para presionar a las autoridades. La capacidad de imponer un discurso y definir a los rivales como corruptos o negligentes es un arma poderosa. Por lo que en algún momento del conflicto, probablemente en abril de 1992, el gobierno modificó su posición y accedió a las demandas del movimiento.

En torno a la cuarta hipótesis, referente a la participación en foros internacionales, se puede decir que esta fue rechazada, ya que el movimiento fue principalmente regional, con alcances nacionales en algunos momentos del conflicto. El movimiento no participó en las negociaciones del TLCAN, aunque posteriormente algunos de sus miembros participaron en el PIAF.

Probablemente, el movimiento ambientalista no buscó presionar a las autoridades estadounidenses porque conocía la problemática y sabían bien que era un asunto que el gobierno mexicano tenía que resolver. A su vez, se comprobó que las autoridades estadounidenses en ningún momento intentaron presionar al gobierno mexicano para que instalara el incinerador o cancelaran la licencia de operación de TEESA.

Habiendo analizado las cuatro variables del segundo componente. Se determina que las “estrategias de poder” fueron elementos útiles para explicar la manera como se movilizaron los recursos y se presionó a las autoridades. Sobre todo en el caso de los componentes legal y de medios de comunicación, pues impulsaron el capital simbólico del movimiento ambientalista y fueron clave en la obtención de los objetivos.

Finalmente, con respecto a las contribuciones de este trabajo al conocimiento, se ha dicho que la investigación integra una teoría que no había sido usada para explicar la problemática de los movimientos ambientalistas; además de hacer una adaptación a la teoría de los campos para acotarla a la particular dinámica de los movimientos sociales. Además, se realizó una

adecuación de los presupuestos teóricos de Bourdieu al contexto mexicano, lo que probablemente facilitará a otros investigadores la aplicación de la teoría de los campos a problemáticas diversas.

Por otra parte, quizás el principal aporte del trabajo sería un modelo científico orientado hacia el análisis de la efectividad de los movimientos ambientalistas. Aunque habría que especificar la necesidad de complejizar el modelo para que incluyera una mayor cantidad de variables y componentes representativos de movimientos ambientalistas procedentes de otros contextos.

Entre las variables no incluidas en el modelo por falta de información o datos significativos están los elementos (referidos en el capítulo I) relacionados con el paradigma de la identidad, como por ejemplo, la construcción de identidades colectivas; o de otra parte, algunos conceptos en torno al paradigma de la movilización de recursos, como la capacidad de organización; o también un análisis del discurso de la organización a partir de la desconstrucción.

No cabe duda que hubo cuestiones que no fueron tratadas con la eficiencia científica necesaria, lo que dejó algunos elementos sin resolver como es normal en cualquier trabajo de investigación. Destacando la necesidad de una mayor profundización en la adaptación de la teoría de los campos, proyecto obligatoriamente postergado para investigaciones futuras.

Para terminar sugiriendo que se profundice en la integración de la teoría de los campos en torno a los movimientos ambientalistas desde la lógica de un estudio comparativo en el que se analicen más variables de investigación para tratar de encontrar un mayor volumen de regularidades que nos permitan comprender la forma como la Doxa de un campo podrá ser modificada por los agentes sociales.

En última instancia, el trabajo de investigación analizó por medio de un modelo científico la efectividad de la participación ciudadana en los movimientos ambientalistas, determinándose que los agentes sociales si tuvieron la capacidad de influir en el gobierno e impedir la instalación de un proyecto que percibían como riesgoso para su salud y negativo para el medio

ambiente. Así, el movimiento en oposición a TEESA sería un ejemplo de cómo la acción colectiva podrá contravenir la dinámica de la estructura de poder dominante y re-definir el espacio simbólico que determina en gran parte (sin dejar de ser determinado por nosotros) nuestras vidas.

BIBLIOGRAFÍA

- Hirschman, Albert, 1977, *Salida, voz y lealtad*, México, FCE, 189 p.
- Bauman, Zygmunt, 2006, *Ética posmoderna*, México, Siglo XXI, 296 p.
- Beck, Ulrich *et al.*, *Modernización reflexiva, política, tradición y estética en el orden social moderno*, España, Editorial Alianza, 329 p.
- Bourdieu, Pierre, 1991, *El Sentido práctico*, Barcelona, Taurus, 456 p.
- Bourdieu, Pierre, 1992, *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*, Barcelona, Anagrama, 520 p.
- Bourdieu, Pierre, 1999, “Repensar el movimiento social”, París, en: <http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Repensar%20el%20movimiento%20social%20Pierre%20Bourdieu.pdf>, consultado: 15 de abril de 2010, 6 p.
- Bourdieu, Pierre, 2001, *Contrafuegos*, Barcelona, Anagrama, 155 p.
- Bourdieu, Pierre, 2002, *Intelectuales, política y poder*, Buenos Aires, Eudeba, 246 p.
- Bourdieu, Pierre, 2006, *Autoanálisis de un sociólogo*, Barcelona, Anagrama, 160 p.
- Bourdieu, Pierre, 2007, *Razones prácticas sobre la teoría de la acción*, Barcelona, Anagrama, 233 p.
- Bourdieu, Pierre, Loic, Wacquant, 2005, *Una invitación a la sociología reflexiva*, México, Siglo XXI, 424 p.
- Bourdieu, Pierre, en Jiménez, Isabel, Comp., 2005, *Ensayos sobre Pierre Bourdieu y su obra*, México, Plaza y Valdez Editores, Universidad Nacional Autónoma de México, 387 p.
- Castells, Manuel, 1981, *Crisis urbana y cambio social*, segunda edición, México, D.F., Siglo veintiuno editores, 322 p.
- Castells, Manuel, 1983, *Movimientos sociales urbanos*, séptima edición, México, D.F., Siglo veintiuno editores, 131 p.
- Convenio de Estocolmo [versión electrónica], 2001, en: <Convenio de la Paz, [versión electrónica], 1983, Semarnat, en: http://www.semarnat.gob.mx/presenciainternacional/fronteranorte/Documents/Marco%20Legal/007_Mex-EUA_Convenio_Protección_Medio_Ambiente_Fronterizo_CONVENIO%20DE%20LA%20PAZ%201983.pdf>, consultado el 14 de Mayo de 2009.

Corcuff, Philippe, 2009, "Pierre Bourdieu (1930-2002) leído de otra manera", *Crítica social post-marxista y el problema de la singularidad individual*", en *Sociología*, México, vol. 4, núm. 7, pp. 9-26.

Diani, Mario, 1992, The concept of social movement, *The sociological review*, núm. 4, año 1, pp. 1-25.

Dube, Saurabh, 2001, *Sujetos subalternos*, Colegio de México, 279 p.

Elías, Norbert, 1995, *Sociología fundamental*, Barcelona, Gedisa editorial, 216 p.

Elster, John, 1990, "Racionalidad, moralidad y acción colectiva", *Zona abierta*, España, núm. 54-55, pp. 43-67.

Foucault, Michel, 1980, *El ojo del poder. En Jeremías Bentham. El Panóptico*. Barcelona, Editorial La Piqueta, 189 p.

Foweraker, Joe, 2001, "Grassroots movements and political activism in Latin America: A critical comparison of Chile and Brazil", *Journal of Latin American Studies*, Inglaterra, Cambridge University Press, vol. 33, núm. 4, invierno, pp. 839-865.

Gamson, William, 1990, *The strategy of social protest*, Belmont (California), Wadsworth Publishing Company, 357 p.

Giddens, Anthony, 1987, *Las nuevas reglas del método sociológico. Crítica de las sociologías interpretativas*, Buenos Aires, Amorrortu, 174 p.

Green Peace, 2005, "Además de dañar el ambiente y la salud pública, la autorización de la Semarnat para incinerar askareles en El Higo, Veracruz, es ilegal", Boletín 0547, Green Peace, México, en <http://www.greenpeace.org/mexico/prensa/releases/ademas-de-da-ar-el-ambiente-y>), consultada: 31 de Diciembre de 2009.

Habermas, Jurgen, 1987, *Teoría de la acción comunicativa Racionalidad de la acción y racionalización social*, primera parte, décima edición, Madrid, Taurus, 517 p.

Habermas, Jurgen, 1999, *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*, Madrid, Cátedra, 237 p.

Hamel, Jacques, 1997, "Sociology, Common Sense, and Qualitative Methodology. The Position of Pierre Bourdieu and Alain Touraine", *Canadian Journal of Sociology*, Université de Montréal, núm. 22, en: <http://www.ualberta.ca/~cjscopy/articles/Hamel.html> consultada: 15 de enero de 2010, pp. 95-112

Jenkins, Craig, 1994, "La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales", *Zona abierta*, Madrid, núm. 69, pp. 5-22.

Kolakowsky, Leszek, 2001, *Libertad, fortuna, mentira y traición, Ensayos sobre la vida cotidiana*, Barcelona, Paidós, 108 p.

Leff, Enrique, 1986, *Ecología y capital: racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable*, México, Siglo XXI, 437 p.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), [versión electrónica], 1988, Congreso de la Unión, en http://www.conanp.gob.mx/pdf/leygra_eqilibrio.pdf >, consultado: el 10 de Julio de 2009.

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos [versión electrónica], 2003, Congreso de la Unión, en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/263.doc>, consultado: el 15 de Agosto de 2009.

Lomnitz, Larissa, 1975, *Como sobreviven los marginados*, México, Siglo XXI Editores, 322 p.

Luhmann, Niklas, 2007, *La sociedad de la sociedad*, México, D.F., Herder/Universidad Iberoamericana, 954 p.

Martí, Salvador, 2004, “Los movimientos sociales en el mundo globalizado”, *América latina hoy: Revista de ciencias sociales*, España, Universidad de Salamanca, vol. 36, en: <http://nuevomundo.revues.org/3031>, consultada: 18 de Diciembre de 2009, pp. 79-100

Martínez, Manuel, 2006, “El movimiento zapatista: un análisis desde la Teoría de la movilización de recursos”, *Kairos: revista de temas sociales*, México, año 10, núm. 18, pp. 1-24.

McAdam, Doug, 1986, “Recruitment to high risk activism: The case of freedom summer”, *American Journal of Sociology*, Estados Unidos, vol. 92, núm. 1 (Julio de 1986), en: <http://www.jstor.org/pss/2779717>, consultada: 16 de Julio de 2010, pp. 64-90.

McCarthy, John, Mayer, Zald, 1977, “Resource mobilization and social movements: a partial theory”, *American Journal of Sociology*, Estados Unidos, núm. 82, pp. 1212-1241.

Melucci, Alberto, 1988, *Los movimientos sociales y la democratización de la vida cotidiana*, Buenos Aires, CLACSO, 276 p.

Melucci, Alberto, 1989, *Nomads of the present. Social movements and individual needs in contemporary society*, Londres, Hutchinson, 288 p.

Morín, Edgar, 1990, *Introducción al pensamiento complejo*, Barcelona, Gedisa, 427 p.

Olson, Mancur, 1971, *The logic of collective action: public goods and the theory of groups*, primera edición, Cambridge, Harvard University Press, 186 p.

Parra, Marcela, 2005, “La construcción de los movimientos sociales como sujetos de estudio en América latina”, *Atenea Digital: revista de pensamiento e investigación*, Universidad Autónoma de Barcelona, núm. 8, otoño, en: <http://antalya.aub.es/athenea/num.8/parra.pdf>., consultado: 14 de Mayo de 2010, pp. 72-94

Pizzorno, Alberto, 1988, “Los intereses y los partidos en el pluralismo”, en Sergei, Berger, *La organización de los grupos de interés en Europa Occidental*, Madrid, Ministerio de Trabajo, pp. 24-46.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2002, Transformadores y condensadores con PCB: desde la gestión hasta la reclasificación y eliminación, en: http://www.chem.unep.ch/Pops/pdf/PCBTransformers_sp.pdf>, consultado: 16 de Julio de 2009.

Revilla, Marisa, 2006, “El concepto de movimiento social: acción, identidad y sentido”, *Última década*, Chile, Centro de investigación y difusión poblacional, núm. 5, pp. 1-18

Scott, James, 2000, *Los dominados y el arte de la resistencia*, México, Era, 221 p.

Snow, David, Robert Benford, 1992, “Master frames and cycles of protests”, en Aldon, Morris y Carol, Mueller, editores, *Frontiers in social movement theory*, New Heaven, Yale University Press, pp. 133-155.

Tarrow, Sidney, 1996, “States an opportunities: The political structuring of social movements”, en Doug McAdam, John McCarthy y Mayer N. Zald, editores, *Comparative perspectives on social movements*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 41-61.

Tilly, Charles, 1978, *From mobilization to revolution*, Michigan, The University of Michigan Press/Ann Arbor, 384 p.

Touraine, Alain, 1985, “An introduction to the study of social movements”, *Social Research*, núm. 52, año 4, pp. 749-788.

Touraine, Alain, 1995, *Producción de la sociedad*, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto Trances de America Latina/Embajada de Francia, 372 p.

Touraine, Alain, 1999, *¿Cómo salir del neo liberalismo?*, Barcelona, Paidós, 318 p.

Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN), [versión electrónica], 2010, Secretariado del TLCAN, <http://www.nafta-sec-alena.org/sp/view.aspx?conID=590>>, consultado: 12 de Noviembre de 2009.

Velázquez García, Mario Alberto, 2007, “Perspectivas del movimiento ambiental en la Frontera entre México y Estados Unidos: Acciones y necesidades”, *Región y Sociedad*, Hermosillo, México, El Colegio de Sonora, Vol. 19, núm. especial, pp. 171-197.

Valenzuela, José [tesis de maestría], 1988, “Empapados de sereno. El movimiento urbano popular en Baja California”, Tijuana, El Colegio de la frontera norte, Maestría en desarrollo regional, 291 p.

Vargas, José, 2004, “Teoría de la acción colectiva, sociedad civil y nuevos movimientos sociales en las nuevas formas de gobernabilidad en Latinoamérica”, *Nómadas*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, núm. 9, enero-junio, pp. 35-57.

Vicente, Loreto, 2004, “¿Movimientos sociales en red? Los Hacktivistas”, *El cotidiano*, D.F., Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, vol. 20, núm. 126, pp. 15-35.

Wittgenstein, Ludwig, 2008, *Los cuadernos azul y marrón*, Barcelona, Tecnos, 217 p.

ANEXOS

Anexo i. Agentes entrevistados para el caso de estudio

A) Campo académico (CA):

CA1-Dr. Carlos de la Parra:

Descripción: Investigador de El Colef; miembro del movimiento ambientalista; fundador del PRD en Baja California; ex delegado de Semarnat.

CA2-Dr. Roberto Sánchez:

Descripción: Investigador de El Colef; miembro del movimiento ambientalista; miembro de la ONG Proyecto Fronterizo; Director del departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente de El Colef durante el periodo de estudio.

CA3-Dr. José Manuel Valenzuela:

Descripción: investigador de El Colef; especialista en movimientos sociales urbanos.

CA4-Dra. Gabriela Muñoz Meléndez:

Descripción: Investigadora de El Colef; Especialista en contaminación atmosférica; ex funcionaria del gobierno del Distrito Federal en el área ambiental.

B) Campo social (CS):

CS1-Antropóloga Laurie Silvan:

Descripción: miembro del movimiento ambientalista; ex Directora de la ONG Proyecto Fronterizo, organización que participo en el grupo de ONG Aire Sano.

CS2-Arquitecta Margarita Díaz:

Descripción: Activista ambiental; actual Directora de ONG Proyecto Fronterizo

CS3-Arquitecto Roberto Díaz García

Descripción: Dirigente del movimiento ambientalista; presidente del Foro Ecologista de Baja California; Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOPE) durante el gobierno de Milton Castellanos en Baja California (1971-1977) y Delegado de Sedue en Sonora (1988-89).

C) Campo administración pública (CAP):

Niveles de gobierno a los que pertenecen los agentes:

M-Municipal

F-Federal

CAPM1-Contador público Carlos Montejo Favela

Descripción: Presidente municipal de Tijuana durante el periodo 1989-1992.

CAPM2-Arquitecto Héctor Castellanos

Descripción: Director de Desarrollo Urbano y Ecología durante el gobierno de Carlos Montejó Favela.

CAPM3-Arquitecto Enrique Romero

Descripción: Jefe del departamento de Control Urbano durante el gobierno de Carlos Montejó Favela.

CAPM4-Arquitecto Rafael Sanabria

Descripción: actual secretario particular del alcalde Jorge Ramos.

CAPM5-Ingeniero Manuel Guevara

Descripción: actual Administrador de la ciudad (Tijuana).

CAPF1-Biólogo Jorge Escobar

Descripción: maestro en Ciencias; Jefe del departamento de Prevención y Control de la Contaminación de Sedue (1988-1990) y subdelegado de Sedue en Baja California (1990-1992). Actualmente es propietario de un despacho de consultoría ambiental.

D) Campo económico (CE):

CE1-Ingeniero José Carmelo Zavala

Descripción: actual Presidente del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable (CCDS) en el noroeste de la república; ex Presidente de la ONG Aire sano; Director de Biotec (empresa de manejo de residuos peligrosos); Académico UABC-El Colef; especialista en manejo de residuos peligrosos.

Anexo ii. Publicaciones 1992

Periódico	A	R	N.D.
Diario 29	17	7	2
La Jornada	20	1	
El Porvenir	2		
El Universal	4		
Excélsior	10		
El Sol de Tijuana	2		
El Heraldó	1		
Azteca	1		
New York Times	1		
Zeta	4		
El Diario de Monterrey	1		
ABC	1		
Baja California	1		
El Mexicano	1		

San Antonio Express News	1			
Revista Campestre	1			
Uno más uno	1			
Tribuna de Monterrey	1			
El Norte	2			
Zócalo	3			
Total	75	8	2	85

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica

Anexo iii. Desglose de notas periodísticas

Notas locales				
Título	Fecha	Apoyo	Rechazo	N.D.
Bienestar del pueblo sobre otros intereses	27/02/92	X		
Vecinos de Playas realizaron una nueva protesta en contra de TEESA	29/02/92	X		
Frente fronterizo contra la instalación de tiraderos nucleares propone diputada federal	02/03/92	X		
Proyecta EU exportar sus residuos industriales a territorio mexicano	02/03/92	X		
En forma abrupta se suspendió la sesión ordinaria de cabildo	04/03/92		X	
Los regidores ratificaron ayer la determinación de seguir adelante en el juicio de interdicto contra	04/03/92	X		
Marcha en contra de TEESA y Titisa	04/03/92	X		
Incinerador de Chemical en Kettleman, igual que en Tijuana	13/03/92	X		
No se recabó el título	13/03/92	X		
Campaña en contra de Chemical Waste Management de México (desplegado)	13/03/92		X	
Informaciones falsas sobre los oponentes a TEESA y Titisa (carta)	13/03/92	X		
Manifestaciones de protesta contra TEESA y Titisa	13/03/92	X		
Rechazo a basureros tóxicos	18/03/92	X		
Crece la pugna entre Chemical y los colonos	18/03/92	X		
Appel Chacón: Estudiarán diputados el caso TEESA	01/04/92	X		
¿Chemical Waste, Una blanca paloma? Pte. 1	01/04/92	X		
Agresiva manifestación de amas de casa de Playas	01/04/92		X	
Emplazado EU a dar respuesta a México	02/04/92	X		
¿Chemical Waste, Una blanca paloma? Pte. 2	02/04/92	X		
Revocan licencia al incinerador de Playas	03/04/92	X		
Positiva respuesta del gobierno federal en torno al incinerador	03/04/92	X		
Reubicación de la recicladora, piden	04/04/92	X		
Fue sorpresiva la clausura del incinerador	04/04/92		X	
Determinaron la reubicación de TEESA las demandas populares	04/04/92	X		
Amas de C. pedirán a la Sedue copia de la clausura del incinerador	05/04/92	X		
No desalentará a empresarios foráneos la clausura del incinerador	06/04/92			X
Desplegado Chemical Waste Management	06/04/92		X	

Ecologistas pueden pedir reubicación de Titisa	06/04/92	X		
Asevera Greenpeace: El desplegado trata de sorprender a la opinión pública	07/04/92	X		
Se entrevistarán representantes de la Chemical Waste con Sedue	08/04/92			X
Atinada decisión federal de reubicar TEESA: ecologistas	09/04/92	X		
Analiza Sedue posible operación de incinerador	13/04/92		X	
Crucial revocación de permiso a TEESA	13/04/92	X		
Titisa no saldrá de Playas: solo se reubicara el incinerador	23/04/92		X	

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica

Notas nacionales con enfoque movimiento local				
Título	Fecha	Apoyo	Rechazo	N.D.
Protesta contra EU por basurero toxico	18/01/92	X		
Diputada denuncia basureros tóxicos en la frontera norte	23/02/92	X		
Inician construcción de basurero nuclear	23/02/92	X		
Viola EU acuerdo ecológico: Flores	23/02/92	X		
Pretende EU instalar dos basureros nucleares a 24 Km. de la frontera	26/02/92	X		
Estudia la Sedue el proyecto de EU de instalar basureros nucleares en la frontera	28/02/92	X		
Rechazan instalación de un cementerio nuclear fronterizo	28/02/92	X		
A organizarse, llama a grupos civiles en Tijuana	02/03/92	X		
Anuncian movilizaciones contra los proyectos de basureros radioactivos	05/03/92	X		
Hará el PRD movimiento de protesta	09/03/92	X		
Exigirán respeto para convenios internacionales	09/03/92	X		
Titisa no saldrá de Playas: solo se reubicara el incinerador	12/03/92	X		
Tiempos de lucha (columna)	13/03/92	X		
Gestionar la cancelación de los cementerios nucleares, piden más de cien grupos sociales	21/03/92	X		
Greenpeace expresa también su firme rechazo a los depósitos radioactivos	21/03/92	X		
No a los confinamientos e incineradores de residuos peligrosos (desplegado)	21/03/92	X		
Pretenden expandir sus proyectos de desechos tóxicos a México	30/03/92	X		
Desautorizan la incineración de askareles	03/04/92	X		

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica

Notas nacionales con enfoque metamovimiento				
Título	Fecha	Apoyo	Rechazo	N.D.
Por ningún motivo debe permitirse la creación de basureros nucleares	19/01/92	X		
Representantes de todos los partidos asumen actitud de defensa el riesgo	22/02/92	X		
Un estado radioactivo	23/02/92	X		
Inadecuado almacenaje de residuos peligrosos en 450 lugares a lo largo de la frontera	28/02/92	X		
Rechazará México proyectos riesgosos de EU en la frontera: Sedue	02/03/92	X		
No presionará México contra la instalación de depósitos nucleares	04/03/92		X	
El PRD propondrá ante la LV Legislatura un nuevo proyecto de Ley de Equilibrio Ecológico	05/03/92	X		
Diputada perredista alerta sobre probable instalación de incineradora de tóxicos	09/03/92	X		
Protesta el día 21 en ambos países contra los depósitos	10/03/92	X		
La población se opone a los basureros de productos tóxicos en EU	10/03/92	X		
Frontera mutante (cartón)	12/03/92	X		
Durante 25 años almacenarían basura nuclear, en Spofford	13/03/92	X		
Obispos mexicanos gestionarán su cancelación: J. Sandoval	13/03/92	X		
Evaluarán cementerios	13/03/92	X		
Oposición tajante a los basureros tóxicos en la frontera con EU: Wybo	13/03/92	X		
El cementerio esta a 50 kilómetros	13/03/92	X		
EU no informa aun sus planes para crear basureros tóxicos	13/03/92	X		
Amplio rechazo a los basureros nucleares: se anuncian movilizaciones en la frontera	13/03/92	X		
20 millones de toneladas de residuos tóxicos, capacidad de los cementerios	13/03/92			X
Puntos oscuros en el informe de la EPA	13/03/92			X
Exigen posponer los proyectos de desechos tóxicos en Texas	14/03/92	X		
Ecologistas crean Frente Fronterizo por la vida	17/04/92	X		
Iniciaron en Juárez lucha contra el cementerio nuclear	30/05/92	X		
Serán 28 los basureros tóxicos en la franja fronteriza	21/06/92	X		
Contra los basureros nucleares, acudirá diputada a la CIDH	09/09/92	X		
Pide PRD a CIDH evitar basureros radioactivos	15/09/92	X		
Evitar la instalación de basureros radioactivos, pide diputada del PRD	15/09/92	X		
Planean Diputados Mexicanos Reuniones con Congresistas Estadounid.	15/09/92	X		
Legisladora presenta denuncia contra México y EU en la CIDH	17/09/92	X		

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica

Notas internacionales				
Título	Fecha	Apoyo	Rechazo	N.D.
Environmental meeting scheduled for March 12	02/03/92	X		
Se fortalece la alianza binacional contra tiraderos en Texas	29/03/92	X		

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica

Anexo iv. Posición del autor de la tesis en el campo académico

Pierre Bourdieu comenzó su libro “Autoanálisis de un sociólogo” (2006) con un epígrafe: “Esto no es una autobiografía”, expresando así la intención de objetivar al sujeto objetivante, es decir, presentarse a sí mismo, al científico social, como constructor del objeto de estudio pero a la vez como parte del objeto de estudio. Para Bourdieu el científico no puede objetivar el objeto de estudio sino busca objetivarse a sí mismo por medio del análisis reflexivo de sus orígenes sociales, su posición en el campo y su postura ideológica o filosófica.

De ahí que la teoría de los campos cuente con una herramienta fundamental, la reflexividad, para buscar objetivar al sujeto objetivante. La reflexividad es un proceso riguroso en el cual el científico social se somete al “autoanálisis” crítico para evitar proyectar en la investigación la subjetividad que caracteriza a un agente social, quien aunque en este caso es un científico, no deja por ello de ser receptor de la influencia de su contexto histórico.

Bourdieu considera que la sociología reflexiva permite “...realizar la diseminación de armas de defensa contra la dominación simbólica...” (Bourdieu y Wacquant, 2005; 20), es decir, promover el “autoanálisis” como un proceso básico de la investigación científica con el objetivo de comprender las estructuras simbólicas que influyen en el comportamiento del científico.

La construcción e implementación del concepto de reflexividad y sus pretensiones de objetividad han recibido diversas críticas a lo largo de los años, las cuales se han centrado principalmente en dos aspectos, la supuesta intención de Bourdieu de adaptar conceptos provenientes del psicoanálisis a la sociología, y la cualidad “peligrosamente” autocomplaciente de la reflexividad, es decir, la incapacidad del científico social para objetivarse, presentándose de forma conveniente a su teoría y a sus resultados científicos (Beck *et al.*, 2001).

En ese sentido, no se cuenta aquí, al ser esta una tesis de maestría, con los recursos, sobre todo el tiempo, para desarrollar el “autoanálisis” profundo que implicaría la utilización de la metodología bourdieana para objetivar efectivamente no solo al objeto de estudio sino al “sujeto objetivante”, por lo que en primer lugar se hace una acotación relacionada con la posibilidad del autoanálisis reflexivo que permitiría desarrollar un proceso científico más riguroso.

Por lo que, intentando dirigir la reflexividad hacia este análisis reflexivo en el que se intenta ubicar al autor de esta investigación en el espacio social, y conocer no solo sus fines, sino sus medios; está claro que habría que reconocer, como parte del ejercicio reflexivo, que no se logrará del todo la claridad objetiva que proponía Bourdieu como ejercicio ético y práctico del investigador, sino que habrá que conformarse con un brevísimo ensayo de reflexividad acotada.

De esta manera, se aclara desde un principio, parafraseando el epígrafe de Bourdieu, que este no pretende ser el Autoanálisis a profundidad de un científico social, sino una sintética y limitada descripción del posicionamiento del autor de la investigación en el campo académico; proponiendo entonces mejorar la comprensión de los mecanismos causales del texto y sus

resultados, sin dejar de lado el hecho de que el autor está sujeto a los procesos sociales que intenta observar objetivamente, por lo que siempre cabrá el resquicio a través del cual la objetividad pueda diluirse.

Bourdieu (2005) sugiere tres propiedades primordiales que funcionarían como elementos de análisis en un proceso reflexivo. En primer lugar el origen social, es decir, las características socio-económicas y socio-culturales del científico social, las cuales determinan en parte la posición en el espacio social y las disposiciones o elecciones que se pueden tomar.

Luego, la posición que ocupa el científico en el campo académico, o sea, el lugar, tanto físico como abstracto, que detenta el investigador, considerando su posición (puesto, función, salario, fuente de recursos) y su postura teórica o filosofía científica, la cual es potencialmente determinada por el contexto histórico.

En tercer lugar, esta la postura filosófica o analítica que el investigador podría proyectar en el fenómeno social estudiado, es decir, el científico social comprende la sociedad y sus fenómenos como objetos de estudio maleables a partir de los intereses de la teoría, transformando el espacio social en un escenario del cual cree ser el director, en lugar de adecuar la teoría a la problemática, adapta la problemática convenientemente a la teoría.

Con respecto a las propiedades de la reflexividad, Bourdieu y Wacquant (2005) sugieren explicitar los elementos personales necesarios para incrementar la objetividad. A continuación se presentan tres apartados que se refieren a las tres propiedades de la sociología reflexiva.

a) Origen social.

El autor de esta investigación nace en una familia de clase media en la ciudad de México. Como resultado de la crisis económica de los ochenta se traslada a los 6 años a Tijuana, para vivir en una colonia proletaria conflictiva, en la que se encuentra con carencias, violencia y tráfico de drogas. Hijo de profesores egresados de la Normal Superior que sufrieron la problemática de la desarticulación del estado social, por lo que proviene de una tradición relacionada con los estudios cualitativos, particularmente orientado desde pequeño hacia las humanidades.

En Tijuana estudia en escuelas religiosas privadas, aunque no se considera católico. Se siente atraído por la filosofía francesa desde la secundaria, primero por Jean-Paul Sartre y luego por los enfoques posmodernos a lo largo de la preparatoria, Foucault, Lyotard, Derrida, entre otros.

Históricamente tiene dificultades con respecto a formar parte de grupos sociales, problemas disciplinarios en torno a las jerarquías rígidas, así como una desconfianza natural hacia las posiciones de poder. Se define tranquilamente como un poeta frustrado.

El trabajo que más ha disfrutado fue el de periodista en prensa escrita y conductor de programas de radio. Estudia relaciones internacionales en una universidad privada durante el periodo de alternancia política en el que el PAN asumiría la presidencia en el año 2000; ahí se

interesa por la ciencia política y los estudios sociales. Luego, comienza a estudiar la carrera de Literatura en una universidad pública, pero la deja trunca.

Como resultado de la situación económica errática, a partir de mediados de los noventa tuvo trabajos variados, desde jardinero en los Estados Unidos y trabajador de construcción, hasta bibliotecario y profesor de distintos niveles escolares. También recorrió la ruta de las maquiladoras como ejecutivo pero nunca pudo adecuarse a los horarios de oficina.

Actualmente cuenta con una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para cursar estudios de postgrado, la cual está a punto de finalizar. Posteriormente intentará estudiar un doctorado en Sociología.

b) Posición en el campo académico

El autor ocupa una posición de privilegio en el campo académico al formar parte del sector dominante del grupo dominado, las ciencias sociales; al contar con una beca federal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para desarrollar estudios de posgrado en El Colegio de la Frontera Norte (El Colef).

Para Bourdieu (2007), las ciencias sociales forman parte del sector dominado del campo académico, mientras que las ciencias naturales y exactas conforman el grupo dominante, ergo, el sector de las ciencias sociales también presenta una división entre dominados y dominadores con base en los temas y las metodologías dominantes sustentadas por la Doxa como legítimas.

El cursar una maestría relacionada con las ciencias ambientales responde a uno de los temas promovidos por los grupos dominantes en el campo académico, la investigación sobre el medio es ampliamente financiada, aunque las ciencias sociales han logrado posicionarse en el campo e influenciar la Doxa dominante para incluir no solo las ciencias exactas y naturales, sino los estudios sociales.

El enfoque del trabajo, orientado hacia la participación ciudadana y los movimientos ambientales, se presenta como un fenómeno heterodoxo en los estudios relacionados con la administración integral del ambiente, siendo una postura en la que se promueve la comprensión de la participación ciudadana como un recurso útil y administrable para los tomadores de decisiones en el marco de la política ambiental y los programas orientados hacia la implementación de programas relacionados con el desarrollo sustentable

La beca implica recibir financiamiento proveniente del presupuesto del gobierno federal, lo que desde nuestra perspectiva no condiciona la objetividad del trabajo de investigación. Aunque en la institución académica se cuenta con mecanismos orientados a controlar el contenido de las tesis, como lo es el Comité de Tesis.

Finalmente, la metodología utilizada para abordar la temática ambiental en esta investigación tampoco responde a la ortodoxia, dado que la teoría de los campos no ha sido utilizada para

abordar dicha problemática, en la cual normalmente se excluye el análisis sociológico, más allá de unos breves trazos de la perspectiva social.

c) Filosofía científica

En este trabajo se utiliza como enfoque la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, dando énfasis en la herramienta conceptual conocida como teoría reflexividad. Se usó como complemento esta última para generar un “autoanálisis” sobre el autor y así evitar, en la medida de lo posible, transformar al objeto de estudio en un fenómeno teóricamente correcto, es decir, más allá de la realidad, tendiente hacia una construcción que favorecería los postulados teóricos ciegamente contra la descripción científica de los fenómenos sociales.

El estudio es un esfuerzo por adaptar elementos provenientes de la ciencia social hacia los apartados socio ambientales de los estudios ambientales, de ahí que la teoría de los campos permita experimentar con recursos teóricos poco utilizados para comprender los fenómenos socio ambientales.

En ese sentido, la investigación no representa la creación de una nueva teoría, sino la implementación liberal de la lógica bourdieana en un contexto innovador.

Es importante mencionar que actualmente el trabajo de Bourdieu presenta un auge en las ciencias sociales, cuestión que motiva una gran cantidad de trabajos basados en las ideas del sociólogo francés. Sin embargo, en el área relacionada con los estudios socio-ambientales, la aplicación de esta teoría es incipiente, por lo que no se cuenta con una gran experiencia en su operacionalización.

Las virtudes del método bourdieano tienen que ver con sus características de integralidad que incluyen tanto elementos cualitativos como cuantitativos; empero, la presente investigación se sustentará primordialmente en metodologías de tipo cualitativo. Al ser la formación del autor de la tesis principalmente orientada hacia las ciencias sociales y las humanidades, habrá que realizar un trabajo análisis posterior para posiblemente incluir elementos cuantitativos.

Anexo v. Perspectiva geográfica del estudio de los movimientos sociales

En este apartado se presentan algunos de los enfoques teóricos que han abordado la temática relativa a los movimientos sociales y los movimientos ambientalistas. El orden del inventario no es cronológico, sino geográfico, y no se refiere a las teorías más importantes, sino a algunos autores que han estudiado el fenómeno en contextos representativos de la complejidad inherente al objeto de estudio.

Los movimientos sociales urbanos se han desarrollado en diferentes entornos a través de la historia, de ahí que la diversidad de los mismos permita la construcción de múltiples orientaciones y subtemas para impulsar y activar la participación ciudadana por medio de la acción colectiva (Foweraker, 2001 y Parra, 2005).

Para Manuel Castells (1983), los movimientos sociales urbanos surgieron en el siglo XX como respuesta a las contradicciones de las sociedades industriales capitalistas, expresadas en el

gobierno y la administración de las ciudades "modernas"; en ese sentido la "cuestión urbana" y la materialización de problemáticas como la inequidad en la distribución económica o la reivindicación de ideales, serían motivo de prácticas sociales que estarían avocadas a contravenir el orden.

En Latinoamérica, Foweraker (2001) argumenta que los movimientos sociales urbanos se construyeron bajo las condiciones autoritarias de los gobiernos dictatoriales del siglo XX, en donde no existía un espacio en la institucionalidad para la participación de los ciudadanos, por lo que estos tenían que organizarse para tratar de influir en el gobierno o para cumplir las tareas que la autoridad evadía.

El caso chileno y el brasileño serían ejemplos de lo anterior y una muestra de la diversidad de los movimientos sociales, ya que a pesar de las diferencias estructurales y contextuales entre el movimiento de "los sin tierra" en Brasil, o las organizaciones sociales a favor de la democratización de Chile, así como los objetivos y resultados distintos, ambos podrían definirse como movimientos sociales urbanos.

En Europa se ha desarrollado una tradición de movimientos sociales en donde el caso de la "renovación-deportación" en París, y el movimiento madrileño como resultado de la crisis de la vivienda, representarían experiencias de participación ciudadana a través de la organización en oposición a políticas públicas ineficientes (Castells, 1981; 1983).

En lo que se refiere a la problemática ambiental, los movimientos sociales se han manifestado continuamente en el ámbito urbano dado que las ciudades han sido uno de los principales motores de lo que Habermas (1999) consideraría la "segunda contradicción en las sociedades industriales capitalistas", es decir, la incapacidad del capitalismo para integrar de forma sustentable los recursos naturales. Bajo esta lógica, uno de los primeros ejemplos de un movimiento ambientalista fue el de los Estados Unidos durante los sesenta (Castells, 1983).

En México, específicamente en la región fronteriza norte, el surgimiento de los grupos ambientalistas durante la década de los ochenta se constituyó a partir de los movimientos urbano populares que demandaban servicios públicos; la diversidad de los grupos ambientalistas tuvo que ver con la creciente problemática ambiental de la región, con la tradición ambientalista estadounidense, y con las posteriores posibilidades que brindaría el Tratado de libre comercio para la organización binacional (Velázquez, 2007).

El caso de Baja California refleja la relación entre la problemática ambiental causada por empresas cuya labor es percibida por algunos sectores de la población como riesgosa para la salud y el medio ambiente; siendo un antecedente significativo el intento de instalación de un incinerador de residuos peligrosos de la empresa TEESA en el municipio de Ensenada en 1988, evento que motivó la movilización ciudadana; o también, el movimiento contra las regasificadoras en Ensenada en los últimos años.

Anexo vi. Inventario de "vicios y virtudes" de las teorías de los movimientos sociales

Se consideran cinco formas convencionales de estudiar los movimientos sociales urbanos en el marco de las ciencias sociales, las cuales no son quizás las más importantes, pero si es posible

afirmar que desde nuestro punto de vista, son efectivas para intentar proyectar el estado de la cuestión con respecto al objeto de estudio.

En primer lugar están dos paradigmas que buscan analizar los movimientos sociales desde dos enfoques opuestos, el paradigma de la identidad y al paradigma de la movilización de recursos.

El primer , utilizado por autores como Meluccí (1988) y Touraine (1999), estaría enfocado en la construcción y ruptura constante de identidades como elemento de configuración de las estructuras sociales, siendo resultado de constantes luchas en las cuales los actores modifican defienden sus identidades individuales por medio de la acción colectiva, para así construir espacios democráticos.

La identidad sería la principal variable explicativa de la acción colectiva, es decir, por medio de la comprensión la sustancia de los movimientos sociales se intenta explicar el curso de sus acciones y la respuesta de otros grupos sociales. Esta teoría se centra en el análisis del comportamiento de los actores y en la acción colectiva que fortalece la identidad individual.

El paradigma de la identidad tiene como principal virtud la comprensión de lo que Touraine llamo el accionalismo, en el marco de los elementos de identidad, totalidad, y oposición, por medio de los cuales se intenta dar una explicación coherente de la acción colectiva y sus resultados. Uno de los elementos más importantes de la teoría es precisamente, la capacidad de los actores sociales para generar cambios en la sociedad.

Para Melucci (1988) la principal demanda colectiva de las personas sería el derecho a construir su propia identidad; la capacidad para disponer de su creatividad individual, sus sentimientos personales hacia los demás y su existencia biológica, frente a la desindividualización e incertidumbre de las identidades en las sociedades contemporáneas

El autor afirma que los individuos buscan ser individuales y contar con una identidad relativamente única. Esto es importante porque se contrapone a las corrientes funcionalistas y estructuralistas (desde Talcott Parsons hasta Niklas Luhmann) que sugieren “desmitificar” la identidad individual ante las instituciones de una sociedad, “funcional” en lo colectivo, pero carente de rostros humanos.

Es interesante, a manera de paréntesis, expresar que el funcionalismo, aceptado como ley en el campo científico-social durante la primera mitad del siglo veinte, no obtuvo respuestas claras a la visión mecanicista que postulaban sus promotores. Siendo Luhmann (2007) quien aportaría un intento de renovación del funcionalismo estructural por medio de su teoría de la sociedad., en donde se articularía un corte analítico, si bien mecanicismo, a su vez orientado hacia la construcción del papel “significativo” del individuo en el esquema social.

De otra parte, el paradigma de la identidad, al dar un peso preponderante a la formación de identidades como elemento de ruptura y cambio social, fundamenta una vinculación directa hacia la noción de que los individuos tienen la capacidad total de modificar los mecanismos de asignación de roles sociales; ignorando la rigidez conservadora que los mecanismos de reproducción social podrían presentar ante los cambios imprevistos.

Desde nuestra perspectiva, no se ha dado el peso necesario en este paradigma a los elementos objetivos de la producción de la sociedad. Pareciera como si los individuos no fueran acotados por las estructuras objetivas que ellos construyen y que luego limitan su capacidad de construir nuevas identidades o presentan por medio de la violencia simbólica identidades viables e identidades inviables: comportamientos correctos e incorrectos.

Como virtud el paradigma de la identidad habría llenado en su momento un vacío en la sociología, dado que los enfoques funcionalistas habían copado los espacios de interacción y cambio social. Además por medio de la “sociología de la acción” el autor enfrenta a las teorías marxistas de las clases sociales y sus luchas, encarando la vinculación estricta de las luchas sociales a la pertenencia a una clase social.

Bourdieu (2002) interpreta la postura marxista de la lucha de clases desde un enfoque distinto al marxismo ortodoxo, ya que en lugar de emprender el camino de la sociología de la acción, se desarrollaron los conceptos de campo, habitus, y especies de capital para estudiar los fenómenos sociales.

Con el campo no dejan de existir las clases sociales, es solo que los agentes se analizan a partir de su posición en el espacio social, resultado de una acumulación de los distintos tipos de capital (cultural, económico, social, simbólico), a diferencia de la teoría marxista que estudia las relaciones sociales en torno al capital económico

Los campos son un instrumento científico preciso para determinar la posición de un agente en el espacio social, así como los capitales con los que cuenta. Lo que es un avance, ya que desde nuestra perspectiva, la teoría de la lucha de clases tendía a realizar generalizaciones a partir de la argumentación de que el capital económico es el activo fundamental en la dialéctica social.

Cabe decir, que para este trabajo no se ha utilizado el paradigma de la identidad por una razón fundamental, la noción de habitus propuesta por Bourdieu y sus implicaciones en lo que el sociólogo francés llamaría la singularidad colectiva, representan un esfuerzo científico funcional e innovador para el objeto de estudio, sobre todo en el análisis de la construcción de identidades y su relación con las estructuras objetivas.

De tal forma, se comprende que si bien la conformación de identidades juega un papel central en la movilización social, el concepto de habitus podría ser un elemento de mayor lucidez para analizar los movimientos sociales desde nuestra perspectiva, ya que no elude la reproducción social relativamente determinada por un sistema de valores dominante, sino que es el vínculo entre lo objetivo y lo subjetivo.

El habitus, comprendido como un filtro de lo colectivo hacia lo singular, o sea, la introducción de lo objetivo en lo subjetivo de una manera individual, y la respuesta individual hacia las estructuras institucionales: pues el individuo recibe de las instituciones sociales (no solo del gobierno) elementos que articulan su identidad, pero a la vez, los integra de una forma personal. De ahí que los individuos sean llamados agentes en la teoría de los campos, pues su accionar esta acotado por la capacidad de agencia respecto a patrones establecidos socialmente.

El habitus descansa en el concepto de singularidad colectiva, el cual rompe con los paradigmas antinómicos que sugerían la polarización entre el individuo y la sociedad, entre lo colectivo y lo singular, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre el funcionalismo y las teorías de la identidad.

El paradigma de la movilización de recursos, en cambio, intenta elaborar su análisis partiendo de la posesión de recursos y la capacidad para movilizarlos (Jenkins, 1994). A diferencia del paradigma de la identidad, los recursos materiales o simbólicos son la principal herramienta de un movimiento social. Nociones como estrategia, recursos, oportunidades políticas, e intereses, forman parte del inventario conceptual por medio del cual se busca comprender la movilización social.

La virtud de este paradigma es que presenta de una manera práctica la capacidad de los movimientos para desarrollar estrategias coherentes para movilizar sus recursos y obtener ganancias. Desde la perspectiva de las teorías de la movilización de recursos, el elemento central que podría definir a un movimiento social sería la acción de los grupos sociales que se movilizan para hacerse de recursos.

Quizás la principal crítica que podría detallarse a esta postura es que se centra en la acción racional de los individuos y su movilización con respecto a una planificación estructurada. Ya Touraine (1995) había argumentado que los movimientos sociales no reflejan conductas colectivas orientadas hacia valores “estáticos” de una organización social o hacia un sistema racional de toma de decisiones, sino que proyectan los conflictos de clase resultantes del sistema de acción histórica

Asimismo, la idea de que los individuos se organizan racionalmente como respuesta exclusiva a un agravio, realmente infundada, es una visión idealista de la capacidad de la participación ciudadana. Para Bourdieu (1999) los movimientos sociales en primer lugar no tienen una idea clara de lo que los agobia, aunque obviamente comprenden un contexto no así la “violencia simbólica”.

Los mecanismos de reproducción social se benefician del encubrimiento simbólico que los resguarda. De tal forma, las luchas sociales encubren contiendas simbólicas que están en el fondo de los conflictos. Estas luchas simbólicas tienen como propósito el lograr controlar el sentido del campo, es decir, su sistema de valores o Doxa (Bourdieu, 2005).

Asimismo, la diferencia central entre el paradigma de la movilización de recursos y la teoría de los campos está en que, en Bourdieu el racionalismo de los agentes es acotado por los mecanismos de reproducción social, por lo que solo si se comprende la violencia simbólica ejercida sobre los cuerpos socializados, podrán generarse “elecciones racionales” en la movilización social.

Desde otro ángulo, y siguiendo con la lógica del apartado, encontramos los desarrollos teóricos provenientes de las ciencias políticas y la antropología. Desde la óptica de las ciencias políticas, por ejemplo, está el trabajo de James Scott (2000) sobre “infra política”, es decir, de las formas de dominación que se construyen en el plano cotidiano. Decidimos

referenciar a Scott pues aporta una respuesta funcional a la dominación simbólica desde el plano cotidiano.

El autor aporta un análisis que incluye elementos como el “encubrimiento lingüístico” y los “códigos ocultos”, los cuales funcionarían como elementos de resistencia implementados por los dominados ante el dominio. Esta perspectiva es importante porque es crítica de los trabajos que se enfocan en la dominación desde arriba, sin incluir el estudio de las respuestas que los dominados realizan a tal dominación. Lo que en cierta forma coincide con la comprensión del poder de Foucault (1980), pues este autor también pretende que el poder no es un proceso controlado solamente por los dominadores, sino que los dominados también contribuirían a su sometimiento.

La perspectiva de Scott establece que la aparente inactividad de los individuos frente a la dominación es en ocasiones un código oculto que permite maniobrar a los dominados, lejos de la mirada de los dominantes, en espacios de resistencia construidos para aspirar a la rebelión y ruptura de la estructura de poder.

Si bien la infra política es una respuesta atractiva a la dominación, se le pueden hacer algunas críticas. Dos principalmente, la primera relacionada con la capacidad de los agentes dominados para racionalmente comprender los costos de la movilización y por ende guardar un silencio conspirador; la segunda orientada hacia los supuestos espacios de resistencia y la posibilidad de aislarse en ellos para escapar de la dominación.

Los códigos ocultos propuestos por Scott podrían ser también mecanismos de control. Cuando el guardar silencio ante la dominación podría parecer como un elemento liberador, quizás es lo que Bourdieu (2007) llamaría la contribución del dominado a su dominación. Una especie de naturalidad para olvidar el dominio que persiste en cada instante por las vías menos esperadas.

Por otra parte, la racionalidad de los individuos dominados podría colocarse en duda bajo la misma lógica, pues habría que comprender hasta que punto realmente se evalúan los costos de la franca oposición a los poderosos, o las ganancias potenciales; y si no es en verdad ese silencio, conspirador y subversivo en Scott, el principal artículo de control social.

Asimismo, los espacios de resistencia podrían ser, a la manera de Bourdieu o inclusive Foucault (1980), espacios asignados para los dominados en donde la dominación sería encubierta por una resistencia acotada e improductiva. Además, los mecanismos de reproducción social podrían ser físicos o abstractos, cuando algunos de los más eficientes son precisamente los que se “socializan en el cuerpo” (Bourdieu, 2005) mediante el habitus.

Inclusive se puede teorizar un poco sobre el habitus del rebelde o subversivo, ya que el mismo, resultante de las condiciones objetivas y subjetivas, limitaría realmente la capacidad de oposición a los grupos dominantes, y se cumpliría con el rol socialmente aceptado de enajenado.

De otra parte, con respecto al enfoque antropológico de Lomnitz (1975), se pueden rescatar conceptos como el de redes sociales, contribuyendo a la comprensión de los elementos que permiten a los sectores marginados sobrevivir a las constantes luchas de poder. Revalorando

el uso de la reciprocidad en el marco de las redes sociales, como un elemento de movilización social.

Entre las principales virtudes de este enfoque estaría un análisis distinto al motivado por el concepto de poder presente en autores, como Bourdieu y Foucault. Para Lomnitz los grupos dominados establecen redes sociales con el objetivo de generar contra-mecanismos para enfrentar las luchas de poder en los campos. El autor se enfoca en la marginación, siendo comprendida aquí como la incapacidad para generar especies de capital útiles para contender por una posición en el campo.

Lomnitz concibe un espacio social en el que existen motivaciones distintas a la lucha por el poder, estudiando comportamientos colectivos orientados por una sustancia distinta. En ese sentido, coincide con Kolakowsky (2001) en que no todos los comportamientos humanos responden al interés por una posición de poder.

Este enfoque teórico presta atención a elementos que algunas de las macro-teorías no contemplan, incluida la teoría de los campos; cuestiones supuestamente alejadas de las luchas de poder. Empero, quizás esa es la principal crítica que se le puede realizar a Lomnitz, dado que no profundiza en el análisis del supuesto comportamiento basado en la reciprocidad.

Al respecto, Bourdieu (2005) plantea el concepto de “comportamiento desinteresado” de los agentes que forman parte de campos en los que la franca aceptación de un interés por obtener capitales para lograr una posición de poder se contrapone con la Doxa del campo. Ejemplo de ello pueden ser los campos científico o literario, en donde hay comportamientos que ocultan un interés por dominar, encubiertos bajo un discurso de desinterés, el cual irónicamente fortalece su posición de poder.

En otro sentido, están los estudios post-coloniales y grupos de estudios subalternos. Ambos partiendo de la crítica al colonialismo y al universalismo occidental. Desde esta perspectiva, autores como, Dube (2001), aportan críticas al elitismo que permea, desde su perspectiva, el análisis sistemático de las cuestiones sociales. Para los autores de esta corriente, la movilización social es tipificada como subversión a partir de conceptos construidos en torno al dominio neocolonialista, lo que limita la posibilidad de organización social y, por ende, de cambio desde abajo.

La principal bondad del enfoque es que aporta un análisis de la dominación simbólica sobre las posibilidades de movilización social en los países tercermundistas. Elaborando críticas a la construcción de conceptos para una realidad occidental, es decir, delimitados por parámetros ajenos, y en ese sentido enajenantes, a la problemática de las sociedades marginales. En un segundo nivel, este grupo reprueba la articulación de conceptos teóricos universales y aplicables a fenómenos relativamente similares pertenecientes a realidades sociales distantes.

Con base en la filosofía de Bourdieu, se puede considerar que su argumento es parcialmente cierto, pues hay diferencias culturales que impiden la universalización de los presupuestos de una teoría. Sin embargo, también es fundamental considerar que también se han desarrollado macro-teorías que se apoyan en las regularidades objetivas que se repiten en fenómenos sociales similares.

Otro enfoque que vale la pena reseñar es el marxista, que para comprender la movilización social centra su análisis en las motivaciones de clase y en la lucha por los medios de producción y el control del capital económico de la sociedad. Es importante recalcar que este último ha sostenido una significativa influencia en el tercer mundo, y particularmente en Latinoamérica, aportando investigaciones relativas a la conflictividad social y la problemática de la clase obrera.

Autores como Castells (1983) han estudiado, desde el enfoque marxista de lucha de clases, las contradicciones urbanas que han llevado a movilizarse a la ciudadanía. Para Castells, los movimientos sociales son el principal motor de cambio social, analizando las contradicciones del modelo económico capitalista en torno al urbanismo.

El marxismo ha proporcionado a los movimientos sociales un método para entender y modificar las estructuras de poder y las relaciones de explotación de parte de la clase burguesa en torno al trabajo del proletariado. Para los marxistas la razón de la movilización social está en las condiciones económicas desiguales fomentadas por el capitalismo y la posesión de los medios de producción por una clase dominante.

Para Marx las clases sociales están definidas con base en las relaciones de producción, es decir por la forma como se producen las mercancías. Siendo el capital económico el principal motor de las luchas de poder entre las clases. La perspectiva marxista aporta la noción de enfrentamiento entre explotados y explotadores.

Sin lugar a dudas, el marxismo ha aportado elementos vitales para la comprensión de los movimientos sociales; y su principal virtud desde nuestra perspectiva, en torno al tema, sería la construcción de un sistema conceptual complejo, útil para analizar y explicar los fenómenos sociales bajo una dialéctica particular.

La teoría de los campos y en general el pensamiento de Bourdieu ha derivado algunos de sus principales conceptos del marxismo. La comprensión de lo social como un espacio en el que se presentan luchas de poder es un legado de Marx. Igualmente, la explicación de los fenómenos sociales sustentada en el capital es una herencia del marxismo.

Aunque Bourdieu comprende que la dinámica de las relaciones sociales es la lucha por el poder, se distancia de Marx al no reproducir la clásica bipolaridad entre la burguesía y el proletariado; enfocando su análisis en el plano más amplio de la teoría de los campos, en donde si bien se alude al capital económico, y en cierta forma le otorga preponderancia, se distribuye el poder mediante la confrontación de las diversas especies de capital.

El distanciamiento de Bourdieu para con el marxismo no ha sido un proceso casual, sino fruto de los avances en el estudio de los fenómenos sociales; sobre todo cuando el fracaso de los postulados marxistas a nivel mundial (en la práctica) indicó en su momento que había otros argumentos científicos utilizables para comprender el universo social.

Habría que desarrollar una discusión prolongada sobre el marxismo y su relación con Pierre Bourdieu, la cual no tendría soporte en este breve apartado, por lo que de forma esquemática

se plantean dos diferencias centrales, las cuales desde la perspectiva del autor de esta investigación, apoyarían el uso de la teoría de los campos.

Primero, en Bourdieu las relaciones sociales no se sustentan exclusivamente en las relaciones de producción y en el capital económico, sino que existen otras especies de capital, como el capital cultural o el capital social, que complejizan la interacción de los agentes sociales. En segundo lugar, la lucha no es entre clases sociales bien definidas, sino entre agentes que pertenecen a campos con lógicas específicas y principio de jerarquización diversos.

Para Marx los conflictos sociales, como la desigualdad económica y la explotación de los agentes, se soluciona con la instauración de una dictadura del proletariado y el progreso de las instituciones del modelo político-económico anterior a través del materialismo histórico. Abriendo espacios para la participación de las clases proletarias en los procesos políticos.

En Bourdieu, el cambio no depende de la instauración de un nuevo régimen, con nuevas versiones de las instituciones sociales; pues para subvertir el orden establecido sería esencial desarticular los mecanismos de reproducción social que dan sentido a la estructura de poder dominante, mismos que al igual que en Foucault (1980) pueden mutar y trascender los cambios de régimen estructural.

Finalmente, para cerrar el apartado, se hace alusión a los estudios definidos por los conceptos relacionados con las corrientes posmodernas; los cuales si bien no son homogéneos en sus propuestas o formas de análisis, si contienen una relación intrínseca de ruptura con el estructuralismo convencional de las teorías anteriores.

La filosofía posmoderna de autores como Foucault (1980), comprendería nociones relacionadas con la deconstrucción del tejido social, así como una desarticulación de los sistemas de valores modernos, incluidos sus mecanismos de control. Además, de evadir el progreso social sustentado en la teoría marxista de materialismo histórico, pues desde aquí los mecanismos de control trascenderían un cambio de régimen y una ruptura de las instituciones vigentes.

El enfoque posmoderno, sobre todo en el caso de Foucault, se caracterizaría por una percepción de “imposibilidad” en torno a la ruptura de las estructuras de control, dado que los agentes subversivos formarían parte del sistema de control imperante, por lo que su movilización sería respuesta fundamentalmente a un rol social dominado como cualquier otro.

La teoría de los campos articula un esquema social complejo que funciona con base a la dominación simbólica. A diferencia de los posmodernos, Bourdieu si concibe un espacio para el cambio social y particularmente a través de las luchas de poder en las que los agentes se movilizan. Al final, la Doxa de un campo puede ser modificada, y un nuevo grupo dominante puede actualizar el esquema social.

Anexo vii. Ubicación geográfica del incinerador TEESA



El autor es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Tijuana. Ha sido profesor en distintas universidades privadas del estado de Baja California. Columnista/articulista de periódicos regionales, así como conductor/analista de programas de radio. Egresado de la Maestría en Administración Integral del Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte.

Correo electrónico: miguel.escobedo@gmail.com

© *Todos los derechos reservados. Se autorizan la reproducción y difusión total y parcial por cualquier medio, indicando la fuente.*

Forma de citar:

Escobedo De la Torre, J. Miguel (2010). Modelo de efectividad de los movimientos ambientalistas: el caso del incinerador TEESA. Tesis de Maestro en Administración Integral del Ambiente. El Colegio de la Frontera Norte, A.C. México. 254 pp.